

C. PARRA-PEREZ

EL REGIMEN ESPAÑOL EN VENEZUELA

ESTUDIO HISTORICO

SEGUNDA EDICION



MADRID
EDICIONES CULTURA HISPANICA
1964

C. PARRA - PEREZ

EL REGIMEN ESPAÑOL EN VENEZUELA

ESTUDIO HISTORICO

SEGUNDA EDICION



MADRID

EDICIONES CULTURA HISPANICA

1964

EL REGIMEN ESPAÑOL EN VENEZUELA

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

MIRANDA ET LA REVOLUTION FRANÇAISE

PIERRE ROGER. PARÍS

DELPHINE DE CUSTINE, BELLE AMIE DE MIRANDA

EXCELSIOR. PARÍS

MIRANDA ET MADAME DE CUSTINE

BERNARD GRASSET. PARÍS

HISTORIA DE LA PRIMERA REPUBLICA DE VENEZUELA

(DOS VOLS.)

TIPOGRAFÍA AMERICANA. CARACAS

BAYONA Y LA POLITICA DE NAPOLEON EN AMERICA

TIPOGRAFÍA AMERICANA. CARACAS

PAGINAS DE HISTORIA Y DE POLEMICA

LITOGRAFÍA DEL COMERCIO. CARACAS

*UNA MISION DIPLOMATICA VENEZOLANA ANTE NAPOLEON
EN 1813*

COLECCIÓN HISTORIA. DÉCIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA. CARACAS

BOLIVAR

EXCELSIOR. PARÍS

(Traducido al inglés por el profesor Andrew N. Clevén. Pittsburg Printing Co.—Traducido al italiano por Paolo Nicolai. Istituto Cristoforo Colombo. Roma.)

LA CARTERA DEL CONDE DE ADLERCREUTZ

EXCELSIOR. PARÍS

MARIÑO Y LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA

(CINCO VOLS.)

EDICIONES CULTURA HISPÁNICA. MADRID

LA MONARQUIA EN LA GRAN COLOMBIA

EDICIONES CULTURA HISPÁNICA. MADRID

MARIÑO Y LAS GUERRAS CIVILES

(TOMOS I, II Y III) EDICIONES CULTURA HISPÁNICA. MADRID

TRAZOS DE HISTORIA VENEZOLANA

EDICIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CARACAS

DISCURSOS

ALTAMIRA, TALLERES GRÁFICOS. MADRID



D^a ISABEL LA CATÓLICA

C . P A R R A - P E R E Z

EL REGIMEN ESPAÑOL EN VENEZUELA

ESTUDIO HISTORICO

SEGUNDA EDICION



MADRID
EDICIONES CULTURA HISPANICA
1964

Depósito legal M 9621 - 1964

Dedico cordialmente esta contribución al estudio de la historia colonial de Venezuela a mis compatriotas institutores y maestros encargados de enseñarla.

RELACION PRELIMINAR

LA reedición de este libro, diferida durante largo tiempo, se efectúa en vista de las numerosas indicaciones que su autor ha recibido de parte de quienes se ocupan en la historia colonial de la nación, y mayormente de los profesores que la enseñan. Fue proyectado y escrito, hace más de treinta años, con la única intención de que sirviera de prefacio o introducción a la obra *Historia de la Primera República de Venezuela*, que desde entonces nos proponíamos escribir, mas que sólo se publicó en 1939. De ahí su forma concisa y la falta del siempre impresionante aparato de las notas de pie de página, que habrían sobrecargado el texto muy fuera de lugar. Sin embargo, el estudio resultó tan extenso para prólogo, y tan lejos veíamos venir la *Historia*, que nos decidimos a imprimirlo tal cual en un pequeño volumen, que hoy nadie encuentra, pero con la natural adición de una lista bibliográfica esencial.

Es evidente que para separada la obrilla habría tal vez debido presentarse mejor nutrida, pero hay que tener en cuenta que fue hecha en París y Roma, no en Venezuela o España, donde están todos los papeles pertinentes. Sus fuentes provienen de libros, no de archivos originales, que, por lo demás, no creemos que existan en las nombradas ciudades relativos especialmente a la conquista y colonización de nuestro país. En todo caso, el autor no buscó allí documentos inéditos y se atuvo a lo que halló en cronistas e historiadores. Por tal razón puede asentar que cada una de sus frases se apoya en algún libro conocido y que cada uno de los hechos presentados tiene como garantía de veracidad la que pueda darle la autoridad de aquéllos.

En su reciente Historia del Descubrimiento y Conquista de América,¹ cuyas páginas 443 a 466 están dedicadas a los primeros tiempos de la Colonia venezolana, don Francisco Morales Padrón dice, en nota bibliográfica: "La conquista de Venezuela, como la de Colombia, no se ha estudiado sino a través de los cronistas. Estos, por partidismo o por recibir las noticias al cabo de años, son muchas veces erróneos. Cuando se explore a fondo los archivos habrá que corregir muchas fechas, nombres y tópicos de la anexión de Tierra Firme." Si tal es aún el estado de la cuestión, el lector verá en ello una razón de más, y perentoria, de estimar con justeza las condiciones en que fue escrito el presente libro.

¹ Colección Mundo Científico. Serie Histórica. Editora Nacional. Madrid, 1963.

En consecuencia, si los archivos que el señor Morales Padrón espera se hurguen algún día no vinieren a infirmarlos, los hechos aquí evocados deberán aceptarse como auténticos, es decir, como verdades históricas, al menos a título provisional, según lo permite la crítica. Y es claro que no bastarán para echarlos abajo declamaciones altisonas fabricadas con lugares comunes o inspiradas en sectarismos e ideas preconcebidas.

Después de reflexionar bastante, resolvimos no alterar el viejo texto ni agregarle algo o mucho de lo que en su apoyo se infiere y deduce de cuantos varios autores han acopiado en estos últimos tiempos. Una de las razones de ello es la necesidad de no distraer nuestra atención de otros trabajos que deseamos terminar de preferencia. Pero, sobre todo, creemos que para el fin que entonces buscábamos los hechos alegados quedan allí, innegables y suficientes.

No obstante, para fortalecer el volumen le damos como exordio, y aparte esta relación que sirve también de tal, la traducción castellana de una de las conferencias que leímos en 1954 en el Instituto de Altos Estudios de la América Latina de la Universidad de París, y que proporcionará al lector indicaciones útiles para formarse idea del estado del Imperio Español a fines del siglo XVIII. Y hemos incluido en apéndice, como justificante de los móviles del libro, la crítica desfavorable a éste de uno de los historiadores y polígrafos más ilustres de Hispanoamérica y la respuesta que entonces le dimos.

Después de la aparición de este libro, y sin hablar de gran número de trabajos aislados, publicados en revistas y periódicos y que sería largo mencionar, han visto la luz varias obras, muchas de ellas valiosas, cuyos títulos incorporamos en nuestra lista bibliográfica por creerlas indispensables hoy para un examen concienzudo del argumento. Entre esas obras, consideramos importante la del doctor Guillermo Morón sobre Los orígenes históricos de Venezuela, cuyo primer tomo, único publicado hasta ahora, revela en su autor el sentido de una crítica científica de la fundación y formación de nuestra patria por los colonizadores españoles. Queremos asimismo recomendar la lectura de los estudios del doctor García Chuecos, que aclaran satisfactoriamente ciertos puntos de la crónica de la postrera época del régimen.

Aquí habría podido terminar la introducción explicativa de la segunda edición del presente trabajo. Confesamos, sin embargo, no haber podido resistir a la tentación de presentar al lector, a riesgo de incurrir en ciertas repeticiones, algunas de las numerosas cédulas o fichas sobre esta materia u otras conexas que se han acumulado en nuestro clasificador. Las personas estudiosas apreciarán quizá como útil nuestro deseo de alumbrar con ello los puntos de vista donde nos situamos.

I

LA LEYENDA DORADA

Se me ha dicho historiador de escuela conservadora. ¿Conservadora de qué? He luchado toda mi vida por echar abajo las mentiras que otros se empeñan en conservar como verdades. En nuestro caló vernáculo se me ha llamado también escritor godo, y a este calificativo arcaico no recuerdo quién juntó el moderno de fascista, sin reparar en la chillona antinomia que implica el adunamiento de ambos. Como los años me han conducido poco a poco a economizar las palabras excesivas, sólo diré que todo eso es poco serio. He sido y soy un simple narrador que trata de contar sucesos antiguos o contemporáneos sin fantasear y apoyándose en libros y papeles que se tienen por acreditados.

En materia de historia colonial hispanoamericana, especialmente en la venezolana, que es la que más me interesa, se me incluye con alegre arbitrariedad entre los sostenedores de cierta Leyenda Dorada, que presenta la característica de no existir, por la sencilla razón de que nunca se la ha fabricado. No conozco absolutamente a nadie que haya dicho, ni diga, ni pueda decir que la tremenda conquista y trabajosa colonización de nuestra América fue hecha por ángeles de bruñidas alitas. Obra humana fue y, según Pero Grullo, las obras humanas, sobre todo las de este género, están lejos de ser perfectas. La edad de oro de que hablaban los primitivos latinos no ha existido en parte alguna del mundo.

Pero si la Leyenda Dorada es doblemente legendaria, la Negra, en cambio, es real y concreta; vale decir que desde hace siglos la historia de la América Española es una especie de conmixtura de medias verdades y de falsedades, de imputaciones y de tergiversaciones tan íntimamente traslapadas con los hechos ciertos, que su análisis impone al historiador objetivo el procedimiento más metódico, tal el del químico en su laboratorio para distinguir los elementos del compuesto que disocia. No es tarea de gente acelerada, ni tampoco para gente secuaz y fanática, imbuida en prejuicios acomodados a tendencias personales de partidarios de este o aquel sistema de los llamados ideológicos.

El autor del presente libro no cree en los días dorados de América, pero tampoco cree en los que pintan completamente negros. La historia es tela muy matizada, y aun abigarrada casi siempre, donde los colores contrastan. Considerarla como un bloque o monolito equivale a contemplar la cordillera de los Andes a distancia tal que no permita advertir los valles y abismos que separan entre sí a los ventisqueros.

II

LA LEYENDA NEGRA

Sobre este asunto de la historia de la Colonia se está todavía, y probablemente se estará siempre, en pleno proceso general, y apenas existen ahora algunas decisiones parciales aceptables acerca de puntos muy determinados. En todo proceso hay fiscales

cuyo mandato consiste en acusar y abogados que tienen el de defender. Durante mucho tiempo sólo se vió a acusadores que dispusieron de campo libre para acumular cargos sobre cargos, ante espectadores ignorantes o por mil razones propicios. Mas en época relativamente reciente surgieron algunos abogados que, desacordes con el monólogo y sin concierto previo, decidieron registrar y ordenar la papelería para presentarse luego en el pretorio a fines de discusión. En eso estamos. Ahora sí hay debate.

Como era de esperarse, los acusadores, bastante maltrechos y acorralados, endilgan a sus contendientes el calificativo de panegiristas del pasado y les atribuyen la invención de la dicha Leyenda Dorada.

En realidad, no hay quien pida absolución ni sobreseimiento en esta vasta causa. Hay quienes recusamos jueces y tachamos testigos. Y que siga el proceso: en historia no hay sumario cerrado.

La Leyenda Negra se funda esencialmente en la suposición especiosa de que España y la sociedad española eran cosas por entero distintas del resto de los pueblos europeos y opuestas a ellos por su misma naturaleza. No hubo ni hay tal: nuestro mundo occidental es uno solo y lo bueno como lo malo que representa es propiedad general y bastante bien repartida. La simple enumeración de las faltas políticas y sociales que se reprochan a España basta para demostrar nuestra tesis. Los enemigos de esta nación imaginan tal vez que ocultan o borran sus propias debilidades proclamando las de la aborrecida rival.

El fin de la rectificación histórica no puede ser el eximir a los españoles de los errores y crímenes que hayan cometido. Mas es de justicia y equidad examinar también los de sus detractores

extranjeros. Los excesos y crueldades de unos no excusan los de otros; pero es chocante e inaceptable, sobre todo cuando se trata, como en gran número de casos, de imputaciones inciertas y aun completamente falsas, que se quiera dividir la historia en buena y en mala, incluyendo en la buena sólo a los enemigos de España.

A la Leyenda Negra, en general, se asocia necesariamente el nombre de Felipe II, que es el personaje más injuriado de la historia tal como la escribieron sus encarnizados enemigos extranjeros, y que es la vigente en Europa de cuatro siglos a esta parte. Para todos, sabios o ignorantes, aquel monarca es un condenado a muerte sin moratoria ni remisión. No es dable ya enjuiciarlo, su causa está instruida para la perpetuidad, es intocable y la sentencia no tiene apelación. Curiosear su expediente resulta tan extravagante como lo sería hacerlo, por ejemplo, con los de Caín o de Judas.

Sin embargo, quedan algunas personas estudiosas, escasas tal vez, pero quedan, que no están de acuerdo por completo en eso de enterrar definitivamente con su sambenito a tan notable Rey, bajo lápida de ignominia.

Hay cierta crítica histórica, la que parece estar al corriente de los hechos efectivos, que no se deja impresionar por el griterío y afronta el riesgo de pensar y de calificar a pesar de la presunción de los más. Esa crítica sabe con cuánta desconfianza es menester considerar los dos libelos capitales de que derivan las acusaciones esparcidas en su época contra Felipe II. Aludimos a la *Apología* del adversario holandés Guillermo de Orange y a las *Relaciones* del tráfuga español Antonio Pérez. De uno y otro libelo se apoderaron escritores pertenecientes a naciones enemigas de la potencia española y con ellos, principalmente, forjaron la terrible

y persistente ficción que la gran política supo utilizar y que la literatura, aun la pequeña, no ha cesado nunca de fomentar.

Así como es por completo imposible juzgar de la inmensa parte que tuvo Luis XI en la construcción de la monarquía francesa, limitándose a recordar que encerró en una jaula al cardenal La Balue o que se valía de su barbero para cometer menudas perfidias, no lo es menos querer despachar a personaje tan considerable como Felipe II con sólo recurrir al teatro romántico, divulgador, entre otras, de la fábula de Don Carlos, presentado como pobre víctima de los amorosos celos paternos. Este infante era un chico degenerado y loco, que el Rey debió hacer vigilar en su cuarto, porque entre sus varias manías tenía la peligrosa del homicidio y la muy despropositada de ir a alzarse con el mando en Flandes. Dios se lo llevó a su lado mandándole una indigestión, inevitable resultado de sus continuos hartazgos.

Creemos que la verdad o verosimilitud históricas, menos aún su enseñanza científica y útil, no pueden basarse únicamente en piezas como los escritos de Antonio Pérez, las especiotas del Padre Las Casas o las educciones seudo filosóficas del Abate Raynal.

No hablemos aquí del primero, atestante sospechoso, por decir lo menos, cuando se trata de su antiguo señor y quien, por lo demás, mandaba a Felipe III opiniones y consejos no desprovistos de cordura y que revelaban, en particular, buen conocimiento de lo que podían ser las relaciones políticas entre España y Francia.

Es bastante relativa nuestra admiración hacia el Padre Las Casas, benefactor titular de los indios, malhechor involuntario pero efectivo de los negros, e inventor de las fantásticas estadís-

ticas que se convirtieron en una de las manifestaciones favoritas de detestación de España por los extranjeros. Más adelante volveremos a su asunto.

Sobre el Abate Raynal hemos hablado y hablamos en más de una ocasión.

III

DOS CIVILIZACIONES

Entre las censuras estrafalarias que se han hecho al Imperio español, las hay comparables a las que el imaginativo H. G. Wells hace al Imperio romano. Escribe el fabulista inglés: "A nuestro parecer, el sistema imperial romano era una organización de valor más que dudoso. No se tiene ni aun el derecho de decir que seguía una política. Era, cuando más, una administración burocrática que, durante cierto tiempo, logró mantener la paz, pero que fue incapaz de asegurar su reinado definitivo... De todos los imperios, aquél fue el más ignorante, el más desprovisto de imaginación. Nada supo prever. No conocía nada de la geografía ni de la etnología y, en consecuencia, no podía tener ninguna noción antropológica original. Ignoraba todo de Rusia, del Asia Central y del Oriente".¹

Pocas veces algún hombre de notable inteligencia ha dicho tales simplezas. Por inverosímil que parezca, mayores se han dicho, no obstante, del Imperio español.

También se ha enrostrado a Roma la destrucción de Numancia, de Cartago y de Corinto, creyendo que ello basta para elimi-

¹ *Bosquejo de la Historia Universal*, p. 248. (Traducción francesa.)

nar la gigantesca obra creadora del mundo y de la civilización occidentales realizada por aquélla. Un historiador muy superior en este terreno al *amateur* Wells, Camille Jullian, ha dicho que "Roma ahogó en su germen civilizaciones originales que iban a elaborarse" y nos asegura que "el mundo no tuvo jamás necesidad de un molde uniforme, de un tipo humano cosmopolita".¹ Pobre sentido crítico en esta ocasión el de M. Jullian al preferir Vercingetorix a César, tan pobre como el de quienes ponen a Moctezuma encima de Hernán Cortés.

Ciertos indudables resultados artísticos no deben cegarnos hasta el punto de hacer olvidar la barbarie moral profunda en que vivían las poblaciones precolombinas. Esa situación paradójica no era única, por lo demás, y puede citarse como ejemplo de ello el de una nación que desde el punto de vista artístico llegó a un grado superior al alcanzado por las tribus mexicanas o peruanas y que, sin embargo, tuvo en religión y moral los principios y nociones más groseras que pueda darse. "Los dioses dominantes de los etruscos —señala Mommsen— eran ciertamente los peores y más perversos. Su culto era cruel y comprendía el sacrificio de los cautivos... En vez de un mundo pacífico de los muertos, que viviesen tranquilamente en los reinos inferiores, la religión etrusca presentaba un verdadero infierno, en el cual las pobres almas estaban condenadas a que se las torturase con martillos y serpientes..."² Del propio modo, los tan admirados mayas eran, según recuerda M. A. T'Serstevens, viajero y escritor francés de nuestros días, amigo de estudiar a fondo

¹ Citado por Jean Chevalier en *La Cité Romaine à travers la littérature latine*.

² *Histoire Romaine*, I, p. 225.

la historia de los pueblos que visita, "grandes matadores de mujeres y bebedores de sangre humana", y si resucitasen "podrían recommenzar sus decapitaciones y sus asados de prisioneros, de lo cual hacían, como se sabe, su diversión favorita, así como también de ahogar muchachas de su raza en el Cenote Sagrado, después de haberlas cubierto de joyas, para honrar al dios de la Lluvia".¹

Y no hablemos de la dulzura de los aztecas, sobre quienes el citado escritor francés comenta: "Y las pretendidas matanzas de que se ha acusado a los conquistadores, basándose en las exageraciones de Las Casas, ya combatidas por los más íntegros de sus contemporáneos, no son nada en comparación de las espantosas hecatombes casi cotidianas de esa horda soldadesca que, en nombre del eterno "buen salvaje", se nos ha representado como una víctima del cristianismo".²

Por lo demás, identificar el México y el Perú actuales con el Imperio azteca y el Imperio inca, sería tan aventurado como pretender que el Egipto de Nasser equivale al de Ramsés. Nuestros países no podrán despañolizarse, si ello fuere, sin embargo, posible, sino cuando otras poblaciones inmigrantes en masa cumplan allí una obra análoga a la realizada en los Estados Unidos, que la inmigración ha, en cierto modo, desinglesado. A este respecto, salta a los ojos que desde el punto de vista étnico no puede ya asimilarse la Argentina a México, el Uruguay al Perú. En Venezuela hay más mulatos que mestizos; en Colombia, sucede lo contrario. Y tales ejemplos no son únicos. No obstante, ¿quién puede negar que todos los países hispanoamericanos continúan llevando su sello español, hasta ahora imborrable?

¹ *Mexique, pays à trois étages*, pp. 309, 312.

² *Ibid.*, p. 54.

Es inadecuado hablar de "dominación" española y de "dominación" extranjera al referirse a la época colonial. Los criollos americanos eran tan españoles como los españoles peninsulares, y aquella dominación existía en Tucumán o en el Táchira, tanto como en Murcia o Extremadura. Ni siquiera podría hablarse de dominación de clase en el sentido que hoy damos a esa expresión, pues es necesario pensar en la clase de gentes que iba a América. Todos los allí nacidos somos indígenas, pero, a decir verdad y llevando las cosas a su extremo, los únicos autóctonos efectivos del Nuevo Mundo son los indios. Los negros y mulatos, que se tienen por criollos en la acepción actual del vocablo, son tan ocupantes como los descendientes de los conquistadores. Todos fueron allí en el mismo barco, unos en cubierta, otros en la cala.

De aplicarse cierta lógica, los ocupantes usurpadores del territorio, ya blancos, ya negros, todos artículos importados, deberían liar sus bártulos y marcharse, unos a Europa, otros a Africa.

Quienes por afán de patriotismo excesivo llaman a nuestros países indoamericanos, en vez de hispano o de latinoamericanos, hacen pensar en los turcos, que para no emplear el nombre de Constantinopla, denominan a esta ciudad Estambul. El gentilicio de indio, como es sabido, diéronlo los propios españoles, por error, a los aborígenes del Hemisferio occidental. El patriotismo no debiera tener nada que hacer en este asunto, si se lo relaciona con los indios, sobre todo si lo proclaman los descendientes de la raza conquistadora o de inmigrantes de cualquier pelo y color.

Por otra parte, es necesario no confundir la historia con el patriotismo. La historia —dice Fustel de Coulanges— es una

ciencia; el patriotismo es una virtud. Por ello, nada tiene que sufrir el patriotismo cuando se restablece la verdad histórica.

Los conquistadores españoles, quiéraselo o no, crearon la nacionalidad hispanoamericana, fundaron nuestros Estados presentes, que son parte de algo que se llama "civilización occidental", la que vale para nosotros todos y que es hija de Grecia y de Roma. Sin hablar de la ciencia, del arte y de la literatura, no hay duda de que el cristianismo es preferible al culto del Sol y al de la Serpiente alada, y la moral del Evangelio a los sacrificios aztecas.

No sabemos lo que quedará de la obra de los ingleses en la India, sobre todo cuando se eliminen los ferrocarriles como principal medio de transporte y dejen los estudiantes de aprender la lengua de Oxford; pero sí es creíble que los Estados hispano-americanos serán siempre hispánicos y occidentales de cultura y de estructura moral, aun aquellos en que la aportación enorme de sangre no española haya transformado el medio étnico.

IV

LA CRUELDAD ESPAÑOLA

Hay la historia de la crueldad de los conquistadores españoles, que sin cesar denuncian los descendientes de otros conquistadores y de piratas y corsarios cuyos malhechos convendría no olvidar. No se tiene, repetimos, no puede tenerse el absurdo propósito de justificar a los primeros, pero es necesario reponer en su puesto

a los segundos. El criterio, aceptado sin discriminación, de la crueldad como característica exclusiva de la conquista española, es uno de los elementos absolutos que han contribuido más a falsear la historia, y fue arma política y religiosa muy bien manejada en su tiempo contra España. Arma tanto más eficaz cuanto que, en lo relativo a nuestra propia manera de juzgar las cosas que nos conciernen, es aún esgrimida también por los liberales peninsulares y por los hispanoamericanos, en la creencia de que sirve para defender la Revolución.

Mientras Las Casas, para proteger a los indios, aconsejaba la introducción en América de esclavos negros, se vio a otro sacerdote, el Padre portugués Manuel de Nobrega, protestar contra dicha introducción en Bahía, ciudad recién fundada. De ambos Padres, preferimos a Nobrega, a pesar de que Las Casas se compungió luego de su incongruencia. Rafael Altamira recuerda oportunamente, además, que también hubo otros Padres españoles que reprobaron desde el principio la esclavitud de los negros, tales Bartolomé de Albornoz y el jesuita Avendaño.

Es evidente que las declamaciones del Padre Las Casas inspiraron en gran parte la campaña política y religiosa, nacida de la Reforma y grandemente reforzada más tarde por la Revolución Francesa, contra los españoles y su obra en América.

El autor citado, M. A. T'Serstevens, escribe también palabras de gran sensatez sobre Las Casas. "Fray Bartolomé —nos dice— ha sido consagrado como el gran defensor de los indios contra los abusos de los españoles, lo que le valió tener su estatua en el Zócalo (o gran plaza) de México. Esos abusos son innegables, al menos en los primeros tiempos de la Conquista, pero es necesario decir que

el vehemente dominico se dejó llevar, con demasiada frecuencia, por su ardor y trató el asunto con alguna parcialidad. Los más ilustres de sus contemporáneos del siglo XVI, y que conocían la cuestión mucho mejor que él, Sahagún y Motolinia, reaccionaron en vida de Las Casas con cuerda clarividencia, como también fray Nicolás White, menos conocido pero tan bien informado como éstos. Al estudiar esos testimonios irrecusables se da uno cuenta de cómo Las Casas incurrió en fuertes exageraciones, tanto en su apología de los indios (*Apologética Historia de las Indias*), como en la pintura de las crueldades de los españoles. La suerte de los indios había sido defendida mucho antes que él por los más enérgicos franciscanos; y es, sin duda, necesario ver en la actitud inmoderada de Las Casas uno de los aspectos de la rivalidad de las órdenes religiosas. Pintar con colores tan sombríos la situación de los indígenas era atacar indirectamente la Orden de San Francisco, haciendo a ésta responsable.”¹

Para los hispanoamericanos y, por extraordinaria paradoja, para los aludidos liberales peninsulares del siglo XIX, el manifiesto de otro sacerdote, el del jesuita arequipeño Vizcardo, de los expulsados del Paraguay, vino a juntarse, por cuidado de Miranda, a todo cuanto se decía desde Las Casas contra el régimen español.

Las crueldades y atropellos de los extranjeros en sus conquistas de ambos mundos son inenarrables. Sobre el particular poseemos muchas fichas que no queremos dar en este lugar. Para nuestro fin recordatorio y como muestras bastan botones.

¹ *Loc. cit.*, p. 414.

En 1640, el gobernador británico de Antigua, cansado de las incomodidades que le ocasionaban los indios caribes autóctonos, invitó a gran número de ellos a un banquete, y una vez servido el postre los hizo matar a todos.

Cuando el capitán Cook abordó en Nueva Zelanda no predicó ni izó la cruz como Colón en Guanahani, sino que disparó sobre los naturales, quienes no comprendían nada de sus intenciones y se mostraban codiciosos de cuanto veían. "No ignoro—decía en su *Diario*— que la mayor parte de las gentes que tienen sentimientos humanos, si no se han encontrado en tal situación, me censurarán por haber disparado contra aquellos hombres en su embarcación; y no ignoro que las razones que tenía de apoderarme de ésta no bastarán para justificarme. Si yo hubiera previsto que opondrían la menor resistencia no me habría acercado a ellos; pero habiéndose producido el hecho, no iba a quedar indiferente y a sufrir que ni yo ni mis compañerosuviésemos la cabeza rota." *Sancta simplicitas*: tal es la ley de la conquista.

Durante los siglos XVII y XVIII, los holandeses practicaron en Guayana grandes rebatos de indios, especialmente de guaharibos, adultos y niños, y se los llevaban a trabajar como esclavos.

Más cerca de nosotros, recuérdese lo que era apenas cien años la conquista del *Far West* norteamericano, en la cual se mataba a los indios como bestias salvajes. Sólo hacia 1870 cesó aquella cacería. Para el presidente Theodor Roosevelt, el indio bueno no existió sino en las novelas de Fenimore Cooper. Aquellas tribus crueles y traidoras no eran dignas de piedad y estaban ya corrompidas antes de la llegada de los blancos. Los generales

Sheridan y Sherman, héroes de la guerra de Secesión, profesaban que "no hay indio bueno sino el indio muerto" y que "esa raza debe ser suprimida por una guerra sin merced".

Tampoco eran monopolio español los procedimientos empleados en esa época con los detenidos de derecho común. Miranda vio aún en Basilea "los prisioneros de ambos sexos, muy bien vestidos y con un collar de hierro y grillete los hombres, que barren las calles".¹ En las cárceles de las colonias anglosajonas se encadenaba por el cuello y los pies a los deudores y a los presos en general y se les hacinaba en inmundos calabozos. Esa situación se prolongó en algunas partes de la Unión norteamericana hasta principios del siglo XIX, y todavía en nuestros días los periódicos relatan a veces las infamias cometidas por los carceleros y denuncian el estado de ciertas prisiones, tan horrible que provoca frecuentes y sangrientas rebeliones. El informe de la Comisión Wickersham, que versó sobre tres mil establecimientos penitenciarios para hombres y mujeres, los condenó todos como malsanos, sin hospitales y sin enfermeros, sujetos a disciplina ininteligente, cruel, inhumana, y cuyos principales instrumentos eran, para la falta más leve, el calabozo, las cadenas, los grillos, el régimen de pan y agua. Los legisladores hablan de la eficacia del látigo de nueve colas en las prisiones de Delaware y aconsejan su aplicación en otros Estados federales.

Se condena con harto motivo la severidad de la represión del intento de revolución de los patriotas venezolanos en 1797 y el suplicio de José María España, cuyo cadáver descuartizado quedó

¹ *Archivo*, III, p. 379.

expuesto en varios sitios de la ciudad de Caracas. El ejemplo de aquella suerte de castigo no es único, y, precisamente en el mismo año, al patriota norteamericano Mac Lane, que conspiraba con los canadienses en favor de la libertad, lo ahorcaron los ingleses, le cortaron luego la cabeza y le arrancaron las entrañas, que fueron quemadas públicamente.

V

EL RACISMO

Un autor francés, M. Roland Mousnier, en obra reciente, escribe: "Se ha reprochado mucho a los españoles ese tratamiento dado a los indios" (haberles aislado de los blancos, teniéndoles como inferiores a éstos).¹

No conocemos ningún sabio español racista. En cambio, basta citar a filósofos alemanes como Kant y Herder, a sociólogos franceses como Gobineau, para saber quiénes crearon la teoría de que las "razas superiores" degeneran cuando se cruzan con otras que no lo son.

Desde 1514, y la observación es del antropólogo sueco Lundborg, las leyes castellanas favorecían expresamente la unión entre españoles e indios. Se sabe que Carlos V ennobleció en cierto modo a sus súbditos peninsulares que se casaban con las hijas de los caciques.

¹ *Histoire Générale des Civilisations, publiée sous la direction de Maurice Crozet. Vol. IV. Les XVI et XVII siècles.*

El *Código Negro* llamado de Colbert, que data de 1685, permitió el matrimonio de un francés con una negra, a condición de que ésta se convirtiese al cristianismo. Pero tal autorización fue abolida en 1724 y Luis XV prohibió a los blancos casarse aun con mulatas.

A este respecto, como a muchos otros, basta la comparación sumaria de las Leyes de Indias con las observadas, o no observadas en las colonias extranjeras, para comprobar la superioridad del criterio jurídico y social español sobre los de sus rivales y enemigos. "Los franceses y los ingleses fundaron en sus islas y posesiones —dice el profesor Mousnier— una sociedad racista." Y agrega: "Pero los ingleses crearon en el Continente un tipo de Colonia blanca homogénea, destructora de la indígena, dotada del *self government*, por completo original y llamada a gran porvenir." ¹ Esta sociedad blanca no se ocupó en evangelizar a los indios, cuando más en domesticarlos para el trabajo, como decían los mismos ingleses. Sobre todo, se les perseguía y se les despojaba de sus tierras. El español reducía, convertía, dejaba vivir; el inglés apartaba, mataba si era necesario, ensanchaba su espacio vital tanto como podía a costa de los indios.

Y ciertamente tampoco fue de una cabeza española que salió la especie de establecer diferencia entre las razas valiéndose de argumentos sacados de la religión. Es el inglés Gibbon quien asegura que: "Una religión metafísica está quizá por encima de la inteligencia de una población negra. Sin embargo, se puede instruir a un negro tan bien como a un loro a repetir las palabras del símbolo de Calcedonia o del de los monofisitas." ²

¹ *Loc. cit.*, p. 432.

² *Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire Romain*, IX, 142.

El Parlamento inglés había decretado que el comercio de negros "era muy ventajoso para la Gran Bretaña y necesario a sus plantaciones y colonias". Lord Dartmouth, secretario de Estado para las Colonias en 1775, negaba que los insurgentes norteamericanos tuviesen derecho a poner trabas o a desalentar en cualquier forma un negocio "que era tan provechoso para la nación". El propio evangelista John Newman continuó mandando personalmente un barco negrero largo tiempo después de su conversión. Frente a Wesley, que denunciaba la esclavitud, Whitefield se proclamaba abiertamente su partidario. Los únicos que entonces combatían la trata eran los cuáqueros, a quienes perseguían ásperamente otras sectas preponderantes.

Powell y Tout, de cuyo libro tomamos estos y otros datos, cuentan la fantástica historia siguiente: "En 1793 fue revelado un asunto particularmente horrible: el capitán de un barco negrero, al advertir que había enfermos en su cargamento, arrojó al mar ciento treinta y dos negros, porque si éstos morían a bordo la pérdida incumbiría al propietario, en tanto que si los tiraba al agua por medida de seguridad, los aseguradores del navío sufrirían solos dicha pérdida".¹

A propósito de estos pasatiempos, ¿recuerda alguien que los propios calmudos dinamarqueses imponían a sus esclavos antillanos rebeldes castigos atroces, tales como cortarles las orejas, y aun las piernas, y aplicarles hierros ardientes?

Nótese que la sociedad formada en Inglaterra en 1787 para la abolición de la trata se abstuvo prudentemente de atacar el princi-

¹ *Histoire d'Angleterre, des origines à nos jours*, por E York Powell, profesor de la Universidad de Oxford, y E T. Tout, profesor de la Universidad de Manchester. (Edición francesa de Edouard Guyot, profesor de la Sorbona. París, 1932.

pio mismo de la esclavitud. Y cuando estalló la Revolución Francesa hubo del otro lado de la Mancha una violenta reacción contra el movimiento abolicionista. La supresión de la esclavitud por "los ateos y los anarquistas de Francia" determinó a los ingleses a tomar una posición contraria.

Esperando la llegada de los filantrópicos sentimientos, los mercaderes ingleses, en especial los de Bristol, "se enriquecieron con la trata de negros, que era tan productiva que nadie pensaba en su carácter inmoral".¹

Los anglosajones, a pesar de que invocan con frecuencia la Biblia y el Evangelio, acostumbran aplicar en ésta y otras cuestiones un criterio utilitario de que se dice carecen los latinos. Todavía hacia 1860 grandes periódicos del norte de los Estados Unidos, como el *New York Herald* y el *Boston Post*, juzgaban que la esclavitud era un mal necesario en los Estados del Sur, del cual dependía la prosperidad americana toda entera, porque aseguraba la producción del algodón y otras materias primas indispensables para la industria del Norte y el equilibrio de la economía nacional.

Alexander Stephens, vicepresidente de la Confederación Sudafricana, decía paladinamente en 1861: "La esclavitud es la condición natural y normal del negro... Para mí es indudable que esta verdad concluirá por ser reconocida en todos los pueblos dotados de luces y de razón... El sistema esclavista se halla todavía en su infancia..."²

¹ Powell y Tout, *loc. cit.*, pp. 957, 971.

² Emile Jouveaux: *Los Estados Unidos de la América del Norte*. Introducción de Edouard Laboulaye, p. 124. (Traducción española. Madrid, 1871.)



JEANNE D'ARRAGON HERITIERE DE
*Castille et d'Arragon femme de philippe d'Autriche prince
des pays bas et*

Era la época en que un viajero inglés conocido, el doctor Zincke, sentenciaba: "No soy de los que creen que la inteligencia de la raza más civilizada y más desarrollada del mundo (la anglosajona) debe ser igual a la de un pueblo que jamás ha tenido ideas, ni aun la menor vislumbre de civilización; o, en otros términos, que los hombres que han dado muestras de su inteligencia de manera brillante se hallen al nivel de los que jamás la han manifestado de manera alguna." Y Zincke agregaba que los negros, cuya vivacidad es apreciable cuando son niños, no pasan nunca de cierto límite y están condenados a perpetua infancia.

Es por estas y otras razones similares que los blancos del Sur se oponían desde entonces por todos los medios a la enseñanza de los negros y acusaban a las autoridades del Norte de "inculcar a éstos la falsa y peligrosa idea de que la suprema necesidad de la vida no es el trabajo, sino la educación", y de trastornar con ello "el orden natural de las cosas".¹

Economizamos al lector el recuento de los resultados y consecuencias actuales de lucubraciones de ese género, que cada uno puede registrar "en su periódico cotidiano habitual", según acostumbran indicar las estaciones de radio.

El repartimiento y la encomienda provenían ciertamente de un concepto feudal: el conquistador obtenía tierras e indios, pero en contrapartida estaba obligado desde luego a evangelizar, a convertir a los hombres, en seguida a protegerlos y a prestar ayuda a la Corona. En los primeros tiempos las ciudades suministraban contingentes armados para las empresas de conquista

¹ *Ibidem*, pp. 131, 137.

y reducción, bajo sus banderas y sus jefes particulares. Un general de los cabildos o ayuntamientos mandaba el todo.

Una pregunta: ¿era peor el sistema de la encomienda española que el aplicado por los santos puritanos de Massachusetts a los indios perseguidos hasta en las florestas que les dejaron y a las cuales se tenía por reino del Diablo? ¹

Cualquiera que haya sido el resultado de la concesión otorgada por Carlos V a los Belzares de Venezuela, y en nuestra opinión ese resultado fue detestable, hay que convenir en que la idea no era absurda en sí, ni tampoco excepcional según el criterio de la colonización que tuvieron durante siglos los europeos todos. Genéricamente el concepto de la encomienda española entra también dentro de tales nociones. Los anglosajones fueron más lejos que los españoles en ese camino y lo anduvieron durante mayor tiempo. Pueden verse pormenores sobre ello en la obra de Ellis Stevens.²

William Penn obtuvo en 1681 un breve como propietario, y al año siguiente compró al duque de York sus derechos sobre los tres condados del bajo Delaware. Estos territorios, conquistados a los holandeses, primeros ocupantes, habían sido concedidos por Carlos II a su hermano, futuro Jacobo II. El breve daba a Penn y a sus sucesores la facultad de hacer leyes y de levantar impuestos, con el consentimiento de sus conciudadanos, reservándose el Rey el derecho de veto. Fue solamente en 1701 cuando la Corona inglesa cambió allí el sistema de gobierno por medio

¹ Soulié: *Les procès célèbres des Etats-Unis*, p. 13.

² *Les sources de la Constitution des Etats-Unis* (Traducción francesa), 1897, páginas 23-25.

de una carta que creó un gobernador, un Consejo de Estado y una Asamblea de Diputados.

La Carolina había sido antes otorgada por el mismo Rey a lord Clarendon. El sistema de administración implantado allí brotó, dice Stevens, del cerebro del filósofo Locke. La Georgia fue fundada por Jorge II en 1732. El ensayo de administrar esta colonia por una compañía privada no dio buen resultado y aquella volvió al dominio directo de la Corona.

Estos datos son útiles al historiador como puntos de comparación con lo que era el régimen político y administrativo del Imperio español.

VI

LA INQUISICIÓN

Francisco I, que sostenía a los protestantes alemanes contra Carlos V, persiguió con saña a los franceses en su reino. "Como una estatua de la Virgen fuese mutilada, en 1528, se ordenó abrir información contra la herejía: algunos suplicios tuvieron efecto y la Corte asistió a ellos. Siete años más tarde aparecieron pasquines contra la misa hasta en el cuarto del Rey: muchos herejes fueron quemados..."¹

"En cuanto a los luteranos —dice Pierre Clément²—, las persecuciones dirigidas contra ellos por Francisco I son la mancha

¹ *Histoire des Quatre Derniers Valois*, por M. E C., p. 25.

² *Enguerrand de Marigny*. Paris, Didier et Cie. Libraires-Editeurs, 1859, páginas 138-141.

más grande de su reinado (...) Pero si es necesario alabar a Francisco I de haber querido oponerse a los progresos de las nuevas sectas en Francia, nunca podría protestarse bastante contra la inhumanidad y la barbarie de que dio prueba en su cruzada anti-protestante (...) A pesar de los esfuerzos de algunos espíritus escogidos, especialmente de Clément Marot y de Margarita de Angulema, Francisco I combatió la Reforma por medios dignos, salvo el número de víctimas, de Nerón y de Diocleciano. Cien veces, bajo su reinado, el mismo mercado de cerdos donde se hacía hervir a los monederos falsos y la plaza de Grève, vieron encenderse las hogueras destinadas a los sectarios de Lutero (...) Pero fue sobre todo a fines de 1534 y a comienzos del año siguiente cuando la persecución contra los luteranos fue encarizada, implacable. El 28 de octubre de 1534 se quemó a tres en la Croix-du-Trahoir y a tres más en el Mercado. El 10 de noviembre siguiente se condenó a otros siete, que fueron también quemados en varios barrios de París, después de cortar la mano a los más de ellos (...) Por la misma época fueron quemados en París solamente... más de treinta luteranos, entre quienes se contaban mujeres, escolares, negociantes, libreros, artesanos de toda profesión."

Porque en aquella época se cocía a las gentes aún vivas: en el *Diario de un burgués de París*, escrito bajo el mismo reinado, se lee: "El 9 de noviembre de 1527 Yon de Lescut, negociante de París, fue hervido en el mercado de Pourceaux-les-Paris porque durante más de quince años había fabricado falsa moneda de oro y de plata, por cuyo medio había hecho grandes adquisiciones".¹

¹ *Ibidem* p. 138.

El historiador-cronista Lenôtre dice por su parte: "Sólo en el ducado de Lorena se quemó, en veinte años, de 1585 a 1604, a más de cuatrocientos brujos; y la cosa habría durado largo tiempo si, al comienzo del siglo XVII, en la jurisdicción de la Marche, un acusado, Thomas Gandel, a quien se intimaba revelase los nombres de sus compañeros de travesuras diabólicas, no hubiera tenido la ingeniosidad de denunciar sus jueces: él había visto, en el aquelarre y sentados a la mesa con el Demonio, a todos los magistrados presentes en la audiencia, desde el procurador general hasta el escribano".¹

En todo aquel juego no se quedaban, naturalmente, en zaga los hugonotes. Y sería harto curioso saber en qué parte y ocasión pudo verse en España algo semejante a un Beaumont des Adrets, barón protestante, divirtiéndose en Montbrison con que los soldados católicos prisioneros saltasen de la plataforma de una torre, mientras que sus reitres los recibían al pie, entre gritos y sarcasmos, en la punta de sus alabardas.²

Fueron terribles las persecuciones en tiempos de Elisabeth de Inglaterra. Los turiferarios de esta gran soberana confiesan que aprobó, personalmente, el asesinato de doscientos cincuenta papistas, aunque aprovechan para recordar que María había hecho matar trescientos protestantes. De hecho, a este respecto, las dos hermanas Tudor se valen. Sino que a la católica los protestantes la bautizaron Sangrienta.

El angloamericano Thomas Walsh escribe: "En cambio, si había algún lugar en el mundo donde se invocara aparatosamente la libertad y se la despreciara y escamoteara cruelmente, era la

¹ *Ce qu'on voyait au Sabbat.*

² *Histoire des Quatre Derniers Valois*, p. 120.

Inglaterra de Elisabeth... El número de católicos asesinados fue muy superior al de los protestantes ejecutados bajo el reinado de María, que fueron doscientos setenta. Pero aparte su número, por su ferocidad cruda y sangrienta, la persecución inglesa ha tenido pocas que se le puedan comparar en la Historia. Cada correo traía listas de las más terribles matanzas de sacerdotes y laicos, en especial en aquella época." Walsh agrega que "en Inglaterra no existía ya ni libertad de opinión en ningún asunto que se refiriera a personas de distinción. El mundo no ha conocido nada peor, como no sea la Rusia Soviética".¹

Casi al mismo tiempo que el proceso de Belén en Boston, por 1692, se efectuaba en Aix-en-Provence, el del negociante marsellés Béliard, acusado de blasfemia. El tribunal de esa ciudad, "considerando que la horrible impiedad y la abominación de los designios sacrílegos de Béliard no permitían ninguna circunstancia atenuante", le condenó a que se le cortase la lengua, "la que sería arrojada al fuego, antes de que al mismo se le quemase vivo".

En materia de torturas, la Inquisición católica no era la sola en aplicarlas. En 1689, los magistrados de Berna lo hicieron, por ejemplo, con Catalina de Wateville, acusada de ser espía extranjera: "Se le aplastaron los pulgares hasta que brotó la sangre y cayeron las uñas; se la levantó por el brazo mediante una polea y se ató a sus pies una piedra de veinticinco libras. No habiendo esta experiencia desatádole la lengua, se reemplazaron las cuerdas que la tenían suspendida por hilos de alambre que penetraban en sus carnes y la piedra de veinticinco libras

¹ *State Papers Spanish*, III, 231. 4 de diciembre de 1581. Citado en la *Historia de España* por don Ramón Menéndez Pidal, XIX, p. 441.

por otra de doble peso." Y el público veía, presenciaba todo, pues se había quitado el techo del cuarto de torturas "a fin de que los pasantes por la calle pudiesen convencerse de que no se trataba a la espía con indulgencia. La sangre corría de sus brazos y piernas y se aprovechó de ello para desnudarla y envolverla en una malla de hierro, cuyo contacto avivaba sus heridas y les impedía cicatrizarse. En fin, al cabo de dos meses y medio de este régimen se la condujo al cadalso".¹

Es innegable, y se lo ha repetido a saciedad, que durante lo que puede llamarse el apogeo del régimen de la Inquisición en España, los laicos y los monjes y frailes españoles pudieron publicar contra el gobierno real y en favor de los derechos del pueblo, tratados tanto o más audaces que cuanto dijeron los Enciclopedistas. Eso está escrito y repetido, agregándose que ni el Rey ni la Inquisición inquietaron a aquellos publicistas, aun cuando algunos llegaron hasta defender la forma republicana de gobierno.

El pueblo entero de Madrid concurrió al entierro de Lope de Vega; y al recordar este hecho, M. François Pietri escribe: "Detalle lleno de enseñanza: mientras en el país de los autos de fe el clero da la absolución al sarcófago de Lope, le sigue procesionalmente hasta el cementerio y escucha allí un poema fúnebre recitado por uno de sus bastardos, la Iglesia de Francia rehusará todavía cuarenta años más tarde dar a Molière sepultura cristiana." ²

"Se les ha reprochado mucho (a los españoles) —dice Monsieur Mousnier— la introducción de la Inquisición en México,

¹ G. Lenotre: *L'Espionne*, p. 66.

² *L'Espagne au Siècle d'Or*, p. 285.

en 1509. Algunos hispanizantes hacen notar que de 1569 a 1715, es decir, en ciento cuarenta y seis años, hubo en Nueva España treinta ejecuciones capitales por auto de fe, y treinta en Lima, Perú, mientras que en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX, hubo durante treinta años un linchamiento cada cincuenta y nueve horas y cuarto."¹

Se sabe que en Venezuela no hubo ninguna condenación a muerte por delitos religiosos en el espacio de los tres siglos coloniales.

Y no es menos sabido que en los filtros y alambiques de la Inquisición sólo se trataba el elemento o producto puramente cristiano. El judío entraba en la probeta cuando era converso. Era un tribunal contra la herejía y de ningún modo contra otra religión extraña al cristianismo. En América jamás se quemó a un indio porque fuese pagano.

Pero no es con los linchamientos del siglo XIX que debe establecerse la comparación sugerida por M. Mousnier, sino con los procesos de brujería efectuados en las colonias inglesas durante el siglo XVII.

Según puede verse, no sólo en España se combatió la herejía durante toda una época en que, al decir de Wiston Churchill, "la religión tenía en la vida un papel tan importante como el que tiene hoy el deporte".²

M. Louis Pauwels escribe en el prefacio de la obra de Jean Lorédan, reeditada recientemente: ³

¹ *Histoire Générale des Civilisations*. Vol. IV, p. 423.

² *Marlborough. Sa vie et son temps*. (Traducción francesa), p. 43.

³ *Un prince de Belzébuth*. Bibliothèque Historique Mondiale, 8, rue Berri. Paris.

"He querido que la Biblioteca Mundial publique la admirable narración de Jean Lorédan porque reúne una suma considerable de conocimientos sobre la atmósfera conventual e inquisitorial de principios del siglo XVII en el sur de Francia.

"En esa época se quemó en Francia a muchas docenas de miles de hombres y mujeres acusados de brujería y, sin embargo, se estaba en el momento en que Descartes escribía el *Discurso sobre el Método*.

"En Europa, durante los siglos XV, XVI y XVII, se producen poderosas epidemias de diabolismo que cubren el Continente con las cenizas de las hogueras."

No fue el fraile Torquemada, sino el cardenal Richelieu, o su agente Laubardemont, consejero del Parlamento, quien hizo condenar al canónigo Urbain Grandier, en 1634. Convencido de magia y maleficio, Grandier fue quemado vivo, después de habérsele roto las piernas con borceguíes de hierro. Este famoso proceso de las posesas del convento de las Ursulinas de Loudun no tiene parecido en toda la historia de la Inquisición española.

El gran Cardenal, que, por otro lado, y como es bastante conocido, no tuvo escrúpulos al unirse con los príncipes protestantes de Alemania para combatir a la Casa de Austria, tomó o hizo tomar por Luis XIII varias medidas contra los hugonotes franceses, a quienes, derrotados en todas partes, privó la paz de Alais, en 1629, de sus privilegios de defensa militar.

Luis XIV dictó desde luego una serie de disposiciones, tales como la supresión de las cámaras paritarias, que antes juzgaban en los asuntos concernientes a los "religionarios"; la exclusión de éstos de ciertos oficios y profesiones; la demolición de los templos que se decía contruidos con violación del Edicto de

Nantes, y el fin de los privilegios otorgados a los convertidos, entre ellos los relativos al pago de sus deudas y a la repartición del impuesto.

El Edicto fue revocado en octubre de 1685. Louvois escribió entonces: "Su Majestad ordena que se trate rigurosamente a los que no quieran hacerse de su religión; y los que tengan la necia gloria de ser los últimos, deberán padecer lo más extremo".¹

El decreto de revocación ordenó: la destrucción de todos los templos, prohibiéndose el ejercicio de la religión reformada; el destierro de todos los ministros de esa religión en un término de quince días, con interdicción, bajo penas graves, al común de los protestantes de salir del Reino. Se sabe que, a pesar de esta última prohibición, y según asegura Voltaire, cincuenta mil familias se marcharon de Francia en tres años, seguidas luego de muchas otras que "llevaron a los extranjeros las artes, las manufacturas y la riqueza".

Louis Madelin hace notar que cuando Luis XIV revocó el Edicto de Nantes, "Inglaterra aprisionaba y condenaba a muerte a los no conformistas católicos, Ginebra se cerraba a los papistas y Holanda era inaccesible a la "superstición romana". En el siglo XVII, por un protestante quemado en París, había dos católicos colgados en Londres. Por lo demás, la opinión francesa era, en su inmensa mayoría, favorable a la medida".²

Algún punto de comparación podría encontrarse entre la revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV y la célebre expulsión de los moriscos ordenada un siglo antes en España por su abuelo Felipe III. Cuestión ha sido ésta ampliamente deba-

¹ Julián Juderías: *La Leyenda Negra*, p. 472.

² *Les grands serviteurs de la Monarchie*, p. 119.

tida y que aún en nuestros días sirve a veces de argumento a juicios y polémicas. Ya en 1598, el famoso Antonio Pérez escribía al joven Rey, recién subido al trono: "Y en fin, obedientes (los moriscos) mientras hubiese paz, desleales y muy para ser temidos si hay guerras civiles o revueltas extranjeras, que es cuando los oprimidos, como quiera que sean y lo estén, levantan las cabezas y muestran su mal ánimo." Apenas seis años más tarde, Enrique IV de Francia entraba en tratos con los moriscos y les excitaba a sublevarse. Numerosos en el reino de Valencia, pedían armas y jefes para apoderarse de la ciudad. El futuro mariscal de La Force envió a España, por orden real, un agente encargado de los tratos. Los conspiradores ofrecían levantar ochenta mil hombres y entregar a los franceses tres ciudades, un puerto entre ellos. Pero el gobierno de Jacobo I, sucesor de Elisabeth de Inglaterra y partidario de un acuerdo anglo-español, comunicó el complot a Felipe III. El espía francés Saint-Estève fue preso en Valencia y condenado a muerte. El duque Auguste de La Force, en su excelente libro sobre su antepasado el Mariscal, narra aquellos sucesos y concluye: "Tantos complots precipitaron la expulsión de los moriscos. Se comprende que España haya querido echar fuera a estos enemigos interiores tan peligrosos para ella. Idiáquez, ministro de Felipe II, quien, en 1595, había sido casi el solo que viese qué calamidad sería para su país la partida de súbditos tan laboriosos y ricos, notables en la hacienda, la industria y la agricultura, estimaba (sin embargo) que todo ello no debía considerarse cuando se trataba de "quitarse el cuchillo de la garganta".¹

¹ Pp. 144-46.

Tal se presentaba en verdad el problema. Personalmente, hemos tomado siempre con extrema reserva aquello de la capacidad y posibilidad atribuidas a los moriscos en materia de agricultura y otras riquezas, pues juzgamos según lo que ellos mismos y sus congéneres han hecho en el norte de Africa y otras tierras árabes y arabizadas. Nos parece, por otra parte, que la unidad moral del Reino valía ciertamente mucho más que la presencia en una porción de su territorio de algunos millares de bereberes, prontos siempre a la rebelión y a componendas con el enemigo exterior. Reflexiónese por un momento en esa terrible e insoluble cuestión de minoría mora, cifrada en millones, que se presentaría hoy a España, si Felipe III y su ministro Lerma no hubiesen barrido su suelo de aquellos extranjeros, absolutamente inasimilables desde entonces por el organismo nacional, ya bastante saturado de africanos. Es, pues, indudable, aparte todo romanticismo, que esa medida política, pretextada, si se quiere, con motivos religiosos, produjo mayores bienes que males.

En nuestra época, las expulsiones y trasplantes de pueblos alógenos se efectúan algunas veces bajo la égida de los organismos internacionales y con el nombre decente y jurídico de canje de poblaciones.

Cerremos este párrafo diciendo que, en nuestra opinión, la medida correlativa de expulsar también a los judíos, escalonada, como se sabe, en varios reinados, a partir del de los Reyes Católicos, fue, al contrario de la anterior, funesta para España. Pero no hay aquí sitio para extenderse sobre ello.

La persecución de la herejía continuó en Francia durante el siglo que siguió a la muerte de Luis XIV. El profesor Henri

Régnauld escribe:¹ "La declaración del 8 de marzo de 1715 debía agravar aún el rigor de las disposiciones adoptadas en 1685. Fundándose en la idea de que la permanencia de los protestantes en el Reino después de la revocación del Edicto de Nantes es la prueba de su conversión, aquella declaración reputa por relapsos a todos los que en su lecho de muerte manifiestan morir en la religión reformada y ordena que se procese su memoria. Además, por el hecho de que no existen los protestantes, todos los franceses deben casarse por ante el cura, recibir los últimos sacramentos y dejar educar a sus hijos en la religión católica. Para dar mayor eficacia a estas medidas, toda posibilidad de celebrar el culto, aun en secreto, se suprime, y se aplica la pena de muerte a los ministros, la detención perpetua a los asistentes, al mismo tiempo que se declaran nulos los matrimonios celebrados *au désert* y bastardos los hijos. La declaración de 14 de mayo de 1724 es más terrible todavía, pues renueva la prohibición a los protestantes de desempeñar funciones públicas, ordena disolver las asambleas ilícitas y prevé el rapto de los niños de los herejes para hacerlos educar en la religión católica".

Puede decirse, naturalmente, que aquellas disposiciones legales no se aplicaban siempre con todo su rigor. Pero es necesario agregar, aunque los escritores no lo tomen en general en cuenta, que también sucedía lo mismo con las leyes españolas en esta y otras materias.

En 1778 fueron quemados vivos en una plaza de Lieja setenta procesados por magia y misas negras, a quienes se llamaba los Caballeros del Macho Cabrío, es decir, del Diablo.

¹ *Manuel d'Histoire du Droit français*, p. 281.

En Inglaterra, a fines del siglo XVIII, toda práctica anticristiana de magia o brujería se castigaba aún con la pena de muerte.

Y el colmo de las "cosas de los ingleses" es que hace sólo seis años, en 1958, fue cuando se abrogó una ley de 1677, que ordenaba que las personas que predijeran el porvenir fuesen quemadas en la plaza pública.

En resumen, ¿qué pensar de la Inquisición española y, en general, de la batalla dada en Europa durante siglos a la herejía? Líbrenos Dios de querer constituirnos en juez de tan grave cuestión. Nuestro único propósito al evocarla ha sido recordar al lector del presente libro, con cita de algunos hechos bien probados, que en esa materia, y en las demás relacionadas con nuestra historia, el fanatismo y otras tendencias de su género no son aberraciones exclusivas del carácter español, como pretende hacerlo creer una pseudo psicología generalmente aceptada.

Y completemos el cuadro con dos opiniones, siempre ajenas, que pueden ayudarnos a salir del atolladal.

En un comentario publicado en el *Journal de Genève*¹ sobre la obra de M. Marcelin Defourneaux,² leemos: "Escrutando con una lente el propio mecanismo del procedimiento inquisitorial, el profesor Defourneaux demuestra que la Inquisición española en el siglo XVIII se caracteriza sobre todo por su ineficacia: no sólo la Inquisición ve sus competencias limitadas por el poder real, sino que el embargo de los Jesuitas sobre el Santo Oficio tiende a transformarle, a daño suyo, en instrumento de polémica contra los jansenistas... La inspección inquisitorial en las fronteras no es, con frecuencia, sino una parodia rutinaria... De

¹ Número de 11 de junio de 1963.

² *L'Inquisition espagnole et les livres français au XVIII siècle*. P. U. E, París.

hecho, el pensamiento de los enciclopedistas conoció gran difusión entre las *élites* de la Península. Los grandes de España y las gentes de la Corte gozan de permisos; los sabios, los eclesiásticos y todos los miembros de las academias locales obtienen licencias de la Inquisición. La venalidad y el contrabando se encargan del resto". Conclusión del profesor Defourneaux: "No, la Inquisición, de hecho, no cerró a España a la cultura europea: toda la historia del siglo XVIII español prueba lo contrario. Pero aquélla dio a algunos de los que vivían en el interior de sus fronteras la impresión de estar encerrados en una "prisión intelectual" a través de cuyos barrotes no podían sino entrever la libertad".

Conclusión aceptable, aunque cabe preguntar si existiendo también la inquisición de libros fuera de España, por qué la "prisión intelectual" debía creerse existente sólo en ese país.

A pesar de todo, siempre y ciertamente quedará el dicho Torquemada en la imaginación pública, porque hay símbolos y nombres que, una vez lanzados y puestos en circulación, toman forma de indestructibles realidades. Multitud de gentes creen, y seguirán creyendo, que la Santa Hermandad era un tribunal religioso, o algo así como la milicia de la Inquisición, cuando la verdad es otra: la Santa Hermandad fue simplemente la policía creada por Fernando e Isabel, en 1476, para perseguir y castigar los delitos cometidos en despoblado. Los abusos de aquella guardia civil y que le valieron las sátiras cervantinas, no tienen nada que hacer, o poquísimo, con el tribunal de la Inquisición.

¡Cuántas cosas verdaderas o falsas se han escrito sobre el terrible Gran Inquisidor! Es claro que no hay aquí sitio para separarlas. Pero a fin de que no todo lleve en estas páginas un

sello de excesiva gravedad, recordemos la aguda crónica en que Jean-Jacques Brousson anunciaba la aparición del conocido libro de Marguerite Jouve: "Fue Víctor Hugo quien inventó a Torquemada. El padre de Torquemada es el mismo de *Hernani* y de *Ruy Blas*. El autor de la *Leyenda de los Siglos* creó la leyenda de Torquemada, y ¿por qué? ¡Por algunas vocales sonoras! Torre-que-mada. Educado en Madrid con los pajes del rey José, el pequeño Víctor oyó resonar cierto número de palabras que divirtieron su pubertad. Apenas eran sonajeros sacudidos por muchachos, que se convirtieron en dogmas republicanos del otro lado de los Pirineos".¹

Además, las cosas habían cambiado bastante desde los tiempos del celeberrimo fraile. El no menos célebre Beaumarchais, a quien no se puede calificar de particularmente devoto y retrógrado, escribió al duque de La Vrillière la carta que citamos en la página 200 de nuestra obra.²

VII

LOS LIBROS

¿La inquisición de y contra los libros? No hubo una sola y española, sino varias y en todas partes, y abundan los ejemplos, de que apenas caben aquí algunos típicos. Subsiste aquélla en

¹ *Je suis partout* (Hebdomadario). 3 de noviembre de 1934.

² Loménie: *Beaumarchais et son temps*. (Citado por Grandmaison: *L'Espagne et Napoléon*, I, p. 396.

nuestros días y bajo diversas formas, sin la hoguera, por fortuna, y en países donde el puritanismo y la pudibundez caracterizan aún el odio a la Iglesia Católica, que, para muchos, continúa allí siendo la bestia apocalíptica.

La traducción del Nuevo Testamento al inglés, que hizo William Tyndale en 1525, sólo pudo publicarse en Alemania. "Los hombres que osaron traducir la Biblia al inglés —dice el profesor de Teología Williams, de Denver— fueron perseguidos y algunos lo pagaron con la vida. Sus estudios fueron quemados, sus obras confiscadas o destruidas, rotas sus prensas de imprimir. Se los excomulgó y persiguió en los países extranjeros y varios terminaron en la hoguera".¹

En aquella misma Inglaterra, Jacobo I hizo quemar por mano del verdugo, en el atrio de la Catedral de San Pablo, la obra publicada por el español Suárez en defensa de la fe católica y prohibió su lectura a los ingleses bajo penas severísimas. El Parlamento de París hizo también quemar ese mismo libro, en 1614, porque contenía máximas contrarias al derecho de los reyes.

"El Parlamento —leemos en Grimm—, en consecuencia del voto del gobierno y del clero y a petición del abogado general, ha hecho, el 18 del mes último (1770) los gastos de una fajina, al pie de la escalera del *Mai*, para hacer quemar por el verdugo algunas citas del procurador que representaban siete de las obras más desagradables para el clero." Es cierto, agrega Grimm, que los miembros del Parlamento hacían quemar los títulos, a fin de poder guardar los libros condenados en sus bibliotecas particulares...

¹ *Les Prophètes, pionniers du Christianisme*, p. 34.

Cuando, en aquel mismo año, M. Thomas, director de la Academia Francesa, respondió al Arzobispo de Tolosa, que entraba a ella, hízolo en tales términos que el gobierno prohibió la impresión total o parcial de su arenga, con amenaza al autor de ser destituido de su calidad de académico, embastillado y aun colgado en la plaza de Grève.

Los primeros tres volúmenes de la segunda edición de la Enciclopedia fueron secuestrados durante años.¹

Rousseau tuvo que escapar de Francia después de la publicación del *Emilio*, y sólo pudo hacerlo gracias a la intervención personal de Conti.

Decidióse quemar aquel libro en la grande escalera del Palacio de Justicia, y se lanzó un decreto de prisión contra el autor. Y lo interesante del caso fue que quienes se encarnizaron contra el ginebrino, sobre todo a propósito de las *Confesiones*, no fueron los católicos, sino los pastores protestantes, cuya "hostilidad infernal —dice Hippolytte Buffenoir— contribuyó más que nada a las desgracias del grande hombre y a envenenar su vida".²

Las autoridades de Ginebra no se mostraron menos severas con tan ilustre conciudadano, y a su vez condenaron *El Contrato Social*, alegando motivos religiosos, aunque, en el fondo, obedecieron a motivos políticos.

Lo que hay de más jocoso en la aventura del Abate Raynal es que su Historia, o supuesta Historia, fue también quemada por el verdugo en París como blasfematoria y subversiva, y que el

¹ *Correspondance Littéraire, Philosophique et Critique*, I, pp. 255, 270.

² *La Maréchale de Luxembourg (1707-1787)*. París, 1924.

libelista hubo de tomar la fuga para evitarse, al menos, un calabozo en la Bastilla.

El capítulo de la intolerancia en las Universidades coloniales es de los más fecundos en comentarios antiespañoles y, aparte lo que en él hay muchas veces de conseja y exageración, los comentaradores ignoran, voluntaria o involuntariamente, las circunstancias del mundo de entonces y cuanto en virtud de ellas acontecía en los países de Europa, cualesquiera que fuesen. ¿Hase visto caso como el del joven Gibbon, arrojado de un colegio de Oxford, a los dieciséis años, por haberse convertido al catolicismo? ¿Y qué decir de su envío inmediato a Lausana, donde, en manos de un pastor tiránico y de su avarienta mujer, se le forzó a abjurar por los medios más condenables de presión moral y material? Para que se le dejase en paz, el muchacho concluyó por "someterse con fe implícita a los dogmas y a los misterios adoptados con el consentimiento general de católicos y protestantes".¹

En América española, los primeros que introducían libros prohibidos eran los obispos. "A la muerte del segundo obispo de Mérida, Ilmo. Sr. Torrijos —dice el doctor García Chuecos—, el Comisario de la Inquisición en dicha ciudad halló en la biblioteca del Prelado gran cantidad de libros prohibidos, que extrajo de ella y remitió a España. Y como éste, hubo casos más graves en centros tan cultos como Lima y México, Santa Fe y Buenos Aires".²

No volvamos aquí sobre cuanto en el particular observaron en Venezuela Humboldt y otros viajeros, y citemos solamente algunos otros casos menos familiares a nuestro público.

¹ *Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire Romain*. Prefacio.

² *Estudios de Historia Colonial Venezolana*, I, p. 316.

El viajero francés Lafond calculó en veinte mil el número de libros que formaban la biblioteca de los Jesuitas en Quito. Y el sabio Caldas vio en librerías privadas de la misma ciudad las obras de Buffon, de Lineo, de Maupertuis, de Réaumur, de Ramford, sin contar la colección de las sesiones de la Academia de Ciencias de París. Hidalgo, el héroe del "Grito de Dolores", que era un pobre cura de aldea, "compartía el tiempo entre la lectura de (autores) españoles y franceses y la música".¹

El autor inglés de *Campagnes et Croisières*² dice: "Se encuentra (en el Colegio de los Jesuitas de Popayán) una gran biblioteca bien provista de libros, de telescopios y de instrumentos de matemática, así como una escuela cuyos muros están cubiertos de pinturas relativas a las ciencias, desde el alfabeto hasta la figuras de los elementos de Euclides."

La universidad de Chuquisaca, ciudad de segundo o tercer orden, tenía hasta quinientos estudiantes, dice Mariano Moreno. El hermano de este ilustre prócer argentino agrega: "Todos los mejores autores de Europa sobre política, moral, religión, historia, etc..., que han pasado de cuando en cuando por entre las severas prohibiciones del despotismo inquisitorial hasta Buenos Aires, han ido seguramente a parar al Perú donde encuentran mejor recepción, ya por el mayor aprecio que de ellos se hace, ya por el más subido precio a que se venden, o ya, en fin, porque el espionaje es menos severo, siendo los que están encargados de estorbar la circulación de semejantes obras los mismos que las solicitan y colocan con preferencia en sus estantes. El gusto de la literatura francesa es el dominante y hay muy pocos de pro-

¹ Véase a Bulnes: *Nacimiento de las Repúblicas Americanas*, II, pp. 8-9, 204.

² P. 221.

fesión científica que no conozcan este idioma. Mariano se instruyó en él y empezó a ensanchar sus ideas con la lectura de Montesquieu, d'Aguesseau, Raynal y otros célebres escritores de esta nación".¹

VIII

LA TOLERANCIA ANGLOSAJONA

Decimos y repetimos que no hay derecho para tener la intolerancia religiosa como atributo característico exclusivo de los españoles. Para volver desde luego a nuestro Hemisferio occidental, y sin dejar de recordar, a título de chiste, que los daneses imponían en sus Antillas una multa de veinticinco libras de tabaco a todo individuo que no asistiera el domingo a la iglesia, veamos un poco lo que sucedía con los anglosajones en el Norte.

La famosa búsqueda de la libertad de religión por los Peregrinos y otros fundadores de las Colonias fue, en realidad, la búsqueda del exclusivismo protestante. "La inmensa mayoría de los refugiados que llegaron a Nueva Inglaterra —dice Boutmy²— formaron más que una sociedad de ciudadanos una comunidad de fieles; leyes sanguinarias prohíben el arribo a aquellas plazas de los católicos, de los cuáqueros, de los miembros de todas las sectas que no fueran congregantes. En Massachusetts y en Connecticut se estableció un régimen de terror; todas las almas reci-

¹ *Vida y Memorias*, pp. 51, 54, 55.

² *Études politiques*, p. 109. Boutmy fue el fundador de la *École des Sciences Politiques de Paris*.

bieron el sello del puritanismo y esa huella subsistió aun después que a los rigores de la disciplina hubieron sucedido reglas más clementes."

El publicista francés agrega: "Roger Williams no representaba el espíritu de aquellas Colonias: fue perseguido y debió refugiarse en Providencia. Los demás pueblos que fueron fundados por sus discípulos, o por refugiados imbuidos de sus principios, no eran, por decir así, sino barrios de dicha ciudad, puesto que el Estado de Rhode-Island, donde estaban agrupados, es todavía hoy el más pequeño de América del Norte. Por lo demás, su sistema no tuvo buen éxito: al cabo de un siglo, la sociedad que se había constituido en Rhode-Island bajo el régimen de la libertad absoluta era materia de escándalo para todos los Estados Unidos. Las costumbres privadas eran allí detestables y no existía fe pública.

"Lo que se estableció en aquella época, casi en todas partes de los Estados Unidos, no fue la libertad de conciencia, sino algo muy diferente: la tolerancia. Esta tolerancia provenía, casi dondequiera, de un razonamiento fundado en las condiciones económicas de cada grupo social."

Pero, ¿qué era esta tolerancia entre anglosajones? "Cualquiera que adore otro Dios que el Señor será castigado con la muerte", decía la ley de Connecticut en 1650. Y como textos aplicables se citaba el Deuteronomio, el Exodo, el Levítico. La blasfemia, la brujería, el adulterio, la violación, el ultraje a los padres se castigaban asimismo con la muerte. El simple comercio entre hombre y mujer no casados, llevaba consigo la multa y el látigo en público.

La ley de Massachusetts es semejante. El tribunal de New Haven condenó a muerte a una niña que se había dejado dar un beso. La mentira merece la multa y el látigo. Se castiga a los que beben o fuman, a la mujer que lleva cabellos largos.

En 1656 se expulsó de aquel territorio a los cuáqueros, "secta maldita de herejes". Expulsados también los curas católicos, y si vuelven se los mata.¹

Edward Channing² dice que en la provincia de Nueva York no se hallaba ni un solo irlandés antes de la Revolución, "tanto eran severas allí las leyes vigentes contra la religión católica romana".

En Pensilvania había libertad de cultos y todos los cristianos tenían derecho de voto, mas no así los judíos, quienes sólo podían votar en Rhode-Island.

La Carta constitutiva de Georgia en 1732 excluyó de allí a los católicos.

En pleno siglo XIX aún, hasta las leyes que crean escuelas y extienden la instrucción en los Estados Unidos son dictadas por el espíritu esencial y únicamente religioso. El preámbulo de una ley de Massachusetts dice: "Considerando que Satanás, el enemigo del género humano, encuentra en la ignorancia de los hombres armas poderosas..." Es lo que Tocqueville llama la combinación maravillosa del espíritu de religión y del espíritu de libertad.³

¿Qué decir, por otra parte, de las leyes impuestas por los ingleses durante todo el siglo XVIII en Irlanda, donde los católicos

¹ Ver Tocqueville: *De la Démocratie en Amérique*, I, pp. 58 y sig. Ver también a este respecto la *History of the Colony of Massachusetts*, por Hutchinson.

² *Histoire des États-Unis d'Amérique* (1765-1865). Traducción francesa.

³ *Loc. cit.*, I, pp. 65-67.

estaban privados de las libertades que pueden dar precio a la vida? Los obispos, sacerdotes, monjes y frailes refractarios a cierto juramento de abjuración estaban considerados como traidores y pasibles de muerte, siempre a merced de los delatores. "La caza de curas se convirtió en industria y los obispos católicos romanos se vieron obligados a ocultarse bajo disfraz en los pantanos y montañas. Los católicos no eran electores ni elegibles. No podían ser *sherifs*, miembros del parlamento, abogados, procuradores, etc. En la mayor parte de las ciudades, las corporaciones les cerraban los ramos elevados del comercio. No podían llevar espada, hábito de gentilhomme, sin licencia muy difícil de obtener. Si poseían caballos, todo protestante podía obligarles a venderlos al precio de cinco libras. No podían enviar a sus hijos a escuelas de su confesión, en la isla o en el extranjero. No podían gozar de un alquiler mayor de treinta y un años, y si el beneficio de éste excedía de un tercio, dicho alquiler podía transmitirse a cualquier protestante que delatase el hecho. Si el hijo de un propietario católico se convertía al protestantismo tenía la facultad de transformar el derecho inmobiliario de su padre en renta viajera y asegurarse la sucesión con preferencia a sus hermanos. Para estimular las conversiones al protestantismo se creó en 1773 el sistema de las Escuelas Patentadas, destinadas "a liberar el alma de millares de pobres niños amenazados por las supersticiones y la idolatría papistas y librar sus cuerpos de las miserias engendradas por la pereza y la mendicidad".¹ El "Acta de emancipación" que dio a los católicos irlandeses el derecho de voto, sin concederles el de ser electos, data de 1793.

¹ Powell y Tout: *Loc. cit.*, pp. 990-91.



Otro sonido de campana en Francia. En 1785 La Fayette escribía a Washington: "Aunque no haya persecución abierta (contra los protestantes) ellos dependen del capricho del Rey, de la Reina, del Parlamento o de un ministro. Sus matrimonios son ilegales, sus testamentos no tienen fuerza alguna ante la ley, sus hijos son considerados como bastardos."

Sólo por ordenanza de 29 de enero de 1788 vino Luis XVI a conceder a los no católicos el uso de los derechos civiles de que les había privado el Edicto de Nantes.¹

En nuestro mundo contemporáneo hay todavía formas de intolerancia verdaderamente estrambóticas. En un artículo crítico sobre los *Souvenirs* de Charles Benoist,² André Bellesort notó: "Y él (Benoist) observaba que en ningún pueblo (como en Holanda) la teología había representado mayor papel para la formación de los partidos. Recuerdo, en efecto, que uno de los críticos holandeses más conocidos me decía que en su país, reputado como tierra de tolerancia, si las sectas se toleraban, la intolerancia vivía en el corazón de cada una de ellas; y me daba este ejemplo increíble: en Brabante los paisanos habían fundado asociaciones para la procreación de cabras sobre bases católicas y para la procreación de cabras sobre bases protestantes."

¹ Kunstler: *La Vie Quotidienne sous Louis XVI*, pp. 299, 336.

² *Je suis partout* (Hebdomadario). 29 de octubre de 1932.

IX

LA FRASE DE CARLOS IV

Debe rechazarse de plano la fábula del llamado oscurantismo colonial. Es absolutamente arbitraria la aseveración de Manuel Palacio Fajardo: "Una profunda ignorancia, aun en las artes más necesarias, reinaba en toda la extensión de este inmenso territorio".¹ Se trata allí de una de las numerosas inexactitudes que contiene el alegato de ese hombre insigne, propio y admirable ejemplo, él mismo, de la suma de conocimientos literarios y científicos que podía adquirir, bajo el régimen de la Colonia, un criollo de Venezuela. Y no sólo, se lo ve, un privilegiado señorito habitante de Caracas, sino también un llanero nacido en el hato de Mijagual, en el fondo de la provincia de Barinas.

Para deshacer la pertinaz afirmación basta repetir, por décima vez, la pregunta decisiva: ¿de qué escuela salieron Andrés Bello, Sanz, Roscio, Ustáriz, Espejo, Peña, Cristóbal y Luis Ignacio Mendoza, Peñalver, Briceño, aquel mismo Palacio Fajardo y otros grandes letrados que formaron el Congreso de 1811?

No era estúpida ni estaba sumida en las tinieblas aquella sociedad criolla, en la cual brillaban las artes más delicadas. El viajero escocés Robert Semple, que la visitó en 1811, comprobaba: "Dudo mucho que en alguna ciudad de los Estados anglo-

¹ *Esquisse de la Révolution de l'Amérique Espagnole*. París, 1817, p. 10.

americanos este arte exquisito (la Música) haya alcanzado igual perfección que aquí".¹ Bello escribirá a Fernández Madrid, el 20 de agosto de 1829: "Echo menos nuestra rica y pintoresca vegetación, nuestros variados cultivos y aun algo de la civilización intelectual de Caracas en la época dichosa que precedió a la Revolución". Y el Libertador mismo dirá, desencantado: "Hemos destruido tres siglos de cultura, de ilustración y de industria".

Repítese, no obstante, con insistencia de loro, que no existía la instrucción pública bajo el sistema español. Desde luego, cabe aquí otra de esas preguntas a las cuales debieran responder previamente los censores: ¿Qué era la instrucción "pública" en las naciones civilizadas de Europa a fines del siglo XVIII, y aun todavía a principios del XIX? No viene al caso recordar, por ejemplo, las condiciones en que se efectuaba la instrucción en Francia durante los últimos años de la monarquía. Pero sí es útil decir que, según el primer informe de Turgot sobre la hacienda, en 1775, no había en el presupuesto público ningún capítulo dedicado a los gastos de instrucción; y que en el informe de Necker, en 1781, sólo se halla la suma de seiscientas mil libras para las veinte universidades y los quinientos sesenta y dos colegios del Reino. El Estado francés "no contribuía a los gastos de la instrucción popular, y solamente por una parte restringida a los de la instrucción secundaria".²

Después de esto, vaya usted a fabricar cuentos porque el Estado español no había establecido lo que al presente se nombraría una cadena de escuelas laicas en las selvas del Orinoco,

¹ Londres, 1812. Traducción de J. H. Stahler. *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*. Número 60. Diciembre de 1932. Caracas.

² Kunstler: *Loc. cit.*, p. 302.

aunque sí instituyó gran número de misiones que enseñaban a los indios a leer y fundaban pueblos y villas.

En cuanto a las ciudades grandes o medianas, sábase suficientemente que si bien había muchos jóvenes ignorantes de cuanto se escribía en el extranjero, los había asimismo, y no pocos, que leían en el texto a Montesquieu, Rousseau y Voltaire.

Con este negocio de la instrucción pública se relaciona, natural y especialmente para los venezolanos, el bulo clásico de cierta frase atribuida al asendereado Carlos IV. Recordemos un poco de qué se trata.

A nuestro parecer, la primera vez que se lee la especie es en la citada notoria obra de Palacio Fajardo, publicada en 1817, y quien da la siguiente versión: "La ciudad de Mérida de Maracaibo, en Venezuela, había presentado al Rey una petición para obtener el permiso de fundar una Universidad: la administración fiscal decidió que debía desecharse la petición porque no era conveniente propagar la instrucción en la América española, cuyos habitantes parecían destinados a trabajar en las minas".¹

No habla, pues, don Manuel de decisión personal de Carlos IV, sino de la "administración fiscal", lo cual, por otra parte, permite sospechar que hay en su espíritu cierta confusión entre la funciones de algún empleado de hacienda y las del Fiscal de la Corona, o sea el representante de ésta, de obligatoria consulta en cualquier sumario o expediente que se formase en los Consejos del Rey, y que veremos expresamente mencionado en la Cédula que resolvió la cuestión.

¹ *Loc. cit.*, p. 32.

Pero hay otra versión del tema y que se refiere a una solicitud distinta, concerniente al estudio de las matemáticas en Caracas y dirigida, no ya al supuesto ignaro Carlos IV, sino a su padre y predecesor el esclarecido Carlos III.

En efecto, en los *Documentos para la historia de la Vida Pública del Libertador*,¹ "a falta de documento auténtico que compruebe este hecho", se leen algunos párrafos de un estudio de Arístides Rojas, publicado en 1873 y que rezan: "Así, durante la gobernación del Capitán General don Manuel González en 1785, propuso el Padre Andújar, capuchino aragonés de extensos conocimientos, se le permitiese regentar gratis una cátedra de matemáticas con el único objeto de aclimatar en el país este ramo de los conocimientos humanos. Accedió momentáneamente el Gobernador, pero con la reserva de que fuere apoyado por la Corte de España; cuando a poco andar llegó la Real Cédula de Carlos IV negando la licencia. *No conviene que se ilustre a los americanos*, decía el monarca, y la cátedra fue eliminada." Don Arístides confirmó lo dicho años más tarde: "Sin academia y en abandono continuaron en Caracas, después de la partida del coronel Castro, los estudios matemáticos que con tanto entusiasmo se habían fundado desde 1761... Cuando años después llegó a Caracas la Real Cédula de Carlos IV negando la licencia, por que *no convenía* ilustrar a los *americanos*. La cátedra fue suspendida cuando ya comenzaba a dar ópimos frutos".²

¹ Vol. I, p. 208.

² Citado aquí por Gonzalo Picón-Febres en *Nacimiento de Venezuela intelectual*, I, p. 131.

Codazzi volvió a la primera versión, la relativa a Mérida, en su *Geografía*. Pero es, sobre todo, importante lo que dice Baralt: "Felipe V accedió al fin a sus deseos (de los obispos, gobernadores y cabildos para que se fundase la Universidad de Caracas) por Cédula de 1721, que el Sumo Pontífice Inocencio XIII confirmó en el año siguiente, quedando convertido el Seminario Tridentino de Caracas en Universidad Real y Pontificia, con los mismos privilegios que la de Salamanca... Una razón semejante movió a los habitantes de Mérida a pedir a la Corte de Madrid igual gracia para un seminario que tenían; mas se las negó Carlos IV a principios de este siglo (el XIX) "porque Su Majestad no consideraba conveniente que se hiciese general la ilustración en América".¹

El ilustre literato tomó su información del *Repertorio Americano*² y de "otras autoridades", que no sabemos cuáles hayan sido. En el dicho Repertorio Baralt encontró la *Revista del estado anterior y actual de la instrucción pública en la América antes española*, por Juan García del Río, cuyo texto reprodujo Rojas.³

Todo esto forma uno de los infundios más curiosos, por decir lo menos, de que está entretejida la historia oficial de Venezuela, y de América en general, durante la época de la Colonia. Por tal razón, nos detenemos a poner aquí las cosas en su punto. Por suerte para la crítica seria, más de un escritor e historiógrafo ha logrado ya desbaratar impostura tan perturbadora del juicio his-

¹ *Resumen de la Historia de Venezuela* (desde el siglo XV hasta 1797), p. 436.

² Publicado en Londres. Vol. I., p. 244.

³ *Orígenes venezolanos* (edición de 1891), p. 183.

tórico en la debatida materia de la instrucción de los venezolanos antes de la Independencia.

No tenemos hoy a la vista el interesante trabajo sobre el particular del doctor Rafael Domínguez, que leímos hace varios años.¹ Pero sí podemos referirnos expresamente a cuanto escribieron Tulio Febres Cordero² y Caracciolo Parra León.³

Muy acertada es la indicación del notable humanista e historiador Parra León: "Nació también en la "Revista" (de García del Río) aquella peregrina especie de que "se prohibió el establecimiento de la Universidad de Mérida de Maracaibo porque Su Majestad no consideraba conveniente se hiciese general la ilustración de América"; pero quien haya leído la Cédula en que Carlos IV trató la materia (y puede leerse en los *Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida*, del Ilmo. Sr. don Antonio Ramón Silva, o en el tomo I de nuestros *Documentos del Archivo Universitario de Caracas*) no sólo verá que no contiene semejantes palabras, sino que mediante ella concedió el Rey al Colegio Seminario emeritense la facultad de dar grados mayores en Filosofía, Teología y Derecho Canónico, por lo cual fue recibida con grande alegría y esplendor."

Por el texto de la Real Cédula se ve que fue el Deán de la Catedral de Mérida, a la sazón Gobernador del Obispado, don Francisco Xavier de Irastorza, que se señaló después como muy enemigo de la causa de la Independencia, quien, el 1.º de mayo

¹ *Rectificaciones Históricas*. Clase y Academia de Matemáticas. (Anales de la Universidad Central de Venezuela. Número 2 de 1928, p. 101.)

² *Archivo de Historia y Variedades*, I, pp. 166-75.

³ *Filosofía Universitaria Venezolana*, pp. 171-72. *Documentos del Archivo Universitario de Caracas* (1725-1810), pp. 310-14.

de 1800, solicitó del Rey el establecimiento de una Universidad en el Colegio de San Buenaventura de aquella ciudad. El Gobernador Intendente de la Provincia, cuya capital había sido trasladada a Maracaibo, aprobó la idea, pero pidió que la Universidad se instalara en esta última población y no en la de Mérida. Dice la Cédula: "Remitidas copias de ambas representaciones y de los documentos que las acompañaron, con cartas de 21 de marzo de 801, al Gobernador Capitán General de Caracas, con encargos de que tomando conocimiento del asunto y los informes que estimase convenientes, formalizando expediente, y ayuda del Fiscal con precedente voto consultivo de mi Real Audiencia, expusiese lo que se le ofreciera, dirigió en 24 de abril de 1804 testimonio del citado expediente. Visto y examinado todo en mi Consejo de Indias, con lo informado por su Contaduría principal, lo que dijo mi Fiscal y habiéndome consultado sobre ello en 24 de marzo del corriente año: no accediendo al establecimiento de Universidad en esa ciudad, como solicitan en representación de 31 de mayo de 803, ni en Maracaibo, como propuso el Gobernador Intendente, he resuelto se fomente ese Seminario e inviertan sus rentas en el asunto de becas; se provean y voten las cátedras con profesores hábiles e idóneos para la enseñanza de las ciencias, y se pongan bajo el plan y gobierno conveniente para llenar los fines del Concilio (de Trento) y surtir el Obispado de curas y ministros instruidos y virtuosos de que carece... Con el fin de remover los inconvenientes de que los colegiales y cursantes de este Seminario tengan que pasar a recibir los grados en las Universidades de Santa Fe y Caracas, he venido en mandar que en ese Seminario se confieran los grados mayores y menores en Filosofía, Teología y Cánones, y no en Derecho Civil, tenien-

do su valor como si fueran recibidos en las referidas Universidades..."¹

Esta Real Cédula está fechada en Aranjuez el 18 de junio de 1806. Perdido su original "con motivo de la presente guerra", y a petición del obispo señor Hernández Milanés, ordenó el Rey que se la remitiese de nuevo a su destino, por providencia tomada en San Lorenzo de El Escorial el 6 de octubre de 1807.

De lo expuesto resulta evidente que el Rey no hizo en aquella ocasión, como era de rigor que siempre lo hiciese, sino atenerse a la opinión que le daban las autoridades competentes consultadas, la principal de las cuales fue en este caso el Claustro Pleno de la Universidad de Caracas, formado de letrados criollos. Y, sobre todo, no resulta menos evidente que no hay absolutamente hasta ahora prueba, ni siquiera indicio válido, de que Carlos IV pronunciara nunca la frase en cuestión, como lo han repetido y repiten a ciegas muchos escritores y libelistas.

Es sabido que durante el reinado del nombrado monarca se tomaron en y para las provincias americanas algunas grandes medidas de las que hoy llamamos culturales. En cuanto particularmente se refiere a la Universidad venezolana recuérdese, entre otros varios ejemplos dignos de atención, que ese Rey prohibió en 1799 a las autoridades de aquélla que empleasen sus haberes en cosa distinta de la instrucción pública: "Que no haya gastos —dijo una Real Cédula— a costa de los fondos de la Universidad, que se deben invertir siempre en los precisos fines de su

¹ *Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida*, publicados por el Ilmo Sr. Dr. Antonio Ramón Silva. II, pp. 134-38.

destino, beneficiosos a la causa pública de la buena instrucción de la juventud en las ciencias útiles al Estado".¹

Mas no terminemos con este argumento sin citar las palabras de Gonzalo Picón-Febres, nada sospechoso, sin embargo, de ternura hacia los peninsulares, acerca de aquella opinión de las referidas autoridades competentes, criollas, sobre la súplica de los merideños: "El 1.º de mayo de 800 comenzaron las gestiones enderezadas a que el Rey de España e Indias elevase el Seminario (de Mérida) hasta Universidad. La iniciativa fue del Cabildo Eclesiástico de Mérida. Al recibir la petición, el Monarca pidió informes al Capitán General de Venezuela. Este ocurrió inmediatamente al Claustro Pleno de la Universidad Real y Pontificia de Caracas. El Claustro Pleno estudió el expediente y, acomodado de deficiencias que éste presentaba, declaró que no podía haber lugar al necesario informe que se le exigiera de orden del Monarca. El 10 de febrero del 802, el Cabildo Eclesiástico de Mérida volvió sobre la carga y pidió al Ayuntamiento que lo ayudase con su voz para obtener la gracia. Los dos se dirigieron al Capitán General de la Colonia; pasó el Capitán la petición al Claustro Pleno de la Universidad Real y Pontificia de Caracas, y el mezquino Claustro Pleno, en sesión de mayo 12 del 802, acordó que *no debía accederse a la solicitud de la Universidad de Mérida*, no embargante que los doctores José Antonio de Tinedo y José Antonio Briceño se lanzaron a decir que las razones expuestas al Capitán General en el Informe del Ilustre Cabildo Eclesiástico de Mérida les resultaban poderosas y más que suficientes para el establecimiento de la Universidad que habían solicitado".²

¹ Para León: *Documentos*, etc., pp. 295-96.

² *Loc. cit.*, p. 168.

X

EL AISLAMIENTO

Cuando se insiste sobre la supuesta dispersión o aislamiento en que estaban las provincias hispanoamericanas unas de otras, parece que se ignora cómo hasta 1760, y según lo nota Channing,¹ no existía entre las colonias inglesas, que iban pronto a formar los Estados Unidos, más lazo que el de su origen británico común y su sujeción a la Corona y al Parlamento. Y adviértase que se trataba de establecimientos próximos, situados en un pequeño territorio, y no como nuestras provincias, que constituían ya países distintos, por decir así, naciones formadas y delimitadas en espacios inmensos. El gobierno inglés rechazaba todo proyecto tendente a juntar sus colonias, y las asambleas locales de éstas repugnaban tal unión. Es inconcebible lo disparatado de los cargos que sobre ese tema se levantan contra los españoles.

Se afirma que España, "por política", mantenía ciertas poblaciones del interior del Continente sin comunicaciones fáciles con el litoral. No era cuestión de "política", sino de defensa militar, porque no disponiendo de marina suficiente, los españoles no hallaban otro modo de preservar sus tierras vulnerables de los ataques de los piratas y corsarios desde luego, y en seguida de los navíos de guerra de las naciones rivales. Por otra parte, la obser-

¹ *Loc. cit.*, p. 50.

lación sólo podría aplicarse a algunas regiones del océano Pacífico. Y sería importante pensar en las dificultades que presentaba en todas partes el estado de los caminos y comunicaciones. ¿Qué debía pedirse en América a este respecto, cuando se sabe lo que pasaba en la misma Europa? Los varias veces citados profesores Powell y Tout dicen: "Pero los caminos con barreras, en las cuales se percibían los derechos de peaje aplicados a su mantenimiento se generalizaban, y de 1760 a 1774 cuatrocientos cincuenta y dos decretos del Parlamento se votaron para la reparación de grandes vías de comunicación. Pero los caminos estaban todavía en tan mal estado que para ir de Bath a Londres era necesario contar desde el lunes en la tarde hasta el miércoles a mediodía... En un espacio de diez y ocho millas, un viajero había encontrado diez coches volcados... En 1797, trescientas ochenta ciudades no habían tenido hasta entonces sino tres servicios (de diligencia) por semana".¹

Se censuran ciertas medidas tomadas por los reyes de España para impedir que sus súbditos saliesen del Reino y fuesen a establecerse en países extranjeros. Idénticas disposiciones se aplicaban en Francia, y con el mayor rigor. Sólo el Acta constitucional de 3 de setiembre de 1791 vino a garantizar a los ciudadanos franceses, como derecho natural y civil, la libertad de ir adonde quisieran. Varias ordenanzas reales condenaron en ese país a la pena de confiscación de cuerpos y de bienes a quienes, sin autorización previa, formasen establecimientos y fijaran domicilio fuera del país de su nacimiento. Luis XIV, especialmente, prohibió a sus súbditos, de cualquier condición que fuesen, salir del país sin

¹ *Loc. cit.*, pp. 961-62.

permiso para instalarse en el extranjero, casarse allí, adquirir bienes inmuebles, etc., y todo bajo pena de confiscación.

Tales eran los usos antes de la Revolución Francesa, y los monarcas españoles nada inventaron al respecto.

Es de creerse que las medidas dictadas para estorbar el establecimiento de extranjeros en las provincias ultramarinas, y de que habla en síntesis el doctor García Chuecos,¹ tenían poca aplicación, al menos en Venezuela. Un ejemplo entre muchos: cuando los ingleses se apoderaron de Trinidad en 1797, había allí gran número de colonos de origen extranjero, norteamericanos, irlandeses y sobre todo franceses, realistas o revolucionarios, y quienes, entre paréntesis, sirvieron luego las ideas de independencia. En Tierra Firme, sobre todo en Oriente, vivían y trabajaban también muchos extranjeros. Detalle típico: al estallar la Revolución, la principal posada de Caracas era propiedad de un genovés.

Por lo demás, las disposiciones contra los extranjeros tomadas en el año citado por el Capitán General no tenían nada que ver con alguna supuesta "política de aislamiento" o cosa semejante: se les expulsaba simplemente, y así continúa haciéndose hoy en todas partes, como perturbadores del orden público. "Las restricciones contra los extranjeros —dice el citado historiador— llegaron a su máxima en los últimos diez años del siglo XVIII, disparadas especialmente contra los franceses, en vista del pánico que por el mundo monárquico sembraba el cataclismo de la Revolución".

En cuanto al régimen del comercio hispanoamericano, no se conocía en ninguna parte, hasta fines de dicho siglo, sino el

¹ *Loc. cit.*, I, pp. 310-14.

llamado con el nombre de mercantilismo. Los españoles lo aplicaban, como el resto de los pueblos europeos; y, además, sus colonias no tenían modo de traficar que fuese distinto del aún empleado en las suyas por Inglaterra, Francia u Holanda.

"Era el sistema colonial de la época —leemos en Lavissee y Rambaud—; las posesiones exóticas debían ser explotadas en provecho de la madre patria; la grandeza marítima y comercial de la Gran Bretaña reposaba sobre la exclusión de las colonias de toda participación en los provechos del tráfico marítimo. De allí, la célebre *Acta de Navegación* editada por Cromwell, renovada bajo el gobierno de Carlos II y concretada por otras estipulaciones cuyo conjunto constituyó las *Leyes de Navegación*, fuentes de irritación entre las colonias y la metrópoli. Estas leyes disponían que toda importación de mercaderías a América proviniere de Inglaterra y que los productos naturales de los establecimientos no fuesen exportados sino con destino a Inglaterra. Los transportes no podían efectuarse sino en navíos ingleses".¹

"No fue por la paz y el libre cambio —dicen Powell y Tout—, sino a consecuencia de guerras felices y del establecimiento de monopolios, cómo Inglaterra aseguró su importante comercio con el extranjero... Todas las guerras se hicieron entonces en vista de ventajas comerciales".²

Archisabido es que, según el Pacto colonial aplicado durante el antiguo régimen en Francia, se prohibía a las colonias producir cuanto pudiese competir con la agricultura y la industria francesas, debiendo aquéllas limitarse a enviar a la metrópoli

¹ *Histoire Générale*, VII, p. 553.

² *Loc. cit.*, pp. 957-58.

los "productos coloniales"; y se les imponía, además, la obligación de no comerciar sino con Francia.

Después de la paz que entregó el Canadá a los ingleses, Grenville, ministro de Jorge III, resolvió aplicar estrictamente las leyes que daban a la metrópoli el monopolio del comercio con las colonias americanas. Sin embargo, como sucedía en Hispanoamérica, y para burlar dichas leyes los colonos habían organizado un contrabando confortable. Las medidas del gobierno causaron desde luego malhumor, que aumentó con la decisión tomada en Londres de crear un ejército plenamente a expensas de los colonos. De ello se originaron los sucesos que, a través de las peripecias conocidas, llevaron a la guerra de la independencia de los Estados Unidos.

El monopolio era, por decir así, universal. En su *Diario* de Copenhague, fecha 2 de enero de 1788, dice Miranda: "Después estuve a comprar un sombrero, y no pude encontrar cosa mejor ni tan buena como el mío que traje de Moscou, pues toda manufactura extranjera es prohibida".¹

Arístides Rojas llama al privilegio ejercido por la Compañía Guipuzcoana "horrible monopolio de aquella época".²

El monopolio de la Compañía fue fecundo en bienes económicos para Venezuela y causa esencial de la prosperidad agrícola en que la halló la Revolución.

¹ *Archivo*, III, p. 113.

² *Efemérides*. Segunda serie, p. 112.

XI

ROTO EL EQUILIBRIO

El conde de Ségur acumuló en sus Memorias todas las diatribas antiespañolas que le fue posible. En otra ocasión desmontaremos pieza por pieza la armazón que fabricó aquél para trazar su cuadro caprichoso de la Capitanía General de Venezuela en 1783, año de su visita allí. Ahora nos ceñimos a indicar que no parece que la ciega tiranía reinase en un país donde, al decir del visitante, los propios altos funcionarios, como el "vicegobernador" de la Provincia y los "tenientes de Rey" o alcaldes de Maracay y de La Victoria, se atrevían a confiar a un oficial extranjero las críticas más acerbas contra su propia administración.¹

Abundan las pruebas de que las autoridades reales reconocían expresamente el perfecto derecho de los criollos a ocupar empleos públicos. Un ejemplo entre varios: cuando en febrero de 1809 se levantaron las penas de confinamiento y de prisión dictadas contra los criollos comprometidos en el intento de crear una junta gubernativa en Caracas, el gobierno declaró que la conducta de aquéllos en esa ocasión no podría invocarse "para impedirles obtener los empleos públicos del real servicio, ni otro algún efecto".²

La representación hecha al Rey por los nobles de Caracas acerca de los "oficios de república", sus reclamaciones continuas

¹ *Mémoires ou Souvenirs et Anecdotes*, I, pp. 424-45.

² Gil Fortoul: *Historia Constitucional*, I, p. 157 (2.^a edición).

sobre el rango que debía dárseles no son más ni menos ridículos que la famosa memoria dirigida a Luis XV por la alta nobleza francesa cuando, a propósito de un baile en Versailles, se trató de conceder a la extranjera Mlle. de Lorraine un puesto intermedio entre los príncipes de la sangre y la dicha nobleza. Hay que leer en Grimm¹ este documento único para darse cuenta de las graves frivolidades que ocupaban entonces la sociedad en todos los países.

Pero, en rigor, ¿era todo eso solamente fútil? ¿No se fundaba en ello y en otras cosas análogas mucha parte del equilibrio político y social de la época? Que tal equilibrio mereciese ser destruido, no cabe duda; pero nuestra cita aquí tiende a demostrar que la sociedad española americana no era la única en tratar de mantenerlo y que no sólo ella vivía obsesa por tales nimiedades.

A propósito de estos títulos de nobleza, digamos que si los reyes españoles ennoblecían a ciertos criollos venezolanos por haber sembrado cacao, no se encuentra entre éstos ninguno que lo hubiese sido por practicar la trata de negros, tal como lo fue, por ejemplo, el padre de Laffont-Ladebat, por obra y gracia de Luis XV. "Hemos sido informados —dice el Rey de Francia— que el señor Jacques-Alexandre Laffont de Ladebat, negociante de nuestra ciudad de Burdeos, ha llevado su comercio a Africa y a América y se ha distinguido por su celo, por la extensión de las operaciones y por el comercio de la trata de negros...; que, desde 1764, ha hecho pasar a nuestras islas de América más de cuatro mil negros, por medio de quince armamentos que hizo en las

¹ *Correspondance, etc.*, I, p 146.

costas de Africa; que, además de esos armamentos, ha hecho doce para Santo Domingo; que actualmente sin ningún interesado tiene siempre siete barcos empleados en la trata de negros o en el abastecimiento de nuestras islas..." Por tales causas y otras "que nos mueven a ello", el Rey concede al traficante las siguientes armas: ...¹

Con las familias de muchos conquistadores ocurrió en Venezuela y, en general, en América, algo parecido a lo que pasó en la antigua Roma con los nombres de algunos de los reyes primitivos, que vinieron a menos, es decir, a designar familias plebeyas. Un cónsul plebeyo del año 170 antes de Jesucristo se llamaba Hostilio Mancino y otra familia plebeya llevaba el nombre de Anco Marcio.²

Muchos de los nobles venezolanos del siglo XVIII no descendían de conquistadores, y algunos ni siquiera tenían raíces en la nobleza peninsular. Al comentar la situación de la aristocracia criolla peruana al advenimiento de los Borbones, dice José de la Riva-Agüero:³ "Escasa y vana compensación de tales daños fue la frecuente concesión de títulos de Castilla, que, como dondequiera ha sucedido, no recayeron siempre en las familias más ilustres, y obedecieron más a la riqueza actual de los agraciados y a los cuantiosos donativos en metálico que a los antiguos servicios y a la genuina descendencia de los primeros conquistadores. Se observa ya, por lo general, en esta época, hasta en los titulados

¹ *D'azur une fontaine d'argent jaillissante surmontée d'un soleil d'or et accompagnée de deux ancres d'argent. (Journal d'une déportation à la Guyane Française, página 15.)*

² De Sanctis: *Storia dei Romani*, I, p. 350.

³ *El Perú Histórico y Artístico*, p. 119.

(al revés de la anterior), que los comerciantes predominan sobre los militares y magistrados. Comienza la definitiva ascensión de la burguesía."

Equilibrada o no, aquella sociedad tocaba a su término. Ideas nuevas la desquiciaban sin remedio, y la revolución era inevitable.

El escocés Robert Semple que, como hemos dicho, estuvo en Caracas por 1811, en su *Comentario* sobre el estado de cosas que observó allí, plantó unas cuantas comprobaciones que vale la pena reproducir. Horrorizábale el espectáculo de la "guerra civil" existente en las colonias españolas, sin comprender con exactitud las causas de aquel desorden, que atribuía esquemáticamente a "un espíritu nuevo".¹

"En corto tiempo —escribía Semple— se ha formado un espíritu nuevo en América, que se está difundiendo con la rapidez de un fanatismo religioso. Refiérome a una afectación de independencia total de los americanos, en todos respectos, no sólo políticamente, sino aun hasta el extremo de desconocer toda clase de obligaciones para con Europa. Nosotros los ingleses visitamos con placer las playas de Grecia e Italia y no creemos que sea una desgracia reconocer todos los beneficios derivados por nuestros antepasados y hasta por nosotros mismos de aquellas grandes fuentes del arte y de la ciencia. No sucede lo mismo con esta inmensa y moderna secta americana, que sería capaz de persuadirse a sí misma y de persuadir a los demás de que las artes y las ciencias, las libertades y las leyes son productos del Nuevo Mundo. De ahí la proposición, muy seriamente formulada en los Estados Unidos, de que se adopte un lenguaje nuevo o se cambie

¹ *Loc. cit.*,

el nombre del actual por el de *freedonian*, a fin de no continuar por más tiempo en la triste necesidad de hablar inglés, y de ahí también el dolor con que los hispanoamericanos afectan deplorar la suerte de los aborígenes de su tierra y la razón de que, en todas sus constituciones, imiten a los indios, que hasta ahora habían sido tratados con tantos miramientos, a tomar parte nominal de sus privilegios. En numerosos ejemplos, que aumentan constantemente, este espíritu se significa hasta un grado de fanatismo odioso hacia los europeos, a quienes se califica de feroces, crueles y pérfidos, mientras que a los americanos se considera magnánimos, tolerantes y justos. Para otros, este odio se reduce solamente a los súbditos de las metrópolis. Y es así cómo a los ingleses sus descendientes les denominan piratas, tiranos y rufianes, mientras que los descendientes de los españoles califican a éstos de godos y le imputan a la presente generación todas las crueldades cometidas desde la llegada de los primeros conquistadores. En cuanto al término de "madre patria", se usa únicamente como reproche."

XII

FUNDACIÓN DE LA CAPITANÍA GENERAL

A riesgo de suscitar extrañezas, y acaso sonrisas humorísticas, digamos que el origen de la legitimidad jurídica territorial de Venezuela, como la de todos los Estados iberoamericanos, se halla a no dudarlo en la Bula de Alejandro VI, que repartió los

descubrimientos entre españoles y portugueses y validó singularmente la circunstancia de la conquista, que ha sido siempre, en la historia, generadora de derecho político y justificante de la posesión real.

Aquella Bula constituye uno de los actos de arbitraje más considerables de la historia universal. Está fundado en una cuestión de hecho, en hechos y, por lo tanto, no tenía nada de ese carácter teórico que le atribuyen muchos escritores, con el fin de hacer de él objeto de burla. Porque ¿es o no cierto que españoles y portugueses, y sólo ellos, estuviesen conquistando el Mundo Nuevo? ¿Dónde estaban y qué hacían entonces los franceses, los ingleses y otros pueblos marítimos? ¿Por cuál razón debía el árbitro hispano-portugués traer a debate intereses inexistentes? Tanto valdría hoy mezclar a España en una distribución de tierras disputadas entre China y Japón. En cuanto al "derecho" que poseía la Santa Sede a actuar en calidad de árbitro entre potencias católicas, y en el siglo XVI, creemos que está la cosa fuera de toda discusión. El lector hallará en las páginas del presente libro ocasión de apreciar nuestras ideas al respecto.

En cuanto a la creación propiamente dicha de nuestra Capitanía General, nos parece que la abundante discusión habida sobre el tema¹ se debe en mucha parte a que los arguyentes no han tomado en suficiente cuenta que el título y cargo de Capitán General eran y son de naturaleza militar y estaban normalmente unidos al de Gobernador de cualquier territorio, cuyo titular tenía comisión de defender a éste y de mandar la tropa de línea o la milicia.

¹ Véase, como ejemplo y síntesis de esta controversia, a Tulio Febres Cordero: *Archivo de Historia y Variedades*, II, pp. 178-82.

La Real Ordenanza de 8 de septiembre de 1777, por la cual Carlos III creó la Capitanía General de las Provincias de Venezuela, constituye, en rigor, el acto de nacimiento de la nación y del Estado venezolanos como ente político y con su presente forma territorial, que es, salvo las usurpaciones inglesas de la isla de Trinidad y de un extenso territorio en Guayana, idéntica al *uti possidetis jure* de 1810.

De no haber existido tal Ordenanza y si la Revolución de Independencia nos hubiese hallado con el estatuto territorial, político y administrativo anterior a aquélla, es muy probable que en la hoy República de Venezuela habría sucedido algo análogo a lo de Centroamérica, es decir, la constitución de dos pequeñas repúblicas: una central con la provincia de Caracas, y otra oriental con las provincias de Cumaná y de Guayana. En cuanto al occidente del país, o sea la provincia de Mérida de Maracaibo, que antes de 1777 pertenecía al Virreinato, habría quedado en 1810 como parte integrante de Nueva Granada.

De allí, para los venezolanos, el interés histórico y político que presenta aquel instrumento decisivo, cuyo texto, que tomamos de los *Documentos para la Vida Pública del Libertador*,¹ es el siguiente:

"EL REY

Por cuanto teniendo presente lo que me han representado el actual Virrey, Gobernador y Capitán General de Nuevo Reino de Granada, y los Gobernadores de las Provincias de Guayana y Maracaibo acerca de los inconvenientes que produce el que las

¹ I, p. 129.

indicadas provincias, tanto como la de Cumaná e Islas de Margarita y Trinidad, sigan unidas como al presente lo están al Virreinato y Capitanía General del indicado Nuevo Reino de Granada, por la distancia en que se hallan de su capital Santa Fé, siguiéndose por consiguiente el retardo en las providencias con graves perjuicios de mi Real Servicio.

Por tanto, para evitar éstos y los mayores que se ocasionarían en el caso de una invasión, he tenido a bien resolver la absoluta separación de las mencionadas Provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, e Islas de Trinidad y Margarita, del Virreinato y Capitanía General de Nuevo Reino de Granada, y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están, por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda, a la Nueva Intendencia erijida en dicha Provincia, y ciudad de Caracas, su capital. Así mismo he resuelto separar en lo jurídico de la Audiencia de Santa Fé, y agregar a la primitiva de Santo Domingo, las dos expresadas Provincias de Maracaibo y Guayana, como lo está la de Cumaná y las islas de Margarita y Trinidad, para que hallándose estos territorios bajo una misma Audiencia, un Capitán General y un Intendente inmediatos, sean mejor regidos y gobernados con mayor utilidad de mi Real Servicio.

Y en su consecuencia mando al Virrey y Audiencia de Santa Fe se hayan por inhibidos y se abstengan del conocimiento de los respectivos asuntos que les tocaba antes de la separación que va insinuada, y a los Gobernadores de las Provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo e islas de Margarita y Trinidad, que obedezcan, como a su Capitán General, al que hoy es y en adelante lo fuere de la Provincia de Venezuela, y cumplan las órdenes que

en asuntos de mi Real Servicio les comunicare en todo lo gubernativo y militar; y que así mismo den cumplimiento los Gobernadores de las Provincias de Maracaibo y Guayana a las provisiones que en lo sucesivo despachare mi Real Audiencia de Santo Domingo, admitiendo para ante ellas las apelaciones que se interpusieren según y en la forma que lo han hecho, o debido hacer para ante la de Santa Fé, que así es mi voluntad.

Dada en San Ildefonso, a ocho de setiembre de mil setecientos setenta y siete.

YO EL REY

Joseph de Galvez."

París, mayo de 1964.

**INDICACIONES SOBRE EL ESTADO DEL
IMPERIO ESPAÑOL DE AMERICA
A FINES DEL SIGLO XVIII¹**

¹ Conferencia leída, en francés, en el *Instituto de Altos Estudios de la América Latina de la Universidad de París* (Segundo trimestre de 1954).

MUCHO se ha hablado sobre la bula de Alejandro VI, el papa Borgia, que repartió entre españoles y portugueses las tierras descubiertas o por descubrir, según una línea que, en lo relativo al Continente suramericano, podía seguir el sexagésimo octavo grado oeste del meridiano de París, es decir, que iría, poco más o menos, de la embocadura del Orinoco hasta la del Plata. Y se atribuye a Francisco I de Francia la curiosidad de leer la cláusula del testamento de Adán que le hubiese privado de su parte de herencia en la distribución del Nuevo Mundo.

El Abate Raynal, sobre cuya obra tendremos pronto ocasión de volver, escribirá, con su impertinencia habitual: "Aunque las dos naciones (España y Portugal) siguieran su propósito de engrandecimiento en regiones bien separadas, pareció posible que se encontrasen. Su antipatía había hecho peligroso tal acontecimiento. Para prevenirlo, el Papa fijó, en 1493, las pretensiones respectivas, en virtud de ese poder universal y ridículo que los pontífices de Roma se habían arrogado desde muchos siglos atrás, y que la ignorancia de dos pueblos igualmente supersticiosos prolongaba todavía para asociar el cielo a su avaricia". Inmediatamente después de Raynal, los patriotas hispanoamericanos no se privaron de burlarse ellos mismos del reparto pontifical.

Sin embargo, aquella verdadera sentencia arbitral, aquel acto diplomático de la mayor importancia es, por decir así, la propia base de la creación de nuestros Estados americanos y de su estatuto jurídico territorial. Aparte que no había entonces una autoridad más alta ni más adecuada que la del Papa para validar con semejante juicio un compromiso entre las dos naciones a las cuales se debía el ensanche del mundo, es necesario darse cuenta de que correspondía al Soberano Pontífice intervenir en un negocio que se presentaba primordialmente como empresa de evangelización, conforme debemos recordarlo. En el pensamiento de Isabel la Católica, en efecto, era para cumplir obra misionaria que enviaba sus carabelas a la otra riba del océano, y no fue ciertamente culpa de la gran Reina si los misioneros, ya fuesen clérigos, ya fuesen laicos, olvidaron con frecuencia el espíritu franciscano.

Sea lo que fuere, y dejando de lado el arranque del rey de Francia y las impertinencias del Abate, es innegable que la decisión arbitral de Alejandro VI permitió establecer en América sobre fundamento jurídico, de una parte reinos castellanos y de otra un reino portugués. Y no es menos evidente que aquel famoso meridiano sexagésimo octavo se ha mostrado mucho más fecundo en beneficios para el porvenir del género humano que el reciente paralelo trigésimo octavo de la península coreana.

La corona de Castilla fue la que descubrió, conquistó y pobló la América española, y ello debido al hecho de que en la época de Isabel, y durante largo tiempo después, esta corona estaba separada jurídica y políticamente de la de Aragón, que pertenecía a Fernando, marido de la Reina. Por esa razón, los mercaderes aragoneses, catalanes y valencianos, no podían traficar en Indias sino mediante el beneficio de real licencia. Aquí encontramos la primera noción esencial que es menester considerar para darse exactamente cuenta de lo que fue el Imperio español, a saber, que sus territorios americanos no eran propiamente colonias, sino que formaron reinos y provincias iguales por naturaleza y muy semejantes en la práctica a los reinos y provincias europeas de la Madre Patria. Así, pues, se tratará de verdaderas provincias castellanas de origen y de dere-

cho que, por lo demás, no pudieron ser llamadas provincias españolas sino a medida que adelantaban la transformación política de la Península y la fusión de sus reinos, a consecuencia de la obra centralizadora, de inspiración extranjera y efectuada poco a poco, primero por la Casa de Austria, en seguida por la de Borbón. Pero siempre, y aparte los textos que continuaban proclamando su pertenencia castellana, nuestros pueblos lo sabían y recordaban. Cuando los criollos venezolanos se alzaron, a la nueva de la invasión napoleónica, fue su grito "Castilla y Caracas por el Rey Nuestro Señor".

La segunda noción esencial que hemos de apreciar, y que forma de cierto modo un corolario de la que acabamos de enunciar, es que los españoles estaban obligados a observar y de hecho la observaron en la mayoría de los casos, una conducta hacia los aborígenes que difiere en grado sumo de la que sus enemigos les reprocharon durante largo tiempo. Ya desde mediados del siglo XVI, la idea misma de conquista comienza a borrarse y se la reemplaza por la de poblamiento, que conduce a la composición de una nación hispanoamericana. Es lo que nos dice, entre otros, el profesor francés Henri Hausser: "Aun en las Indias españolas debe notarse el hecho importante de que hacia 1570 los viejos nombres de conquista y de conquistadores ceden el puesto a otros términos: población y pobladores". En realidad, ese concepto estaba lejos de ser nuevo, como acabamos de verlo. Con frecuencia, las cosas eran muy otras; pero no es menos cierto que según la letra del código de las Leyes de Indias estaba prohibido servirse, en las capitulaciones otorgadas a los descubridores, de la palabra conquista y que sólo podían emplearse en ellas las de pacificación y poblamiento. En cuanto a los indios, debía reducirseles, verbo que significaba expresa y exactamente llevarlos a abandonar sus florestas y reunirlos en aldeas donde llevasen vida cristiana y civilizada.

Indiquemos ahora algunos datos indispensables sobre la organización que los españoles dieron a sus provincias trasatlánticas, dejando entendido que nos atendremos a las líneas generales, sin entrar en detalles que estarían aquí fuera de lugar.

Los negocios políticos y administrativos de América fueron confiados por la Corona a un cuerpo supremo llamado Consejo de Indias. Los económicos y comerciales diéronse a la Casa de Contratación, establecida en Sevilla poco antes de la muerte de la reina Isabel. Por medio de estos organismos centrales gobernó España sus nuevas posesiones.

Al principio hubo dos Virreinos, el de México o Nueva España y el del Perú. En el curso del siglo XVIII se crearon dos más, el de Buenos Aires, que es la moderna República Argentina, más lo que se llamaba entonces la Banda Oriental del Uruguay, y el de Nueva Granada, cuyo territorio definitivo forma hoy las Repúblicas de Colombia y del Ecuador. Al lado de estas grandes jurisdicciones, se establecieron sucesivamente entidades llamadas Capitanías Generales en número de cuatro: Cuba, Chile, Venezuela y Guatemala, cubriendo esta última los cinco actuales países centroamericanos. Las tres últimas Capitanías Generales habían sido segregadas de los Virreinos vecinos y todas poseían gobiernos autónomos dependientes directamente de la metrópoli. Desde los comienzos del siglo XVII el Rey encargó a los jesuitas de evangelizar las regiones del río de la Plata; bastante conocida es la experiencia efectuada por los Padres en el Paraguay.

Debe notarse que los conjuntos políticos organizados por los españoles no hicieron sino recubrir las jurisdicciones imperiales, o simplemente las tribales, que encontraron a su llegada. Nada o casi nada hay de arbitrario en las divisiones territoriales de los reinos y capitanías que, a su turno, fueron sustituidos por nuestras repúblicas independientes. Cuando en 1810 vendrá la Revolución, los nuevos Estados se hallarán en presencia de un *uti possidetis* que les servirá para establecer sus fronteras.

Para asegurar la expedición de los asuntos judiciales y administrativos, el Rey creó tribunales superiores, llamados Audiencias, a ejemplo de lo que existía en España. Cuando advino la revolución de Independencia, había una docena de aquellos tribunales distribuidos en todo el territorio americano. Los magistrados eran designados por la Corona y entre ellos había muchos criollos. El Virrey o el Capitán General, en

sus casos, presidía la Audiencia, sin derecho de voto, y ésta podía corresponder directamente con el Soberano por órgano del Consejo de Indias.

La ley que se aplicaba en América estaba formulada en código conocido con el nombre de *Compilación de las Leyes de Indias*, publicado en 1583, reeditado definitivamente en 1680 y que es, a no dudarlo, uno de los monumentos legislativos más considerables de todos los tiempos. Si se recuerda que los españoles heredaron de los romanos, y en grado sumo, el espíritu legista, no será asombroso en modo alguno ver cómo se revela tal espíritu con extraordinario vigor en el gobierno de América. Quiero señalar, de paso, que allí existía para los funcionarios, por altos que fuesen, un juicio o proceso incoado a raíz de su salida del cargo, y en el cual aquéllos debían rendir cuenta de su gestión ante los jueces reales: era el llamado juicio de residencia, una de las instituciones políticas más admirables que se conozcan y que sería muy digna del estudio de nuestros jóvenes auditores.

Virreinos y Capitanías se dividían en distritos, a cuya cabeza se encontraban los intendentes. La creación de las Intendencias, o en todo caso su generalización, se hizo con fecha relativamente tardía. Algunos intendentes, cuya función fue primordialmente la de tesorero, entraron en conflicto con la Audiencia, disputándole la competencia en negocios judiciales y con el Virrey o el Capitán General, a quienes ataban los cordones de la bolsa. Los historiadores tienen la costumbre de morarse de estos conflictos, mezclándolos a otros mucho más chistosos, que dividían a las autoridades coloniales. En realidad, los pleitos sobre competencia probaban casi siempre la existencia y aplicación de todo un sistema constitucional que tenderá a mantener el equilibrio entre las diversas ramas del poder público. No debe olvidarse tal circunstancia en el estudio de la organización política del Imperio.

Para ese estudio debe también tomarse en cuenta otro elemento principal, que representaba papel de primera importancia en la vida del gobierno de las provincias americanas. Se trata del Ayuntamiento o Cabildo, o sea, en nuestro lenguaje moderno, el Concejo Municipal. El Ca-

bildo (que no hay que confundir, naturalmente, con el Cabildo eclesiástico) era el asiento y baluarte de las libertades de los colonos, porque hay que decir que éstos tenían libertades y que las defendían bastante bien. Ya veréis a su tiempo lo que estos cuerpos, estos municipios, de pura tradición romana y española, serán capaces de hacer cuando suene para los criollos la hora de declararse independientes. El Cabildo era en manos del hispanoamericano un verdadero órgano para ejercer lo que el anglosajón llama *self government*. Nuestra historia colonial es rica en incidentes, que ponen de relieve la existencia de una vida política de la cual no siempre se ha sabido mostrar la importancia y que se revelaba principalmente por la actividad del municipio. Más de una vez, los Cabildos aparearon a Capitanes Generales y les enviaron a prisión, forzando a los Virreyes o al Consejo de Indias, es decir, al Rey mismo, a intervenir para poner fin a la querella.

Digamos una palabra respecto a las relaciones de la Corona con la Iglesia en las provincias americanas, porque es tema que ocasiona errores y ha sido siempre fuente de interpretaciones torcidas. El Rey tenía en América un derecho de patronato muy extenso. Para el nombramiento de los obispos, Isabel había obtenido del Papa el privilegio de la *símpli-ca*, o sea de la petición en favor del candidato a la mitra, y esta concesión se convirtió bajo Carlos V en derecho de presentación. Fernando el Católico y el no menos católico Felipe II defendieron con gran tenacidad lo que decían ser prerrogativas reales frente a la autoridad pontifical. Felipe, sobre todo, se mostró intratable al respecto, o mejor dicho, no hizo durante todo su reinado sino tratar con la Santa Sede hasta obtener lo que un ilustre jesuita de nuestra época, el Padre Leturia, llamó una especie de vicariato laico para sus posesiones de ultramar. El Rey no aceptó nunca el envío de Nuncios Pontificios a Indias, pues quería que la Corona conservase allí la alta autoridad en todo lo concerniente al gobierno de la Iglesia.

Harto habría que decir sobre la situación que por tales razones se estableció, pero por hoy debemos contentarnos con señalarla a vuestro estudio. Como la religión y el clero tuvieron papel decisivo en los su-



FELIPE II.

cesos que entonces se preparaban, es indispensable que conozcáis cuál era el régimen de la Iglesia hispanoamericana y la política seguida al respecto por el gobierno español.

No hay que olvidar, por otra parte, que al ejercicio rígido del derecho del patronato vino a juntarse en la segunda mitad del siglo XVIII y para la dirección de los negocios eclesiásticos, el espíritu volteriano que se había extendido a la Corte de Madrid y animaba a muchos políticos influyentes. Cuando el Rey de Portugal y las cuatro ramas reinantes de la Casa de Borbón decidieron expulsar a los jesuitas de sus dominios respectivos, la rama española no fue, ciertamente, la que mostró menos rigor en la aplicación de la medida. Dejádme, en fin, señalaros también que España fue la nación que hubo de sufrir más de las consecuencias de tal medida, pues los Padres expulsados y muy luego dispersos por el Breve de Clemente XIV se contaron entre los más activos zapadores del edificio imperial.

¿Cuál era en realidad la población total del Nuevo Mundo a la llegada de los conquistadores? Hoy se estima que apenas excedía de cuarenta millones. Pero es necesario confesar que nuestras estadísticas modernas sobre hechos y cosas que vemos con nuestros propios ojos son a veces tan engañosas y decepcionantes, que se tiene derecho a vacilar en el uso de cifras relativas al siglo XV. En consecuencia, sólo puede tratarse de cálculos cuya mayor parte carece de base sólida. Uno de nuestros maestros más estimado, el profesor Mousnier, indica el decrecimiento gradual de la población indígena en México de 1519 a 1650, y da para este último año el número de 1.500.000 personas. Esta precisión, de cualquier parte que proceda, es sorprendente; pero, de cualquier modo, sería necesario tener en cuenta, en materia de demografía, las epidemias y varios otros elementos para explicar el movimiento de la población en el Nuevo Mundo bajo el régimen de colonización establecido por las naciones europeas. La enfermedad mataba enormemente a indios y a colonos; de 1588 a 1687, en un siglo, hubo en Venezuela, por ejemplo, seis epidemias espantosas de viruela, que destruyeron tribus enteras; y ello se renovó en el siglo XVIII. Al mismo tiem-

po, la provincia sufrió sequías que ocasionaron hambres y terremotos en que perecieron millares de gentes. Luego, existía guerra abierta con indios indomables y agresivos, en la cual había que matar o ser muerto. Y, por último, conflicto constante y sangriento con los enemigos extranjeros, corsarios y piratas.

Se repite a saciedad que aquellos conquistadores españoles, a quienes sólo guiaba la sed del oro, se entregaron a la matanza sistemática de los indígenas, de suerte que, al propio tiempo que destruían civilizaciones famosas, que valían la suya, despoblaron el Continente y sus islas. Esta opinión tomó cuerpo ya a mediados del siglo XVI, cuando el Padre Las Casas publicó en Sevilla su *Relación* de la destrucción de las Indias, en la cual aseguraba que conquistadores y colonos habían matado allí hasta quince millones de hombres, mujeres y niños indígenas. Debe notarse, con don Rafael Altamira, que, justamente lo que en gran parte priva de valor el testimonio del famoso Padre son sus exageraciones y sus cifras fabulosas. No tardaron éstas en ser contradichas por otros frailes; y, en efecto, cuanto a las islas especialmente, no podían corresponder en manera alguna a la población real que allí encontraron los españoles. Por otra parte, el nombrado profesor observa con bastante tino que: "La pasión política, tan excitada entonces en Europa por las diversas guerras que mantenían los monarcas españoles y los odios de la lucha religiosa se apoderaron bien pronto de aquel escrito, que se tradujo a varios idiomas (al francés, en 1578 y en 1697; al italiano, con el título de *Il suppllice schiavo Indiano*; al latín, con el de *Crudelitates Hispanorum in Indis patratae*), y cuyos cargos fueron ponderados, como expresivos de una condición natural de los españoles, ejemplo monstruoso de crueldad por ninguna otra nación superada". Para concluir, Altamira observa asimismo que el filántropo Las Casas era español también y que en favor de los indios invocaba una legislación española, cosa que los censores de nuestros días continúan olvidando.

El profesor Mousnier nota, por su lado, que aquel dominico era hombre "apasionado, violento, injusto, con frecuencia inexacto", y agrega: "Los libros de Las Casas fueron traducidos, publicados, retocados, am-

pliados por los protestantes y los enemigos de los españoles, con títulos más o menos estridentes: *Horribles matanzas, Carnicerías*. Los detalles se volvieron más y más sensacionales".

No es de nuestra tarea emprender aquí una litigación sobre este punto, pero podemos decir que desde hace largo tiempo llegamos a la segura conclusión de que no es en el Padre Las Casas donde debe ir a buscarse toda la verdad sobre la conducta de los españoles con los indios.

Tampoco nos corresponde extendernos ahora sobre los grados diferentes de civilización y de organización política y social que ofrecían los indígenas americanos cuando aparecieron los colonizadores. Debe, no obstante, retenerse, en términos generales, y ello para explicar los matices en el método de administración empleado por éstos, que no había posible equiparación entre hordas salvajes como los caribes, por ejemplo, y los indios de México y del Perú, o, a un grado menor apenas, los chibchas de la futura Nueva Granada. Sabéis muy bien que en estas tres últimas regiones existían verdaderas sociedades políticas y que en sus territorios respectivos se desarrollaron sucesivamente varias civilizaciones apreciables.

Es evidente que la conquista y colonización de nuestros países americanos, aunque bautizada por la Reina Católica con el nombre de evangelización, no podía hacerse solamente con ayuda de bedeles y de hermanas de la Caridad. Aquella empresa estuvo lejos de ser un idilio y quedó marcada con los excesos de violencia y terrible saña inherentes a la guerra en todas las épocas. Pero la obra de los conquistadores y pobladores no aparece menos como una de las cosas más grandes que se haya realizado, como uno de los designios que honran mayormente al espíritu creador del género humano. Y, sin embargo, pintada por Raynal y cuantos le copian, la colonización de América, especialmente la española, apenas fue una caricatura bárbara y sangrienta. Los españoles, que han sido, no obstante, uno de los pueblos más inquietos y bullidores de la historia, no habrían, según el Abate, aportado a las naciones sometidas sino su tendencia a la ociosidad, sin contar, naturalmente, su orgullo inmenso y su inmensa avaricia. He aquí cómo Raynal, patético, ve el

contacto de los dos mundos, el español y el indio, y cómo, bajo la influencia del mito del buen salvaje y del civilizado malo, llega a amar al primero y a detestar al segundo: "Dime, lector, ¿fueron pueblos civilizados que desembarcaron en tierra de salvajes, o salvajes que lo hicieron en tierra de pueblos civilizados? ¿Y qué importa que (los indios) vayan desnudos, que habiten el fondo de la floresta, que vivan en chozas, que no tengan código de leyes, ni justicia civil, ni justicia criminal, si son dulces, humanos, benéficos, si tienen las virtudes que caracterizan al hombre? ¡Ay de mí! En todas partes se habría obtenido la misma acogida con los mismos procedimientos. Olvidemos, si fuese posible, o más bien recordemos aquel momento del descubrimiento, aquella primera entrevista de los dos mundos para mejor abominar el nuestro". He allí cómo, para ese supuesto filósofo, se planteaba la vasta cuestión de la fundación del mundo latinoamericano. La diatriba, por descontado, abarca a todos los colonizadores europeos, pero está dirigida sobre todo a los españoles, hacia quienes el Abate nutre un odio sólido de pagano y aun de ateo. Va contra esos convertidores, contra esos bárbaros codiciantes de oro y que sólo se inspiran en la crueldad y en el goce vil. Puede, sin duda, parecer asombroso que gentes tan imbuidas en ciencia y en luces, tan valientes enemigos del oscurantismo y de la ignorancia hayan cifrado la felicidad del hombre en su grado de barbarie, aun de salvajismo. De oírles, la venturanza humana sería cuestión de bosque y desnudez. Raynal lo proclama sin rodeos: los habitantes de las Antillas —dice— "nada sabían, pero no tenían ningún deseo de aprender. Esta indiferencia y la confianza en que se entregaron a extranjeros prueba que eran felices". Según el Abate, los españoles, arribados a América "en un siglo de ignorancia y de barbarie", cuando "todos los principios de gobierno habían sido olvidados", no eran hombres propios para "llevar allí la luz, desterrada desde hacía doce siglos de la Europa entera". Por donde se ve que ese sabio se complace en ignorar aún la historia de Francia y aparta con un solo desdeñoso ademán tanto los siglos XII y XIII como el del Renacimiento. Y léase, en fin, su sentencia definitiva: "Pero la imagen de la naturaleza tosca y salvaje está ya desfigurada.

Urge juntar los rasgos medio borrados, después de haber entregado a la execración a los ávidos y feroces cristianos que una suerte desgraciada condujo primero a aquel otro hemisferio".

Si me detengo a recordar tales singularidades es porque de ellas se han sacado muchos argumentos contra la conducta de los europeos que fundaron nuestras naciones; y porque con su ayuda se fabricó en gran parte lo que hasta hace poco tiempo se decía ser la historia verídica de los establecimientos españoles de ultramar. Soy un republicano de América, es decir, que estoy del lado de la Revolución; pero para defender a ésta, para explicar sus causas y justificarla plenamente, confieso que no tengo necesidad de deformaciones históricas.

Pero volvamos a un hecho que nos interesa ahora en particular, y es el de saber cuál era el número de los habitantes del Imperio español de América por los últimos años del siglo XVIII y los comienzos del XIX, cuando sobrevino la revolución de Independencia. Con la ayuda de cifras derivadas de varias fuentes se la podría calcular en 18.000.000 de almas. 3.250.000, poco más o menos, eran criollos, es decir, blancos; se contaban 7 u 8.000.000 de indios, 800.000 negros, más de 5.000.000 de mestizos y de mulatos. En un papel comunicado a Pitt en 1792, Miranda fija el número total de la población de las provincias hispano-americanas en 11.000.000. Pensemos siempre en el elemento de arbitrariedad que puede viciar todos estos números.

A ese mundo abigarrado, prodigiosamente diverso y pululante, que se extiende desde California hasta el Cabo de Hornos, deberá España hacer pronto frente, con la circunstancia, que debe retenerse, de que lo custodiaba casi sin soldados, apoyándose apenas en algunas milicias locales. Ese universo abarcaba una extensión de cerca de 11.000.000 de kilómetros cuadrados, o sea, una tercera parte de la superficie total del hemisferio occidental. Empleo con designio esta última locución, aunque viciosa, alegando un uso irresistible, pero sobre todo porque me da ocasión para adelantar una comprobación muy importante, a saber: que las provincias españolas de América, llamadas un día a ser independientes, por heterogéneas que fuesen desde el punto de vista étnico, no eran

menos enteramente "occidentales", es decir, europeas, más todavía, latinas, en cuanto a sus principios políticos, su cultura intelectual, su moral religiosa y social. Más tarde veremos las consecuencias de ese hecho.

Henos, pues, aquí en el siglo XVIII, que se señala por un desarrollo de todo orden en el mundo americano. El progreso es continuo, y especialmente, durante el reinado de Carlos III, no cesan de estrecharse los lazos entre la Península y las provincias ultramarinas. En una gran obra francesa reciente leemos lo que sigue: "España suministraba más y absorbía más. Los criollos se enriquecían, poblábanse las ciudades y se embellecían. El reinado despótico de Carlos III fue benéfico para las Indias Occidentales". Tal es la exactitud misma. Notemos, de paso, que Carlos III no era más despótico que sus colegas notables de aquel momento, José II, Catalina, Federico o Gustavo III. Quizá lo era un poco menos y, en todo caso, no hacía mala figura entre los tiranos esclarecidos que parecían realizar el ideal de gobierno caro a los filósofos de entonces.

Sabemos perfectamente lo que significa el renacimiento español bajo Carlos III. Pero aquí, como en cualquiera otra ocasión, es necesario entenderse sobre el significado de las palabras. Se habla con razón de la decadencia, del letargo de España en Europa, cuando, a partir del reinado de Felipe IV, lo que se llamó la preponderancia española hubo de ceder el paso a las potencias francesa e inglesa. Pero ciertas nociones aplicables correctamente en Europa no tienen siempre el mismo curso al tratarse de nuestro hemisferio. Así, si España estaba en decadencia, no lo estaban los españoles en América. Atribuidlo al individualismo de la raza, o a causas semejantes y tan cómodas de invocar unas como otras, el hecho es que la creación del Nuevo Mundo hispánico nunca se detuvo. Nuestros reinos y provincias estuvieron durante siglos en perpetuo devenir y suceder. Asentado esto, era muy natural que al renacimiento de la Península correspondiera un crecimiento del esfuerzo constructivo y colonizador en América. La anquilosis colonial, tan propagada por los historiadores como verdad absoluta, es una muy relativa, y aun tal vez pudiera aparecer, a la luz de los hechos, como error calificado. Algunos ejemplos patentes bastan para demostrar cuán vivaz es-

taba allí el viejo espíritu de lucha y de creación. La vitalidad de la raza se manifestaba de un extremo a otro del Continente. Ojead la cronología a partir del Descubrimiento y hasta la Revolución y veréis cómo a las fundaciones suceden las fundaciones, desde la de Santo Domingo en el siglo xv hasta la de San Francisco en el xviii. Y no quiero limitarme a evocar sólo estos dos nombres que hablan a la imaginación: contemplo ese vasto mundo entero, desde California, la última nacida, desde Tejas y Arizona hasta el Río de la Plata, donde aparece Montevideo y se defiende la frontera contra los portugueses. Del siglo xviii data también la colonización del Orinoco y la obra admirable de los misioneros y de los grandes gobernadores en Guayana y en otras regiones orientales de Venezuela. También allí se defiende el Imperio contra las usurpaciones de los holandeses en el Esequibo.

Como resumen, quisiera insistir en que respecto a las provincias americanas de aquel Imperio jamás se paralizó la transformación en el sentido del progreso. La formación de los estados políticos, la atribución de fronteras y de jurisdicciones fue obra, sin duda lenta, pero ininterrumpida, bastante segura y por lo demás sensata; a tal punto que, de atenderse a las reales ordenanzas, podría decirse que, en general, no había malas fronteras en América. Los errores que sobre el particular se observan son tan poco numerosos como los cometidos en otras materias por el Consejo de Indias.

Se cree generalmente, porque doctos narradores y polemistas apresurados nos lo afirman así, que la América española formaba un mundo cerrado e impermeable, sumido en quietud cataléptica hecha de tiranía arbitraria y de oscurantismo fanático e intolerante. Allí, se nos dice, yacían en la esclavitud más abyecta pueblos miserables, mantenidos deliberadamente en la ignorancia y en la superstición, entregados sin misericordia a la codicia y a la violencia de algunas docenas de europeos, que ocupaban todos los cargos y se aprovechaban personalmente de ellos. Bajo tal régimen, los criollos no eran nada, y en especial nada podían aprender porque la Madre Patria apartaba cuidadosamente, metódicamente, toda posibilidad de educación y de instrucción para sus hijos de

América. La Inquisición cubría con su ala negra el horror de los autos de fe; era el reinado absoluto de los frailes y de los curas ignorantes ellos mismos en grado estupefactivo y que no desdeñaban a veces llevar vida comparable a la del Padre Gorenflot. El gobierno de aquellas colonias —agregase— era absurdo, no existía sociedad política, ni más ley que el capricho de los Virreyes y de los Capitanes Generales.

No pienso, en cuanto me concierne, que los hispanoamericanos debamos forzosamente enorgullecernos de oír repetir que nuestros antepasados vivían en tal estado y que para sacarlos de él y hacerles entrar en la civilización fue indispensable la influencia de algunos libros y de algunas ideas extraños a su espíritu rústico y bárbaro. Dejo a otros el cuidado de aplaudir, con las dos manos, según expresión cara a Víctor Hugo, a tan corriente versión de la evolución histórica de nuestras naciones.

El hecho real es que hacia fines del siglo XVIII había en las diferentes provincias lo que puede llamarse un movimiento intelectual considerable, de que dan prueba por sí solas las propias medidas tomadas por las autoridades para contenerlo.

Si remontáis a los primeros tiempos de la Conquista, veréis que los españoles no tardaron en establecer, aquí y allá y de acuerdo con las necesidades, escuelas cuya mayor parte, bajo la denominación genérica de clases de gramática, abarcaban enseñanzas no limitadas únicamente al alfabeto. Muy pronto pensaron en crear institutos más considerables. Ya hacia 1551, las cédulas o decretos de Carlos V establecieron universidades en Lima y en México. La universidad de Santiago de Chile data de 1619, la de Quito de 1620, la de Chuquisaca de 1623, la de Guatemala de 1676. Después vinieron las universidades de Santa Fe en Nueva Granada, de Caracas, de Buenos Aires, de Córdoba. Las instituciones de cultura se creaban a medida del desarrollo de las ciudades y de las aglomeraciones políticas. En general, se daba allí un enseñanza semejante al que recibían, en las diferentes épocas, los alumnos de las universidades europeas. En el alba del siglo XIX, Humboldt encontró que la ciudad de México poseía "establecimientos científicos

más grandes y más sólidos" que no importa cuál otra ciudad del Continente americano, comprendidas las de los Estados Unidos.

La imprenta fue instalada en México en 1536, en Lima en 1584, en Guatemala en 1667, en Santa Fe de Bogotá en 1738. En ello, como para la creación de colegios y universidades, parecía obedecerse al ritmo del desarrollo local, sin que podamos tenerlo como regla, puesto que veremos a ciudades como Buenos Aires y Caracas, sobre todo a esta última, esperar largo tiempo la importación de la imprenta. Será menester buscar en otra parte las razones de tal circunstancia. Asegúrase que desde mediados del siglo XVII había ya una docena de imprentas en la sola ciudad de Puebla, en México. A fines del XVIII se contaban siete en Cuba. Es interesante y curioso comparar las fechas que acabamos de dar con las de la introducción de la imprenta en las colonias británicas.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII aparecen dos gacetas literarias en México; en Santa Fe, el *Papel Periódico*; en Quito, las *Primicias de la Cultura*; en Buenos Aires, *La Gaceta* y *El Telégrafo*. En Lima había dos periódicos importantes: *El Mercurio Peruano*, que trataba de historia y de literatura, y *El Diario*, que hablaba de negocios económicos y comerciales. Los libros subversivos pasaban fácilmente a través de las mallas bastante laxas de la Inquisición. Mariano Moreno encontró en casa de un canónigo de Chuquisaca toda especie de obras que nutrieron sus ideas revolucionarias. En Caracas y en otras ciudades venezolanas de menor importancia, como Cumaná y aun en Calabozo, Humboldt se admiró de ver las bibliotecas de los criollos llenas de libros franceses de filosofía, de ciencias y de política. Muchas veces, ciertamente, se perseguía a los poseedores de esas obras, formándoles procesos que, al parecer, no iban, sin embargo, demasiado lejos en la generalidad de los casos. La censura de las ideas y de los libros no se practicaba entonces solamente en la América española; pero comprenderéis con facilidad que no tengamos aquí tiempo suficiente para detenernos en ese capítulo. En lo relativo a la Inquisición, es bueno indicar, no obstante, que durante tres siglos sólo hubo en las provincias venezolanas

cuatro procesos de este género, uno de los cuales fue movido contra un pastor protestante holandés que, bajo pretexto de vender Biblias, practicaba el espionaje del lado de Guayana. Ninguna de aquellas causas condujo a condenación capital.

Para completar este cuadro bastante sumario que trato de presentar, quisiera decir algunas palabras sobre la situación económica y comercial de nuestras provincias en los últimos años del régimen español. Muchísimo se censuran las prohibiciones y aun las limitaciones de algunos cultivos impuestos en América por las autoridades reales. Por ejemplo, y para hablar de cosas que, particularmente, conozco un poco: en 1607, se prohibió en la provincia de Venezuela, cuyo territorio, por lo demás, no era entonces sino una parte del de la República actual, la siembra del tabaco durante diez años. Ahora bien, la razón de aquella medida era, al parecer, de carácter puramente militar, porque no había otro modo de impedir que los holandeses, con quien España estaba entonces en guerra y que poseían una marina excelente, comprasen en contrabando toda la producción venezolana y la vendiesen en Europa. A veces, se trataba de medios de proteger ciertos productos de la Península y aun de otras provincias americanas. No vemos inconveniente en reprobar con energía tales prevenciones, pero ¿estamos seguros de que no se las emplee idénticas en el mundo presente? ¿No acaece en Europa, por ejemplo, que se limite la producción de vinos? Y no digamos otras cosas. Pues lo mismo acontecía cuando, desde el siglo XVI, se imaginaban maneras de proteger la industria y la agricultura españolas. Ello justifica poco, si se quiere, pero explica mucho. Era una política económica errónea a nuestros ojos de liberales (no sabemos si todavía existen liberales), pero no pura tiranía ni mucho menos ciego despropósito.

El desarrollo económico y comercial de las provincias ultramarinas de la Monarquía recibió gran impulso como consecuencia de las ordenanzas de Carlos III sobre el comercio libre, las cuales parten de octubre de 1765 y se suceden hasta 1778. Primero las Antillas, luego, sucesivamente, México, Nueva Granada, el Río de la Plata, Chile, Perú fueron

llamados a gozar de la libertad de comercio, con excepciones, naturalmente, para ciertos artículos, tales como los vinos y los licores. El rey Carlos IV otorgó en 1797 licencia especial para que las islas francesas pudiesen comprar en Venezuela y en Luisiana víveres, sobre todo ganados. Ese mismo año se permitió el transporte en barcos neutrales de las mercaderías que fuesen a las colonias o proviniesen de ellas, salvo artículos de prohibida importación. Por esta medida se ponía fin al monopolio legal existente hasta entonces. Decimos expresamente monopolio legal, porque en la práctica no eran los españoles quienes lo tenían, sino los ingleses y los holandeses, y también un poco los franceses, bajo la forma de un contrabando desenfrenado y que los cruceros reales eran incapaces de combatir. Conviene sobre todo no olvidar que el negocio inglés sacó siempre provecho doble en la América española: por el contrabando, inundaba nuestras provincias de mercancías secas; por el privilegio llevaba allí esclavos. Porque Inglaterra había obtenido de España, por un tratado público, lo que se llamaba *asiento*, es decir, el privilegio de suministrar negros para el trabajo agrícola en el Nuevo Mundo. Será más tarde, mucho más tarde, cuando los ingleses se convertirían en apóstoles de la abolición.

Así, pues, un tráfico fructuoso se efectuaba a la barba de los españoles, quienes, para impedir la introducción de los productos extranjeros en sus posesiones, carecían de barcos suficientes y de industria capaz de luchar con las de sus competidores. No es exacto decir que los colonos estaban en realidad privados de los artículos necesarios a la vida y que por esta razón reclamaban la libertad de comercio. Pero es evidente, sin embargo, que los intereses económicos y comerciales comenzaban a desempeñar papel preponderante en la política hispano-americana. El monopolio, por teórico que fuese, las restricciones y las dificultades pesaban mucho sobre las provincias, que buscaban comerciar libremente entre ellas y con el extranjero y producir otros artículos que los que podían vender a España. Resultados tan apreciables para el crecimiento de la riqueza pública y privada como, por ejemplo, los obtenidos en Venezuela por la Compañía Guipuzcoana, no podían menos

de estimular, por contragolpe, el deseo de los americanos de dirigir por sí mismos la explotación y el desarrollo de sus recursos.

Veis, por este esquema y en la medida en que me ha sido posible presentároslo, que la situación efectiva de las provincias hispanoamericanas no era completamente la que algunos historiadores eminentes nos enseñan, fundados por lo demás en las quejas que formulaban los propios criollos revolucionarios.

Pero entonces, diréis, ¿por qué se separaron de España aquellas provincias?

Ofreceros un estudio profundo de las causas de la Revolución hispanoamericana sería, bien lo sabéis, trabajo para el cual habríamos menester más de una plática. Pero puedo y debo formular ahora una especie de inventario de esas causas, que desde luego no es inédito, comentándolo siquiera tantico, de manera que tengáis ante los ojos el panorama aproximativo del Imperio español de América, que se me ha pedido escribir, para el momento en que va a desagregarse y dar nacimiento a los Estados independientes actuales. Queda entendido que no pierdo de vista que es indispensable guardarse, cuando se ensaya restablecer algunas verdades antiguas, de crear errores nuevos. La Arcadia no existió nunca fuera de los poemas helénicos. Las cosas estaban muy lejos de ser óptimas en América, como por lo demás tampoco lo eran en Europa. Y fue porque todo no iba por lo mejor en el mejor de los mundos que se hizo, aquí y allá, una revolución.

Indiquemos, pues, los motivos principales que inspiraron a los criollos y los empujaron a sublevarse contra la metrópoli.

Para comenzar, los había de orden interno y que provenían de la naturaleza misma del Imperio, de su constitución, o más bien de sus constituciones, pues existía más de una por decirlo así, y tal circunstancia es la que, a primera vista, desconcierta un tanto al observador extranjero llevado a juzgar sólo por las apariencias, sobre todo cuando están consagradas por un prejuicio más que secular. Estos matices y estas diferencias de naturaleza política se juntaron a las muy variadas características de las poblaciones autóctonas, de los climas, de los productos del suelo;

en una palabra, de la geografía, para determinar la diversidad de nuestros Estados hispanoamericanos. Sin vacilar queremos creer que esa diversidad es armoniosa, y en todo caso nos esforzamos, sin excepción, en hacerla tal. Pero puesto que existe, es necesario tomarla muy en cuenta para llegar a comprender nuestra historia.

Lo que constituye la grandeza misma del movimiento de la Independencia hispanoamericana es que, habiendo sido proyectada, comenzada y realizada por los criollos, no se hizo solamente en su provecho, como lo esperaba la mayor parte de ellos. La sociedad colonial era un edificio formado por castas superpuestas que presentaba, además, un equilibrio que Humboldt y otros viajeros admiraron mucho. La casta blanca, a la cual, sin embargo, podían acceder mestizos y mulatos enriquecidos, o que hubieran rendido servicios públicos, dominaba el conjunto y ejercía lo que se ha llamado la tiranía activa. Aquella estructura social, cuyos chasquidos significativos oímos a lo largo del último siglo de su existencia, debía inevitablemente llegar desde luego a penoso desenlace para la metrópoli; pero al fin se derrumbó por su propio peso y de sus escombros se verá surgir la verdadera Revolución. En efecto, la clase dirigente, es decir, los criollos, que, por ejemplo, en Venezuela y en varias otras provincias, poseían las grandes propiedades agrícolas y de cría de reses, querrán obtener una autonomía, en seguida una independencia que muchos de ellos pensaban sería apenas un cambio de personas, determinado por la expulsión de los españoles europeos y que no tocaría en nada la estructura social del país. Hablaban, ciertamente, de democracia, de libertad y de igualdad; pero es probable que en su fuero interno se trataba de aplicar esas ideas a una sociedad en la cual habrían continuado a ejercer toda especie de prerrogativas. El drama sobrevino cuando, en algunos países como el mío, las castas inferiores, temiendo la tiranía de los aristócratas y de los burgueses, corrieron a cobijarse bajo el estandarte real y desataron así una larga guerra civil y social. Fue sólo al cabo de muchos años de lucha y de destrucciones cuando la revolución pudo cumplirse, justamente porque dichas castas inferiores se apoderaron a su

turno, compartiéndolas, de las ideas antes predicadas en beneficio de otra.

Mas no anticipemos, y limitémonos a señalar el hecho como argumento de estudio indispensable. Agregad la consideración no menos necesaria de la cuestión económica, sobre todo en su aspecto agrario, y tendréis amplia materia de reflexión sobre algunas de las debilidades internas del Imperio español de América. Las proporciones de tales problemas pueden medirse viendo cómo hoy todavía sólo en parte han sido resueltos.

Veamos ahora las influencias exteriores que se ejercían sobre el espíritu de los criollos y a los cuales tampoco escapaba gran número de españoles peninsulares habitantes de nuestras provincias, y a quienes se verá tomar partido y alistarse resueltamente en favor de la independencia.

En primer lugar, había los principios revolucionarios franceses. Por Revolución Francesa entiendo aquí no solamente los acontecimientos decisivos de 1789 y de los años subsiguientes, sino el vasto fenómeno filosófico y la corriente de las ideas políticas que se precisaron a partir de la publicación de las obras de Bayle, de Montesquieu, de Rousseau y luego de la Enciclopedia. Advirtamos que importa sobremanera no confundir las diatribas del género de las de Raynal, que hace poco citamos, con las sustanciales ideas políticas y filosóficas que, nacidas en Francia y otros países, España inclusive, ejercieron indudable influencia, y determinante, en el espíritu de los criollos y les llevaron de la revuelta a la verdadera revolución. Balzac ha dicho que "el pensamiento es el elemento destructor"; no me atrevería a resolver la cuestión de saber si el tantas veces nombrado Abate y sus congéneres tenían pensamientos efectivamente balzacianos, pero es exacto que obras como las suyas tuvieron también influencia considerable en el ánimo de nuestros futuros insurgentes.

Uno de los canales más señalados por donde la Revolución Francesa en acción pasará al Continente hispanoamericano será la rebelión de los negros de Santo Domingo, que por ese respecto merece estudio especial de quienes quieran darse cumplida cuenta de los orígenes exteriores de

nuestra independencia. Ya más de un viajero, desde fines del siglo, apreciaba esta influencia haitiana y en general de las Antillas pobladas de negros, en la propagación de las "ideas francesas" en la vecina Tierra Firme. Quizá no sea inútil recordar que fue por el tratado de Ryswick, en 1697, que España cedió a Francia la tercera parte de la isla de Santo Domingo, y que esa parte cedida forma hoy la República de Haití.

Vino por otro lado la influencia de la revolución de los Estados Unidos de Norteamérica. Acabamos de ver, por las cifras dadas, que la población blanca de las provincias hispánicas no era inferior en número a la de las trece colonias inglesas en la época de su independencia; pero aquélla estaba repartida en un territorio infinitamente más grande y vivía en condiciones sociales y materiales que decían poca relación con las de las comunidades del Norte. Los colonizadores ibéricos no eran racistas, como los anglosajones, y al mezclarse con los indios y los negros y al dictar desde el comienzo leyes de protección para los primeros, para su conservación podría decirse, constituyeron sociedades que no podían tener la homogeneidad étnica ni la psicología uniforme que se observaba en las colonias separadas de Inglaterra. No tardará en verse, y al contrario de la opinión generalmente esparcida, que los criollos, y en todo caso sus cuadros directores, estaban tan instruidos de sus negocios en materia política como podían estarlo los colonos británicos. Pero ellos no serán los únicos que podrán arreglar su nueva vida de independencia, porque no formaban sino una parte, y la menos numerosa, de esas sociedades que los propios anglosajones llamarán después muy desdeñosamente *melting pots*. Por tal razón, si bien está permitido y aun muy indicado establecer comparaciones entre los pueblos hispánicos y británicos del Nuevo Mundo, es por lo menos ocioso pretender deducir de tales comparaciones consecuencias válidas en cuanto a la capacidad política de unos y de otros.

Los actos del Congreso de Filadelfia, el *Bill of rights*, el ejemplo de aquellos colonos que expulsaban de su seno al europeo para asumir, con el mayor buen éxito, la gestión de sus propios negocios, asombraron al

principio y fascinaron después a los americanos españoles, mostrándoles la posibilidad de hacer ellos lo mismo.

A este respecto, ha podido hacerse notar que España no hubo de obtener gran provecho de la ayuda que prestó a los insurgentes norteamericanos, pues contribuyó con ello a crear el ejemplo más peligroso para sus propios súbditos. Es verdad, por otra parte, que en aquella ocasión Carlos III se hallaba obligado por el Pacto de Familia a entrar en guerra al lado de Francia y que, además y sobre todo, trataba de recuperar a Mahón y a Gibraltar y de vengar muchas otras vejaciones que Inglaterra había hecho a su país.

Y será, precisamente, en las maquinaciones de Inglaterra que será necesario ir a buscar una tercera y última causa exterior de nuestra revolución de Independencia. Esta nación se ocupaba desde hacía tiempo, no en volcar brusca y totalmente el Imperio español, sino en roerlo. Fue empresa de larga duración, proseguida con tenacidad y oportuno aprovechamiento de las circunstancias desde el tiempo de Elisabeth y que, como muy bien sabéis, había ya conducido a la conquista de varias islas españolas y también francesas en los mares occidentales.

Durante siglos subsistió en la América española una especie de patriotismo imperial muy fuerte, que llevó a los criollos a defender ellos mismos al Continente contra los ataques del extranjero. Combates como los que se dieron a los ingleses en el área del Caribe, en Cartagena, en La Guaira y, mucho más tarde, en Buenos Aires, atestiguan de esta cohesión del Estado español y de la firme voluntad de permanecer españoles que parecía animar a los colonos.

Pero aquellas pruebas de fuerza servían también de lección a los hispanoamericanos, porque les demostraban que tal vez no habían necesidad de España para escapar a una nueva conquista, que era cuanto mayor temor les inspiraba. Así, cuando se dieron cuenta más y más de que podían vivir y hacer valer sus derechos propios y personales, derechos diferentes y a veces opuestos a los de la Madre Patria, vínoles la idea de que ya no había lugar a batirse contra el extranjero, sino más bien a entenderse con él para luchar a su turno contra la metrópoli. Y fue

de esos sentimientos, de esa nueva política que ganaban terreno entre los criollos, que los ingleses se dispusieron a aprovechar.

He aquí, señores, las grandes líneas de que he creído poder servirme para ofreceros, en una hora de reloj, el cuadro de la América española en la víspera de su revolución. En próxima oportunidad, hablaremos del nacimiento de esa revolución, y después, de su cumplimiento en una parte del Continente.

**EL REGIMEN ESPAÑOL
EN VENEZUELA**

I

LA CONQUISTA

EN su tercer viaje, Colón tocó en la parte oriental de Venezuela, llamándola Tierra de Gracia, el 1 de agosto de 1498; pero la primera expedición que recorrió nuestras costas fue la que al mando de Alonso de Ojeda, natural de Cuenca, salió del Puerto de Santa María en el mes de mayo del año siguiente. Con Ojeda navegaba el florentino Américo Vespucio, que dejaría su nombre al Continente. Las naos españoles reconocieron las islas de Trinidad y Margarita, el golfo de Paria, las playas de Barlovento, y entraron luego en el golfo llamado hoy de Venezuela y en el lago de Maracaibo. Fue en estos parajes donde Ojeda vio habitaciones de indios sobre pilares plantados en el agua, y les dio el desdeñoso nombre de pequeña Venecia, que pasó después a ser el del país. Otra expedición siguió en el propio año de 1499, bajo Niño y Cristóbal Guerra, quienes recogieron algún oro y hasta ciento cincuenta marcos de perlas, primeros tesoros que de aquellas regiones fue-

ron a España, y muy luego llegaron nuevos barcos a las órdenes de Rodrigo de Bastidas. Tornó, por último, Ojeda al lago con provisión real de conquistar las tierras y con la expedición que partió de Cádiz en enero de 1502. Débese, pues, a éste la toma de posesión por España del territorio comprendido entre las bocas del Orinoco y la península Goajira, y tal posesión consagróla el audaz marino en aquel magnífico lenguaje castellano del siglo XVI: "Yo, Alonso de Ojeda, criado de los muy altos y muy poderosos Reyes de Castilla y de León, dominadores de las gentes bárbaras, su mensajero y capitán."

Durante los primeros años fue la costa venezolana teatro de piraterías y desmanes cometidos por los aventureros de toda suerte provenientes de la isla Española. Propusiéronse al principio los conquistadores explotar la pesca de perlas en las islas de Margarita y de Cubagua, y en esta última existió desde 1510 una ciudad llamada Nueva Cádiz. Diéronse luego aquéllos a buscar y beneficiar minas. La conquista de Oriente fue tan cruenta como debía serlo la de Caracas, porque los indios, exasperados, empeñaron la lucha contra los invasores, destruyendo sus establecimientos, asesinando a los misioneros y emponzoñando las aguas. Gonzalo de Ocampo recibió de las autoridades de Santo Domingo, en 1520 ó 21, cinco carabelas y el encargo de pacificar la Nueva Andalucía. El pacificador, como todos los que llevan ese título, mostróse terrible en el escarmiento. Mas los indígenas reincidieron e incendiaron a Nueva Toledo, fundada por Ocampo. Poco después llegó Castillón con cinco carabelas y trescientos soldados. El nuevo jefe estranguló o empaló a los cabecillas rebeldes y fundó a Nueva Córdoba, que tomó luego el nombre de Santa Inés de Cumaná. Esta ciudad, ilustre entre

todas las de Venezuela por su papel histórico en la formación de nuestro Estado y por la inteligencia y gloria de algunos de sus hijos, fue asentada definitivamente en 1569 por Diego Fernández de Zerpa.

En 1527, el capitán Juan de Ampies, enviado por la Audiencia de Santo Domingo, fundó la ciudad de Santa Ana de Coro, que fue erigida en 1531 en sede episcopal; y al año siguiente Carlos V dio en arrendamiento gran parte del territorio de Venezuela a los Welser o Belzares, banqueros de Augsburgo, sus prestamistas. Era un verdadero contrato de colonización, que no preveía la vil explotación de los indios como la practicaron los concesionarios: obligábanse éstos a llevar, además de trescientos españoles, cincuenta alemanes expertos en la industria minera y a fundar dentro de corto plazo dos ciudades y tres fortalezas, concediéndoles, en cambio, el Emperador el 4 por 100 de los provechos que como quintos tocasen a la Corona, algunas tierras en propiedad y la facultad de reducir a la esclavitud a los indios que resistieran a la ocupación; todo en el territorio comprendido entre Maracapaná y el cabo de La Vela. Los alemanes recibieron, firmada por Doña Juana *la Loca*, una carta semejante a las que se daban a los conquistadores españoles, y es de observarse que el gobierno peninsular conservaba su derecho de intervenir en la administración de las comarcas concedidas. Es cierto que Carlos V recurría a medios peculiares para obtener dinero, como dar en prenda la ciudad de Amberes a los banqueros Fugger a cambio de las sumas necesarias para cohechar los electores imperiales. Pero en el caso de Venezuela puede decirse que cuando el Emperador confiaba en una firma mercantil el cuidado de conquistar y colonizar, iniciaba un procedimiento empleado luego

con excelente éxito por los franceses y los ingleses, creadores de célebres Compañías en ambas Indias. Sea lo que fuere, en Carlos V, alemán hasta la medula, ejercían influencia decisiva sus ministros flamencos, y a éstos corresponde casi enteramente la responsabilidad de la política americana de la Corona en aquel tiempo. Para los funcionarios del Imperio, indiferentes al interés español, sólo se trataba de hallar recursos a fin de proseguir las guerras en Europa.

Señalóse la dominación de los adelantados germánicos por una serie de hazañas y crueldades de que hay pocos ejemplos en la historia de América. Alfínger, primer gobernador, es el tipo del aventurero sin entrañas, incendiario y rapaz. Jorge Spira y Nicolás Federman realizan atrevidas expediciones en el interior de las tierras, batiéndose contra los indios que defienden su libertad. Epoca de inauditos pillajes aquella en que Pedro de Limpias va a limpiar el lago, trayéndose quinientas piezas de esclavos de ambos sexos y toda edad. Contrasta con esta ferocidad, a pesar de lo que afirma Oviedo y Baños, la magnánima conducta del obispo Bastidas, prelado bienhechor, notable precisamente por la protección que acordó a los indígenas.

En 1546 el Emperador pone término al incumplido contrato, y con el nombramiento del licenciado Juan Pérez de Tolosa como gobernador de Coro se abre la era de la colonización, de la fundación de villas y ciudades, del progresivo allanamiento de los indios. La ciudad de El Tocuyo fue erigida por Juan de Carvajal en 1545, y de ella partieron las expediciones hacia la cordillera andina y hacia el centro del país, donde debía crearse luego la provincia de Caracas. En 1552 Juan de Villegas funda a Nueva Segovia de Barquisimeto y, en 1555, Alonso Díaz de

Moreno a Nueva Valencia, cerca del lago de Tacarigua. Juan de Salamanca funda a Carora en 1572, como en 1556 Diego García de Paredes fundara a Trujillo, ciudad que después de mil peripecias, provocadas por la hostilidad de los naturales, se asentó en el lugar que hoy ocupa. Al propio tiempo entraban del Nuevo Reino de Granada otros conquistadores, que crearon los establecimientos de Mérida y el Táchira. El extremeño Juan Rodríguez Suárez levanta en 1558 la salmantina ciudad de Mérida, trasladada poco después a su sitio definitivo por el capitán Juan Maldonado, que la nombró Santiago de los Caballeros. En 1561 nace la villa de San Cristóbal. Diez años más tarde Alonso Pacheco funda a Ciudad Rodrigo, no lejos del lugar que había presenciado las fechorías de Alfínger; el nuevo establecimiento, trasladado y repoblado por Pedro Maldonado, que lo llamó Nueva Zamora, es hoy Maracaibo, capital del petróleo, una de las ciudades más ricas del país. En 1576, gentes de Mérida, a las órdenes del capitán Juan Andrés Varela, fundan a Altamira de Cáceres en tierras de los indios barinas, cuyo nombre tomó en definitiva la ciudad, que sería célebre por su tabaco, su cacao y la riqueza de sus ganados.

Mientras tanto, se batallaba duramente en el centro, donde caciques épicos se defendían de los invasores. La lucha de Guai-caipuro contra los más esforzados capitanes, a quienes tuvo largo tiempo en jaque y aun derrotó varias veces, presenta el más bello ejemplo del valor y tenacidad de los aborígenes venezolanos. En medio de continuos combates y bajo el gobierno de D. Pedro Ponce de León, en 1567, Diego de Losada fundó a Santiago de León de Caracas en el sitio donde antes Rodríguez Suárez levantara su villa de San Francisco. A Caracas empezaron a trasladarse

desde 1577, por obra del gobernador D. Juan de Pimentel, los poderes civiles y eclesiásticos de la provincia, hasta entonces establecidos en Coro. Otras villas y ciudades surgen en los años subsiguientes: La Guaira, en 1586; Guanare, en 1595. Nueva Barcelona, trasladada después al sitio que en la actualidad ocupa, fue fundada en 1637 por Juan de Urpín, pacificador de los cumanagotos, quien creó también en aquellos territorios la efímera Nueva Tarragona.

Múltiples expediciones vinieron durante el siglo XVI a las regiones del río Orinoco, que se llamó primero Pato, y cuyo delta visitara en 1500 Vicente Yáñez Pinzón. Diego de Ordaz obtuvo de Carlos V patente de conquista y gobierno, y remontó hasta la embocadura del Meta. Seis años después, otros barcos, al mando de Herrera, subieron por este último río, en cuyas orillas halló el jefe su muerte. Exploradores partidos de Guayana penetraban en 1553 hasta el Amazonas por los afluentes. Al finalizar el siglo había numerosos establecimientos en las regiones del Esequibo, y la bandera real flotaba en el fuerte que defendía la entrada del Cuyuni. En 1591, Antonio de Berrío, marchando en sentido inverso, vino de Nueva Granada por los tributarios del Orinoco y fundó la primera villa de Santo Tomás. Domingo de Vera, general y maestre de campo de Berrío, tomó posesión oficial y jurídica por ante escribano, en 23 de abril de 1593, de "las nobles provincias de Guayana y El Dorado". Vera llevó luego nuevos colonos a Santo Tomás, probablemente transferido a otro lugar, y formó allí un convento de franciscanos. Al lado de la obra de los misioneros, de la cual se hablará más adelante, intensificase en la última mitad del siglo XVIII la colonización civil de Guayana. Iturriaga fundó en siete años diez

estaciones en la ribera izquierda del Orinoco. En 1762, el Rey, siguiendo el informe del comisario Solano, ordenó la traslación de la capital a Angostura, donde la nueva ciudad se levantó con el auxilio de dieciséis mil pesos que dio el Tesoro Real, flanqueada de dos fuertes que cerraban el pasaje del río. Nació también entonces la villa de Upata.

Nada puede dar, a quienes no conozcan la naturaleza de aquellos países, idea bastante exacta de la suma de audacia, de valor y de formidable voluntad que necesitaron los españoles para conquistar y colonizar a América. La epopeya de nuestros mayores no tiene parangón en la historia del mundo, por los resultados obtenidos, la extensión del territorio, las innumerables dificultades que opusieron los hombres y las cosas y por la escasez de medios que para vencerlas se tuvieron. Yerran quienes pretenden que no hubo sino dos conquistas, la de México y la del Perú, y que en el resto del Continente se limitaron los invasores a tomar posesión en nombre de la Corona y a explotar el país con poca resistencia. El heroísmo desplegado por los conquistadores en Venezuela fue extraordinario. Alonso Pérez de Tolosa, a la cabeza de un puñado de hombres, como lo hicieron todos sus émulos y compañeros, efectúa una expedición de tres años a través de tierras bravías, en diario batallar contra los naturales indómitos, contra "indios desabridos y de mala digestión", como dice el cronista Oviedo y Baños. En la batalla de los Omeguas, Pedro de Limpías y treinta y nueve compañeros rompen y rechazan millares de enemigos enfurecidos. El brillante paladín Garci González de Silva, soldado insuperable, suerte de Cid Campeador de la conquista venezolana, combate cuerpo a cuerpo con los caciques; vence a los caribes, a los

teques, a los cumanagotos, en luchas que duran decenas de años; cumple proezas homéricas. Temen los indios la capa escarlata de Rodríguez Suárez, que flamea en la refriega. Y alternan en Losada el impetuoso coraje y la política sin escrúpulos de un condotiero medieval. A flechazos sucumben Suárez, García de Paredes, Narváez, Diego de Paradas. Sólo hacia 1600 pudo tenerse por pacificado el territorio: la porfiada lucha había durado ochenta años.

Algunos exaltan el valor y la iniciativa de los conquistadores sólo con el propósito de quitar mérito al gobierno español, a la España oficial, que, si creyéramos a ciertos censores, recogiera apenas el fruto de los sacrificios de un puñado de hombres abandonados a sus propias fuerzas y a quienes pagó después con la más negra ingratitud. El cargo, además de ser infundado en el caso concreto, podría aplicarse por hábiles sofistas a cualquier país colonizador. Con frecuencia se hace en Francia la apología de ilustres coloniales a expensas de la administración y aun del régimen político, y se compara la conducta de la República con este o aquel organizador de protectorados y colonias a la de Carlos V con Hernán Cortés.

Para explicar la conquista y rebajar la altura de la gesta española, invócase, por otra parte, la diferencia de armas y de organización entre invasores e invadidos. Igual reproche hácese de antiguo a las empresas de Alejandro, sin que pueda destruirse la importancia histórica de la helenización del Oriente ni negarse el genio del conquistador. No debe olvidarse que, según anota cierto francés que citaremos con frecuencia, el número de los indígenas, comparado al de los españoles, guardó dondequiera relación de cuatro mil a uno. Ni siempre disponían los conquis-

tadores de la superioridad de las armas de fuego, o bien las echaban de lado por incómodas, y fueron innumerables durante la conquista de Caracas los combates en los cuales una docena de españoles, provistos de lanza, espada o manopla, rompieron los escuadrones indios que peleaban con clavos, macanas y venablos. Garci González de Silva, sorprendido en cierta ocasión sin armas ni escolta, se batió con una espuela y empleando a manera de escudo una frazada arrollada en el brazo. El yelmo, la loriga, los caballos y los perros eran elementos de verdadera superioridad; pero recuérdese que Losada llevó consigo apenas veinte soldados montados. No sólo peleaban a pecho descubierto los indígenas, sino que recurrían a hábiles estratagemas, como la de vestirse de pajas para ocultar sus movimientos, o talar las sementeras para vencer a los invasores por hambre.

Tampoco en sus luchas intestinas, que, como se verá, las hubo, iban siempre los españoles bien armados, y algunas de aquéllas debieron efectuarse, como luego muchas de nuestras republicanas guerras civiles, a machete limpio. Cuando Gutiérrez de la Peña reunió en El Tocuyo ciento cincuenta hombres para atacar a Lope de Aguirre, sólo contó con dos arcabuces, y sus adargas eran de cuero crudo. Los soldados de García de Paredes usaban, según dice Oviedo y Baños, celadas "hechas de lienzo de la tierra, acolchadas con algodón, de figura ridícula". Fue Bravo de Molina quien llevó entonces las armas de fuego del destacamento de Mérida. En la conquista de Caracas muchos soldados calzaban la alpargata.

Al correr de la guerra los conquistadores formaron contingentes de indígenas amigos, que les sirvieron como auxiliares. En la expedición contra los quiriquires Infante llevaba sesenta

españoles y mil indios, y poco después volvió contra aquéllos Calderón a la cabeza de ochenta españoles y más de seiscientos indios. Indios teques acompañaban a Sancho García, y muy eficaces fueron sus escuadrones de flecheros para la derrota de Acuareyapa. Indios llevaba Garci González de Silva en sus dos victoriosas campañas contra los caribes, que invadieron el territorio de Valencia y del Guárico, y cuatrocientos le seguían, para muy luego abandonarlo, contra los terribles cumanagotos. Contra éstos condujeron también indios de la costa Cristóbal Cobos y, más tarde, Juan de Urpín. Gran número de indios yanoconas y apenas ochenta y dos españoles condujo García de Paredes a la guerra de los cuicas. El cacique Aricabacuto tomó parte con sus vasallos en la expedición contra los mariches, que mandó Pedro Alonso Galeas, bajo el gobierno de Mazariego.

No sólo contra los indios batíanse los conquistadores: que también peleaban entre sí. Cobos mata a traición al bravo Fajardo, y a traición asesina Carvajal a Felipe de Utre. Diego de Ordaz, veterano de la guerra mexicana y explorador del Orinoco, ataca los soldados de Cedeño, gobernador de Trinidad, y es aprisionado por meterse en ajena jurisdicción. Rebélase el veedor Alonso de Escalante, y apresa al gobernador de Paria y Maracapana Jerónimo de Hortal. Riñen Villegas y Losada, Limpías y Bartolomé Belzar. Dispútanse la conquista en tierra de Trujillo, Francisco Ruiz por El Tocuyo y Juan Maldonado por Mérida. Juan de Salas subleva a los cumanagotos contra Zerpa, quien halla la muerte en el combate.

Para regir y contener a los audaces soldados que realizan la conquista, diputa la Corona legistas y letrados, un Pérez Tolosa, un Collado, un Villacinda, un Bernáldez. Y los hombres de ley,

cubiertos a su vez del casco y la armadura, dejan caer su ruda justicia sobre los malhechores, como Carvajal; apaciguan la querella de Villegas y Losada; disciplinan el ímpetu de Paredes y de Suárez. La iniciativa de los caudillos encaja dentro de las normas legales, y Fajardo no se atreve a fundar una ciudad sin ir antes a El Tocuyo a solicitar la investidura de poblador, pues no hay fundación posible si el escribano no toma la posesión jurídica y provee el auto. Rodríguez Suárez es sometido a juicio por haber fundado a Mérida sin tener autorización del gobierno de Santa Fe. Un arbitraje de eclesiásticos regla provisionalmente la divergencia entre Federman, Quesada y Benalcázar, mientras César decide. Lope de Aguirre mismo promete al padre Montesinos enviarle los traslados de los autos que ha hecho levantar para legalizar sus crímenes; y se cuenta de un tal Arias a quien el tirano perdonó sólo por ser hombre sabidor en derecho y hábil en la fabricación de piezas jurídicas. Antes de remitir preso a España a su predecesor Collado, prepara el licenciado Bernáldez documento justificativo, en regla, de los delitos o faltas que le imputa. Alonso Cobos, antes de asesinar a Fajardo, le procesa sumariamente, hácele tomar confesión por el escribano y le da vista de los cargos, con media hora para defenderse. Pedro de Viedma se encarga, a su vez, de formar el proceso de Cobos, el cual muere ahorcado y es hecho cuartos, en Margarita, por mandato de la Audiencia. Aun a la guerra con los indios pone el conquistador formas jurídicas, y antes de dar el último asalto, por sorpresa, a Guaicaipuro, procésale Losada, llevando consigo Infante un mandamiento de prisión contra el indómito cacique. No tuvo entonces Losada, al sumariar a éste, "el más extravagante pensamiento que ocurrirá jamás a conquistador nacido o por nacer", según pretende

Baralt, pues tal era el uso corriente y tal el respeto del español por la legalidad, rasgo característico del heredado viejo espíritu de Roma. Abrióse también causa a los mariches antes de entregar sus jefes a la venganza de tribus enemigas, que los empalaron. Carrizo violó la fe jurada a los tácatas, mas antes de darles garrote hízoles sumaria, de la cual resultaron culpables de haber devorado a Juan Pascual y a Diego Sánchez. Cuando Vera, en 1593, tomó posesión del territorio guayanés, el cacique Morequito, señor del lugar donde aquel acto se verificaba, otorgó su consentimiento expreso y prometió, con las formalidades jurídicas, obediencia al Rey. En 1634, Urpín, después de una campaña victoriosa, obtuvo el "consentimiento" de los cumanagotos para convertirse en vasallos de España.

Hubo, ciertamente, atropellos, violencias y crueldades en la conquista. Húbolos porque los indígenas, invadidos, se defendieron, y porque, como algún día dijéralo Bolívar, la guerra no se hace por amor de Dios. Ninguna conquista, y menos las de aquella magnitud, puede realizarse con sacristanes, sino con aventureros de pelo en pecho, capaces de lanzarse al océano sobre frágil carabela para ir a buscar el Dorado en las vastas selvas del Orinoco, donde serían atacados a cada paso por gran número de enemigos guerreros y feroces. Las nacientes colonias americanas eran la cloaca máxima que recogía todas las horrruras de Europa: cuando Cartier partió por segunda o tercera vez a las tierras que forman el Canadá, Francisco I le acordó el derecho de transportar allí como colonos a los condenados a muerte y a otras penas.

Pero no todos los soldados españoles eran bárbaros, puesto que entre ellos vemos, en Europa, a Cervantes, Garcilaso, Lope

de Vega, Hurtado de Mendoza. El Gran Capitán y el marqués de Pescara alternaban, entre dos batallas, con literatos y académicos, y el marqués del Vasto, a más de esclarecido mecenas, era poeta y escritor. De los extranjeros que en aquella época señoreaban a Italia no fueron, ciertamente, los españoles los que causaron mayores daños a museos y bibliotecas. Y muchos de los formidables conquistadores de América eran asimismo hombres letrados y de agudo ingenio, tales Bernal Díaz del Castillo, Lechuga, Ercilla y aquel Pedro Sarmiento de Gamboa, explorador de la Tierra del Fuego, que, hecho prisionero por los ingleses y conducido a Londres, admiró por su cultura a la reina y a sir Walter Raleigh, con quienes conversaba en latín. Hernán Cortés es de madera cesárea, soldado que, si en hábil audacia emula al divino Julio, escribe también páginas que por su estilo pueden compararse a la insuperada prosa de los *Comentarios*.

¡Cuánto se ha hablado y se habla de la búsqueda del oro y de la codicia de los conquistadores! Importa estimar en lo que vale la moralidad hipócrita de los acusadores extranjeros: si los españoles extraían el oro del fondo de las minas, iban los ingleses y franceses a tomarlo en los navíos que lo transportaban a España o en los propios establecimientos de América. Y al mismo tiempo que contra los indios, defendíase el conquistador de Venezuela contra los piratas y bucaneros, que atacaban sin cesar las villas de la costa y aun del interior de las tierras. La piratería era, en Inglaterra, empresa preparada por los capitalistas y los personajes más influyentes del mundo oficial y de la corte. La reina Elisabeth participaba directamente en el negocio, y sacaba de él grandes provechos personales: aumentar la parte del botín real era para los corsarios el mejor medio de captar los favores de la

soberana. El favorito Leicester y el secretario de Estado Walsingham, y otros aún, organizaban las fructíferas expediciones. Los barcos cargados de asesinos y ladrones ostentaban nombres místicos, como convenía a tan austeros antipapistas, el "Jesús", el "Ángel", la "Gracia de Dios", y los capitanes recitaban versículos de la Biblia en el acto de ordenar el incendio, la matanza y el saqueo. Hawkins, al abandonar parte de sus compatriotas en una isla desierta, excítales a servir y a temer a Dios; Drake comulga al lado de sus víctimas el propio día en que las hace decapitar. Los curas anglicanos proclaman en el púlpito que la piratería contra España, bestia y prostituta apocalíptica, es acto meritorio a los ojos del Señor. En la escena de Drury Lane se representaron durante largo tiempo, en medio de los aplausos del público, piezas en loor de las hazañas y rapiñas de los filibusteros que aun hoy los ingleses tienen por héroes nacionales. Sir Walter Raleigh obtuvo el pleno apoyo del gobierno de la reina para sus correrías en Guayana tras el señuelo del Dorado, del palacio de Manoa, "donde la vajilla, los vasos, los muebles, todo es de oro y plata; los pájaros, los cuadrúpedos, los árboles y los arbustos, de tamaño natural, todo es de oro, lo mismo que los peces de los ríos, lagos y mares de esta región sorprendente". Más tarde, Port Royal se convierte en una caverna de criminales, y los gobernadores de Jamaica arman las flotas piráticas y perciben un tanto por ciento del producto de la exacción.

Durante los siglos XVI y XVII los filibusteros franceses e ingleses cometen en Venezuela y otras colonias espantosas crueldades y dan tormento a los pacíficos pobladores para arrancarles el dinero, las joyas y demás objetos de precio. Aquellos malvados dejaron un nombre particularmente odioso en las regiones

del Orinoco y del lago de Maracaibo. Nau, llamado el Olonés, acostumbraba a sacar la raíz de las uñas a sus víctimas o hacerlas saltar los ojos de las órbitas por medio de una cuerda apretada alrededor de la cabeza. En Gibraltar su banda violó a las mujeres y encerró a gran número de habitantes de ambos sexos y toda edad en una iglesia, donde murieron de hambre. En la toma de San Pedro (Centroamérica), el pirata devoró crudo el corazón de un español. Morgan hizo volar en Puerto Belo un fuerte repleto de prisioneros, y en Gibraltar, para obtener dinero de cierto portugués que sus esclavos denunciaban como rico, le colgó de brazos por detrás hasta que saltasen las articulaciones; atóle luego por los dedos de los pies, y, por último, le puso un enorme peso en el vientre y le abrasó el rostro. Un loco, que se decía hermano del gobernador, fue quemado vivo. Gran número de otras víctimas fueron abominablemente mutiladas, crucificadas o incineradas. En Panamá —dice el médico Esquemelin, que se hallaba entre la horda de Morgan— los piratas se entregaron a crueldades inauditas: golpearon los prisioneros y habitantes hasta hacerles chorrear la sangre; les cortaron la nariz y las orejas; les calcinaron el rostro; les traspasaron el cuerpo con estacas. "Escenas atroces de este género eran para aquellos salvajes a la vez deporte y recreo —dice el testigo—. Ni la edad ni el sexo protegían a los desgraciados. La peor suerte tocaba a los frailes y las monjas, con los cuales se daban a las más locas obscenidades."

En las postrimerías del siglo XVII los negociantes londinenses extremaron su ingeniosidad al punto de constituir sociedades y armar navíos destinados a robar a los ladrones. El célebre capitán Kidd, que despojaba, además de a los piratas, a cuanto pacífico

navegante encontraba en su ruta, obraba por cuenta de una de estas compañías, en la cual participaban lord Sommers, jefe del Gabinete y del partido wigh; el conde de Oxford, primer lord del Almirantazgo; Schrewsbury, lord de la Alta Justicia, y Romney, secretario de Estado. El rey Guillermo III en persona había prometido entrar en el consorcio como accionista, por mil libras esterlinas. Cuando estalló el escándalo, hubo necesidad de colgar a Kidd y a alguno de sus cómitres para salvar al gobierno y a los nobles, culpables principales.

Un autor, probablemente alemán y sin duda alguna hispanófilo, elogia con razón, en libro reciente, la obra admirable llevada a cabo en Asia por la Compañía inglesa de Indias; pero "nadie creerá —agrega— que esa obra haya sido realizada por pacifistas. En Oriente, las cosas sucedieron como en Occidente: a la cabeza de la civilización europea bogaba el pirata. Desde el principio, cuando el comercio no andaba bien, los emisarios de la Compañía acostumbraban a resarcirse a costa de las carracas portuguesas. Los holandeses y los franceses hacían lo mismo. Y los portugueses, a su vez, pillaban la navegación indígena, cuya defensa estaba considerada como piratería".

Además de los peligros representados por el indio y el filibustero, otras dificultades rodeaban la vida de los colonos venezolanos durante los primeros siglos, porque el hambre y las epidemias castigaban dura y periódicamente la provincia. En 1580 un barco portugués llevó la viruela a nuestras costas, con tan horrible contagio que hubo por su causa más víctimas que las ocasionadas por la guerra en ochenta años: muchas poblaciones quedaron destruidas, y sucumbieron tribus enteras. Fray Pedro Simón asegura que ocho años después la viruela destruyó

aún más de la tercera parte de la población, entre indígenas y españoles. En 1594 sobrevino el hambre por haber destruido cierto gusano los sembrados. En 1614 hubo de nuevo viruela y hambre, y en 1617, sequía. Por 1627 fue tanta la penuria en Caracas que hasta los cabildantes más ricos decidieron irse a sus haciendas, no pudiendo soportar los gastos de la vida en la capital. En 1641 un terremoto mató allí doscientas o trescientas personas, y arruinó sobre todo las iglesias. En 1658 la peste acabó con mil personas, del bajo pueblo solamente. En 1662 los ratones y las langostas destruyeron las plantaciones. No hubo aquel año carne suficiente, y los indios robaron las pocas reses reunidas por la autoridad a fines de abasto. En 1667, viruelas, que arrasaron —dice Terrero— con los pocos vivientes que habían escapado a la peste. Por último, en 1687, una nueva y terrible epidemia de viruelas y de vómito negro hizo grandes estragos y se prolongó durante dieciséis meses. Guardémonos, sin embargo, de creer que estos sucesivos flagelos se debían a una falta de higiene y policía peculiar de las colonias españolas, pues lo mismo sucedía entonces en Europa: en la época de Cromwell la peste llegó a causar en Londres siete mil defunciones por semana. Aunque muy mejoradas las condiciones de la vida en Venezuela durante el siglo XVIII, volvieron las epidemias a azotar más de una vez a los colonos. Bajo el gobierno de Ricardos la peste diezmó en Caracas a los soldados europeos. En 1764 reaparecieron las viruelas, y en 1793 los buques de guerra llevaron a Puerto Cabello la peste, que se propagó a la capital.

II

LA FORMACION DE LA CAPITANIA

EN medio de la guerra contra el indio, y a pesar del ataque de los piratas, de la frecuente discordia intestina y de las epidemias, la colonia se desarrolla. El misionero completa la grande obra del soldado: reduce a los indígenas, habituándoles a la vida sedentaria y pacífica, y aporta a las nuevas fundaciones sus principales elementos de cultura y civilización. Con soldados y misioneros, férreos procónsules, muchos de ellos verdaderamente ilustres, modelan al correr de los años la sociedad colonial; organizan el mecanismo gubernativo; aplican las leyes y providencias desde el principio dictadas por el Rey; crean, en fin, nuestras nacionalidades, con los límites y características que ofrecerán en el momento de proclamar su independencia. En Venezuela tuvimos en el último cuarto del siglo xvi un gran constructor de imperio en la persona de D. Diego de Osorio. Este gobernador funda La Guaira, levanta hospitales, traza caminos romanos, reparte tierras, señala a las villas y ciudades sus ejidos, establece archivos y registros, alienta el comercio, puebla los indios y pide al Rey la supresión del trabajo forzado

de éstos, o sea del servicio personal que prestan al conquistador, y "forma a las repúblicas sus ordenanzas y sus reglas", según la frase del cronista. Político y letrado, Osorio encarga a un soldado poeta de escribir la gesta de la conquista, y ordena a sus capitanes reunan y consignen en manos aquél los altos hechos que cada cual haya cumplido. Más tarde, Guayana tendrá sucesivamente tres gobernadores eminentes, cuyos nombres bastan para destruir la inepta conseja de que España sólo enviaba a Tierra Firme funcionarios medianos o incapaces: Centurión, Inciarte, Marmión, pueden figurar entre los mejores agentes que metrópoli alguna haya comisionado para administrar sus colonias.

La vida nace temprano en aquella sociedad primitiva. En el seno de las villas recién fundadas surgen ardientes banderías, que se baten por el mando. Verdaderos partidos disputan sobre la elección de regidores y de alcaldes, y el eco de sus luchas llegará, no muy tarde, hasta la lejana Audiencia. En Mérida empieza la querella de Gavirias y Cerradas, que agitará durante siglos la ciudad. Ocumare se despuebla por la discordia de sus vecinos, como, a la partida de García de Paredes, despuéblase Trujillo. cuyos ambulantes moradores presentaban al cabo de varias peregrinaciones, dice Oviedo y Baños, "descoloridos y hipatos, más forma de hospital que de república" La segunda ciudad del Espíritu Santo se arruinó completamente por haberse dividido sus vecinos en bandos al dejarlos su fundador González de Silva. A fines del siglo XVI vemos a Caracas partida en fracciones —una por Rojas, otra contra él—, con la particularidad de que en el fondo esta lucha versaba sobre un punto de verdadero interés político, como era saber si el gobernador tenía facultad de privar de sus prerrogativas a los regidores.

Mas al amparo de sus fundadores la ciudad progresa, anexa tierras, forma paulatinamente la provincia. Afirmanse las instituciones coloniales; cada villa tiene su milicia. Se esbozan confederaciones ocasionales. Poco a poco, en virtud de la geografía y de la economía, nace cierto sentimiento de solidaridad, que tardará en penetrar en la conciencia pública, sin ser por ello menos real y efectivo. Hecho grave, sin embargo: las ciudades inician su rivalidad, que se extenderá a las provincias. Coro no perdona a Caracas que la haya despojado de su rango metropolitano; y contra Caracas intriga Cumaná, anexando a su jurisdicción territorios conquistados a esfuerzos de caraqueños. Cuando Bravo de Molina acepta del gobernador Collado el empleo de teniente general sus soldados protestan, por considerar como indigno del justicia mayor de Mérida someterse al gobernador de otra provincia, mientras podría hacer la guerra bajo su propia bandera, en calidad de auxiliar y no de subordinado. Era tal la autonomía con que en aquella época manejaban los cabildos sus asuntos particulares, que, al decidirse la expedición decisiva contra las tierras de Caracas, el gobernador Bernáldez y el mariscal Gutiérrez de la Peña hubieron de visitar personalmente todas las ciudades en solicitud de contingentes armados, visita que no produjo resultado alguno por inspirar a todos entonces mucho miedo la guerra proyectada. Andando el tiempo, hacia 1664, Cumaná permanecerá sorda a los clamores del gobernador de Caracas, que pedía a los orientales viniesen en ayuda de su desolada provincia con el excedente de la cosecha de maíz. Más tarde todavía, los habitantes de determinada provincia querrán a veces que se nombre a europeos para ejercer algunos empleos, de preferencia a funcionarios criollos de otra

jurisdicción venezolana: ejemplo de ese particular estado de espíritu diólo Barcelona, en cierta ocasión, pidiendo que se le enviase un oficial español como comandante de armas, a fin de evitar que lo fuese un cumanés.

Desde 1560 las ciudades venezolanas, separadas por inmensas distancias y cada una de las cuales había surgido al azar de la conquista y por voluntad de atrevidos capitanes, manifiestan tendencia a aglomerarse y establecer entre ellas lazos, en vista de mejorar la gestión de los negocios públicos, sobre todo en punto a defensa militar, y para recabar de la Corona ciertas medidas políticas y administrativas aplicables al conjunto del territorio. El conquistador Sancho Briceño fue diputado a Madrid para exponer al Rey los *desiderata* de aquellas provincias. Para mandar la expedición contra el negro Miguel se nombra a Losada "general de los cabildos", y para reducir a los charagatos acuérdanse los ayuntamientos de Caracas y Caraballeda, aprontando contingentes que van a la batalla bajo sus cabos autónomos. Algunas villas y ciudades forman liga, como hemos visto, contra el peligro común representado por Lope de Aguirre, quien, después de asesinar a su jefe Ursúa en el Marañón, invadía Venezuela a la cabeza de terribles bandoleros: tropas de Coro, El Tocuyo, Trujillo y Mérida cercaron al invasor en Nueva Segovia. Cuando en 1589 el gobernador Osorio invitó a los principales ayuntamientos a mandar a Caracas representantes que nombrasen un procurador encargado de proponer al Rey su plan de reformas administrativas, se reunió un verdadero congreso de diputados de Valencia, Coro, El Tocuyo, Barquisimeto, Carora, Maracaibo, San Sebastián de los Reyes y Caracas, y dicho congreso designó para pasar a España a D. Simón de Bolívar,

antepasado directo y homónimo del Libertador. Puede decirse que con la misión de aquel primer Bolívar hicieron los venezolanos el primer esfuerzo en el camino de la autonomía, porque, además de las reformas citadas y de varias mercedes, reclamaron entonces ciertas prerrogativas para su gobernador, con el visible propósito de sustraerle a la estrecha sujeción en que le tenía la Audiencia de Santo Domingo.

En Oriente habíase creado un gobierno separado con las provincias de Nueva Andalucía, Nueva Barcelona y Guayana, el cual dependía en lo civil de la autoridad granadina, y en materia judicial, de la Audiencia de Santo Domingo o de la de Santa Fe.

En el curso del siglo XVII todas las provincias venezolanas, que obedecían a una o a otra de aquellas jurisdicciones, continuaban marcando su carácter, por decir así, nacional, derivado de las condiciones arriba mencionadas, de las necesidades de la común defensa y, en cuanto a política, de las reales ordenanzas.

Un decreto de Felipe V separa a Venezuela o Caracas de la Nueva Granada, en 1731, dejándola subordinada en lo judicial a Santo Domingo. Reincorporada al Virreinato en agosto de 1739, vuelve el Rey a disgregarla el 12 de febrero de 1742, en vista de las representaciones que se le hicieron sobre las dificultades políticas y administrativas que ofrecía la ejecución de su reciente cédula. Extendió entonces la Corona la jurisdicción del gobernador de Caracas a Maracaibo, Cumaná, Margarita, Trinidad y Guayana, en lo relativo a la lucha contra el tráfico ilícito; mas Zuloaga objetó la real orden con razones de índole material o política, dejándola sin aplicación. Hasta 1678 había dependido Maracaibo de la gobernación de Venezuela, cuando sus

vecinos pidieron se les agregase a la de Mérida, que pertenecía al Nuevo Reino, no tardando aquella ciudad en convertirse, por su importancia, en capital de la provincia. La isla de Margarita obedeció también a Caracas en los primeros tiempos, por estar del lado de acá de Maracapana, límite de aquélla por Oriente. En 1764 se separó a Guayana de Cumaná y se le nombró un gobernador propio, que fue a prestar juramento a Caracas, aun cuando iba a quedar bajo la jurisdicción de Bogotá.

Vino por último la Real Cédula de 8 de septiembre de 1777, carta de constitución de la Capitanía General de las Provincias de Venezuela, por la cual se sujetaron a Caracas en lo gubernativo y militar las provincias de Maracaibo, Cumaná, Guayana, Margarita y Trinidad, tenidas hasta entonces por entidades independientes unas de otras, y se estableció en la capital una Intendencia común de la Real Hacienda. El título de capitán general era puramente militar, y lo usaban todos los virreyes y gobernadores, en su calidad de comandantes de las armas reales. Túvolo, naturalmente, desde principios del siglo XVI el gobernador de la provincia de Venezuela, lo cual ha dado lugar a divergencia de opiniones sobre la fecha efectiva del establecimiento de la Capitanía General. En realidad, la entidad política conocida bajo ese nombre, y que comprendía la mayor parte de territorios que forman nuestra República, data de 1777: a partir de aquel momento no hubo sino un capitán general, residente en Caracas.

La organización del Estado se completa, en junio de 1786, con la creación de la Real Audiencia de Caracas. Pero el proceso de la formación política continúa desenvolviéndose normalmente: en el citado año erígese a Barinas en provincia, y Trujillo



*PHILIPPES III. Roy Catholique des Espagnes
et Pere de la Royne Regente Mere du Roy*

*LOVYS XIV.
B. Moncornet scul.*

pasa de la jurisdicción de Caracas a la de Maracaibo. Constituida ya la entidad que puede llamarse nacional venezolana, la administración española tiende a descentralizar en lo necesario y posible, y así podremos ver que, al iniciarse los disturbios revolucionarios, habrá en las provincias arriba citadas, salvo en la de Trinidad, ya ocupada por los ingleses, gobernadores civiles con amplia autonomía, que sólo dependían de Caracas en asuntos militares.

III

LAS CASTAS COLONIALES

ENTRE las diversas consideraciones que le indujeron a desmembrar el virreinato de Nueva Granada tomó en cuenta Felipe V "el caviloso genio de los naturales de la provincia de Venezuela, quienes si se debilitara la autoridad y eficacia de su gobernador sentiríanse estimulados a fomentar con más libertad sus quimeras, con perjuicio de la tranquilidad pública y de las conveniencias de la Real Hacienda". Este carácter peculiar de los venezolanos será siempre motivo de inquietudes y desazones para la Madre Patria y los españoles de España no perderán ocasión de criticarlo. En 1777 Moreno comprobaba el "genio litigioso" de los maracaiberos, "gente viciada en el contrabando" y sus "disputas con los gobernadores". Un siglo apenas había corrido después que Felipe V formara su juicio, cuando el historiador peninsular Torrente escribió: "La capital de las provincias de Venezuela ha sido la fragua principal de la insurrección americana. Su clima vivificador ha producido los hombres más políticos y osados, los más emprendedores y esforzados, los más viciosos e intrigantes y los más distinguidos por

el precoz desarrollo de sus facultades intelectuales. La viveza de estos naturales compete con su voluptuosidad, el genio con la travesura, el disimulo con la astucia, el vigor de su pluma con la precisión de sus conceptos, los estímulos de gloria con la ambición de mando y la sagacidad con la malicia. Con tales elementos no es de extrañar que este país haya sido el más marcado en los anales de la revolución moderna". Créose, pues, durante la colonia un tipo venezolano que a los ojos de las autoridades reales y de los observadores perspicaces ofrecía características sin duda análogas, mas no idénticas, a las de los otros pueblos del Imperio español. E importa, en consecuencia, estudiar nuestros orígenes, seguir la evolución o proceso que condujo a la formación de aquel tipo y presentar, como elemento primordial del conocimiento del antiguo régimen en Venezuela, la verdadera estructura de la sociedad colonial.

A la conquista de nuestro país, según Pedro M. Arcaya, no concurrió ningún individuo de la aristocracia peninsular, pero sí, junto con hombres del estado llano, una multitud de hidalgos. Dichos hidalgos, de sangre o de creación real por servicios en América, formaron la base de lo que se llamó la nobleza colonial. Con Ampíes llegaron, en 1527, sesenta hombres; y al año siguiente llevó Alfínger cuatrocientos. A Spira y Federman acompañaron, en 1533, doscientos andaluces y doscientos canarios; y el último transportó poco después ochenta individuos más de la Española. Con Pedro Malaver de Silva, que capituló la conquista del Dorado en 1578, vinieron seiscientos extremeños y manchegos, "escogidos, muchos de gente noble y principal", la mayor parte de los cuales, por las peripecias de aquella expedición, permanecieron en Margarita, en Valencia y otras ciudades.

Por la misma época llegó a Oriente Diego Fernández de Zerpa con cuatrocientos castellanos, cuya mitad pereció al lado de su jefe en la primera batalla contra los indios. Tales fueron los primeros contingentes de colonos en Venezuela. Muchos de los organizadores de las expediciones eran gente pudiente y no simples aventureros, gente que con la esperanza de lucro y gloria no vacilaba en abandonar posiciones holgadas en la Península, arriesgando sus capitales en la empresa. Los Pinzones auxiliaron grandemente a Colón con sus haberes personales. Cristóbal Guerra hizo todos los gastos del armamento que con Per Alonso Niño condujo a nuestras costas. Ojeda obtuvo dinero de sus amigos para equipar la expedición de 1502. Los hermanos Bravo Hidalgo, naturales de Alcántara, prestaron a Silva mil ducados para la conquista del Dorado. Zerpa era vecino rico de Cartagena y gastó toda su fortuna en la guerra de Venezuela.

Desde el principio muchos españoles tuvieron hijos con indias, algunas de raza de caciques o príncipes, cuya nobleza reconoció Carlos V extendiéndola a sus esposos. El mestizo Fajardo, uno de los héroes de la Conquista, el primero, cronológicamente, de los grandes hombre de guerra venezolanos, tuvo por aquella razón todos los derechos del español noble. Pocas mujeres trajeron consigo de España los conquistadores. Malaver de Silva llevó cierto número, como también algunos niños, que se establecieron en Oriente, en Valencia, El Tocuyo y Barquisimeto; y en su segunda expedición este capitán iba acompañado de sus dos hijas, que con él murieron a manos de los caribes. Con Zerpa arribó "alguna chusma de mujeres y muchachos", en todo ciento cincuenta, que pararon en Cumaná.

Los nobles no formaron en los primeros tiempos clase política que tuviese privilegios legales, y se cita el caso de haberse negado el cabildo de Caracas, en 1692, a cumplir las reales cédulas que ordenaban se guardasen ciertas exenciones al cubano D. Manuel de Urbina en razón de su calidad. El dictado de *Don* dado por Felipe II al heroico Fajardo pudo considerarse entonces como honor insigne, mas a principios del siglo XVIII Oviedo y Baños lo tenía por "circunstancia abatida". Sin embargo, al finalizar dicha centuria existía en Caracas y en las demás ciudades de Venezuela proporcionalmente un grupo de nobles, o si se quiere de grandes burgueses, puesto que no pasaban de seis los títulos de nobleza, que hacía figura de aristocracia y reclamaba prerrogativas que no tenían los demás habitantes. Algunas familias llegadas después de la pacificación fueron engrosando las filas de la oligarquía, sin que faltasen disputas entre los descendientes de los conquistadores y los nuevos colonos. A decir verdad, esta rivalidad original no impidió que la alta clase de la colonia ofreciese al fin notable cohesión, a pesar de algunos incidentes de carácter puramente personal. No había grandes fortunas, el mayorazgo era excepcional y la mayor parte de los notables sacaba sus rentas de propiedades rurales situadas a inmediación de las villas y ciudades. Gozaron los conquistadores de extensas encomiendas o repartimientos de indios; pero estas instituciones disminuyeron rápidamente de importancia y casi nunca fueron hereditarias, desapareciendo las últimas durante el reinado de Carlos III. Dióse a los privilegiados el admirable nombre de mantuanos a causa de la pretensión jamás reconocida por las leyes que tenían sus mujeres de usar, sólo ellas, cierta especie de manto. El venezolanismo mantuano es insustituible

y califica una idea de grande importancia en nuestras contiendas políticas. A tal grupo va dirigido el célebre apóstrofe del libelista José Domingo Díaz, venezolano realista de la época de la Independencia: "Vosotros gozábais para con el populacho de una consideración tan elevada cual jamás la tuvieron los grandes de España en la capital del reino".

Al mismo tiempo se formaba una clase de blancos del estado llano que absorbió paulatinamente muchas gentes procedentes de España, así como gran cantidad de mestizos, en los cuales prevalecía la sangre europea. Sin duda los españoles recién llegados miraban de reojo a los naturales mezclados, cualquiera que fuese su categoría; pero tampoco estas preocupaciones impidieron que a la larga unos y otros quedasen incluidos bajo la denominación de blancos en una clase media, entre la nobleza y los individuos de color, indios e indudables mestizos, mulatos, zambos y negros libres o esclavos.

La verdadera lucha se estableció, por motivos de raza y como se verá más adelante, entre los nobles y blancos del estado llano de una parte, y de la otra la abigarrada multitud que constituía las demás castas. Así lo demuestran, por ejemplo, los pleitos de milicias. Sin embargo, los canarios formaban bando aparte. Estos, los vizcaínos y los catalanes que ejercían el comercio "pugnaron siempre con los nobles cosecheros", dice Laureano Vallenilla Lanz. En efecto, los criollos poseían los fundos urbanos y rurales. El padre del futuro Precursor de la Independencia, isleño, fue acusado por Ponte y Tovar de ser mulato, aun cuando después se pretendió que éstos no habían lanzado tal epíteto. El proceso que entonces tuvo lugar produjo perdurables conse-

cuencias y explicará, cuarenta años más tarde, la querella de Miranda y los optimates.

Especial mención reclama, por el papel que debía representar en las guerras de la Independencia y en las que siguieron ensangrentando nuestro territorio bajo el régimen republicano, la población híbrida que se formó en las pampas venezolanas. Baralt indicaba ya que las costumbres y carácter de los llaneros "eran y son aún tártaros y árabes más que americanos y europeos" Aman, dice, el botín y la guerra "como las razas nómades del Africa" y "como todos los pueblos pastores son aficionados a la música y al canto, e improvisan con mucha gracia y facilidad sus jácaras y romances". A decir verdad, los llaneros no son nómades en el preciso sentido de este vocablo que se aplica a pueblos que andan vagando sin domicilio fijo; y no basta el hecho de que nuestros hatos no estén acotados, lo cual permite la confusión provisional de los ganados en determinados lugares, para imaginar que el llanero va siguiendo su rebaño según las necesidades del pasto y del agua, como hacen, por ejemplo, ciertas tribus goajiras. El llanero tiene domicilio, que es la casa del hato o dehesa. Los montañeses suizos conducen sus vacas a pastar a alturas diversas, de acuerdo con la estación, sin que por ello puedan ser equiparados a un pueblo asiático trashumante. Asimismo en Venezuela gran parte del ganado de los hatos guariqueños se traslada al terminar las lluvias a las tierras bajas y alagadizas del Portuguesa, y en el Apure inferior puede observarse, por diciembre o enero, la llegada de reses provenientes del Guárico o de las llanuras vecinas a la cordillera occidental. La emigración temporal y periódica de nuestro peón montado, de un hato a otro, para buscar trabajo en época de

herradero, tampoco caracteriza un pueblo nómade, como no lo hace el hábito que tienen gran número de obreros europeos de pasar el Atlántico para ir a laborar durante algunos meses en países americanos y regresar a sus casas con el producto de la fatiga. Bajo estas reservas debe admitirse que el llanero tiene mucho de los pueblos pastores, como lo demuestra en sus ciertos estudios Vallenilla Lanz, quien presenta conclusiones muy interesantes, basadas en la observación directa y en la historia del hombre a caballo de nuestras sabanas pobladas de rebaños.

Dada la constitución social de la colonia, no puede hablarse de tiranía específicamente española o de falta de "tiranía activa" de parte de los americanos. La reacción contra el régimen republicano que en 1812 halló calurosa acogida en las clases bajas, en lo que se llama pueblo, vino, sobre todo, del temor que éste abrigaba de ver consolidada y aun reforzada la dominación de las altas clases con la desaparición del elemento ponderador representado por los funcionarios europeos. El historiador y sociólogo que acabamos de citar, que ha estudiado detenidamente la sociedad colonial, no halla en ninguna parte "datos sobre el decantado despotismo de los empleados peninsulares en Venezuela". Los verdaderos opresores de las castas inferiores, dícenos, no eran los efímeros agentes metropolitanos, sino los oligarcas criollos, que, ejerciendo todas las funciones públicas, gobernaban y tiranizaban. En efecto: hechos y testimonios conformes demuestran que, muy al contrario de cuanto repiten algunos escritores, la situación de los recién llegados de España a las colonias era poco envidiable y que, en vez de explotar y maltratar a los criollos, los peninsulares sufrían del increíble desdén de aquéllos, que se negaban hasta a darles

sus hijas en matrimonio. Ya a principios del siglo XVII los criollos de Caracas habían acaparado los diversos cargos concejiles, de tal manera, que el gobernador Alquiza hubo de exhumar y aplicar viejos textos legales que prohibían la acumulación de empleos. La escasez de población y la falta de elementos expertos en el manejo de los negocios públicos concentró fatalmente, como veremos, el poder municipal en unas cuantas familias, y éste degeneró en nepotismo. La real cédula de 15 de junio de 1770 ordenó que los europeos alternasen con los criollos en la alcaldía, y ensayó, sin buen éxito, poner término a la ojeriza de los segundos hacia los primeros. El 12 de septiembre siguiente el Rey se vio en la necesidad de declarar que los españoles de España tenían tanto derecho como los criollos a ocupar puestos públicos en Venezuela. Debe, pues, tenerse por fábula aquello de que los naturales estaban en nuestro país excluidos de los empleos importantes.

Según Depons, apenas cien españoles iban anualmente a Venezuela, en cuyo número, con toda probabilidad, se incluían los empleados. Aquel observador comprobó que para los criollos "todo lo que no es empleo o sueldo del Rey parece desprovisto de atractivos". En realidad, los cargos principales en el gobierno de la ciudad eran accesibles a los venezolanos, y éstos los ocupaban, con excepción de los de capitán general, gobernador y teniente del Rey, es decir, comandante efectivo de la fuerza militar. Y entiéndase que no faltaron americanos que ejercieron también estos altos puestos en las colonias. Criollos eran, como se ha visto, los alcaldes y regidores que balanceaban el poder del representante de la Corona; criollos la mayor parte de los que manejaban la hacienda y fabricaban las leyes,

y criollos mandaban las milicias defensoras de la autoridad real. La jerarquía eclesiástica abría a los venezolanos todas sus posibilidades, dentro, naturalmente, de lo que pudiera llamarse con cierta irreverencia la capacidad de producción del país en elementos apreciables para el clero. Para 1670, "las altas dignidades eclesiásticas empezaban a caer en manos de criollos". Un prelado de renombre, fray Gaspar de Villarroel, arzobispo de Charcas, era venezolano (o quiteño), como lo fueron Sobremonte y José Martínez de Porras, obispos de Puerto Rico; Mixares de Solórzano y Jaimes Pastrana, obispos de Santa Marta, y aquel ilustre D. Juan de Arrechedera, que llegó a obispo y capitán general de Filipinas. Don Diego de Baños y Sotomayor, obispo de Caracas, y fray Cándido de Torrijos, segundo obispo de Mérida, nacieron en Bogotá. Monseñor Ibarra, primer arzobispo de Caracas, nació en Guacara, y por cierto que su elección no fue generalmente aprobada "por su parentesco con mucha parte del engreído criollismo", como escribe el anónimo continuador del cronista Terrero. Vale decir que el pueblo bajo y las gentes del estado llano habrían preferido que se diese entonces la mitra a un español europeo.

Un inglés —que era tal vez el español Blanco White—, al publicar en Londres la Constitución venezolana de 1811, señaló una estadística de los personajes que habían ocupado los altos empleos en las colonias españolas, de la Conquista a la Independencia. Según tales datos, hubo: 702 obispos y arzobispos españoles europeos por 278 americanos; 166 virreyes españoles por 4 americanos; 588 capitanes generales españoles por 14 americanos. No garantizamos la estadística, que Baralt acoge; pero tomándola de pretexto, nos preguntamos cuántos no ingle-

ses de Inglaterra han ejercido y ejercen hoy las funciones de gobernadores de los dominios autónomos y de las colonias de Su Majestad Británica.*

Para 1758, al terminar una de las tantas guerras anglo-francesas, el coronel Jorge Washington era el único oficial superior nacido en América que sirviese en las tropas metropolitanas, pues los ingleses no concebían cómo pudiera darse mando alguno a un americano. Los criollos de las colonias españolas, en cambio, enviaban a sus hijos a servir en el ejército peninsular, y los cargos de confianza que desempeñó Miranda en Cuba, la Florida y las Bahamas durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, demuestran, entre otros ejemplos, que el gobierno español no ponía obstáculos, en principio, al ascenso normal de los oficiales ultramarinos en la jerarquía militar. El general San Martín hizo su carrera en España y su caso no es único.

Fue el colonial un régimen de castas superpuestas engendrado por realidades sociales y no por principios políticos abstractos. Dicho régimen no resultaba en la práctica más tiránico que los existentes para la época en España y en el resto de Europa; y en todo caso preservó de la anarquía a nuestro Continente durante tres siglos. "El reposo, dice Humboldt, ha sido el resultado del hábito de la preponderancia de algunas familias poderosas y sobre todo del equilibrio que se establece entre fuerzas enemigas". La diferencia entre el sistema colonial inglés en América y el español, en punto a política social, consistía en que las colectividades anglosajonas que formaron los Estados

* Escrito en 1930.

Unidos se componían de una clase uniforme de blancos que tenían todos los derechos y de cierto número de negros que, esclavos, no tenían ningunos; mientras que en las colonias españolas el cruce de razas produjo aquellas castas que no podían mantenerse en paz sino por superposición. Sin que sea permitido equiparar la India a las posesiones de España en América, puede, sin embargo, hallarse alguna analogía entre el método empleado hoy por los ingleses para gobernar la primera y el sistema español. La casta dominadora de los colonos y los funcionarios británicos han asegurado hasta ahora la tranquilidad en el gran imperio asiático, como los criollos o blancos y los funcionarios peninsulares la aseguraban en América.

Se ha visto que no repugnaba al español enlazarse con indias o negras, y de allí que durante la colonia se creara el tipo o la variedad de tipos humanos que Bolívar no acertaba a clasificar. "El gobierno español, dice Baralt, por muchas reales cédulas declaró a los hombres de color libres con derechos a los mismos honores y empleos que sus otros vasallos. Una de 1588 les admitía en la clerecía y mandaba que no fuese impedimento el color de las mujeres para entrar de religiosas. La igualdad, en fin, de obligaciones y derechos en todas las clases de hombres libres, nacidos legítimamente, fue principio reconocido y proclamado por la política de España y defendida por sus mejores publicistas." Pero este criterio muy español-antiguo vino a alterarse profundamente durante el reinado de los últimos Austrias y bajo los Borbones, y así pudieron verse, a partir de 1621, reales órdenes que excluían de los empleos públicos y del servicio en las tropas regulares a las gentes de color. Debe notarse que fue sólo en 1776 cuando una pragmática regia prohibió en

Venezuela los matrimonios entre blancos y personas de otra raza. Prohibición idéntica regía en muchas otras colonias europeas. Colbert admitió, como señalada concesión, el matrimonio de franceses con indígenas de Norteamérica; y el rey de Dinamarca esperó hasta 1830 para conceder a sus súbditos blancos de las Antillas la libertad de casarse con negras, y a los negros la facultad de ejercer artes y oficios. Los sabios modernos pretenden que existen leyes de *eugenesia*, según las cuales deben evitarse los cruzamientos de aquel género, por resultar bastardos los mestizos y mulatos. Después de un eclipse parcial refulge de nuevo el astro de Gobineau. El vocablo raza en su acepción estricta continúa desacreditado, pero todo el mundo está más o menos de acuerdo para decir que blancos, amarillos y negros son distintos unos de otros y que el medio no basta para destruir sus diferencias.

En la práctica, los anglosajones y los germanos rehusan cruzarse con las llamadas razas inferiores. La desigualdad a este respecto está lejos de extinguirse en nuestro mundo contemporáneo, siendo particularmente marcada en las comunidades británicas que se proclaman modelos de democracia y de progreso social.

Nada de extraordinario ofrece, en la colonia venezolana, la competencia de razas recrudescida a fines del siglo XVIII y principios del XIX, cuando el mayor contacto con el extranjero, las revoluciones de Norteamérica y de Francia y las intrigas de los vecinos ingleses quebrantaron nuestro edificio social, despertando anhelos de cambio para unos y de mejora para otros. Revelóse el conflicto en toda su gravedad con ocasión de la conocida cédula de "gracias al sacar", que permitió a los pardos obtener

dispensa de su condición mediante el pago al fisco de sumas que variaban entre setecientos y mil cuatrocientos reales. Cuando, con fecha 10 de febrero de 1795, dictó el Rey esta que pudiera llamarse carta de igualdad para sus súbditos de color, paso considerable hacia la nivelación de las clases y verdadero acto de liberación política, los criollos de Caracas, y en su nombre el Ayuntamiento, del cual formaban parte algunos de los principales de ellos, elevaron hasta el trono protesta razonada contra la medida que consideraban nefasta para la paz de la colonia. Los Toros, López Méndez, Palacios y Rivas juzgaban absurdo y peligroso que los pardos quedasen habilitados, "entre otras cosas, para los oficios de república propios de personas blancas, y vendrían a ocuparlos sin impedimento mezclándose e igualándose con los blancos y gentes principales y de mayor consideración y de mayor distinción en la república, en cuyo caso, por no sufrir este sonrojo, no habría quien quisiese servir los oficios públicos". Es imposible, decían los cabildantes, que los blancos consientan en admitir a su lado "por individuo de su clase para alternar con él a un mulato descendiente de sus propios esclavos o de los de sus padres y mayores". Los notables apoyaban sus preocupaciones de casta en el argumento muy serio del peligro que correría la tranquilidad de la provincia si los pardos viniesen a pretender tomar parte en la vida política y dominarla por su número. ¿Cómo era posible que la Corona confiara la seguridad nacional y la defensa de sus derechos "a unos hombres que, lejos de mirar hacia España como al centro de su felicidad, han de fijar su vista en los oscuros habitantes del Africa de donde proceden, para protegerlos y sublevarlos contra los españoles de quienes dicen que han recibido mil agravios"? En verdad, los

cabildantes de Caracas parecían contemplar ampliamente desde entonces el formidable problema de la guerra social que plantearía muy luego la Declaración de Independencia. No conocemos documento revelador de un estado de ánimo y de situación más amenazadores que esta especie de acta de acusación formulada por los criollos contra las clases inferiores de Venezuela.

La manía igualitaria tenía, por otra parte, funestas consecuencias para la economía de la colonia: por uno u otro motivo, nadie quería trabajar en la agricultura "y todos quieren ser caballeros en la América, ocupar empleos y vivir de las rentas públicas o a costa de la sociedad, sin contribuir a ella". Los criollos, claro está, no se oponían a que los pardos que prestasen verdaderos servicios a la comunidad fuesen individualmente "elevados a la clase de blancos"; aquéllos combatían sólo la colectiva y universal "dispensación de calidades", franquizada por el soberano y peligrosa para el país. En lugar de fomentar la pereza y altivez crecientes de los pardos, debía el gobierno alejarlos de las ciudades, forzándoles a cultivar las tierras, y transformar las milicias reforzando las tropas regulares. Esta ocasión podría aprovecharse para reorganizar la hacienda, enriquecida por el desarrollo de la agricultura.

Denunciaban los criollos al Rey la conducta de sus agentes peninsulares, que llegaban a la colonia "prevenidos contra el carácter de los naturales y vecinos blancos y preocupados de falsas y contrarias ideas de lo que en realidad era el país". Ciertos ministros de la Real Audiencia protegían escandalosamente a los pardos "y a toda la gente vil", con perjuicio de las antiguas familias, y propagaban ideas y máximas perniciosas para la seguridad pública y la buena administración, habiéndose

convertido Caracas desde el establecimiento del nombrado tribunal "en semillero de disgustos, pesares y sobresaltos". Los notables pedían el alejamiento de estos españoles europeos igualitarios e innovadores, con lo cual y la revocación de la cédula volvería la tranquilidad y ganaría el servicio de Su Majestad.

Vivían así los nobles caraqueños en lucha abierta contra el liberalismo de los agentes de la Corona. Es improbable que la actitud de los últimos obedeciese a una política determinada a sostener al pueblo frente a los grandes señores; pero no puede negarse que en muchos casos ocurrió como si tal política existiese y que las mercedes del monarca, sobre todo en punto a concesiones de limpieza de sangre, convertían a los funcionarios metropolitanos en protectores naturales de los humildes. Así vemos al gobernador Agüero obligar al mantuano D. Marcos de Rivas a dar satisfacción a un oficial mulato a quien, valiéndose de sus funciones de alcalde y con violación del fuero, había agraviado y prendido. En Oriente el oidor Chávez enjuicia y acusa ante el Rey a D. Diego de Alcalá, tiránico regidor de indios.

Bastante hemos reído de las dispensas de sangre por las cuales el soberano, mediante ofrendas o servicios, cambiaba un pardo en blanco. Mas debe tenerse en cuenta que, por idénticos procedimientos y razones, papas y reyes de todos los tiempos transmutan en noble un plebeyo ilustre o enriquecido. Por lo demás —y ello atestigua la imparcialidad del rey español—, favores y distinciones se acordaban en general a personas que no habían salido nunca de América, en la misma forma empleada para con los europeos. Y es lo cierto que la mayor parte de las medidas que después se enrostraron como errores o faltas

a la administración colonial fueron tomadas contra el espíritu y la letra de las leyes, contra los usos y costumbres, a instigación muchas veces de los llamados nobles. Los famosos procesos por el uso del uniforme o del paraguas, que tanto se ha citado para simbolizar neciamente las instituciones españolas, no eran obra de los gobernantes peninsulares, sino de los americanos vanidosos y litigiosos. La Corona acogía siempre el dictamen de los jueces europeos o de sus propios consejeros, quienes juzgaban de estos negocios imparcialmente, tomando en general decisiones jurídicas o providencias políticas de admirable sensatez. Y recordemos, además, con Tulio Febres Cordero, que durante el siglo XVII el quitasol era insignia de dignidad y potestad en los dominios españoles, como lo es aún en ciertos países asiáticos. En aquella época se prohibía en Berna, bajo penas severas, llevar una especie particular de calzado con punta arremangada. Examinadas bajo este aspecto algunas interdicciones del tiempo colonial, parecen menos risibles, y, acaso, tan naturales como sería en nuestros días la de pasearse por las calles bajo palio.

El establecimiento de la Audiencia en Caracas, si bien multiplicó los pleitos, dado el carácter de los naturales, facilitó a los pobres e individuos de las clases inferiores el medio de obtener justicia. De allí que aquel tribunal no gozase de la simpatía de los mantuanos. "Entre jueces, abogados, procuradores, escribanos, notarios, alguaciles y otros empleados judiciales —escribe Depons—, hay en Caracas seiscientas personas, de las cuales cuatrocientas, por lo menos, están casadas; esto hace más de dos mil personas que viven de las lágrimas y del sudor de los desdichados litigantes". Pero los mantuanos atacaban la

Audiencia a la vez porque servía de valla a su despotismo en materia legal y porque cercenaba en materia política las atribuciones del Ayuntamiento, del cual eran ellos dueños absolutos. También en otras ciudades venezolanas se precisaba a fines del siglo XVIII la lucha contra las oligarquías que de antaño guardaban en sus manos el poder municipal. Sin olvidar muchos datos anteriormente recogidos por otros eruditos conocedores del período colonial, mencionamos en particular el curioso documento publicado por Febres Cordero, que arroja mucha luz sobre la existencia de aquellas oligarquías y en el cual vemos establecido, por escribano público, el estrecho parentesco que unía entre sí a todos o la mayor parte de los notables de Mérida que, de 1643 a 1662, gobernaron la ciudad. Los Gaviria, Dávila y Rojas, Ruiz Valero, Trejo de la Parra, Zurbarán, Mesa, Reinoso y Otálora, Santa María, De Rivas, De la Peña, Paredes, Bohórquez, Uzcátegui, Osorio, todos más o menos parientes unos de otros, formaban el cabildo y alternaban en la alcaldía y demás oficios de justicia. El resultado de la pugna, y puesto que en la mayor parte de los casos la Corona daba razón a los que protestaban contra los privilegiados, fue la paulatina invasión de los empleos públicos por sujetos incapaces o desacreditados. Guevara y Vasconcelos confesaba en 1801 que la administración de la justicia estaba mal organizada en el interior de la provincia "porque se conferían las tenencias de las ciudades y pueblos a hombres de poco concepto o de ninguno, origen de los disgustos de los pueblos".

Sería pueril calificar de democráticas las instituciones españolas. El término democracia, entendido a la moderna, es inadaptable a la sociedad colonial, compuesta de castas y fundada

en la desigualdad. En rigor, la existencia de castas no es incompatible con la democracia clásica: de los ochenta o noventa mil habitantes que contaba Atenas en su apogeo, sólo unos diez mil eran ciudadanos, no teniendo el resto, por diversas causas, sino poquísimos derechos políticos, o ningunos.

Los agentes del rey de España en Venezuela no eran demócratas, pero sí demófilos, en general, y su acción cooperaba eficazmente a la inevitable transformación del organismo social.

IV

LA SUERTE DE LOS INDIOS Y DE LOS NEGROS

VEAMOS si es merecida la acusación de haber destruido sistemáticamente a los indios que, fundándose en los piadosos libelos del P. Las Casas y tal vez en la obra del italiano Benzoni, así como en literatura posterior de fuente sospechosa, se ha levantado contra España. Y veamos también si el régimen de castas, si la estructura especial de la sociedad colonial que hemos descrito, determinó necesariamente en Venezuela la tiranía de las clases altas sobre las bajas, en proporción mayor de la observada entonces en las demás colonias europeas y de la que puede observarse hoy en algunas de éstas y, quizá, en ciertos países independientes.

El primer hecho que salta a la vista es el gran número de indios puros que existe en muchas repúblicas hispanoamericanas, y la cantidad de sangre indígena que entra en la composición de la casta de los mestizos que en éstas forma la base general de la población. Sin hablar de los aborígenes, que viven en las florestas inexploradas, y cuyos antepasados escaparon al contacto de los conquistadores, puede decirse que no se extinguirán

pronto los guaraníes, aymarás y quechuas, ni los indios de Centroamérica y México. Humboldt verificaba que en los cincuenta años anteriores a su viaje al Continente, en plena dominación española, la raza india había aumentado considerablemente en el nombrado virreinato y contaba dos millones de individuos pura sangre; la población autóctona era entonces, según el sabio alemán, más densa que a la llegada de Cortés.

En Venezuela, al cabo de largos años de guerra y aun mientras ésta duraba, después de las inevitables e innegables crueldades de los primeros tiempos, perpetradas en época de universal inhumanidad y con salvajes feroces y valientes que se defendieron por todos los medios contra el invasor, vencedores y vencidos concluyeron por acomodarse a vivir juntos. Establecida definitivamente la dominación del español, gran masa de indios—dice el doctor Arcaya, especialista en la materia—entró a habitar las ciudades levantadas por los blancos o, bajo el régimen de la encomienda o de las misiones, formó pueblos y aldeas, dejando en todas partes numerosa descendencia. Tal sucedió no sólo en el centro del país, sino muy particularmente en las regiones andinas, donde los indígenas se mezclaron con los europeos para constituir una raza enérgica, laboriosa, económica, en la cual prepondera hoy física y psicológicamente el elemento blanco. Las uniones con los españoles se multiplicaron de manera que, según casi todos los autores, la mayor parte de los llamados blancos, en los últimos tiempos de la Colonia eran en realidad mestizos. Hasta mediados del siglo XVIII, y aun tratándose de tribus tenidas por irreconciliables como, por ejemplo, los motilones de la provincia de Maracaibo, verdaderos salteadores, recurrieron con frecuencia los españoles a medios diplo-

máticos para reducirles, dándoles auxilios y facilidades para que se poblasen, es decir, entraran a vivir pacíficamente y admitieran misioneros en su seno.

Los escritores hispanófilos admiten que las leyes y providencias de la Corona en punto a tratamiento de los indios eran buenas y aun excelentes, pero agregan que los funcionarios no las aplicaban. Es cierto que en muchísimos casos la arbitrariedad y la injusticia golpearon duramente al indígena y que las reales cédulas sobre instrucción y civilización de éste encontraron oposición en los encomenderos cuyos intereses lesionaban. Sería falsear la historia, sin embargo, tener por absoluta la inobservancia de las leyes, aun cuando hacia ella parezcan tender los venezolanos, según lo reparaba Bolívar dieciocho años después de declarada la Independencia. Carlos V concedió a los Belzares permiso para esclavizar a los indios, mas sólo a los que rehusasen someterse, y envió al fraile Montesinos, con el título de protector de indígenas, para que vigilara el cumplimiento de esta cláusula del contrato. Daba el Emperador aquel derecho a los alemanes con violación de sus propios decretos, como recuerda Baralt, pues de 1526 a 1542 aparecieron varias leyes que prohibían reducir a esclavitud a los indios aun rebeldes. Y los excesos cometidos en la época de la dominación alemana fueron una de las causas que indujeron al soberano a rescindir el contrato. Diego de Ordaz recibió, en Nueva Andalucía, prohibición rigurosa de esclavizar a los indios. La Corona tomó allí desde el primer momento cuantas medidas estuvieron a su alcance para impedir que se maltratase a aquéllos y dictó severísimas penas contra esclavistas y malhechores. Por haber cautivado indios y vendíolos en España contra la prohibición

del Rey, fue Cristóbal Guerra preso y condenado a restituirlos libres a América, a su costa. En el permiso que luego se le concedió para emprender otras expediciones, mandósele expresamente abstenerse de violencias contra los naturales. La Audiencia de Santo Domingo, en virtud de órdenes reales, envió sucesivamente a Cubagua y Tierra Firme a los licenciados Prado, Frías y Castañeda, encargados de castigar los desmanes de los conquistadores; y si Prado justificó a Hortal y Frías fue muerto por Sedeño, Castañeda hizo apalear y cortar la nariz a unos cuantos culpables y abrió juicio de residencia a los oficiales de Cubagua. Por una u otra razón, el comercio de esclavos había cesado para 1550. Cuarenta años después la Audiencia diputó a Caracas a Leguizamón para que informase del tratamiento que se daba a los indios e investigase retrospectivamente sobre la conducta de los conquistadores en la reducción. La guerra ocasionó sin duda grandes pérdidas de vidas y se asegura que los jiraharas, que lucharon heroicamente durante setenta y cuatro años, fueron casi exterminados. Pero otras causas produjeron efectos aún más terribles: la epidemia de viruelas de 1580 mató mayor número de individuos que la guerra, como notamos en el capítulo primero de este libro. La provincia de Caracas se despobló entonces por haber sucumbido naciones enteras.

Sobre el régimen y conducta de los encomenderos hanse formulado terribles censuras, fundadas en su mayor parte. Nótese, sin embargo, que aquéllos no tenían la propiedad de los indios, sino su tuición o protección; era en cierto modo un lazo de pura esencia feudal que ligaba tanto al señor como al vasallo, creado en favor de uno y otro y perfectamente explicable y aun justificable por la recíproca posición de conquistadores e indígenas.

En cuanto a la reducción por las misiones, parece justa la opinión del profesor Humbert, quien ha estudiado a fondo la colonización de Venezuela y afirma que la explotación del indio por los misioneros es una de tantas calumnias lanzadas contra España. El sabio francés demuestra que la transformación de las misiones en establecimientos agrícolas, pecuarios o comerciales, fue impuesta por las circunstancias en un país inmenso y semidesierto, para procurarse los objetos indispensables a la existencia.

En Guayana las misiones, reorganizadas bajo Felipe V, realizaron una obra colonizadora admirable. El profesor Humbert dice que si España pudo mantener su dominación en dicha provincia lo debió a la actividad de sus misioneros; y siguiendo a otro autor francés, Desdèvises du Dezert, agrega que la creación de las grandes misiones americanas es uno de los más bellos títulos de gloria de la Iglesia española, y que los misioneros se preocuparon sobre todo del progreso moral de los indios y fueron en nuestro Continente grandes "pionniers" o gastadores de la civilización. En la segunda mitad del siglo XVII los jesuitas emprendieron algunas fundaciones que, por falta de protección militar, fueron destruidas varias veces por los caribes, pereciendo casi todos los sacerdotes. Cedieron el campo los jesuitas a los capuchinos catalanes, quienes, a costa de prodigiosos esfuerzos y numerosos martirios, alcanzaron a crear establecimientos definitivos. Más de una vez los ingleses ayudaron a los caribes a incendiar las misiones. Los poderes públicos concluyeron por convertir éstas en instituciones de Estado, y los misioneros, provistos de escoltas militares, asumían ciertas funciones civiles. Las fundaciones se extendieron entonces a las hoyas del Yuruari, del Cu-

yuni y del Caroní y llegaron a contarse para 1743 siete misiones catalanas, con un total de 1786 indios civilizados, cuyos enfermos, viudas y huérfanos encontraban en ellas alimento y cuidados gratuitos. Diguja dice que había numerosos indios sin bautizar porque los misioneros querían que se convirtiesen libremente. Por esta época los jesuitas habían vuelto a Guayana y creado cuatro establecimientos. Muchos españoles se instalaban también en las misiones para consagrarse a la agricultura y a la cría. En 1755, el número de las fundaciones catalanas había casi doblado, y en 1788 contábanse veintiocho, con 14.012 indios. Para 1813, estas misiones, con las villas de Upata y San Isidro, tenían 21.246 habitantes. Nótese que, según informe oficial fechado en 1724, muchas tribus bárbaras del Orinoco comprendían suficientemente la lengua española, de modo que los misioneros podían servirse de ella para evangelizarlas.

Otras provincias venezolanas eran también teatro de la fecunda actividad de los frailes. En 1720 había en las de Cumaná y Barcelona de treinta a treinta y cinco establecimientos religiosos. El monasterio franciscano de Píritu, dice Humbert, había adquirido grande importancia como centro de propaganda civilizadora en ciertas regiones. Por obra de los misioneros o con su eficaz cooperación eleváronse nuevas aldeas y villas: Río Caribe, Carúpano, Aragua, El Pao. D. Gregorio Espinosa de los Monteros inició una época de verdadero progreso en estas provincias, y ya para 1763 existían allí cincuenta y tres establecimientos dirigidos por frailes.

Depons afirma que el esfuerzo de los misioneros, prolongado durante ciento cincuenta años, fue impotente para vencer los malos instintos de los indios venezolanos. "Lo lento, o, peor

aún, lo nulo de sus progresos en la civilización, dice aquel viajero, tienen como causa la gran lenidad con que recomiendan tratarles las leyes de Indias"; y agrega que pocos extranjeros han hecho al gobierno de España la debida justicia en punto al régimen de los indios, concluyendo que "el legislador español se ha esforzado en dar a estos hombres todas las ventajas que ha creído compatibles con su dependencia de la metrópoli". Baralt ha parafraseado admirablemente las informaciones de Depons sobre el estado de los indios en la colonia. En resumen, y excluyendo los salvajes de las selvas fronterizas, la peor suerte no correspondía al indígena que, "confundido en las ciudades con el resto de los ciudadanos, gozaba de todos los derechos políticos, sino al que habitaba las aldeas bajo la dirección de sus propios cabildos, de un cura doctrinero y del corregidor". Sin embargo, el nombramiento de empleados blancos como protectores y la transformación del gobierno de las aldeas y poblaciones indias según normas españolas, aunque con funcionarios indios, mejoró ciertamente la suerte de los pobres diablos "antes sometidos al poder arbitrario de sus caciques, cuyos abusos han sido calificados de escandalosos". El problema de la protección del autóctono contra la tiranía de sus propios jefes o de los funcionarios de su sangre es todavía uno de los más arduos que deban resolver las autoridades coloniales. Una de las causas del malestar y del fermento revolucionario existente en algunas posesiones europeas de Asia es la impotencia, o indiferencia, de la administración metropolitana para defender a los indígenas de las exacciones y abusos sin cuento de los mandarines. Dicho problema, como se ve, no se planteaba sólo para los españoles ni era inherente al sistema por ellos instituido.

Los doctrineros recibían sueldo del gobierno, la administración de los sacramentos y demás oficios religiosos era gratis y aquéllos sólo podían recibir de los indios algunas primicias. Baralt concluye: "Ningún género de industria les estaba vedado y tenían el privilegio de no pagar el derecho impuesto sobre la venta de las manufacturas. De hecho estaban exentos de los diezmos por los frutos de la tierra. No estaban sujetos a ninguna contribución de sangre y se les dejaba en tranquila posesión del terreno que tenían cuando pasaban al dominio español, o recibían del gobierno una buena porción con cargo de labrarla. Ni forzados ni voluntarios se permitía que los indios fuesen llevados a trabajar en ingenios de azúcar, obrajes de paño, lana, algodón u otra cosa semejante que tuviesen los españoles, sin que por eso se les negase el recurso de ayudarse entre sí para esas mismas u otras obras, con tal que fuese sin mezcla, compañía ni participación de peninsulares de cualquier estado, calidad o condición". El erudito Tulio Febres Cordero califica las instrucciones que promulgó en 1694 el gobernador Berroterán de código indiano y de fuero indígena. Y ciertamente que dichas instrucciones merecen la atención del historiador por cuanto demuestran de la parte de las autoridades españolas, además de sentimientos humanos, la comprensión real de las necesidades políticas, económicas y sociales de la colonia en lo concerniente al régimen de los indios. Allí encontramos enunciadas y prescritas en favor de éstos algunas de las providencias que hoy se tienen como conquistas del pensamiento radical y socialista: la libertad de contratar, la limitación del tiempo del contrato, el salario mínimo, la jornada de diez horas, la obligación por parte de los patronos de alimentar al asalariado, con minuciosa pres-

cripción de la calidad de los alimentos, y de pagarle viático de ida y vuelta cuando su domicilio se encuentra a cierta distancia del lugar de trabajo y, por último, la institución de una especie de semana inglesa. Las mujeres y las niñas gozan de particular protección en cuanto a vestido y educación moral. El corregidor interviene en la celebración de los contratos para instruir al indio de sus derechos y deberes y evitar los abusos del patrón, e interviene asimismo en las compras del primero para que los mercaderes no le vendan artículos averiados o le engañen en los precios y medidas. El corregidor debe defender a los indios "manteniéndoles sus privilegios y prerrogativas como a vasallos libres de Su Majestad", exentos de servicio personal, y ejerce jurisdicción ordinaria para conocer "en todas las causas que se ofrecieren, así entre españoles con españoles como entre españoles con indios, e indios con indios, y de los agravios que éstos recibieren de sus encomenderos", obrando en todo conforme a las leyes del Reino. El corregidor debe mirar "al mayor bien de los naturales y a su conservación y aumento" y explicarles "el deseo expresado en las reales cédulas de que se adelanten y vivan con descanso y que se hagan capaces de nuestra política cristiana, nuestras costumbres, no de otro modo que como lo vean practicar en las ciudades y pueblos españoles..., usando para ello el corregidor de todos los medios de suavidad y cariño que les aficione a los indios para que más bien se logre el católico celo de Su Majestad en bien de estos naturales". Otra obligación del corregidor consiste en levantar el catastro de las tierras realengas o baldías en las cercanías de los establecimientos indígenas "que sean más a propósito, fértiles y acomodadas para señalarles a los indios otra tanta cantidad de tierra como la que estuviese ocu-

pada con las estancias de los españoles, de forma que los naturales queden acomodados y con las bastantes para sus labores. En cuya quieta y pacífica posesión han de estar más amparados, sin permitir en lo adelante que en los términos de los pueblos de los indios no se funden nuevas haciendas para los españoles, so penas que Su Majestad tiene impuestas, declarándolas por perdidas y que se adjudiquen a los indios". Que no vivan —ordena el gobernador— en los pueblos de los indios españoles, negros ni mulatos libres, "y si éstos hicieren algunas vejaciones a los naturales, les han de castigar con gran severidad".

Las autoridades tomaban, además, severas medidas para preservar en lo posible a los indios de los estragos del aguardiente, y a ello tendía en parte la ley de administración de este ramo. A tal respecto, puede citarse como típica la renovación de ciertas instrucciones a los curas dadas por el poder eclesiástico de Mérida, en septiembre de 1812, a raíz de la caída de la primera República. Decía entonces el vicario Irastorza: "Deseando cortar en cuanto se pueda la embriaguez a que son propensos los indios y ha fomentado el gobierno revolucionario con la franqueza de la renta de aguardiente en los pueblos, que rigurosamente tenía prohibido nuestro soberano; por el bien de las conciencias y reforma de costumbres, bastante relajadas con el libertinaje que se iba introduciendo, he pasado los respectivos oficios a los señores gobernadores de las provincias que comprende este obispado para que prohiban la venta en los pueblos de indios con el rigor que estaba antes prohibida".

Se ve, pues, que el gobierno español, a la par que colonizaba con sus nacionales, practicaba una verdadera política indígena, que fue abandonada por los republicanos Estados sucesores de

la Monarquía tan pronto como se declaró la independencia; y se ve que Venezuela no era simplemente colonia de explotación. No caducó durante el antiguo régimen la ordenanza de Berroterán, e invocábanla siempre las autoridades civiles y eclesiásticas en tratándose de proteger a los naturales. Es probable que la eficacia de aquellos textos haya sido por lo menos equivalente a la de las disposiciones que en la actualidad se obligan algunos países de Europa a tomar, por ejemplo, en favor de las minorías alógenas. Los obispos venezolanos se esforzaron casi siempre en hacer que los curas cumpliesen y ayudasen a cumplir lo estatuido por el poder civil, imponiendo multas y otras penas a cuantos utilizaban el momento de la confesión para obtener o recibir de los indios el camarico u ofrenda acostumbrada para la congrua sustentación, y a cuantos castigasen corporalmente a estos últimos, mandándose que se les pagara por trabajo como a los demás obreros y peones. Cuando el obispo Milanés emprendió la grandiosa construcción de la catedral de Mérida, por desgracia interrumpida a su muerte, tomó medidas para que los obreros indios percibieran sus salarios y no pudiesen, sin embargo, malgastarlos en la ciudad, y para que no sufrieran las labranzas con motivo de venirse los labriegos a trabajar en la fábrica.

La suerte de los indígenas fue sin duda peor en las colonias extranjeras. Los caribes de las Antillas ocupadas por Francia e Inglaterra se extinguieron tanto o más rápidamente que en las islas españolas, y esta es la razón por la cual el tráfico de negros tomó allí notable incremento. Y conste que tenemos por absurda la estadística antillana del Padre Las Casas: 3.000.000 de haitianos al desembarcar los conquistadores y sólo 300 cuarenta años después. Los autores anglosajones confiesan que en los

establecimientos ingleses los indios fueron exterminados. Alguna vez fueron también exterminados los blancos por otros blancos: no ofrece la historia de la colonización española ejemplo de destrucción sistemática comparable a la de los colonos franceses, conocidos con el nombre de acadianos, ejecutada en 1775.

El otro elemento étnico que concurrió a poblar el territorio venezolano fue la raza negra, la cual se conservó pura o, mezclándose con blancos e indios, dio nacimiento al mulato, al zambo y a sus derivados. Es sabido que el origen de la importación de negros a Tierra Firme se encuentra en la acción desenvuelta por el Padre Las Casas con el fin de librar a los indios del trabajo de las minas y de la esclavitud en general. Los procuradores enviados sucesivamente a la Corte por las ciudades de Venezuela, Sancho Briceño y Simón de Bolívar, obtuvieron licencias para introducir negros, el último en cantidad considerable, siendo el impuesto primitivo de importación de dos ducados por cabeza. No obstante, los inconvenientes de tal importación a América no escaparon a la perspicacia de Felipe II y de sus consejeros, de modo que para 1580 eran rarísimos los asientos o permisos concedidos a nacionales o extranjeros con aquel objeto. Por desgracia las necesidades del Tesoro, a causa de las interminables guerras con Inglaterra y Francia, obligaron a la Corona a buscar recursos en este ramo y los asientos recomenzaron, sobre todo en favor de los portugueses. La peste de 1658 ocasionó tantos estragos en la mano de obra de las haciendas de Caracas, que los criollos suplicaron al Rey les permitiese la importación de negros para que trabajasen en aquéllas y poder luchar contra la miseria reinante.

Los españoles nunca ejercieron la trata directamente ni establecieron agencias en la costa de Africa, comprando sus esclavos a intermediarios extranjeros, especialmente a los ingleses, "insignes por sus piraterías de esta especie y por la crueldad que usaban con los esclavos", según recuerda Baralt. La trata era, como la piratería, industria nacional y oficial en Inglaterra y los reyes de este país, Elisabeth, Jacobo, Carlos I y los grandes de la Corte "entraron como aparceros en las expediciones africanas". La unidad monetaria llamada guinea recibió su nombre en razón del tráfico de hombres bajo el reinado de Carlos II.

En Francia —donde los armadores de Nantes, Saint-Malo, Dieppe y otros puertos convirtieron en especialidad fructífera este comercio—, Colbert lo estimaba esencial para la explotación de las Antillas y lo alentaba por todos los medios. Ese criterio parece haber arraigado en el país, pues siglo y medio más tarde hallaremos en Depons un esclavista convencido, que veía sólo el lado material del asunto y su resultado inmediato y opinaba, en puro negociante, que la prosperidad de Venezuela dependía de la introducción continua de negros para cultivar las haciendas. Durante más de cien años las colonias francesas de Africa no presentaron para la metrópoli más interés que el de suministrar esclavos; y de hecho la economía entera de las Antillas descansaba sobre el empleo exclusivo de aquéllos, importados en cierta época a razón de cuatro a seis mil por año. En 1701, una compañía "que se daba al salteamiento de negros" obtuvo el monopolio de la trata en América, el cual fue cedido a los ingleses por treinta años después del tratado de Utrecht; en fin de cuentas, estos últimos acapararon el negocio durante el siglo XVIII. El abate Raynal pintó con sombríos colores la situa-

ción de los esclavos en las Antillas extranjeras, muy distinta de la observada en Venezuela por todos los viajeros. Y deben juzgarse con severidad las "atroces medidas" previstas en el código negrero vigente en Francia desde 1660, que contrastaban con las longánimas leyes españolas. La Revolución suprimió en teoría la trata, que fue restablecida legalmente por Bonaparte en 1802.

En pleno siglo XVIII los holandeses sacaban gran provecho de la trata de esclavos indios en Guayana y compraban a los caribes más de trescientos prisioneros por año, incitando a los bárbaros a practicar algaras en territorio español donde no existía la esclavitud del indio. Los esclavos, a su vez, pasaban a las misiones venezolanas en busca de libertad. Los holandeses habían establecido una serie de fortines destinados a impedir aquellas fugas; al tiempo que las autoridades españolas perseguían implacablemente a los mercaderes de esclavos culpables de efectuar un comercio calificado por el comandante Valdés, en 1760, de ilícito e inhumano. Años después —escribe el profesor Humbert— "Centurión reivindica altamente para los españoles de Guayana el derecho de acordar protección a todos los esclavos fugitivos, como se practica en Caracas para los de la isla de Curaçao". Así, pues, en las misiones de Venezuela encontraban refugio no sólo los esclavos indios, sino también los negros. Todo prófugo que declarase su voluntad de abrazar el catolicismo era libre. El régimen español en Guayana, comparado con el implantado por los vecinos, ofrecía tantas ventajas que en 1779 Inciarte comprobaba que los indios inmigraban más y más al territorio nacional y que sus aldeas estaban florecientes.

Después de la rebelión de Santo Domingo contra los franceses, el gobierno español prohibió la importación de negros a Tierra Firme, por medida de seguridad política. Según cálculos que parecen acertados, al declararse la independencia había en Venezuela 60.000 esclavos, de los cuales 40.000 en la provincia de Caracas. Dice Humboldt que el número de aquéllos existente en los Estados Unidos era cinco veces mayor que el que había en las colonias españolas. Solamente en Virginia había más que en toda la América hispana. Un esclavo o esclava de veinte a cuarenta años valía en el occidente de Venezuela, en 1800, doscientos cincuenta pesos; un niño o niña de ocho años, cien pesos.

Sin duda, la condición del esclavo en la colonia venezolana era dura, y el propio Humboldt supo de algunos de ellos muertos de azotes. Pero al menos la Corona española tenía conciencia de su responsabilidad y trataba de mejorar la suerte de los negros con medidas legislativas oportunas. La real cédula de 31 de mayo de 1789, que quedó en gran parte sin ejecución por culpa de las autoridades locales y tal vez de los criollos interesados, prohibía que se hiciera trabajar a los esclavos menores de diecisiete años y a los mayores de sesenta, y ordenaba se separasen los sexos en el trabajo y se construyesen habitaciones para todos, con cuartos independientes, sin que en uno de éstos pudiera ponerse a más de una persona, salvo en casos urgentes. Lo extraordinario del asunto y lo que prueba cómo estas medidas humanas chocaban con las ideas de la época, es que Depons se burla de ellas y las califica de inaplicables e hijas de la ignorancia. Ninguna legislación superaba a la española en cuanto a las facilidades que se daban al esclavo para redimirse. El abuso del

derecho de propiedad bastaba, aun por leves motivos, para que el propietario lo perdiese. El negro podía comprar su libertad por trescientos pesos, suma mucho menor que la establecida en otras colonias para el mismo fin. Se citan casos de esclavos que adquirían peculios de consideración y los legaban a sus hijos, nombrando las más de las veces a sus propios amos como albaceas, sin pensar en libertarse. Había un procurador especial pagado por el gobierno que comparecía en justicia por el esclavo. Nada de esto existía en las posesiones extranjeras. "La mayor parte de los gobiernos —concluye Depons—, lejos de favorecer la manumisión, la gravan con impuestos y formalidades que la hacen difícil, costosa y escasa. Sólo entre los españoles todo concurre a multiplicarla." Por tal motivo había en las colonias del Rey mayor número de manumisos que de esclavos.

El ilustre alemán, cuyas obras son la mejor fuente de información acerca del estado del Imperio español en sus últimos tiempos, dice que el trabajo de las minas era libre y que en México el minero estaba mejor pagado que en cualquier país de Europa. Los indios de mita adscritos al laboreo de minas en el Perú eran pocos, en comparación con el gran número de los empleados libremente en la agricultura e industrias de los centros populosos. La suerte de los labriegos no era tampoco peor que la de los labriegos europeos. Hombres libres trabajaban mediante salario suficiente en los ingenios de azúcar.

Que las leyes se aplicasen o no estrictamente, el hecho es que la crueldad no servía de regla en la América española. "En honor del nombre español —escribe el inglés John Miller— debe tenerse presente que los individuos de esta nación son los hombres que tratan con más dulzura a sus esclavos." Por el

contrario, "los ingleses —escribe el francés Depons—, los tratan con una dureza que contrasta singularmente con sus decantados principios de moral". En las colonias británicas existía, al lado de la esclavitud de los negros, la esclavitud de los blancos, cosa absolutamente desconocida en los dominios de España. Durante las luchas entre la Corona y el Parlamento, y más tarde en la época de la restauración de los Estuardos, las diferentes facciones inglesas expidieron a América cargamentos de enemigos para ser vendidos. Domésticos blancos de cierta categoría eran también verdaderos esclavos, pues no podían romper su contrato y se exponían, en caso de fuga, a ser marcados con un hierro candente y aun a la muerte. Un blanco valía en las colonias citadas hasta diez libras esterlinas; un negro, más resistente, llegaba a valer el quíntuplo. Miranda compró en Pensacola, el 14 de marzo de 1781, un muchacho negro de quince años por doscientos cincuenta dólares. En Filadelfia, a fines de 1783, compró por diez guineas un niño escocés "a bordo de una embarcación que trajo más de trescientos esclavos, entre mujeres y hombres", según anota el general en su *Diario*. Es decir, que en el territorio de la libre República, los ingleses practicaban ostensiblemente el tráfico de blancos y vendían a los extranjeros súbditos de su propio soberano. Es cierto que poco antes, durante la guerra anglo-americana, algunos príncipes alemanes vendían también sus súbditos a Inglaterra como mercenarios, y empleaban el producto en construir suntuosas moradas.

Obsérvese que en nuestro tiempo se ha establecido en Rusia el trabajo forzado colectivo, consecuencia normal de la mezcla de utopías marxistas y barbarie turcomana y mongola de que se compone el bolchevismo. Y en cuanto a la suerte actual de los

negros en las colonias europeas, se sabe que se halla generalmente en manos de sociedades financieras que los explotan de manera escandalosa, haciéndoles trabajar en algunos establecimientos —apunta el conde de Fels, francés— sin pago y aun sin alimento. Puede citarse, entre otros, el caso de un camino de apenas veinte kilómetros, construido hace poco en Africa por una de aquellas sociedades, "que costó la vida a más de dos mil negros, muertos de hambre, de sed y de calor". En las minas de Kimberley, un basuto, que trabaja más de doce horas y trata en ellas veinte toneladas de mineral, recibe cuatro chelines diarios. En Johannesburg, cerca de doscientos mil negros ganan dos chelines, en tanto que los blancos perciben no menos de diecisiete chelines. En ambos establecimientos los negros viven en campos especiales, no se les permite habitar la ciudad y están sometidos a una disciplina de hierro, bajo el látigo de capataces blancos o mulatos.

La propaganda por la extinción de la esclavitud se presta en la actualidad a demagogias tan aprovechables como las que emplearon hasta el siglo XVIII algunas naciones rivales de España, pretextando la presunta tiranía de los dominadores de América. La violenta campaña de prensa, desatada hace años en Europa contra la situación en Abisinia, obedecía al deseo de apoderarse de este país, deseo que los apóstoles no han abandonado. Y la repentina acometida contra la esclavitud, de antiguo existente en Liberia, parece traer su origen de la necesidad que tiene una gran empresa de explotación de caucho de reclutar su mano de obra, monopolizada ahora por los esclavistas descendientes de esclavos.

V

EL DESARROLLO URBANO Y SOCIAL

LENTA fue la transformación de los primitivos establecimientos militares en repúblicas civiles; de aquellos cuarteles donde sólo podía vivir la mesnada del capitán conquistador en aglomeración con mujeres y niños y con los servicios indispensables para la vida en común. Las ciento cincuenta casas que Zerpa levantó en Cumaná por 1569 eran pajizas, y todavía para 1763, según vemos en la relación de Diguja, la mayor parte de los habitantes de aquella ciudad, de Cariaco, Cumanacoa y Barcelona tenían casas de madera y barro. En esta última época apenas había en Cumaná ochenta edificios de piedra y veinte en Barcelona. Del hecho de ser sus moradas de pajas provenía, dice Oviedo y Baños, la facilidad con que los habitantes abandonaban los establecimientos durante el siglo XVI, llevados por razones diversas. Entre las múltiples obras de D. Diego de Osorio, no fue la menos importante enmendar la planta de las ciudades e introducir en ellas ciertas comodidades. Cuando Trujillo se asentó definitivamente, sus vecinos fabricaron casas de sillería, ladrillo y tapia y adornaron las por-

tadas con escudos de armas: todo fue destruido por el pirata Gramont en 1668. Es probable que los habitantes de otras ciudades hayan procedido como los trujillanos. La casa de Damián del Barrio, en Nueva Segovia, estaba cercada de murallas de adobes almenadas, alcazaba que aquel capitán levantó sin duda a imitación de las de los señores italianos que había visto cuando guerreaba bajo el Condestable. En 1608 una de las principales iglesias de Caracas, tenuta por monjes, era aún pajiza. Poco antes habíanse abierto allí las primeras cañerías de agua limpia y construido un muelle en La Guaira. En 1623, Triviño Guillamas estableció una especie de plano regulador o de hermo-seamiento de la capital e hizo que el cabildo nombrase dos peritos para ejecutarlo.

Ya en la última mitad del siglo XVII, con las riquezas de los colonos, se habían aumentado considerablemente el lujo y las comodidades de sus casas, si hemos de juzgar por el ejemplo de un habitante de Maracaibo, a quien el pirata Morgan despojó de su vajilla de plata, que valía treinta mil escudos. Un portugués de Gibraltar pagó mil escudos por su rescate. Dos franceses que sirvieron como pilotos en Maracaibo ponderaban las riquezas de aquella ciudad. En 1640 un corsario holandés robó a los maracaiberos por valor de treinta mil ducados; y dos años después el citado Morgan, luego de saquear la ciudad, naturalmente, les exigió un rescate de veinte mil escudos y quinientas vacas.

En el tiempo de Oviedo y Baños las calles de Caracas eran "anchas, largas y derechas" y estaban empedradas, por orden del acre Cañas, quien ejecutó también otras obras de aseo, de modo

que quedaron suprimidos el polvo y el lodo. Los edificios, bajos por temerse los temblores, eran de tapia, algunos de ladrillo, con patios y huertos interiores. Había cuatro plazas, una catedral decente edificada en 1580, reconstruida o reparada después del terremoto de 1641 y varias iglesias menores, de las cuales la mejor era la de las Mercedes. Veíanse además el colegio de Santa Rosa "de alto, con viviendas muy desahogadas y claras, muy capaces"; y un hospicio para las mujeres enfermas o livianas.

Ricardos, que debía dejar reputación de severidad y aun de dureza por su castigo de la revuelta de Juan Francisco de León, fue gobernador progresista y —anota Terrero— hermoseó la capital, "enderezando y allanando sus calles, dándola a la plaza principal su simetría y adorno, fabricándola por adentro sus portales y dos fuentes para hombres y mujeres, que suministraban el agua del público y antes estaba reducida a la pila que después se puso en la plaza de San Pablo, y por defuera sus tiendas que popularmente llaman canastillas, para reducir a lugar público y fijo a los mercaderes que antes andaban errantes por las calles con sus cajones o canastillas, dejándole en esto a los propios de la ciudad un ramo considerable a sus intereses y fondos". Creó también Ricardos un lazareto y lo dotó con el producto de un impuesto especial sobre el guarapo y las riñas de gallos. Casi todos estos adelantos fueron aniquilados por el terremoto de 21 de octubre de 1766, que completó los desastres causados años antes por la viruela. Tenaces, los caraqueños reconstruyeron su ciudad, no siendo ésta la sola vez. En 1773, bajo el gobierno de Agüero, se inició la fábrica de los puentes de la Trinidad y la Pastora que extendieron el área poblada. Guillelmi levantó,

para 1790, la casa de Misericordia, el puente de Anauco y el cuartel de la Trinidad. Emparan, último capitán general, libertó de mercaderes la plaza mayor y plantó allí una alameda.

Así, pues, el siglo XVIII presencia la transformación de la Capitanía, lenta al principio, rápida luego hasta llegar al estado de indiscutible desarrollo en que la halló la guerra de Independencia y cuyos diferentes aspectos estudiamos. Cesa la miseria de la centuria precedente y empieza una era de progreso que coincide con las actividades de la Compañía Guipuzcoana. La situación económica mejoró de tal manera, naturalmente dentro de las posibilidades muy relativas de la provincia, que el gobierno tuvo dinero para regalar al pueblo con fiestas y regocijos. El advenimiento de Fernando VI, en 1746, fue celebrado en Caracas, según dice Terrero, con fuegos de artificio y, "en una elevada pirámide multitud de jamones, quesos y otras diversas golosinas para la plebe, con una fuente de vino y otra de aguardiente que le brindaban los pechos de una graciosa estatua en quien estaba simbolizada la Europa". Es probable que en aquella ocasión y otras análogas se distribuyeran también al pueblo las monedas de uso. Indudablemente estaba lejana la época en que Diego de Losada, hincando tiendas en tierra de Nirgua, festejaba el día de San Sebastián "con toros, cañas, torneos y otros regocijos militares".

El gobernador González adquiere reputación de hombre alegre, amigo de fiestas y espectáculos, edifica un teatro y preside los regocijos de aquella sociedad ya refinada, que bajo su amable proconsulado recibirá al conde de Ségur. Representaciones teatrales se daban en Caracas desde el año 1600 y aún antes. En 1808 fue a Venezuela una compañía de ópera francesa. Gue-

vara y Vasconcelos nada hizo para privar a la ciudad de ese su carácter tan peculiar, mezcla feliz de insigne heroísmo y jovial desenvoltura, y dilatáronse durante su gobierno, al decir de un cronista anónimo, el libertinaje, la gula, la lujuria y el juego. En los días de Carbonell y de Guevara estuvieron en boga las fiestas del Real Asilo, sitio donde se reunía la alta sociedad y se obsequiaba a los extranjeros distinguidos. El último de los nombrados capitanes generales inauguró veladas literarias, en las cuales recitaban sus composiciones Bello y otros jóvenes "intelectuales".

Los obispos condenan la costumbre de bailar, muy extendida en la sociedad y en el pueblo, y el exceso de bebidas fuertes común en aquellas fiestas. Las clases bajas se entregaban, según S. I. Díez Madroñero, a "diabólicos bailes, llamados vulgarmente fandangos, sarambeques, danzas de monos y otras semejantes, en cuya práctica, congresos y tripulaciones de hombres y mujeres ordinariamente se ofende muy gravemente a Dios Nuestro Señor". En otra pastoral comprueba todavía el obispo que, a pesar de sus requerimientos, continúa en ciudades, villas y aldeas "la práctica pecaminosa de los bailes nombrados vulgarmente fandangos, carizos, danzas de monos y contradanzas del diablo (cuales juzgamos serlo), la de los secretos, la alemana..." Monseñor Martí y, en Mérida, los obispos Lora y Milánés reiteran sin mejor éxito los mandamientos contra ciertas danzas de negros, toleradas, dice el último, por indigna condescendencia aun en las procesiones y otros actos religiosos. Y condenan asimismo los prelados las comedias o teatros a que son aficionados los venezolanos.

Oviedo y Baños notaba ya en los caraqueños "el agasajo con que tratan a la gente forastera, siendo el agrado con que la reciben atractivo con que la detienen, pues el que llegó a estar dos meses en Caracas no acierta después a salir de ella". Hacia 1780, la sociedad capitalina imitaba las modas y los modales franceses y la tendencia al snobismo cosmopolita, que es aún hoy una de sus características, atemperaba agradablemente el sentimiento de la superioridad de lo español sobre lo extranjero, de lo que, muy nacionalistas, alardeaban nuestros criollos nobles o ricos. La elegancia de las caraqueñas llamó la atención del conde de Ségur: "El gobernador me presentó en las sociedades más distinguidas de la ciudad, donde vimos hombres harto graves y taciturnos; pero en desquite gran número de señoras tan notables por la belleza de sus rasgos, por la riqueza de sus adornos y por sus talentos para la danza y la música, como por la vivacidad de una coquetería inocente que sabía hermanar la alegría con la decencia".

La inferioridad de la mujer en nuestra sociedad colonial era tan relativa, que Depons habla de "la ciega protección de las leyes españolas a la mujer en perjuicio del marido", y concluye que en los pleitos conyugales aquélla "no necesita producir pruebas: se la cree de palabra". Miranda, español y caraqueño, anotaba en 1783 que en la Carolina del sur "el sistema social estaba todavía en mantillas" y criticaba la reclusión monástica y la sumisión a los maridos que allí observaban las mujeres. De las de Boston escribía: "Las mujeres aquí tienen poquísima instrucción, y sus diversiones todas se reducen a partidas de circunspección en que la sociedad apenas tiene lugar". En Wethersfield sólo se veían las damas en la iglesia, "único paraje

en que pueden presentarse públicamente y ser vistas, pues paseos o teatros Dios los dé". Agréguese que nuestro viajero se burla repetidas veces de las supersticiones e ideas preconcebidas que tenían curso en la sociedad anglosajona, análogas a las que es costumbre reprochar a la colonia española.

En Venezuela, las joyas que lucen las mujeres y sus vestidos alarman a las autoridades eclesiásticas. Fray Juan Ramos de Lora, obispo de Mérida, fulmina en 1786 contra las piedras preciosas y los trajes deshonestos, contra "la desenvoltura, la extremosa profanidad, la desnudez, la provocación y, en fin, la ignorancia o locura de muchas mujeres de nuestro rebaño". En Maracaibo, sobre todo, "usan de tan inmodestos trajes, como la desnudez de algunas peligrosas partes del cuerpo, trayendo altos los bajos y desproporcionados los escotados, o las cabelle-
ras extremosamente aderezadas y descubiertas las cabezas". Todo aquello era "abominable corruptela" y "hacía daño a la república". Repitiendo el grito de alarma lanzado por su predecesor veinte años atrás, reprueba monseñor Milanés, en 1806, "la inmodestia y deshonestidad de los trajes que se han introducido hoy entre las mujeres", aun en la apartada capital de su diócesis; y excita a los curas a seguir el ejemplo de los Padres, "a declarar y declamar contra esas indecentes desnudeces con que se presentan las mujeres en las calles; y en los templos casi enteramente desnudas, porque las mantillas de red o de transparente nada cubren, antes llaman la atención con estos adornos indecentes". Condena al propio tiempo el prelado el vals, introducido recientemente "hasta en los pueblos más miserables que hemos visitado", y las contradanzas, en que no se avergüenzan "los hombres y las mujeres, en presencia

de sus padres y de sus esposos, de estrecharse, de enlazarse y de hacer otras ceremonias impuras, a la vista de un numeroso concurso".

Ségur, en 1783, halló la ciudad de Caracas "grande, elegante y bien construida", y dice que "gran número de casas elegantes están esparcidas o agrupadas en medio de estas praderas, cercadas de árboles odorantes". En 1801, Juan María Romero, al cabo de un viaje difícil cumplido por tierra desde el Ecuador, escribía: "La ciudad es hermosa, dos veces más grande que Quito y de mejor planta; su temperamento, templado. El abundante comercio de sus superiores frutos va haciendo esto cada día más apreciable. La plaza, muy abastecida; los géneros, a precios muy cómodos; bastante policía; mucha sociedad, mucho lujo y mucha gente de campaña en el bello sexo". Dauxion-Lavaysse, en 1807, comentaba: "Por lo general existe lujo y muchos dorados en el mobiliario de las casas de los ricos, y, en todas partes, más limpieza y abundancia que en España. Encuéntrase en la ciudad de Caracas el lujo de las capitales de Europa y un refinamiento o exageración de la cortesanía que deriva de la gravedad española y las costumbres voluptuosas de los criollos". Entonces, los burgueses de Caracas poseían ricos muebles, espejos de Venecia, bellas porcelanas de Oriente y vajillas de plata. Cosa análoga podía observarse en alguna otra ciudad venezolana: "Los habitantes de Cumaná son muy cultos; hasta podría decirse que lo son en exceso. No hay entre ellos tanto lujo como en Caracas, mas sus casas están bastante bien amuebladas".

La comodidad de las habitaciones españolas, en general, contrastaba con la pobreza que se veía entonces en otros estableci-

mientos europeos de América. Miranda, en su viaje a través de Nueva Jersey, notaba que las casas de campo no tenían allí "la suntuosa apariencia" de las de los cubanos; y si se juzga por los testimonios que acabamos de recordar y por muchos otros, las casas venezolanas eran por lo menos tan cómodas como las de Cuba. Carlos Pereyra dice que las moradas de la gente del pueblo en los Estados Unidos, años después de la independencia, eran pobrísimas. Esta clase de la población no conocía los fósforos, ni la estufa, ni la alfombra, ni los vasos, y apenas comía carne una vez por semana. Y es cierto que la magnífica comodidad que gastan los norteamericanos es de institución relativamente reciente: sólo en 1851, bajo la presidencia de Fillmore, se instaló una sala de baño en la Casa Blanca, según recordaba hace poco cierto gobernador de Connecticut tan enemigo del agua como del vino.

Cuando Antonio Nicolás Briceño abogaba en el Congreso de 1811 por la división de la provincia de Caracas, decía que muchas villas y ciudades del interior eran ricas y tenían fondos públicos para atender a sus necesidades, en proporción de sus respectivas poblaciones, pues "el terreno es generalmente pingüe y feraz", es decir, bien cultivado, y los habitantes "tienen lo bastante para vivir, y a los más no les falta algún sobrante para gastos y urgencias extraordinarias". Briceño elogiaba "los deleites y comodidades que presenta esta pingüe y preciosa parte del globo". Bolívar, por su parte, se queja al editor de la *Royal Gazette*, después de la guerra de Boves: "¡De todas esas bellas ciudades, de todos esos campos risueños, apenas quedan vestigios, excepto escombros, esqueletos y ceniza!" Y dice al caballero

inglés: "Venezuela era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de la América".

Si creemos a Ségur, el valle de Caracas "era una pequeña parte del paraíso terrenal"; y si seguimos a Humboldt, "en ninguna parte de la América española había tomado la civilización un aspecto más europeo", notándose allí "opulencia y luces". Un diccionario de Geografía universal publicado en 1800 decía: "En ninguna parte es menos difícil la existencia del hombre que en Venezuela".



PHILIPPES IV ROY DESPAGNE De Naples, de Sicile &c. Archiduc d'Austriche.
 Duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan &c. Conte de Habsbourg, de Flandres &c. Fils du
 Roy Philippes III et de Marguerite d'Austriche Naitquit lan 1605. Espousa en pr. nopces Elizabeth de Fr
 ance Fille du Roy Henry le grand 1615. morte a Madrid 1644. apres auoir donné un filz à l'Espagne, mort 164
 et une fille en qui reluisent ses vertus. Et en 2. nopces Marie Anne d'Austriche fille de l'Emp. Ferdinand III. Au
 comencem^t de son regne il remporta diuers auantages sur les Hollandois sur mer, aux Indes, et au Palatinat.
 La guerre luy ayant esté declarée en Flandre par le feu Roy 1635. le bon heur de la France et la mauuaise admi
 nistratiō du Comte d'Olinares son pr. Ministre luy causa la perte de plusieurs Villes en ces prouinces, en Italie et
 en Espagne; des prouinces et des Roiaumes entiers. En Catalogne et le Portugal en 1640 seistans soustraits de
 sa dominiōn, le Roiaume de Naples ayant couru le mesme danger en 1647. Mais comme l'esperance des Es
 pagnols est inuincible, mesme au fort de leurs disgraces; ils ont heureuse. n^t. recouure. une bonne partie de
 leurs pertes, toute fois avec peu de gloire puis que cest par les diuisions dont la France est agitée depuis
 4. années.

VI

EL REGIMEN RELIGIOSO

SOCORRIDO tema para los censores del régimen colonial en América es el muy famoso de la Inquisición, sambenito con que el extranjero ha gratificado a la Monarquía española y que los españoles aceptan avergonzados como si, a más de los autos de fe de Torquemada, sus frailes hubiesen realizado también la cruzada albigense y los horrores cromwelianos en Irlanda y otras partes, organizado la San Bartolomé y la persecución de los husitas, quemado, en fin, a Juana de Arco y a Miguel Servet, amén de otras lindezas por el estilo. Conviene, por tanto, examinar cómo obró en nuestra Capitanía de Venezuela el tribunal del Santo Oficio, establecido por 1610 en Cartagena de Indias.

Los procesos de fe en Venezuela pueden contarse con los dedos, y ningún reo sufrió pena de muerte. De 1618, año en el cual el obispo Bohórquez pretendía que muchas personas profesaban y practicaban en Caracas errores contrarios a los cánones del Concilio de Trento, hasta 1668 fueron condenados a prisión un cura y un sastre; a destierro, una vieja de Cumaná, que ejercía

la profesión de bruja, y se persiguió, sin resultado, a un protestante extranjero que, so pretexto de vender biblias, incitaba a los colonos a abrir el territorio a los holandeses. En 1679 dio el tribunal de Cartagena un ejemplo de liberalismo condenando la actitud del obispo de Caracas, Acuña, quien declaraba que no conferiría las sagradas Ordenes a personas de sangre mezclada: en esta ocasión fue el gobernador el más resuelto de los adversarios del prelado.

Debe notarse que el Santo Oficio, según decreto de Felipe II, carecía de jurisdicción sobre los indios, de manera que tampoco hubo procesos en Venezuela por paganismo, idolatría o superstición. Es harto curioso que algunos escritores liberales critiquen su medida a aquel monarca y le atribuyan ciertas ideas absurdas, cuando en realidad dicha medida fue excelente y revela una política tolerante dictada por las circunstancias. Paulo III había dado a los indios en 1537 una especie de patente de humanidad; y los reyes españoles, de Felipe II a Carlos III, hubieron de combatir enérgicamente con decretos formales las pretensiones de los eclesiásticos, que mantenían la exclusiva contra indios y mestizos en ciertas materias de carácter religioso. La intervención del poder político en favor de la tolerancia se vio no sólo en España, sino también en Francia donde la Corona defendió muchas veces a los herejes contra la implacable y docta Sorbona y los elogiados Parlamentos. Fue un "intelectual", Noël Beda, quien propuso a Francisco I suprimir la imprenta para vencer la herejía.

Algún cronista escribe que los inquisidores que estuvieron en Caracas, arrastrados acaso por el espíritu indulgente de los nativos, jugaban al carnaval y aun sus partidas de tresillo. La historia demuestra que el catolicismo de la alta clase de Venezuela ha

sido raramente fanático, y en todo caso nuestro régimen colonial no ofrece, en materia religiosa, ese semblante adusto que pudiera suponerse. Dos letrados colombianos, los Cuervo, conservadores y católicos fervientes, atribuyen a la influencia española "la franqueza en el desdén de las cosas de piedad y religión" que se observaba en Nueva Granada durante los primeros años de la República. Esta afirmación merecería estudiarse, pero es lo cierto que Torquemada no fue a Venezuela y Angel César Rivas pudo escribir que: "Apenas existe memoria de que alguien hubiese sido inquietado por sus opiniones filosóficas; a pesar de su condición bien conocida de luterano, Humboldt halló en los conventos del país la más cariñosa acogida, y, como se complace en decirlo, jamás se le propusieron en ellos discusiones religiosas". Cuando, a petición del virrey-arzobispo Caballero y Góngora, Carlos III dispuso el envío a Nueva Granada de una compañía de mineros alemanes, encargados de enseñar a los del país los métodos aplicados en Europa, el Rey decidió expresamente que no se les molestase a causa de sus creencias y prácticas religiosas y prohibió el registro de sus equipajes, a fin de que pudieran introducir libremente las obras que a bien tuviesen.

Si la Inquisición española ejercía su ministerio con la mayor lenidad en Venezuela, no sucedía siempre lo mismo con las Inquisiciones de algunas tierras protestantes donde, en asuntos religiosos y políticos, reinaban la intolerancia y el terror.

El movimiento anabaptista y otros derivados de la reforma luterana causaron en Alemania más de cien mil asesinatos. Jamás se pronunciaron en España palabras semejantes a aquella de Lutero: "Matad a cuantos podáis, y si acaso morís matando, moriréis de muerte santa". Este apóstol recomendaba que se

arrancase la lengua a los judíos, para infundirles el conocimiento de Dios en tres personas. Calvino, en política simple absolutista, era en religión inquisidor feroz, que implantó un régimen policíaco implacable y sangriento: Ginebra fue la ciudad más tiranizada de su tiempo. Macaulay dice que no hay sofisma ni artificio capaz de borrar o, siquiera, de atenuar las manchas que cubren la Iglesia oficial de Inglaterra en las épocas de Enrique VIII y de Elisabeth: aparte millares de víctimas del común, sufrieron entonces la muerte, precedida de inauditas torturas, hombres ilustres como More, Fischer y muchos otros. Las guerras de religión en aquel país fueron encarnizadas y ofrecen el cuadro de horrores más extraordinarios que pueda contemplarse: en Clyst Heath cuatro mil católicos fueron muertos por las tropas reales; los señores anglicanos tenían en el pueblo una reputación de ferocidad tan bien establecida como la de los caballeros hugonotes del Continente; había verdaderas batidas de caza de católicos, a quienes se robaba sin pudor. En Irlanda los católicos respondían a la violencia y el asesinato con terribles represalias: Osmond mató en menos de un año cinco mil adversarios; los ingleses perecían a filo de espada y se violaba a sus mujeres y a sus hijas. En desquite, los jefes de las fuerzas de la Corona descuartizaban a los cabecillas rebeldes y exponían sus miembros sostenidos por cadenas en las puertas de burgos y ciudades; a multitud de notables les fueron rotos piernas y brazos antes de ser izados en la horca; un general inglés pasaba revista a los cadáveres de los enemigos extendidos en la playa. En Francia se mató en algunos años un número de hugonotes triple del de los herejes que condenó la Inquisición española

durante siglos. Y un solo jefe protestante asesinó por su parte hasta cuatro mil católicos.

En una nación que goza de libertades seculares, en la Confederación helvética, no vacilaban las autoridades bernesas, ya muy entrado el siglo XVIII, en recurrir a la prisión, al ostracismo y aun a la privación del derecho de educar sus hijos de aquellos que no reconocían, bajo juramento, los postulados de la ortodoxia oficial en cuanto a la divinidad de Cristo y a la universalidad de la gracia. Los pietistas eran entonces duramente perseguidos. En países británicos, por entonces, los cuáqueros perdían por lo menos la lengua, como perdían la vida los blasfemos y los negadores de la Trinidad. En 1703 promúlganse en Inglaterra leyes especiales contra los que "perviertan" al pueblo induciéndole a practicar el papismo; y en los años siguientes se extreman los rigores y se priva a los católicos hasta de los derechos más elementales de la vida civil; se llega a dar primas a la más escandalosa delación de quienes observen la religión romana.

En Francia, y sobre todo en Alemania, se quemaron por millares las hechiceras hasta fines del siglo XVIII. D. Julián Juderías recuerda en su libro *La Leyenda Negra* que en la calvinista Ginebra perecieron quinientas y que en Lorena "un solo juez se vanaglorió de haber condenado a muerte a ochocientas brujas". El escritor inglés Mackay, citado por aquel notable español, calcula en más de cincuenta mil el número de brujas achicharradas en Inglaterra y Escocia desde María Tudor hasta Jacobo I. La *Scottish Review* decía, en abril de 1891, que "todas las víctimas de la Inquisición española no hubieran bastado para entretener a los cazadores de brujas británicos durante medio siglo". A fines del XVII, en una de las provincias inglesas de

América, uno de aquellos procesos costó la vida a veinte personas, es decir, a la mitad del número total de víctimas que ocasionó la Inquisición en el virreinato de México durante doscientos setenta y siete años.

Las impresiones de viaje de Miranda en los Estados Unidos son muy interesantes para el estudio de la materia que nos ocupa, primero por su calidad de venezolano y luego por ser aquél, en principio, admirador de las instituciones políticas y sociales de los anglosajones. Son conocidas las declamaciones del célebre agitador contra la tiranía de la Inquisición y la propaganda que contra ésta efectuó entre los soberanos y hombres de Estado de Europa. A decir verdad, las opiniones de Miranda se basaban en lo que había leído de la historia de España y no en cuanto había observado durante su larga permanencia en la Península. Ninguna de aquéllas podía aplicarse a Venezuela, país que el Precursor dejó siendo muy joven, y donde el Santo Oficio, como se ha visto, mostró siempre ejemplar benignidad. ¿Cómo juzgó nuestro viajero el fanatismo puritano? En Nueva Haven, en 1784, leyó con irónica curiosidad el manuscrito de las *Blue Laws*, entre las cuales "varias resoluciones de la gran Corte donde se castiga con multa y azotes a un marido que dio un beso a su mujer en público siendo domingo; otro, por beber a la salud de otros en domingo; otros, por jugar y retozar con los muchachos, igual castigo; otros, por tener cenas frecuentes y compañía en su casa, etc. Tal era el fanatismo y modo de pensar de esta gente un siglo y medio hace". En Massachusetts, Miranda visitó a Gallors Hill, "lugar donde se acostumbraba a ahorcar a las brujas en tiempos de craso fanatismo". En Shelter Island, Wethersfield, cerca de Nueva York, tiene todavía ocasión de burlarse

"del fanatismo y errado modo de pensar que en aquel tiempo (hace ochenta y seis años) prevalecía por todo este Continente". En los archivos de la ciudad de Salem notaba que, hacia 1667, los tribunales habían condenado: "marido y mujer, por haber cometido fornicación antes de estar casados, fueron azotados y multados; otros, por decir *by God*, multados; otros, por haber fornicado, simplemente, azotados y multados; una mujer, por no asistir a la iglesia, azotada y multada; otros, por jugar a los naipes, simplemente, multados, etc., etc.". Y no se crea que el venezolano apunta sólo las curiosidades que se veían en las colonias británicas muchos años antes de su llegada: los Estados Unidos estaban ya constituidos cuando aquél presenció en la iglesia de uno de los pueblos citados este hecho insólito para un espíritu latino: "Un pobre joven que hacía pocos meses se había casado y tenido un hijo antes de los nueve. Habiéndole llevado a bautizar, el cura rehusó administrarle dicho sacramento ínterin su padre no confesase públicamente el pecado; de modo que vea usted aquí este pobre joven ante toda la congregación, al tiempo del servicio, declarar que había ch... a su mujer antes de casar con ella... En mi vida he sufrido mayor bochorno... ¡Qué barbaridad!"

El historiador anglosajón Ashley, citado por Carlos Pe-reyra, apunta: "Sólo en Pensilvania y en Rhode Island había algo que pudiera llamarse libertad religiosa". La privación de ciertos derechos políticos continuó castigando el delito de catolicismo en los dominios británicos. Miranda calificaba curiosa-mente de "grave solecismo" el hecho de que las leyes de Boston admitiesen la libertad de cultos y excluyeran al propio tiempo de todo cargo legislativo o representativo a quien no jurase pro-

fesar la religión protestante. Análoga observación hacía a su paso por Bremen, en Alemania, donde no se permitía a los católicos tener capillas ni tampoco ocupar empleos públicos.

La libertad de cultos en Inglaterra data de 1829, y la desigualdad en materia religiosa era todavía tan marcada en 1850 en aquel país, que los miembros del Parlamento debían invocar en el juramento su fe de buenos cristianos, lo cual equivalía en realidad a ser anglicanos o antirromanos; el barón de Rothschild, diputado de la City, no podía tomar parte en las votaciones, y aun fue objeto de una moción de expulsión de la Cámara.

Hasta nuestros días existió en Prusia, y no sabemos que se la haya derogado, la prohibición de nombrar a los judíos oficiales del ejército.

Por lo demás, el Santo Oficio español se había modificado notablemente en el curso del siglo XVIII. En diciembre de 1764 Beaumarchais escribía al duque de la Vrillière: "Esta terrible Inquisición, contra la cual se arrojan fuego y llamas, lejos de ser un tribunal despótico e injusto, es, al contrario, el más moderado de los tribunales por las precauciones que el actual rey Carlos III ha tomado contra los abusos de que podía haber quejas; está compuesto no sólo de jueces eclesiásticos, sino también de un Consejo de seglares, entre los cuales figura el Rey como primer oficial. La mayor moderación es el resultado del combate perpetuo entre las opiniones de todos estos jueces, cuyos intereses son diametralmente opuestos. Los españoles nos reprochan, con razón, nuestras *lettres de cachet*, cuyo abuso les parece la inquisición más violenta". Y otro francés, Laborde, dice en su *Itinerario* de España que la Inquisición es "un ministerio de policía más

bien que una autoridad religiosa, que condena a prisión y a galeras crímenes que en otras partes son castigados con la muerte”.

Hacia aquella época se habían fundado logias en España, y la francmasonería tomaba incremento, a pesar de las medidas dictadas por Fernando VI. Bajo Carlos III, la Corte misma simpatizaba con la institución masónica. Grandes señores como el duque de Alba, políticos notables como Aranda, propagaban las ideas llamadas nuevas, importadas de Francia. Hasta existía cierto número de obispos medio jansenistas que —dice Geoffroy Grandmaison— “mezclaban sus debilidades doctrinales a sus debilidades políticas”.

Mas volviendo a Venezuela, veamos si la Capitanía era aquella especie de teocracia de que hablan algunos. Conviene recordar, ante todo, que la Monarquía española no tenía ningún carácter teocrático y que su rey, protector de la Iglesia por religión y por política, no aparece ante sus súbditos cual la mitad de Dios, como se cree el emperador germánico; en cualidad de Papa, como se proclama el rey de Inglaterra; ni en taumaturgo divino, como el rey de Francia, David ungido por el Señor, curador de bubones y otras enfermedades en virtud de la Santa Ampolla. Felipe II es católico devoto, ascético, pero es, sobre todo y en fin de cuentas, un gran monarca, a pesar de la legendaria brumazón que envuelve su formidable figura, falseada completamente en innumerables libelos infamatorios por sus enemigos políticos y religiosos, que eran también enemigos extranjeros de España o españoles traidores y tráfugas. Felipe es no sólo el primer funcionario del Imperio por la concienzuda laboriosidad con que ejerce su real oficio, sino también un constructor faraónico de perennes monumentos, un protector de las ciencias y de las

artes, y por ello verdadero príncipe del Renacimiento. Sus antecesores, soberanos autóctonos, conservaban con su origen puramente constitucional, si así puede decirse, el espíritu de tolerancia de que dieron pruebas repetidas los adversarios en la guerra de Reconquista. Sus sucesores, que llevaron a España, como su padre y él mismo, el absolutismo alemán, no trataron nunca, sin embargo, de atribuirse carácter sagrado alguno. Comparado con el jefe del Santo Romano Imperio y con otros soberanos de entonces, el español resulta, políticamente hablando, el más laico de los reyes de Europa. No se notó nunca en la evolución de las instituciones políticas españolas esa tendencia que un profesor polaco ha caracterizado con el expresivo neologismo de "sacralización" y que puede aplicarse no sólo a ciertos períodos de la civilización antigua, sino también, como acaba de verse, a varias monarquías europeas de la época moderna. Ninguno de los grandes teólogos españoles tuvo por divino el derecho de los reyes, y, por el contrario, muchos de ellos expusieron teorías de las cuales sale, como necesaria consecuencia, el principio de la soberanía popular. Vives, Suárez, algún otro, son republicanos en el sentido kantiano de la palabra.

En Venezuela el clero era respetado, pero en realidad tenía poco poder. Desde luego existía, como en el resto de América, el patronato que permitía a la Corona vigilar la política de la Iglesia y los actos de sus ministros. Es un hecho incontrovertible que los reyes aplicaban el derecho establecido con tanta o mayor rigidez que algunos de nuestros gobiernos republicanos, y es improbable que aquéllos hubiesen abandonado ciertas regalías caídas luego en desuso. El espíritu del patronato era tan severo y tan estricta su ejecución por las autoridades españolas que,

según dicen los Cuervo, cuando se trató en 1824 de adoptar la institución en Colombia, "esta medida, muy propia de legistas imbuidos en las doctrinas de los abogados regios", no entraba en las miras de Bolívar y Santander, a juzgar por ciertas manifestaciones de entrambos que dichos autores citan. De cómo entendían los reyes dirigir su política religiosa en las Indias dan fe, particularmente, las constantes negociaciones de Felipe II con la Santa Sede, de las cuales publicaba hace poco sustanciosa noticia el R. P. Leturia, con ocasión del Congreso Internacional de la Prensa celebrado en Colonia. Ya Fernando el Católico aplicara a los negocios de la Iglesia americana su "absorbente y centralizadora concepción", obteniendo del Papa sobre diezmos, presentación de beneficios y fijación de límites de las provincias eclesiásticas, facultades que son la esencia del real patronazgo. Más estricto que Carlos V, renueva Felipe II la política de su bisabuelo, y obra como si estuviese revestido de un "vicariato laico", de "una especie de delegación permanente de la Santa Sede en el Nuevo Orbe". Niégase entonces y siempre la Corona a admitir nuncios en las Indias ni influencia del de Madrid en aquéllas, "porque el meter la mano el nuncio —rezan reales instrucciones— en esto ni en otra cosa que a aquellas provincias toque, podría traer inconvenientes de mucha consideración". La política real, inspirada por el cardenal Espinosa, tendía a la creación de un patriarcado que resolviese los negocios de la Iglesia americana sin pasar por Roma y con el pretexto de evitar retardos, pretensión que, naturalmente, alarmaba a la Santa Sede. De la falta de acuerdo entre ésta y la Corona sobre las decisiones de la junta de 1568, resultó, según el eminente jesuita de Oña, que "el gobierno eclesiástico del Nuevo Mundo, impulsado por las reales cédulas de los dece-

nios posteriores y en parte por la acción enérgica y centralizadora del mismo Toledo (ex virrey del Perú), iba tomando un colorido cada vez más laico y regio". Y con referencia al fuero eclesiástico, dice el ilustre Baralt: "Grandes precauciones tomaron las leyes españolas para mantener en sus justos límites este privilegio concedido al clero, e impedir que la ambición de éste o la ignorancia de los seglares llevase a los tribunales eclesiásticos otras causas que las que les estaban cometidas, pues reconocían el principio de que ellos habían recibido su potestad temporal de la munificencia de los príncipes y que éstos podían, por tanto, limitarla o abolirla, según su voluntad".

Abundan los ejemplos, en España como en América, de disputas entre las autoridades civiles y eclesiásticas, de las cuales no salieron siempre bien libradas las segundas. No conviene, sin duda, atribuir grande importancia a las desavenencias del obispo venezolano con el Ayuntamiento por el puesto de los escaños en la iglesia, la cauda y pajes episcopales, el agua bendita para el gobernador, los quitasoles del cabildo eclesiástico y otras de estas graves futilidades. Pero es evidente que desde los primeros tiempos de la colonia surgió una competencia que, bajo mil formas, versaba sobre el mantenimiento de las regalías y la supremacía del poder civil. Y como el Consejo de Indias y la Real Audiencia darán la razón las más de las veces a la tesis secular, nada de extraño tendrá que gobernador y Ayuntamiento vengán a perder completamente "aquel respeto, veneración y santo terror" que, según el Padre Terrero, comenzaron temprano a relajarse. No sólo las autoridades y las clases elevadas perderán dicho respeto, sino hasta "el atrevido mulatismo" se permitirá "desacatos horribles", como aquellos de que fue víctima, con

Portales, el obispo Escalona. También monseñor Bohórquez, al finalizar su pontificado, se quejará de las injurias que le prodigaban los caraqueños.

Iniciase la larga querella durante el siglo XVI, y termina con el régimen. D. Diego de Osorio prohíbe a la potestad eclesiástica intervenir en los asuntos del hospital que acaba de fundar en Caracas. En la primera mitad del siguiente siglo lucha el obispo Bohórquez contra los gobernadores García Girón y La Hoz Berrío, a quienes excomulga. Cuando aquel prelado fue promovido a otra diócesis, Berrío le pidió definiera claramente su situación y suspendiese el ejercicio de su ministerio, porque no le estaba permitido acumular los beneficios. Excomulga también el obispo Angulo al gobernador Triviño y Guillamas y entra en abierta oposición con el sucesor de éste Meneses y Padilla. Opónese asimismo el obispo López de la Mata a Fernández de Fuenmayor, a quien más tarde excomulga el irascible Mauro de Tovar. Rompe relaciones con este último prelado Xedler y Calatayud y prohíbe al Ayuntamiento que asista a las funciones religiosas, yendo el pleito una vez más hasta el tribunal del Rey. Para 1641, dice Terrero, había "desavenencias entre lo más venerable y santo del estado eclesiástico y más autorizado y respetable del estado secular" y "los magistrados de la república" insultaban al pontífice.

La Corona marca expresamente la separación de las potestades, y Felipe V desaprueba que el obispo de Caracas haya asumido el gobierno en lugar de Portales, declarando que no conviene que el poder político esté en manos de eclesiásticos porque "hay peligro de que usurpen la jurisdicción real".

A veces el brazo secular se propasa a vías de hecho: en 1728 el gobernador Carrillo lanza su guardia contra la casa del provisor Istúriz, y éste no escapa al peligro sino refugiándose en la catedral. Los gobernadores intervienen directamente en los nombramientos eclesiásticos, apartan sus enemigos, imponen sus creaturas: Zuloaga obtiene la remoción del padre Muñoz del cargo de provisor; Ricardos impide al obispo Martí que nombre para dicho puesto al clérigo que éste desea y ordena que lo ocupe don Carlos de Herrera. Y según el piadoso cronista Terrero, sólo "un gobernador celoso de las soberanas regalías, igualmente que desinteresado", pudo contener los abusos y usurpaciones del nepotista provisor Lindo, privado de Su Ilustrísima Martí. Sobre Lindo, como sobre su antecesor Muñoz, caerá el castigo del Rey.

Quéjase al Rey con amargura, en 1789, el obispo de Mérida, fray Juan Ramos de Lora, por los desacatos de que son víctimas su persona y su ministerio por parte de los irreverentes oficiales públicos: el teniente justicia mayor de su ciudad episcopal "ajó como quiso mi jurisdicción —dice el pastor—; o por los oficios más desatentos que me ha llegado a pasar el gobernador de esta provincia, D. Joaquín Primo de Rivera, amenazándome con sus ardores militares, o con sus iras, como llegó en estos días a verificarlo, o por las repugnancias y contiendas que por los más de tales jueces se promueven..." La magistratura secular, como el poder político, parecían empeñados en una lucha total contra la jurisdicción eclesiástica; no le prestaban ninguna ayuda; dejaban impunes las injurias de que eran objeto; ejercían autoridad exclusiva en la administración de los hospitales y de las fábricas de las iglesias.

En Guayana, Centurión vuelve por las prerrogativas de la autoridad política, limita la competencia de los misioneros, impone el carácter civil a las empresas de colonización que crea directamente el gobierno. Hasta los obispos, como Milanés en Mérida, ordenan que "los mismos curas pongan todo el cuidado en no ingerirse en el gobierno temporal de los indios, por lo menos en contravención u oposición al corregidor".

Dirime Carlos III, en octubre de 1784, la disputa entre laicos y eclesiásticos sobre el rectorado de la Universidad; separa de éste el del Seminario, excluyendo del primero a los clérigos regulares; declara que en materias universitarias no hay fuero ni debe solicitarse para regularlas la anuencia de la jurisdicción diocesana, y prohíbe, en fin, al obispo mezclarse "bajo de ningún pretexto, ni con motivo alguno en asuntos comunes ni particulares de la Universidad". La tendencia hacia la secularización del personal docente no se observaba solamente en Venezuela: por esta misma época, el propio arzobispo-*virrey* Caballero y Góngora, en Bogotá, "emancipaba la instrucción de la tutela de los conventos", según apunta Arístides Rojas.

Cuando Carlos IV instituyó el real Consulado en Caracas, excluyó expresamente a los eclesiásticos de tan importante cuerpo.

La autoridad eclesiástica se inquietaba del desarrollo del teatro en Caracas y pretendía ejercer la censura previa de las obras impresas o manuscritas. A esta pretensión oponíase vigorosamente el poder civil, y nueva querella venía a juntarse a las muchas que solían dividir a ambas potestades.

Un cronista, contemporáneo suyo, llama al capitán general Guevara Vasconcelos irreligioso, indevoto, hombre de poca o

ninguna cristiandad y profesor de ajena religión, y al asesor jurado sujeto de igual o peor carácter. Emparan, por su parte, no vaciló en despojar con violencia a los dominicos de cierta propiedad, en la cual levantó la carnicería pública. Apenas se cita un gobernador, Unzuaga y Amézaga, que se haya hecho notar por su benignidad hacia las autoridades eclesiásticas, y aun el mismo Terrero juzga su conducta perniciosa y contraria al legítimo ejercicio de las soberanas regalías.

Para fines del siglo XVIII nótase relajación y disipación en las costumbres de algunos clérigos venezolanos y alejamiento de las altas clases sociales de las cosas de la Iglesia, prefiriendo los jóvenes el servicio militar a entrar como antes al Seminario. En 1784 el obispo de Mérida reprueba la posesión y porte de armas por muchos de sus sacerdotes, que no deberán jamás usarlas, "excepto en los casos de justa defensa de la patria", y la costumbre que tienen otros de vestirse con hábitos civiles que los "aseglarizan" y les permiten ocultar su estado. A pesar de las órdenes del prelado, había curas, por ejemplo, en la vicaría de San Cristóbal, que concurrían a bailes y saraos, vestían como se les antojaba y no hacían guardar la debida compostura en la celebración de los misterios. Obsérvese que el mandamiento episcopal sobre porte de armas coincidía con los del gobierno, pues la policía colonial aplicaba principios y procedimientos idénticos a los actuales y, precisamente en la provincia de Mérida, había prohibido el uso de armas ofensivas, cualesquiera que fuesen el estado, clase o condición de las personas, así como los juegos de azar, so pena de multas y prisión, y aun de azotes para los plebeyos.

Mas el alto clero de la colonia parece haber sido en su mayor parte virtuoso, cultivado y manso. "Es un error —dirá Miranda

a O'Higgins— creer que todo hombre, porque tiene una corona en la cabeza o se sienta en la poltrona de un canónigo, es un fanático intolerante y un enemigo decidido de los derechos del hombre. Conozco por experiencia que en esta clase existen los hombres más ilustrados y liberales de Sud-América." Y el tantas veces citado Depons escribe: "No hay obispo español que no sea buen teólogo, que no lleve vida ejemplar, que no resida de continuo en su diócesis, que no comparta sus rentas con los pobres, que no sea, en una palabra, un verdadero patriarca en el seno de su numerosa familia... Jamás he visto entre los canónigos uno que de sus rentas tome más de lo indispensable y deje de repartir el resto entre sus parientes y los pobres de la ciudad". No yerran, pues, quienes alaban al clero regular y secular de la colonia venezolana y afirman que, en general, no deben aplicársele las censuras a que pudo dar lugar la conducta de muchos sacerdotes y frailes en otras partes del Imperio.

No son raros los ejemplos del espíritu civilizador de nuestros obispos del antiguo régimen. En 1674, Acuña construye un acueducto que lleva a las plazas públicas el agua de Catuche. Baños y Sotomayor, y Calatayud fueron grandes prelados que honraron la mitra de Venezuela y contribuyeron eficazmente al progreso del país. Cuando la epidemia de viruelas de 1764, Díez Madroñero "empeñó su mitra en cerca de veinte mil pesos" para socorrer a los enfermos. Ibarra repartía secretamente sus rentas entre los pobres vergonzantes. Torrijos, hombre de ciencia y voluntad, llevó a Mérida, en 1794, libros, instrumentos de física y vastos proyectos de cultura y construcción. Baralt recuerda que los clérigos Escalona y Echezuría "destruyeron el peripato, leyendo los primeros cursos de filosofía moderna". A veces, el obispo

intervenía ante el poder civil, ejerciendo su antiguo ministerio de defensor de la ciudad: así sucedió, por ejemplo, cuando el de Caracas reclamó, en 1798, contra el impuesto de la carne y también contra el envío de los hombres casados a las guarniciones lejanas.

Es errónea la creencia de que los conquistadores inundaron desde el principio la provincia de sacerdotes, frailes y monjas. La carencia de clero fue una de las causas que determinaron a los colonos a enviar a España a Sancho Briceño, y precisamente en esta parte su misión fracasó por haber dejado incumplidas las órdenes del Rey los provinciales de la Española. Para 1560 no había un solo cura en todo el territorio de Trujillo, y el único que había en Mérida debió venir hasta allí durante cierto tiempo, una vez por año, a administrar los Sacramentos.

En 1567 se fundó en Mérida el convento de San Vicente Ferrer y en 1651 el de clarisas. Para la época de Oviedo y Baños había en Caracas 40 dominicanos, 50 franciscanos y 16 mercedarios, así como 62 monjas concepcionistas. En Maracaibo existía un convento de frailes franciscanos. En Carora, dos o tres frailes. En Coro había apenas dos curas seculares y un "convento corto de San Francisco". En El Tocuyo dos conventos, de franciscanos y dominicos, "ambos de corto número". En Valencia, dos o tres monjas. En Trujillo, dos conventos de frailes y uno de monjas, tan escasamente provistos como los anteriores. En 1739 había en Mérida cuatro conventos: dominicos, franciscanos, agustinos y clarisas, más un establecimiento de jesuitas. Para 1772 se contaban en Caracas 60 monjas concepcionistas, y, según el reglamento del convento de las carmelitas, el número de éstas no podía exceder de 25. En la misma época el convento de Trujillo

contenía 27 religiosos. En 1790 existían en Venezuela 456 clérigos seculares, y en la diócesis de Caracas, 75 regulares. Las monjas profesas de Venezuela, Nueva Granada y Quito eran alrededor de 800. Tales cifras, que no son excesivas si se las compara con las actuales de algunos países europeos, ilustran suficientemente la materia. Y nótese que la pragmática de 12 de abril de 1767, que ordenó la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles, fue inmediatamente aplicada en Venezuela. Si juzgamos por las instrucciones dadas en enero de 1786 por Su Ilustrísima Ramos de Lora, para la vida en común, las 18 clarisas existentes entonces en Mérida vivían hasta aquella fecha bajo un régimen particular que dejaba subsistir entre ellas diferencias de fortuna y rango social, lo que determinaba hábitos de independencia y separación incompatibles con el espíritu de la regla.

En los últimos años de la colonia había en la Capitanía tres sedes episcopales: la de Caracas, que en el siglo XVI estuviera en Coro y que fué elevada a la categoría arzobispal en 1803: la de Mérida, establecida en 1777, sufragánea durante los primeros años del arzobispado de Bogotá, y la de Guayana, creada en 1790, y que dependió del arzobispado de Santo Domingo.

La renta del clero se sacaba del diezmo, del cual se reservaban al Rey dos novenas partes de la mitad, "en señal —dijo Fernando el Católico— de superioridad y del derecho de patronazgo y por haber ganado las dichas ínsulas". La cuarta parte del total correspondía al obispo. En los comienzos del siglo XIX la renta anual de la mitra de Caracas estaba reducida a cuarenta mil pesos. Las regiones del Apure formaban, según el cronista anónimo, "la mejor y mayor porción de la opulenta décima" de la sede caraqueña. Aquellas "pingües campiñas" pasaron al obispado de

Mérida; pero a pesar de ello este último apenas percibía diez mil pesos. El Rey pagaba de su peculio cuatro mil pesos al obispo de Guayana, pues el diezmo de esta provincia iba todo a la Corona.

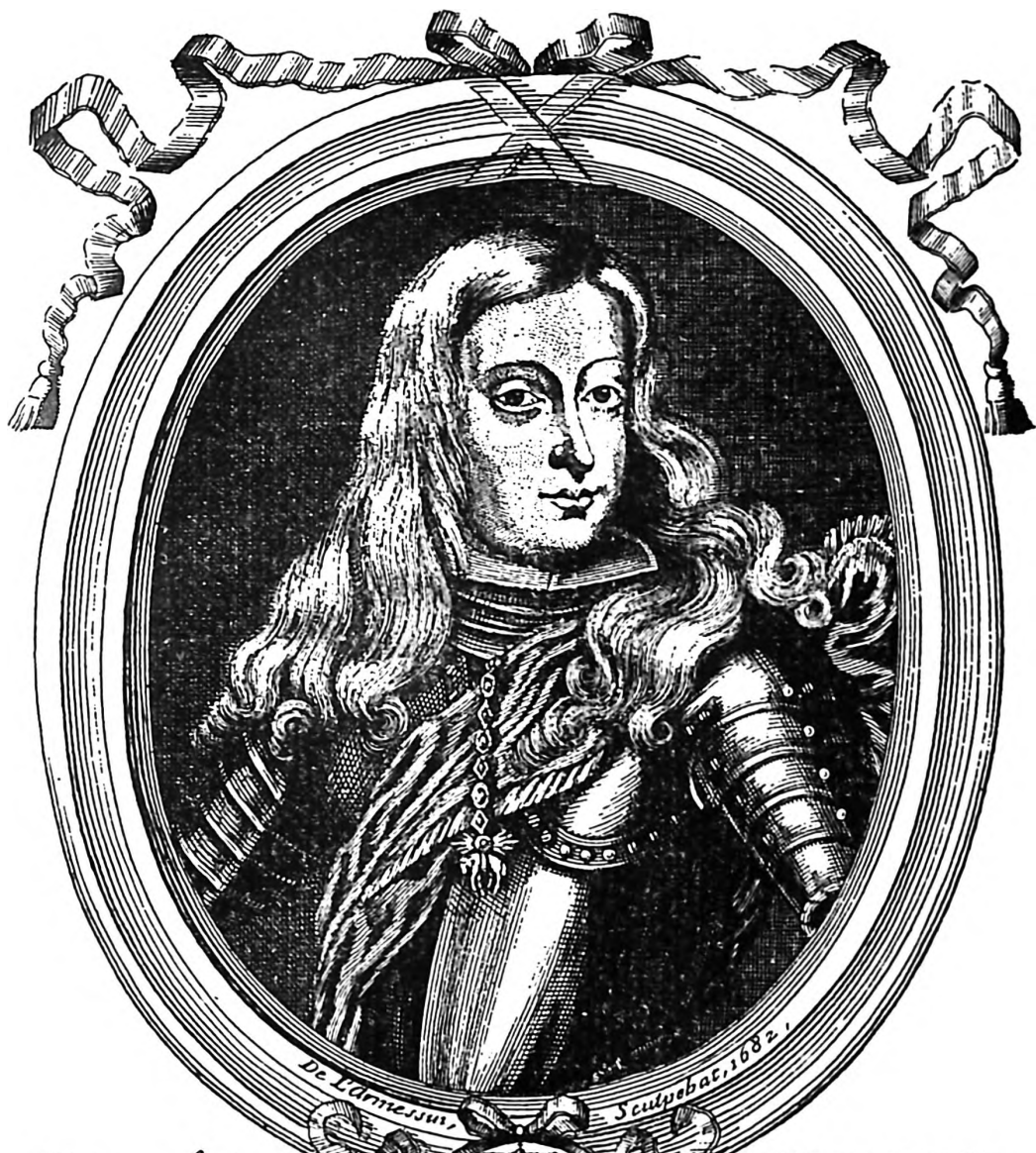
Recuérdese que en Inglaterra subsiste la milenaria institución del diezmo, cuyas tres cuartas partes van a la Iglesia nacional, y que los agricultores de aquel país no han tratado jamás de liberarse de la pesada carga, que se considera como una especie de hipoteca antes que como impuesto propiamente dicho.

Para concluir diremos que los bienes de manos muertas se constituyeron paulatinamente en América contra la tendencia general de las leyes de Indias y la letra expresa de ciertas ordenanzas expedidas por Felipe II y Felipe IV. Desde 1662 se prohibió a los escribanos autorizar testamentos en los cuales se nombrase al confesor heredero, legatario o fideicomisario. Estas y otras medidas más amplias y radicales fueron renovadas en los últimos años del régimen colonial, sin buen éxito, es cierto, porque el espíritu religioso de la población hallaba siempre modo de eludir el cumplimiento de la ley. Por lo demás, los capitales de los conventos, comparados con los de ciertos hacendados, eran exigüos. El de las monjas del "Regina Angelorum" de Trujillo se calculaba en 41.472 pesos fuertes. Las carmelitas de Caracas tenían 37.000 pesos de capital, con renta de 3.850 anuales, lo cual da un interés de 10,40 por 100, inferior al que actualmente perciben los accionistas del Banco de Venezuela. Según el obispo Martí, el convento de concepcionistas disfrutaba, en 1772, de una renta de 17.727 pesos que, calculados al interés citado, indicarían un capital de 170.000 pesos, poco más o menos.

En todo caso, sería difícil pronunciarse con entero conocimiento de causa sobre los efectos reales de la institución de manos muertas en la economía del país, sin estudiar a fondo las dudosas estadísticas de la época, si existieren. Depons apunta que el censo de 5 por 100, atribuido a los capitales legados a las iglesias, estorbaba el desarrollo de la agricultura y era excesivo, porque los bienes raíces apenas producían 4 por 100, deducidos los gastos de explotación.

VII

LA INSTRUCCION PUBLICA



CHARLES II^e DU NOM

Fils de Philippe III^e Roy d'Espagne
de Ferdinand III^e Empereur, Nacq^t le
Arise le 17^e 7^{bre} 1665, il fut Procla
Medina a Madrid le 8^e Octobre de
Marie Louise d'Orleans Fille d'Arnee
d'Orleans & d'Henriette d'Angleterre

ROY D'ESPAGNE

et de Marie Anne d'Autriche Fille
6^e 9^{bre} 1667, Apres la mort de son Pere
me Roy des Espagnes par le Duc de
la mesme Annee, il a Espouse en 1679
de Monsieur Philippe de France Duc
Sour du Roy d'Angleterre apint regnant



DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS REY DE CASTILLA de Leon de Aragon de
tas dos Sicilias de Jerusalem de Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de
Mallorca y de Sevilla de Cerdena de Cordova de Corsega de Murcia de Iam de las Algarue
de Algecira de Gibraltar de las Islas de Canaria de las Indias Orientales y Occidentales Islas
y tierra firme del Mar Oceano Archiduque de Austria Duque de Brabante y Milan Conde
d'Alsurg de Flandes Tirol y Barcelona Senor de Vizcaya y de Molina &c.
Audi Chex la Vega Berward Rue S^t Ineq^a a la P^{me} dor Pres S^t Souerin, Ausc Prind du Roy

QUÉ crédito merece la afirmación de que el gobierno español mantenía deliberadamente la colonia venezolana, como las demás de América, en la ignorancia y la oscuridad en punto a ciencias e instrucción?

La pregunta exige respuesta categórica, entre otras razones, porque habiendo nacido en el seno de la sociedad colonial el movimiento de ideas que determinó la Independencia, precisa establecer las circunstancias del medio intelectual de entonces, para apreciar hasta dónde nuestra revolución fue nacional, es decir, criolla.

Uno de los principales actores en el drama de la Independencia, ilustre prócer civil, Francisco Javier Yanes, fue quien primero rechazó la mendaz acusación, y lo hizo en términos definitivos: "Se ha creído por algunos que los años que precedieron a la revolución fueron de barbarie y de ferocidad. Hablando con justicia, los españoles dieron a América cuanto tenían: si encerraba pocos ramos la enseñanza general de las ciencias, casi iguales se cultivaban en la metrópoli. Para el año 10 se había levantado una juventud ávida de ideas, amiga de las letras, inteligente

y pensadora, llena de gusto y elegancia. Los grandes varones que ilustraron a Colombia se formaron bajo el régimen colonial". Aquella generación estaba, según el colombiano Vergara y Vergara, "compuesta de sabios en todas las materias conocidas, desde la política y el arte de la guerra hasta el arte de escribir con elegancia". Es dudoso que nuestros países hayan producido, en cien años de vida independiente, otra *élite* superior o siquiera comparable.

La cultura llevada por los españoles no se extendió de manera uniforme por el vasto Continente, ni se desarrolló en todas las colonias con idéntico ritmo y rapidez. Establecimientos privilegiados hubo, como México y Lima, en los cuales la afluencia de europeos y el pronto nacimiento de riquezas considerables formó temprano una sociedad pulida y capaz de manifestaciones literarias y artísticas. No pudo, desde luego, competir con aquellos virreinos la colonia venezolana, y fue en ella mucho más lento el progreso, primero por la duración de la guerra de conquista, y después por el hecho de no ofrecer a la explotación del peninsular provechos inmediatamente realizables, como el de las minas.

La primera escuela del Continente fue fundada por los frailes en tierras de Cumaná, hacia 1515, y a mediados del siglo había ya en ciertos países de América planteles para la educación de los hijos de los conquistadores, de los mestizos y de los indios, como los creados en Nueva España por el virrey Mendoza y por los frailes franciscanos y agustinos. Allí se enseñaba la gramática, la filosofía, la medicina, la geografía y otras ciencias, amén de la teología y el latín. El obispo Zumárraga abrió en México, en 1534, un colegio secundario con cátedra de ciencias

exactas. Por esta época apenas pueden mencionarse en Venezuela las lecciones de gramática y latinidad que daba personalmente fray Pedro de Agreda, obispo de Coro, quien ensayaba formar algunos jóvenes para el sacerdocio. En Caracas se establecieron una escuela y una cátedra de gramática por orden de Felipe II. La cédula de 22 de junio de 1592 dispuso la creación del Seminario tridentino, destinado en especial, aunque no exclusivamente, a educar a los descendientes de los primeros conquistadores. El procurador Simón de Bolívar, en vista de las condiciones generales de pobreza de la colonia, pidió sólo que se proveyese una clase de castellano. Los jesuitas debían dar, en la mayoría de las colonias, gran impulso a la obra de la enseñanza. En el siglo XVII se contaban en Nueva Granada más de veinte colegios superiores y un número mucho mayor de escuelas privadas.

La Universidad de México, decretada por Carlos V desde 1521, se inauguró en 1553; la de San Marcos, de Lima, empezó a funcionar en 1551; la Universidad chilena data de 1619; la de Quito, de 1620; la de Chuquisaca, de 1623; la de Guatemala, de 1676.

En 1536 los españoles llevaron la imprenta a México, y en 1584 a Lima; Guatemala tuvo en 1667, y Santa Fe en 1738. Asegúrase que en la ciudad de Puebla existían ya doce imprentas mediando el siglo XVII. A fines del siguiente había siete en Cuba. Venezuela hubo de esperarlas hasta principios del XIX; pero, a juzgar por las fechas y ejemplos arriba citados, es improbable que el retardo se debiese a propósito del gobierno español de negar el beneficio a los venezolanos. De las colonias inglesas, Boston recibió la imprenta en 1639, y Jamaica en 1756.

En 1776 apenas había una en Virginia. Todo parece haber dependido de la importancia de la colonia, puesto que Humboldt pudo hacer esta declaración decisiva: "Ninguna ciudad del Nuevo Continente, sin exceptuar las de los Estados Unidos, tiene establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital de México". Un revolucionario socialista mexicano, el insigne orador y político D. Ezequiel Padilla, no temió decir en 1925, en plena Cámara de diputados de su país, que en la época colonial "México era el asiento de los capitales más ricos de la tierra; se hacían obras de ingeniería verdaderamente estupendas, de las cuales quedan inmortales testimonios; los obreros de México daban sus nombres a las principales calles de la ciudad y eran admirados en la Corte, y, por último, las más suntuosas y más grandes construcciones de arte y de verdadera riqueza estaban en la ciudad de México, haciendo un contraste notable con las rudimentarias construcciones de Norteamérica".

El Seminario decretado por Felipe II para Caracas entró en actividad mucho más tarde, en tiempo de los obispos Tovar y González de Acuña, y fue reorganizado por Baños y Sotomayor en 1682, habiendo sido, por último, transformado en Universidad por cédula de Felipe V, fecha 22 de diciembre de 1721, y bula de Inocencio XIII de 16 de diciembre del año siguiente. Hubo allí desde el principio cátedras de filosofía, moral práctica, cánones, derecho civil, música, retórica, latinidad, etc. La Universidad se desarrolló normalmente y la Corona proveyó a sus necesidades y progresos de acuerdo con las circunstancias. Los estudios de matemáticas se abrieron en 1760 bajo el gobierno de Estenoz y por iniciativa del coronel de Ingenieros Nicolás de Castro; la Academia que éste fundó fue aprobada por el Rey

poco después, pero no duró mucho tiempo. La cátedra de medicina se creó en 1763, a esfuerzos del doctor Campíns y Ballesteros, quien catorce años más tarde fue designado como protomédico y médico del hospital de Caracas. Los nombres de Molina, de Tamaris y algún otro dieron reputación a nuestra primera Facultad de Medicina.

No faltaban entonces las iniciativas privadas en materia de instrucción: en 1768 el licenciado Malpica consagró su fortuna, evaluada en 19.000 pesos fuertes, a la fundación de un colegio de niñas pobres o huérfanas de seis a quince años. Este establecimiento, que la autoridad civil protegió, pudo recibir desde sus comienzos veintisiete educandas. En 1772 el ejecutor testamentario del navarro Iturralde destinó cierta renta al sostenimiento de un maestro de escuela para los hijos de los pobres, sobre todo huérfanos, y allí recibían clase hasta veinte alumnos. El padre Andújar trató de revivir en 1785 los estudios de matemáticas, y el fracaso de su empresa, debido a causas que nos escapan, ha dado lugar a la fábula de "no conviene que se ilustre a los americanos". Ya en 1767, cuando se transformó el colegio de los expulsados jesuitas en colegio de nobles para caraqueños y provincianos, tanto el gobernador Solano como el Ayuntamiento habían querido que se incluyese en el programa del plantel la clase de matemáticas. Hablar de oposición de los nobles a esta medida, como se ha hecho, parece erróneo sobre todo si se piensa que muchos de aquéllos eran miembros del Ayuntamiento, autor del programa.

En septiembre de 1786 Carlos III, para "el fomento de los estudios", reorganizó las cátedras de la Universidad y sus dotaciones y creó la enseñanza de la física experimental. Dos años

después se ordenó que todas las Universidades americanas, de acuerdo con la ley de Indias, confiriesen gratuitamente el grado de bachiller a los estudiantes pobres, "sin poner en ellos cláusula que denote haberse dado a título de pobreza y suficiencia, para que de esta suerte lo pretendan sin rubor los pobres beneméritos".

Para 1800 la enseñanza en Caracas no difería de la que se daba en España. Y no debía estar muy atrasada la instrucción superior en la Península cuando Humboldt podía recomendar a los criollos nombres de sabios ilustres españoles, juntos con los de algunos alemanes y franceses. Aprendíanse en Venezuela, con la Filosofía y la Teología, el Derecho, las Matemáticas y la Medicina de la época. Ramón Azpúrua comprueba que la Universidad de Caracas formó en los últimos años de la Colonia "médicos aventajadísimos y muy notables". Tal es también la opinión del doctor José Izquierdo, que ha estudiado el asunto con relación a la personalidad de Vargas. Obsérvese que en 1797 y 1800 se decretó la admisión de los pardos a la escuela de medicina y al ejercicio de esta profesión, de modo que en ese punto la reforma de 1827 no trajo novedad alguna.

Dice Arístides Rojas que los caraqueños se asombraron al ver en manos de Humboldt "por primera vez instrumentos de física y matemáticas". Pero desde 1794 el obispo Torrijos había llevado a Mérida, con una biblioteca de miles de volúmenes, un gabinete de física, cuyos restos pueden verse hoy en la Universidad: es improbable que la pequeña ciudad aislada de la cordillera haya realizado aquel progreso antes que la capital. Humboldt mismo admiró en Calabozo el talento, la habilidad, la instrucción de D. Carlos del Pozo y Sucre, hombre versadísimo en ciencias físicas que ocupaba los ratos que le dejaba libre su cargo de sub-

delegado de la renta de tabacos en construir aparatos, como cierta máquina eléctrica, "que se puede comparar con las mejores que he visto en España y Francia".

Los que formulan fáciles censuras sobre la preponderancia del elemento religioso o teológico en la enseñanza universitaria colonial debieran recordar el juicio de Miranda sobre la Universidad de Cambridge, en Boston, por los años de 1784, ya constituidos los Estados Unidos: "Paréceme este establecimiento más bien calculado para formar clérigos que ciudadanos hábiles e instruidos, y cosa por cierto extraordinaria que no haya una cátedra siquiera de las lenguas vivientes y que la teología sea la principal cátedra de dicho colegio". En Nueva Hampshire, Miranda se burla de los presidentes de dos colegios, a quienes llama pedantes decidores de "escolásticas majaderías". Más tarde, el caraqueño dirá de la Universidad de Copenhague: "Fui por la mañana en casa de Souza, y juntos con Mr. Riegels (que es un escritor fuerte), fuimos a ver la Universidad, en que hallamos como unos doscientos cincuenta estudiantes que en una gran sala daban lección en doce clases a un tiempo, esto es, en doce mesas, a la cabeza de la cual hay un maestro. El método me parece que trae alguna confusión. El griego, latín, derecho natural, historia, etcétera, son los ramos que se estudian, sin que la física ni las matemáticas entren para nada... De allí pasamos a una institución que dejó fundada Borrichius, para el entretenimiento de dieciséis estudiantes, a quienes, además de alojamiento, se dan sesenta rixdales al año. Tienen su librería, etc., para que se cultive la química; mas con cuánta sorpresa vi que en lugar de esta ciencia lo que se estudia son las obras de Lutero, etc., para formar clérigos".

La leyenda de la absoluta ignorancia en que vivían los venezolanos bajo la autoridad metropolitana se funda en gran parte sobre el famoso informe de Sanz acerca del estado de la instrucción pública en la Capitanía. Cuanto en realidad demuestra aquel documento, a nuestro juicio, es la ciencia y libertad de espíritu de un abogado de Caracas de fines del siglo XVIII. Sanz salía de las escuelas coloniales y, como todos los hombres civiles que con él figuraron en la lucha por la Independencia, había completado su instrucción por métodos de autodidacto, en un ambiente que no era para ello más ni menos favorable que el de gran número de países extranjeros en la misma época. Baralt habla del "caudal de instrucción inmenso" que poseía Sanz. Jurista, literato, filósofo, economista, poeta, el ilustre licenciado puede considerarse como el tipo del humanista de los últimos años de la Colonia. Hombres de su clase estaban tan familiarizados con los autores extranjeros como con las obras maestras del ingenio español. Y aquellos medios, el de Nueva Granada, que produce a Caldas; el de Quito, donde viven Mendoza y Maldonado; el de Venezuela, donde enseña Sanz, están lejos de ser atrasados o bárbaros. Ségur y Humboldt admiraron la cultura intelectual y social que había en Caracas. Depons afirma que eran pocos los jóvenes que allí no comprendieran y hablaran francés o inglés, y a veces ambas lenguas. Por otra parte, muchas de las críticas de Sanz, que no era noble, iban dirigidas contra los nobles "desdeñosos de la agricultura", entregados a disputas pueriles sobre linajes y preeminencias, y quienes, con grandes cualidades de ingenio y de valor personal, adolecían de muchos de los vicios o defectos que siempre han tenido las clases elevadas en todo país. Sea lo que fuere, al comenzar el siglo XIX

habíanse aplicado importantes reformas no sólo en la enseñanza universitaria, sino también en la primaria. Un pedagogo cuyo nombre tendrá la fortuna de unirse al de Bolívar, y a quien varios historiógrafos han dado notoriedad ruidosa, Simón Rodríguez, presentó en 1794 varias sugerencias sobre escuelas que fueron aprovechadas por la municipalidad.

Sin duda, no abundaban en Venezuela las escuelas, como tampoco abundaban en las colonias británicas. Carlos Pereyra afirma que en el territorio de las Carolinas apenas existían cinco al terminar el período real, y Alabama, Mississippi y Missouri no las conocieron hasta 1830. Aun en Europa, Inglaterra y Francia no figuraban al comenzar el siglo XIX entre las naciones más adelantadas en materia de instrucción primaria, y a ese respecto venían después de ciertos Estados pequeños. El gobierno inglés mostró durante muchos siglos soberbio desdén hacia las escuelas nacionales, dejando a los particulares el cuidado de fundarlas y dotarlas, y la enseñanza no ha tenido nunca en Inglaterra carácter propiamente gubernativo. En Francia, hacia 1840, el 40 por 100 de los reclutas no sabían leer ni escribir.

¿Qué debe entenderse por americanos en lo concerniente a instrucción pública? Es improbable que la proporción de iletrados entre la gente blanca o tenida por tal en Venezuela fuese, a fines del siglo XVIII, muy superior a la que existía en la mayor parte de los países europeos. Los caraqueños del tiempo de Oviedo y Baños eran ya "tan inclinados a todo lo que es política, que hasta los negros (siendo criollos) se desdeñan de no saber leer y escribir". En cuanto a las clases bajas, obsérvese que en nuestra republicana América de hoy, si se exceptúan dos o tres países donde la afluencia de extranjeros ha creado sociedades compactas,

cuya inmensa mayoría se compone de blancos, la situación ha variado poco. Hechos estos reparos, puede concederse que los españoles no tuvieron suficiente número de escuelas laicas, aunque sí muchas misiones para instruir a los indios del Orinoco. El norteamericano Lummis escribe: "Aquellos primeros maestros enseñaron la lengua española y la religión cristiana a mil indígenas por cada uno de los que nosotros aleccionamos en idioma y religión. Ha habido en América escuelas españolas para indígenas desde 1524. Allá por 1576, casi un siglo antes de que hubiera una imprenta en la América inglesa, se habían impreso en la ciudad de México muchos libros en doce diferentes dialectos indios, siendo así que en nuestra historia sólo podemos presentar la Biblia india de John Elliot".

Muchos jóvenes de la nobleza y de la burguesía venezolanas iban a estudiar a Santo Domingo, Nueva Granada, México, España. En Madrid se instruyeron, por ejemplo, Bolívar y Mariano Montilla. Miranda dice en su carta al Rey de 10 de abril de 1785: "Tuve la fortuna de recibir clásica temprana educación en el colegio y real universidad de Santa Rosa de dicha ciudad (Caracas), hasta que, concluidos mis estudios de Filosofía, Derecho, Historia, etc., pasé a Europa con designio y vocación de servir a Vuestra Majestad en el ejército". Un joven criollo de Trujillo, Miguel de la Parra, enviado por su padre a estudiar en las universidades de la Península, se encontraba en ésta cuando sobrevino la invasión de los franceses; alistóse voluntariamente en las filas españolas en unión de sus compañeros de aulas y se batió contra el extranjero, saliendo herido en una batalla. Su caso no debió ser único. Y no se alegue que el gobierno real impedía a los jóvenes coloniales estudiar en partes extranjeras al Imperio,

pues hoy mismo vemos a cierta gran potencia europea que marcha, como se dice, a la cabeza de la civilización, prohibir a la juventud de sus posesiones asiáticas que venga a instruirse en planteles que no sean los de la metrópoli. Además, no eran raros los criollos venezolanos que viajaban, y el padre Sojo llevó de Europa a Caracas muchas ideas de progreso en varios ramos.

No existe ningún documento que demuestre la desaprobación por Carlos IV en 1785 al establecimiento de una cátedra de Matemáticas, por la excelente circunstancia de que este monarca no entró a reinar sino tres años después. La famosa frase sobre la instrucción de los americanos que arriba citamos, y que se pone también en boca de aquél con ocasión de la solicitud que presentaron los merideños para que se estableciera su universidad, no tiene fundamento alguno. Del texto de la real cédula de 18 de junio de 1806, renovada el 6 de octubre del año siguiente, aparece que el Rey negó el título de universidad al Seminario de San Buenaventura, en virtud de la oposición del claustro de Caracas y en vista también de la actitud de los maracaiberos, quienes pedían que dicha Universidad se instalase en su ciudad. No obstante, el Seminario recibió entonces la autorización de conceder ciertos grados mayores. Veinte años atrás se contaban ya en aquél, cursando clases de latinidad, filosofía y moral, cuarenta y dos estudiantes, "los más forasteros y pobres". El Rey validaba algunos cursos, a fines de grado en Caracas. En 1805 se empezaron los estudios de medicina en aquel plantel, que la Corona dotara de vastas y ricas tierras que habían pertenecido a los jesuitas. "Nuestro Seminario —comprueba el obispo en 1808— tiene ya las mismas cátedras que la Universidad de Caracas", y sus grados "tendrán el mismo valor que los que se con-

fieren en las Universidades de Santa Fe y Caracas". Y en pastoral de 6 de octubre de 1809 dice todavía monseñor Milanés que el Rey ha concedido al Seminario "la gracia singular, que no goza otro alguno de América, de conferir grados mayores y menores a sus colegiales y cursantes"..

En tiempo de Carlos III la instrucción recibió en América notable impulso. La Universidad de Lima ofrecía un programa de estudios científicos que puede considerarse completo para la época. En Santa Fe se creó un observatorio astronómico. Las escuelas de Quito y Guatemala fueron reformadas a fondo o vieron aumentadas sus asignaturas.

El propio Carlos IV, soberano al cual se atribuyen ideas estúpidas sobre instrucción y ciencias, fundó un instituto anatómico en Lima y aprobó en 31 de enero de 1798 la creación de una academia de Matemáticas en Santiago de Chile. Fue aquél quien eximió del derecho de alcabala a los libros importados de España a las colonias. Desde 1792 se estableció en Granada el colegio de nobles americanos, destinado —apunta Tulio Febres Cordero— a "educar civil y literariamente la juventud de primera calidad, nativa de América y las Filipinas, bajo un plan de estudios más amplio que el de las Universidades existentes para entonces en los dominios españoles de las Indias".

Por este tiempo existían en América periódicos muy importantes, como el *Diario de Lima* y el *Mercurio Peruano*, el *Papel Periódico* de Bogotá, las *Primicias de la Cultura* de Quito, y posteriormente se fundó *El Telégrafo* en Buenos Aires. Pero hay más aún: en 1796 el Rey ordenó la creación de un semanario de agricultura y artes, destinado a difundir en España y América, sobre todo por medio de los párrocos, los conocimientos y ade-

lantos de la época en materias agrícola e industrial. "Siempre ha visto el Rey con sentimiento —decía Godoy— que la muy apreciable clase de labradores esté abandonada a sus escasos conocimientos de la agricultura y que todos los cuidados, los auxilios y establecimientos benéficos se prodiguen en las ciudades... Su Majestad ama indistintamente a todos sus vasallos, pero en todos tiempos ha merecido un lugar distinguido en su soberana consideración la clase agricultora e industrial, a la que debemos el alimento y cuanto constituye la riqueza nacional". Su Majestad indicaba su intención de promover en las escuelas tan importantes estudios, de multiplicar las cátedras de agricultura y de veterinaria, de química y botánica, de alentar la formación de sociedades de economía rural e industrial. Preconiza el monarca la cooperación de las clases en beneficio de la riqueza común, "la recíproca correspondencia que debe reinar entre el agricultor, el fabricante y el mercader". La aplicación del nuevo programa sería empresa ardua, a juzgar por el prospecto; "pero no se perdonará gasto ni diligencia para desempeñarla completamente en beneficio de la patria". Y en circular dirigida a los obispos americanos para que difundiesen, por medio de los curas, los adelantos de entonces en lo relativo a agricultura y artes, decía todavía el ministro del Rey en 1802: "Su Majestad desea con impaciencia ver en sus días que se propaguen los conocimientos que puedan mejorar la suerte de sus vasallos agricultores y artistas".

Fue también Carlos IV quien, por noviembre de 1803, envió al cirujano Balmis a propagar el uso de la vacuna en América, en costosa expedición pagada por el tesoro real.

La Corona alentaba, pues, y protegía directamente la ciencia, del mismo modo que en aquella época lo hacían otros gobiernos.

Ya Felipe II ordenara compilar documentos y escritos de carácter histórico, geográfico, social y religioso, por cuenta del erario público, sobre el Nuevo Reino de Granada, a fin de que "la memoria de los hechos y cosas acaecidas en esas partes se conserven". Y al naturalista Hernández mandaba el Rey que escribiese sobre las plantas y animales de las Indias, trabajo que quedó hecho en quince grandes volúmenes. Pero fue sobre todo a fines del siglo XVIII cuando se marcó la política real en este particular. "Ningún gobierno —escribe Humboldt— ha destinado sumas de mayor consideración que el de España para el avance del conocimiento de los vegetales". La munificencia de la Corona había dotado con diez mil pesos anuales los trabajos de botánica que realizaba en Nueva Granada el sabio Mutis, correspondiente de la Academia de Estocolmo, de quien el citado viajero alemán admiraba la biblioteca en Bogotá, cuyo nombre oyó Miranda citar con elogios en Escandinavia y que el Rey mismo declaraba en real orden "bien conocido en Europa por su eminente instrucción en estas materias". Solamente las tres expediciones de botánicos enviadas al Perú, a México y a Nueva Granada costaron dos millones de francos al tesoro. Y como si esto no fuera suficiente, el marqués de Bajamar, ministro de Carlos IV, lanzaba en septiembre de 1791 un llamamiento a la generosidad de los colonos para que contribuyeran, "voluntariamente y sin el más leve incomodo", a la publicación de los resultados de estos trabajos, deseosa como estaba Su Majestad de que "tan preciosa colección y tan útiles descubrimientos hechos por los españoles a costa de imponderables fatigas, salgan a luz con la posible brevedad y debida perfección, para honor de la nación y beneficio de la república literaria".

Don Antonio Valdés, ministro de la Marina real desde 1781, uno de los primeros peritos navales de su época, trazó el plan de aquel vasto viaje de circunnavegación que durante el reinado de Carlos IV realizaron las corbetas "Descubierta" y "Atrevida", al mando del italiano Malaspina y de Bustamante y Guerra. La expedición, que zarpó de Cádiz el 30 de julio de 1789, demostró una vez más la capacidad náutica de los oficiales españoles y enriqueció los conocimientos humanos en materia de botánica, de litología y de hidrografía. Más de trescientas cartas geográficas, sondeos marítimos, observaciones astronómicas y atmosféricas, estudios de alta física y otros muy importantes de diversa índole, tal fue el resultado de este admirable periplo, durante el cual, de Acapulco, y en carta de 20 de diciembre de 1791 dirigida al conde Greppi, Alejandro Malaspina indicaba cómo Europa venía siendo engañada "por lo escrito en un millón de volúmenes" sobre lo que realmente era el Imperio español. "En verdad —concluía el italiano— no puedo reprimir mi asombro cuando considero hasta qué punto se cree en Europa un número infinito de absurdos, que no podrían existir ni aunque se los quisiese expresamente".

Celoso se mostraba el Rey en Venezuela del dinero dedicado a la instrucción pública, como lo prueba la reprimenda que recibió el rector Briceño por haber destinado una suma a la recepción del gobernador Vasconcelos y del obispo Ibarra: los fondos universitarios, declaró Carlos IV, "se deben invertir siempre en los precisos fines de su destino, beneficioso a la causa pública de la buena instrucción de la juventud en las ciencias útiles al Estado". Y subraya la consideración que se acordaba a los letrados la real desaprobación en que incurrió cierto auditor de guerra que, en

una ceremonia pública, usurpó el asiento del rector de la Universidad.

Mas dícese: había la prohibición de leer libros que no fuesen los permitidos por la Inquisición, de manera que los criollos, faltos de las luces que venían de Francia o Inglaterra, vivían en la oscuridad más completa y estaban reducidos a enterarse con subrepción de las ideas de filosofía y progreso que eran exclusivo patrimonio de las citadas naciones. De una manera general conviene recordar una observación curiosa de Julián Juderías sobre la influencia de la Inquisición en la producción española: "... los tres siglos de Inquisición corresponden precisamente al período de mayor actividad literaria y artística que tuvo España y a la época en que más influimos en el pensamiento europeo".

El catálogo de los libros vedados por la Inquisición española, impreso en 1790, comprendía 5.420 obras, sin contar gran cantidad de anónimos. Dos autoridades en la colonia prohibían la lectura de ciertas obras: la religiosa y la política, pero la organización inquisitorial hacía que la vigilancia en materias dependientes de la primera incumbiese también a la policía gubernativa o secular. Depons pretende que de todos los reglamentos españoles, el relativo a la prohibición de libros era el que mejor se cumplía. Pero, de haber sido así, ¿cómo se explica que los hombres de la Independencia estuviesen antes de 1810 al corriente de publicaciones francesas e inglesas proscritas? ¿Y cómo se explica que el propio Depons haya podido afirmar que "si la competencia (entre venezolanos y europeos) se mantuviera en el terreno de los conocimientos adquiridos, los criollos llevarían indudablemente la ventaja, pues, en general, los venidos de España encuentran en el país gente que les supera en cultura?"

En realidad, no sólo se concedían frecuentes licencias de lectura, sino se burlaba la prohibición, como sucede hoy con los decretos del *Indice*. Quienes juzgan del estado intelectual de todas las clases de la colonia con vista del elenco de los autores condenados por el Santo Oficio, cometen error tan considerable como sería el de juzgar de las lecturas actuales en los países católicos según las listas formadas por la Sagrada Congregación. En la Península misma, cualquiera podía comprar libros extranjeros, como lo prueba el ejemplo de Miranda, que, oficial del ejército real, adquirió allí gran número de obras prohibidas. Es muy posible que la denuncia que de tal hecho se hizo más tarde haya sido incidental y conexas con las demás acusaciones que frecuentemente presentaron contra el venezolano sus rivales españoles.

Los jueces eclesiásticos no ejercían, como pudiera imaginarse, autoridad discrecional e indiscutible en materia de prohibición de libros, puesto que sobre ellos estaba el poder civil. Una cédula de 18 de enero de 1762 dispuso que antes de condenar una obra se citase al autor o a quien quisiera defenderlo y se considerasen sus argumentos, dándosele ocasión para corregir o enmendar sus errores. El inquisidor, antes de lanzar su censura, debía presentar el edicto a la Secretaría de Gracia y Justicia. Un obispo, que se atrevió a protestar contra estas medidas del poder político, fue enjuiciado, y todos los demás se sometieron.

Los mismos españoles europeos que habitaban en América poseían, aun en villas y ciudades alejadas del contacto con el extranjero, bibliotecas completas con libros de toda índole. Es clásico el ejemplo del canónigo de Chuquisaca, D. Matías Terrazas, sacerdote mundano y cultivado, en cuya casa halló Mariano Moreno las obras de los filósofos y enciclopedistas del siglo XVIII.

Humboldt vio en alguna modesta casa de la provincia de Venezuela "una colección de libros bastante considerable", entre los cuales los de Feijóo y los científicos del abate Nollet. En Caracas se leía en sus originales a Racine como a Voltaire y Condillac; y aun en los severos claustros de Santa Rosa, Andrés Bello estudiaba a Locke en su propio texto. Sin contar el gran número de obras sospechosas que llenaban las bibliotecas de muchísimos criollos y españoles europeos, entre quienes se cita a fray Crisóbal de Quesada, al profesor Montenegro, al presbítero Escalona. El conde de Ségur halló en casas burguesas de nuestra capital, por los años de 1783, las obras de Rousseau y de Raynal. "He encontrado en las familias de Caracas —dice Humboldt— decidido gusto por la instrucción, conocimiento de las obras maestras de la literatura francesa e italiana." Y si Ségur y el norteamericano Daune admiraron la cultura de los caraqueños, el sabio alemán comprobó, además, en ellos lo que se ha convenido en llamar madurez política, es decir, información del extranjero, conocimiento del mecanismo y necesidades del Estado, aprecio de la libertad, deseo de un gobierno propio. Flor de aquel gusto literario y de costumbres refinadas fuera el salón de los Ustáriz, que ha podido calificarse de academia.

Las discusiones del primer Congreso republicano, y mil otras manifestaciones, indican que las clases superiores de la colonia —y por superiores debe entenderse no sólo la nobleza, sino, sobre todo, la burguesía educada— estaban al corriente de las cosas de la Europa de entonces, tanto como nuestras clases análogas pueden estarlo hoy de las cosas de la Europa actual. Peñalver, que probablemente no había salido antes de la ciudad de Valencia, probó en alguna ocasión que conocía la historia y la

psicología de los revolucionarios franceses, como las conocía el propio Miranda. Si la ilustración y las luces consistían en aquella época, como creen muchos, en haber leído a Rousseau, a los enciclopedistas y a dos o tres filósofos ingleses, es lícito afirmar que los directores de la sociedad venezolana eran ilustrados. Agreguemos que, afortunadamente para ellos, habían leído también otros libros.

La recomendación de no permitir que se introdujeran en Venezuela publicaciones francesas contrarias a la tranquilidad pública y a la religión católica, hecha por el Consejo de Indias al capitán general Carbonell en junio de 1793 y reiterada luego, y la real orden de 31 de julio de 1794, que cerró las cátedras de derecho natural y de gentes en los dominios españoles, no son más extraordinarias que las prohibiciones y censuras establecidas por muchos de los gobiernos actuales de Europa, en cuanto a libros y libelos extranjeros de propaganda que juzgan perjudiciales a los intereses de sus pueblos. Esta verdadera inquisición contemporánea puede apreciarse como se quiera, pero su existencia demuestra que las precauciones tomadas por las autoridades coloniales no revelaban un estado de atraso y oscurantismo específicamente españoles. Cuando en 1803 la autoridad rehusó permiso para llevar la imprenta a Venezuela, aplicaba simplemente una forma de censura muy común en los casos de estado de sitio o guerra: los gobiernos actuales cierran las imprentas o fiscalizan la prensa; el colonial se oponía a la introducción de la imprenta en aquel momento, porque el país estaba aún conmovido de resultados de la revolución de Gual y España. La Revolución Francesa era el bolchevismo de la época, excitaba a los colonos a rebelarse, naturalmente con el pensamiento de sustituir la dominación de Francia

a la de España, y la autoridad peninsular al combatir aquellas maquinaciones usaba de su derecho de defensa, con la misma legitimidad que asiste a los gobiernos de hoy para luchar contra la propaganda moscovita y aun contra toda propaganda de nacionalismo extranjero. Quien esté enterado de las medidas que toman ciertos países para resistir, por ejemplo, a la campaña que otros prosiguen en favor de las minorías establecidas en el territorio de los primeros, conoce lo que es una inquisición efectiva de la prensa y de los libros.

VIII

EL SISTEMA ECONOMICO

LOS españoles se reservaban el comercio en sus posesiones ultramarinas, del propio modo que el Acta de Navegación de 1660 prescribía que toda mercadería destinada a Inglaterra o a sus colonias, se transportase, bajo pena de dobles derechos aduaneros, en navíos ingleses, construidos en Inglaterra, pertenecientes a ingleses y con tripulación inglesa. El Acta, que sólo vino a derogarse en 1849, constituía un verdadero monopolio, porque la talasocracia británica impedía completamente a los extranjeros la competición. Más adelante veremos cómo los sistemas francés y holandés eran también de privilegio para las compañías nacionales. En América el mal no estaba en el monopolio, sino en el hecho de que España carecía de barcos suficientes de comercio para desarrollar éste de modo conveniente, y de barcos de guerra para impedir el contrabando. No es lícito, en tales condiciones, acusar al gobierno de Madrid de atraso y de estrechez de miras, al mismo tiempo que se elogia a otros por medidas que quizá producían resultados diferentes a causa de determinadas situaciones, pero que provenían de un

principio idéntico: el proteccionismo. Inglaterra proclamaba que España debía abrir la puerta de sus colonias al comercio extranjero por la sencilla razón de que dicho comercio se practicaba en su mayor parte por ingleses en navíos ingleses.

Desde 1497 Don Fernando y Doña Isabel eximieron de todo derecho las mercancías que se enviasen a Indias o de allí vinieran a España, estableciendo así un sistema de proteccionismo imperial, y tomaron providencias para cortar los abusos de los armadores con la creación de fletes fijos en las carabelas que iban a ultramar. Posteriormente, y para escapar a los piratas, creóse la costumbre de reunir en La Habana los buques que transportaban productos de las Antillas y del golfo mexicano, y de aquel puerto zarpaba el convoy para Europa, escoltado por cruceros de guerra. En enero de 1503 se fundó la Casa de Contratación de Sevilla, con el fin de estimular, reglamentar y dirigir el comercio hispanoamericano. La Casa otorgaba patentes de navegación, organizaba las flotas y servía de centro público de informaciones sobre todo lo relativo al Nuevo Mundo. Los cargadores se sindicaron, llamando a su corporación Universidad, e idéntica cosa hicieron las gentes de mar. En México y Lima los reales Consulados servían de corresponsales a la Casa de Contratación y entendían en lo concerniente al tráfico mercantil y al precio de los artículos. No guardó Sevilla el privilegio del comercio ultramarino, pues en 1529 quedaron habilitados para el mismo otros puertos, entre ellos Cartagena, Málaga, Bilbao y La Coruña. El Consulado de Cádiz, que debía rivalizar con la Casa de Contratación y luego reemplazarla, fue creado por Carlos V en 1543 y recibió de Felipe II encargo de construir y armar cruceros para

proteger las costas de América y las flotas mercantes contra los ataques de enemigos y piratas.

En 1560 Sancho Briceño, diputado de las provincias de Costa Firme, obtuvo del Rey el envío de un bastimento anual a Borburata, luego a La Guaira, donde las mercancías españolas pagarían sólo la mitad de los derechos ordinarios. Es la primera línea de navegación fija establecida entre la metrópoli y Venezuela. La rareza de los viajes provenía de la poca importancia de la colonia, compuesta entonces de algunos campos atrincherados y de aldeas bautizados con el nombre de villas y ciudades. Ciertos establecimientos actuales de las naciones europeas en Oceanía reciben la visita de buques metropolitanos a mayores intervalos. Una serie de medidas de la Corona, en las cuales influía primordialmente el estado de guerra declarada o latente con los países rivales, fueron determinando las condiciones teóricas del comercio venezolano. Insistimos en el calificativo teórico porque, como tendremos ocasión de comprobarlo, nuestro comercio tomó en la práctica rumbos distintos de los que el Rey le señalara.

En 1608 Felipe III acordó a los extranjeros el permiso de comerciar con América, a condición de que se naturalizaran. Las autorizaciones fueron limitadas años después en razón del número crecido de solicitudes de naturalización, y los virreyes recibieron orden de restringir en lo posible estos permisos. Por aquella época se firmó una tregua de doce años entre España y las Provincias Unidas holandesas, en la cual se reconocía la libertad comercial en ambas Indias. Pero en 3 de octubre de 1614 el Rey reiteró la prohibición de negociar con extranjeros, obedeciendo a la necesidad de proteger las colonias, muy expuestas, a causa

de la decadencia de la marina española, a la codicia y las empresas de los piratas y aventureros. Decía Felipe, en efecto, que el tráfico no sólo se practicaba en condiciones dolosas "con gravísimos daños e inconvenientes en deservicio de Dios Nuestro Señor y mi corona y vasallos", sino que permitía a los enemigos de la Monarquía adquirir "mucha noticia y práctica de la navegación y puertos de ellas (las Indias), con que ha crecido más su codicia y el deseo de hacer pie en aquellas partes". La marina militar y mercantil española acusaba ya tanta mengua a fines del reinado de Felipe II que, según aparece del proceso de sir Walter Raleigh, aquél sólo tenía seis u ocho navíos para defender sus puertos y había de recurrir a buques extranjeros para comerciar con las colonias. Acentuóse la decadencia un siglo más tarde, en tiempos de Carlos II, a tal punto que el gobierno estuvo reducido al expediente de alquilar navíos a los armadores ingleses para combatir a los piratas.

Felipe V permitió llevar mercancías francesas a Tierra Firme y concedió a una compañía inglesa el privilegio de enviar anualmente a la feria de Puerto Belo un barco de quinientas toneladas. Esta compañía estableció agentes en Cartagena, Panamá y otros puertos americanos e inundó el Continente de productos británicos, con la complicidad de la aduana española.

Ni la Casa de Contratación ni el Consulado de Cádiz pudieron jamás impedir que los extranjeros comerciaran fructuosamente en las colonias. En 1594 podían señalarse hasta diez buques franceses o ingleses que cruzaban las costas venezolanas con mercancías de contrabando. Durante muchos años los holandeses, establecidos en Guayana y en las islas vecinas al golfo de Venezuela, acapararon el comercio de las provincias de Tierra Firme,

anulando prácticamente los viejos reglamentos prohibitivos de Carlos V y Felipe II, y los españoles, ayudados decisivamente por los misioneros, hubieron de sostener una lucha épica para expulsar del Orinoco a aquellos enemigos y competidores. Parece que la pérdida de Curaçao, en 1634, tuvo felices consecuencias para los venezolanos, quienes extendieron sus cultivos a fin de obtener más productos de cambios con los holandeses, compradores de cacao sobre todo. En los intervalos de la guerra, los adversarios negociaban activamente. En 1625 Santo Tomé vendía gran cantidad de tabaco a los holandeses, llegando éstos a reunir en el puerto ocho o nueve navíos. En 1678 las autoridades metropolitanas de las Provincias Unidas comprobaban que era posible regularizar las relaciones comerciales con los españoles de Guayana. Durante el siglo XVIII estos últimos llevaban a las factorías extranjeras aceite, tabaco, mulas, ganado, pieles y carne salada.

En consecuencia, puede afirmarse que la meteduría practicada por los extranjeros y por los mismos españoles corregía en gran parte los efectos de la prohibición legal, y si causaba pérdidas al erario abastecía en cambio normalmente los mercados americanos. Y no errará quien diga que quienes ejercían el monopolio comercial en Venezuela en los siglos XVII y XVIII eran, no los españoles, desprovistos de industria y de marina, sino los ingleses y holandeses piratas y contrabandistas.

El Imperio se defendía en medio de inextricables dificultades. En 1714 el Rey envió a las colonias del mar Caribe cuatro oidores encargados de practicar una investigación sobre el estado del comercio y de enjuiciar a los contrabandistas y a los funcionarios cómplices. Por este tiempo el gobernador Cañas hizo ajusticiar en Barquisimeto a once personas, entre ellas a un niño de once

años, por alijadores. Este crimen de Cañas, que el Rey castigó rudamente, parece de poca monta si se le compara a los que diariamente perpetran a tiros de fusil en los Estados Unidos los policías ejecutores de la ley Volstead, cuyas víctimas, según reciente estadística oficial, son ya mil ochocientas.

Las ordenanzas de Felipe V contra la introducción en España de productos de América por extranjeros, obedecían al legítimo deseo de proteger a los negociantes nacionales perjudicados por sus rivales. Las colonias mismas pedían medidas de protección unas contra otras y aun contra la Madre Patria. A mediados del siglo XVIII, Quito, para defender sus tejidos de paños y bayetas y otras manufacturas, pidió que se prohibiera la entrada en el Nuevo Reino de Granada de géneros de Castilla venidos por el Cabo. Los funcionarios responsables, sostenedores del libre cambio interimperial, sugerían expedientes que daban alguna satisfacción a las provincias. No vacilaban tampoco los virreyes y gobernadores en suspender la ejecución de aquellas providencias reales que juzgaban nocivas al bien de sus respectivas jurisdicciones, como sucedió con la prohibición de importar al Nuevo Reino vinos del Perú, dictada en beneficio de los vinos españoles y que el virrey de Santa Fe declaró inaplicable por perjudicial a los intereses de sus gobernados.

Las fluctuaciones, el continuo acomodamiento a las circunstancias de la política comercial española, han sido, naturalmente, calificadas por algunos de falta de política. Otros escritores, y en gran número, acusan al gobierno real de una especie de secular inercia, incapacidad de adaptación a las transformaciones de la vida nacional e internacional. La primera imputación proviene de ideas preconcebidas; la segunda, de ignorancia de los hechos.

Las autoridades españolas no se mostraron nunca inferiores a su cometido en proporción más considerable que lo que hubieran podido hacerlo las de cualquiera otro país en semejantes condiciones de crisis. La voluntad de un hombre o de un grupo de hombres tiene poca o ninguna influencia sobre los fenómenos colectivos que caracterizan la decadencia de los imperios y naciones. Sin embargo, el siglo XVIII presencia el renacimiento de la actividad creadora del español en los territorios venezolanos. Los holandeses fueron entonces expulsados de Guayana, como también los suecos, que habían instalado un puesto o fortín en el río Barima.

El establecimiento de la Compañía Guipuzcoana, en 1728, cuyo monopolio comprendió sólo la provincia de Caracas o Venezuela y no se extendió a la de Maracaibo sino veintiséis años después, trajo a nuestro país ventajas efectivas. El gobierno español empleaba para combatir el contrabando el único remedio que tenía a su disposición y encargaba a particulares de hacer la costosa policía que el Estado no podía aplicar. La concesión del monopolio, el abandono a negociantes de la explotación del comercio en Venezuela era una medida idéntica al arriendo que se usaba en Francia y a las que hoy adoptan muchos gobiernos cuando, después de ensayar el método socialista de la explotación directa, experimentan las pérdidas o insuficientes ganancias que esperan inevitablemente al Estado mercader o industrial. El arriendo de la fabricación de ciertos productos, como el tabaco y los fósforos, o de servicios, como el de teléfonos, forma parte del programa actual de algunos partidos políticos en varios países. Esta especie de monopolio era de uso corriente en Europa desde el siglo XVI: Elisabeth de Inglaterra lo acordaba ya a sus favoritos

para la venta de vinos, la exportación de paños y la explotación del estaño. Pero Felipe V tenía, sobre todo, presente el ejemplo palpable de las ventajas comerciales y políticas de esta clase de concesiones en las primeras compañías holandesas creadas con un objeto meramente comercial, a diferencia de las francesas que tenían también encargo de colonizar, como lo habían tenido los Belzares. La compañía holandesa constituida en 1621, reorganizada en 1647 y 1674, ejerció un verdadero monopolio y vio sometido a su intervención todo el comercio nacional de Indias. Para 1719 sólo ella podía traficar en Guayana y Trinidad, y después de un siglo venía siendo la colaboradora más eficaz de la política del Estado en aquellas regiones. Sus barcos atacaron más de una vez los establecimientos españoles. Las compañías francesas, por su parte, en virtud de sus privilegios, imponían a los colonos la obligación de comprar y vender solamente a la metrópoli. Cuando el Estado sucedió a aquéllas en la administración de los territorios, el comercio, libre o privilegiado, conservó las mismas ventajas. Desde 1686 Louvois había tomado medidas proteccionistas, prohibiendo, por ejemplo, la importación de telas indias a Francia. Vino luego la serie de disposiciones constitutivas del régimen llamado exclusivo, entre las cuales figuran el código de 1698 y las letras patentes de 1717 y 1727. El comercio quedó reservado a los buques franceses, se abolieron los derechos y se vedó a los extranjeros transportar mercancías a las colonias. El monopolio no era, pues, como se supone, una concepción puramente española, y su aplicación se explicaba y aun se justificaba por las condiciones generales del comercio en aquella época y las ideas reinantes en materia de administración colonial. Un misionero y explorador danés, Hans Egede, preconizaba en 1721

el monopolio comercial y la exclusión de todo contacto con el extranjero, como el único medio de proteger las posesiones de su país en los mares árticos contra las empresas de los aventureros.

La creación de la Compañía fue apoyada con calor por los nobles caraqueños, quienes creían que el nuevo sistema mejoraría la precaria situación económica de la provincia y adquirieron paulatinamente gran número de acciones, sacando grandes provechos. En 1752, una junta de accionistas, presidida por el ministro Arriaga, decidió doblar el total de aquéllas, ofreciendo a los venezolanos participación en la nueva emisión. Según Laureano Vallenilla Lanz el numerario de la Compañía enriqueció en breve tiempo a la aristocracia colonial. El pueblo, en cambio, parece haber estado desde el principio contra el sistema, alegando que se le privaba de la libertad, es decir, de la libertad de contrabandear. La baja de los precios, primer resultado de la instalación de la Compañía, contribuyó a su impopularidad: poco tiempo después de haber entrado en actividad los nuevos servicios, el valor de ciertos productos, del cacao, por ejemplo, bajó el 50 por 100 en el mercado español y de 22 a 8 pesos en Venezuela. En todo caso, la Corona salió favorecida y los barcos de los vascos prestaron ayuda a la marina real durante las guerras con Inglaterra, especialmente en el transporte de tropas y municiones a Tierra Firme y a las Islas.

La Compañía, que fue autorizada en 1742 a aumentar a discreción el número de navíos que empleara en Venezuela, dio impulso considerable a la agricultura, a la industria y al comercio de la provincia. Los astilleros de La Guaira construyeron buques de diversas dimensiones. Puerto Cabello se transformó. La Compañía creó premios anuales para estimular a los agricultores

e inició algunas medidas "sociales", como la institución de pensiones para las viudas y huérfanos de los empleados y de jubilaciones para éstos a partir de los sesenta años. Adelantó fuertes sumas de dinero a los colonos con garantía de las cosechas, y su actividad determinó la fundación de pueblos y ciudades, sobre todo en la extensa provincia de Caracas. Según Depons, los valles de Aragua, después de 1770, "progresaron tan rápidamente, que costaría trabajo encontrar un caso igual entre los pueblos más activos e industriosos. Inmensas llanuras e infinidad de colinas incultas hasta entonces se cubrieron como por encanto de siembras de añil. La afluencia de plantadores y los rendimientos de aquel producto dieron lugar a la fundación de numerosos pueblos, y otros, como Maracay, Turmero y La Victoria, formados únicamente de chozas, tomaron grato y sólido aspecto de ciudades. De los valles de Aragua el añil se extendió al suroeste hasta Barinas". En su admirable lenguaje Baralt dice exactamente lo mismo que el viajero francés. Los cueros y el tabaco se exportaron en cantidades notables. Duplicó la producción de cacao, canalizada y sustraída al contrabando. Se plantó algodón. El número de rebaños triplicó. Bello apunta que entonces "Santa Fe recibió por el Meta los ganados de los inmensos y feraces llanos de Venezuela y envió sus esmeraldas y las producciones de su naciente industria". En los últimos tiempos, seis navíos anuales servían el tráfico entre la metrópoli y la provincia; pero no eran éstos los únicos que tocasen en nuestros puertos, de los cuales no estaban excluidos los extranjeros: el joven Miranda y otros pasajeros se embarcaron en La Guaira, por enero de 1771, en la fragata sueca *Príncipe Federico*, que, después de visitar a Puerto Rico, ancló en Cádiz el 1 de marzo. Las rentas públicas, por



último, cubrieron el presupuesto de la colonia, que no hubo ya de recurrir a México para pagar tropas y funcionarios.

Para combatir el contrabando la Compañía armó en guerra hasta doce navíos y cierta cantidad de barcas tripuladas por diez o doce hombres. El costo de este servicio llegó a doscientos mil pesos anuales.

Mas como cualquier otro monopolio, sobre todo si está en manos de gentes de una sola provincia, el de los vascos despertó oposiciones que, en 1749, determinaron la rebelión de León contra los acaparadores de las riquezas y aun de los puestos en la administración pública. Es muy probable que en aquella insurrección influyese el deseo de librarse de la policía y que gran número de los revoltosos, o de quienes con ellos simpatizaban, no tuviese otras miras que poder contrabandear a su guisa. Los propietarios de Caracas, por otra parte, quejábanse ahora abiertamente de que la Compañía no les compraba todos sus productos ni abastecía de los extranjeros la provincia.

Reales cédulas sucesivas fueron cercenando el monopolio. En 1759 se dispuso que la sexta parte del flete de cada navío de registro quedase a la disposición de los agricultores y comerciantes de la colonia, quienes podrían embarcar cacao para España sin recurrir a la Compañía. Tal medida —anota el profesor Humbert— probaba que las reclamaciones de los venezolanos no eran letra muerta para el gobierno español. Poco después se abrió a todos los peninsulares el comercio con las Antillas, Margarita y Trinidad, mediante el pago de los derechos ordinarios. Vino luego la autorización de constituir compañías de comercio particulares españolas o extranjeras, y el 12 de octubre de 1778 Carlos III decretó el reglamento del comercio libre, extendiendo

considerablemente las facilidades de negociar entre la Península y las colonias, siempre a condición de que el transporte se efectuase en barcos de propiedad y construcción españolas. Años más tarde, la Compañía se fundió con la de Filipinas. La supresión del monopolio en Venezuela precedía las medidas análogas que tomaba Choiseul en Francia cuando hacía ceder o traspasar al gobierno los privilegios de las compañías que acaparaban el comercio en las posesiones del Océano Indico. La de Indias desapareció en 1769. Sin embargo, ocho años después se creó aún una compañía para colonizar a Guayana, vender la goma de Africa y practicar la trata de esclavos. La compañía del Senegal que la sucedió obtuvo los mismos privilegios.

Por el reglamento y las disposiciones subsiguientes promulgadas por el gobierno español, fueron habilitados para el comercio trasatlántico muchos puertos de la Península y de América. Bajo bandera española pudieron las colonias traficar directamente con las posesiones extranjeras vecinas. Desarrollóse también entonces el viejo comercio de Venezuela con Puerto Rico, Cuba, Veracruz, Cartagena y Santa Marta. Sus ganados, pieles y cueros, sus materias tintóreas y medicinales, así como algunos frutos, se exportaban en gran parte a México. España restringía la importación, pero dejaba libre la exportación a países extranjeros, salvo la del cacao, que se enviaba todo a la Península. En cambio —según observa Depons—, todas las demás naciones europeas continuaban imponiendo a sus colonias de ultramar la obligación de comprar y vender sólo al comercio nacional. Apenas, forzado por la necesidad, consentía el gobierno francés que sus colonias comprasen en el extranjero algunos productos que la metrópoli no podía suministrarles. Luis XVI permitió en 1784 el libre

comercio en las Antillas, pero solamente para unos cuantos artículos. El comercio con las Indias orientales no fue libre antes de 1790. Al año siguiente, la Constituyente, es decir, la Revolución, publicó un acta de navegación que reservaba el tráfico con las posesiones americanas al pabellón francés.

Las colonias europeas actuales sufren de todo género de restricciones en materia comercial impuestas por las metrópolis, comenzando por las colonias inglesas. En la India los tribunales condenan con frecuencia a varios meses de prisión a los indígenas que venden telas extranjeras, so pretexto de que tal venta es acto de boicotaje contra las mercaderías británicas. Los congresos hindús no cesan de reclamar, con la abolición de las gabelas, el permiso de importación de aquellas telas prohibidas por la administración.

Sin duda, no existían derechos de importación en las posesiones francesas de América, y eran moderados los de exportación. España no podía prescindir del impuesto porque su industria no bastaba a subvenir a las necesidades de los colonos y debía recurrirse a la extranjera para el abasto de aquéllos, sirviendo sólo el Estado de agente distributor en provecho de otros países. Ni, por otra parte, tenía la metrópoli marina mercante suficiente para poder conformarse con los proventos del flete. Depons confiesa que las tarifas españolas no eran hijas "del capricho y menos de la ignorancia" y las atribuye al "error que les ha servido de base". En nuestro concepto, el error consistía, simplemente, en la falta de industria y de navíos, que no impidió, sin embargo, a las leyes fiscales despojarse, en los últimos treinta años del siglo XVIII, de "toda su aspereza y hacer en beneficio del comercio, todos los sacrificios que racionalmente se les podía exigir".

Las autoridades coloniales seguían con marcada atención los asuntos comerciales y presentaban sus observaciones a España, indicando las medidas convenientes. Así, por ejemplo —leemos en el informe de Moreno—, en vista de que las provincias de Cumaná y Barcelona exportaban gran cantidad de mulas, casi todas de contrabando y sin provecho para el fisco, sugerían de Santa Fe que se permitiese el comercio libre con ciertas precauciones y mediante la imposición de derechos.

El contrabando preocupaba necesariamente al gobierno. Continuaba activísimo en Tierra Firme por la vecindad de las colonias extranjeras y la facilidad que éstas brindaban a los mismos negociantes españoles para burlar los escampavías del monopolio o de la aduana. Barcos procedentes de España transportaban legalmente a América mercancías inglesas y, peor aún, para 1771 las autoridades se declaraban impotentes para reprimir el tráfico ilícito, puesto que hasta en dichos navíos venían efectos de prohibida importación. La suma invertida por los venezolanos en artículos de contrabando podía calcularse, a principios del siglo XIX, en un millón de pesos fuertes. Los efectos, muchos de lujo, venían de Francia, Inglaterra y ciudades hanseáticas. En 1807 sir Arthur Wellesley dirá discretamente: "Hay razones para creer que grandes cantidades de la producción británica son ya transportadas al reino de Tierra Firme por medio de neutrales y el tráfico de contrabando." En consecuencia, concluía el general, que el comercio inglés ganaría poco con la conquista de Venezuela.

A la necesidad de proteger la hacienda juntábase más que nunca la de proteger el territorio. Uno de los mejores funcio-

narios enviados por el Rey a Tierra Firme, Manuel Centurión, gobernador de Guayana, aconsejaba el aumento de las fuerzas en el Orinoco para defenderlo de los extranjeros que, con el pretexto de comerciar, usurpaban tierras y atacaban a los indios españoles. En 1796, como los ingleses se apropiasen territorios hasta la boca del Barima, el capitán general Carbonell declaraba que era indispensable cerrarles el gran río y sus afluentes granadinos, a fin de preservar la paz, no muy segura después de los sucesos de El Socorro y vistos los efectos producidos en la opinión por las publicaciones francesas. Depon observaba: "Inglaterra, cuyas miras se dirigen siempre al comercio, es el único pueblo entre los extranjeros que tiene tantos datos como España sobre la navegación del Orinoco y sobre la Capitanía General de Caracas y las demás posesiones españolas, las cuales inunda con mercaderías de contrabando."

Imponíase, por tanto, algunas medidas de elemental policía contra el comercio extranjero. Las autoridades españolas tenían perfecto derecho de armar corsarios que, a tales fines, cooperasen con los barcos de guerra. Las necesidades económicas y militares justificaban ampliamente las represalias, y no era solamente española la legislación entonces vigente sobre presas y visitas. Antes de que España interviniese en favor de la independencia de los Estados Unidos, mercaderes ingleses, escapando a los pocos cruceros reales, introducían en el Nuevo Reino armas y municiones destinadas a los indios, a quienes excitaban a rebelarse. Durante la guerra americana los navíos británicos embarcaban impunemente en las colonias españolas ganados, con los cuales abastecían sus tropas de las Antillas. En plena época de hostili-

dades, el pabellón español cubría un extenso comercio fraudulento con el Continente. Depons habla de cuatrocientos buques que entraban o salían anualmente con papeles falsos de los puertos venezolanos y granadinos. En 1801 Puerto Cabello expidió, con destino a territorios enemigos, mercancías por valor de cerca de un millón de pesos. Los extranjeros, ocultando sus operaciones detrás de comparsas de nacionalidad española, contribuían así al desarrollo de nuestro comercio.

En la última década del siglo XVIII la situación económica de Venezuela era inquietante, entre otras causas por la recluta que hacían las autoridades de los hombres válidos para llenar las bajas de la marina real, como sucedió en 1793, o para aperibirse a la defensa del territorio. El trabajo de las haciendas se paralizó en gran parte por la falta de cultivadores, y de falta de brazos sufrió también la poca industria que para entonces existía. Tan precaria situación, y el contagio de ideas que llegaban del extranjero, determinó conmociones sociales como la sublevación de los negros en Coro, o políticas como la revolución de Gual y España. Las medidas del gobierno apaciguaron aparentemente los ánimos, a tal punto que Depons, miope observador de la política, pudo años después engañarse y atribuir a Caracas la más completa fidelidad al Rey y a la Monarquía.

A pesar de las circunstancias anotadas, que se agravarán con la ocupación de Trinidad por los ingleses, y siempre para salvar la hacienda, el Rey, por decreto de 18 de noviembre de 1797, permitió a los barcos neutrales abordar libremente a los puertos americanos y comerciar en las mismas condiciones en que lo hacían los españoles, siempre que no se tratase de introducir

mercancías prohibidas. Pero los negociantes peninsulares, diciéndose lesionados, levantaron tales clamores que la Corona se vio obligada a revocar su decreto tres años después: no de otra manera los negociantes e industriales ingleses, norteamericanos o de cualquier otro Estado moderno ejercen presión sobre sus respectivos gobiernos para obtener aranceles proteccionistas. Sin embargo, las autoridades venezolanas, alarmadas ante la extensión que de nuevo tomaba el contrabando, practicado sobre todo en beneficio del enemigo, decidieron volver a abrir los puertos a los buques neutrales, en condiciones aún más liberales que las establecidas por el revocado real decreto y por un lapso determinado. Esta providencia, que demuestra la elasticidad de que gozaban en América los poderes públicos, fue tomada por el Capitán General en mayo de 1801 y se aplicó hasta diciembre siguiente, mes en el cual se modificaron las circunstancias políticas.

Dos años más tarde, los españoles, siguiendo el ejemplo de otros países y por razones de carácter político y militar, impusieron nuevas restricciones a la facultad que tenían las colonias de exportar directamente sus productos a las posesiones extranjeras. Al mismo tiempo, como los buques destinados por la real hacienda a la vigilancia de las costas, escasos y mal armados, se mostrasen impotentes, resolvió el Rey encargar exclusivamente a la marina militar reorganizada de perseguir el contrabando. Es posible que éste hubiera disminuido entonces; pero la fuerza de las cosas pudo más que los reglamentos, y para 1806, a pesar de la guerra anglo-española, había un comercio considerable entre Trinidad y Venezuela, tolerado por ambos beligerantes y prac-

ticado por navíos del gobierno español. A Cumaná, Margarita y Guayana aportaron buques extranjeros con cargamentos de dinero, harina, mantecas, aceites, embarcando allí frutos del país.

El problema comercial, como el político-militar de la defensa nacional, se ligaba íntimamente para el gobierno español al de la residencia de los extranjeros en las colonias. En realidad, no estuvieron éstas nunca tan herméticamente cerradas como se afirma. Desde luego, soldados extranjeros tomaron parte, aquí y allá, en la conquista. En la época de Carlos V hubo hasta veinte griegos empleados como artilleros en el Perú. En las guerras de Venezuela, sin contar a los alemanes, vemos algún que otro italiano. Dos franceses que ejercían de pilotos en Maracaibo, hechos prisioneros por los piratas, se alistaron en las hordas del Olonés, luego de Morgan, a quienes condujeron al lago, valiéndose de sus conocimientos en la navegación.

Pero prescindiendo de estos ejemplos que pudieran explicarse por las necesidades del reclutamiento puramente militar, debe recordarse que, muy al principio, Irala distribuyó tierras en el Río de la Plata a varios franceses, genoveses y venecianos, y que durante el reinado de Felipe II el licenciado Valderrama informaba que México estaba "lleno de extranjeros". Más aún: la historia de O'Higgins, mercader ambulante irlandés que llegó a ser virrey del Perú, y la del francés Liniers, virrey de Buenos Aires, llamado por el cabildo "libertador de los pueblos de la América española en la parte meridional", por sus victorias contra los ingleses, prueban que la Corona española no temía confiar a extranjeros los cargos más altos de las provincias de

ultramar. El primero de aquellos hombres notables comenzó su carrera como comandante de una compañía de voluntarios extranjeros reclutada en Chile. En un momento dado, los judíos portugueses que vivían en el Perú sacaban tan gran provecho del comercio en este país que fue necesario recurrir a la Inquisición para librarse de ellos. El virrey-arzobispo de Santa Fe, Caballero y Góngora, ensayó, inútilmente por desgracia, la colonización en Cartagena, llevando allí familias de Norteamérica. Se ve, pues, que la metrópoli no excluía por sistema a los no españoles y que es exagerada la afirmación de Depons: "no hay nación que como España rechace tan rígidamente de sus posesiones ultramarinas a todo lo que no sea regnícola"

Si hemos de creer a Terrero, para 1723 no faltaban los "forasteros" en Venezuela. En el último cuarto del siglo, escribe todavía aquél con evidente exageración, había en la provincia "multitud infinita de diversos e incógnitos comerciantes", a quienes no cerraba ya la puerta la policía de la extinguida Guipuzcoana y que se introducían "sin el menor recelo de la disparidad de cultos". La Secretaría de Estado tenía por una de las principales causas de la revolución latente en que se hallaba Venezuela hacia 1797 "la residencia de muchos hijos y descendientes de extranjeros y aun de muchos de éstos que estaban tolerados". Ciertas instrucciones comunicadas por los obispos a los párrocos, para que vigilasen las costumbres de los forasteros en sus respectivas jurisdicciones, dejan pensar que el número de éstos era considerable a principios del siglo XIX. En Oriente había un importante grupo de negociantes franceses que tomó parte activa en las conmociones que precedieron a la declaración de la Inde-

pedencia. Ni faltaron extranjeros, como el farmacéutico Blandin, que, casados en el país, entraban en la clase directora, llegando a ejercer grande influencia en la vida social y económica. Un hijo de Blandin fue canónigo de la catedral y otro alternó con los próceres criollos durante la revolución de Abril. La casa de esta familia era uno de los principales centros sociales de Caracas.

Los viajeros Ségur y Humboldt fueron muy bien acogidos en Venezuela, y el segundo, de cuyo alojamiento en una casa de la plaza de la Trinidad se ocupó personalmente el Capitán General, "llevaba amplios pasaportes y recomendaciones de la Corte de España", según recuerda Arístides Rojas. El mismo contradictorio Depons declara que vivió tranquilamente en la provincia durante cuatro años "respetando los usos y sometiéndose a las costumbres locales", lo cual observan también hoy los extranjeros en cualquier país del mundo, so pena de expulsión. El francés fue recibido en la intimidad del Capitán General; deseaba el obispo que su permanencia en Caracas fuese "eterna"; y el intendente Arce le agradecía sus esfuerzos en favor de la prosperidad de la colonia. Otro francés, Marquis, dirigía para entonces la banda marcial de la capital.

En resumen, vense cuán errados son los términos que Baralt y otros emplean al tratar la materia. Las trabas que el gobierno español oponía al paso de los peninsulares a América obedecían, en principio, al legítimo deseo de impedir en lo posible la despoblación de la metrópoli. Puede suponerse, por otra parte, que los permisos otorgados por el Rey a extranjeros para ir a las colonias —equivalentes a nuestros modernos pasaportes— no eran difíciles de obtener. La cédula de 1801 que autorizó al Consejo

de Indias para conceder dichos permisos mediante el pago de un derecho adecuado a las circunstancias y objeto del viaje, e impuso el pago de cierta suma a cuantos quisiesen residir en las provincias ultramarinas o nacionalizarse, se inspiraba en los mismos principios que siguen hoy los gobiernos de países de inmigración cuando dictan medidas como el depósito de caución al desembarco y otras análogas.

IX

LA AGRICULTURA, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

El gobierno español, como acaba de verse, defendía con derecho sus mercados ultramarinos contra otros países que intentaban arrebatárselos. El sistema, bueno o malo, era hijo de las circunstancias, y lo que parece esencial es examinar, con ayuda de los números, la verdadera situación económica que de su aplicación resultaba en la Capitanía General de Venezuela. Las estadísticas coloniales en general, y como muchas de las modernas, deben recibirse a beneficio de inventario. Sin embargo, las cifras que poseemos a partir de la creación de la Compañía Guipuzcoana, tomadas de diversas fuentes, suministran datos bastante fidedignos para que podamos formarnos idea aproximada de la actividad de los venezolanos en el campo económico y seguir sus progresos hasta la declaración de la independencia. Se advierte, por lo demás, que en la mayor parte de los casos estas cifras se refieren, en lo relativo al comercio, al que se hacía legalmente, y que, dada la importancia del contrabando, es probable que la producción fuese siempre más considerable que lo que pudiera dejarlo creer la estadística aduanera.

Notemos desde luego que España no se opuso largo tiempo a que las colonias creasen industrias para atender a sus propias necesidades ni impuso la preferencia de los productos peninsulares sobre los americanos, en los raros casos en que pudo haber competencia entre ellos. Andrés Bello indica que en Tierra Firme, donde por entonces las minas no estaban descubiertas y que, por tanto, no atraía flotas españolas, "no se descuidó la metrópoli en favorecer con sus providencias el espíritu de industria y aplicación agrícola que veía desenvolverse en Venezuela, y los derechos de propiedad anexos a la conquista se hicieron bien pronto trascendentales a la industria y al trabajo". Es claro que el insigne polígrafo se refiere aquí a las providencias que tomó la Corona sucesivamente para establecer el régimen legal de la propiedad y no a otras, por decir así, técnicas, encaminadas al fomento de la agricultura. Medidas de este género tardaron muchísimos años, y los colonos debieron proveer por sí solos y con escasos medios a iniciar los cultivos y a fabricar rudimentariamente ciertos artículos de primera necesidad, como, por ejemplo, el jabón, que se hacía en Caracas ya a principios del siglo XVII. El interés que los tocuyanos tomaron, hacia 1556, en la conquista de los cuicas y otros indios de Trujillo debióse en gran parte a que en aquellas tierras abundaba el algodón, materia preciosa para la fabricación de lienzos, que era la principal industria de la naciente ciudad. Desde fines del siglo XVI los telares de Mérida y Trujillo fabricaban artículos de algodón y de lana, con materias primas de la región, y hasta la declaración de independencia se hicieron en Mérida alfombras y tapetes teñidos con tintas indelebles. Según dice Tulio Febres Cordero, el gobernador Joaquín Primo de Rivera inició y alentó en Maracaibo el cultivo del

algodón con tan buen éxito que, para 1790, funcionaban hasta doscientos tornos y se creaba una casa de manufactura, en la cual trabajaban las niñas pobres y los viejos desvalidos. En cierto memorial de la época se califica a aquel gobernador de padre de la República. En Maracaibo construíanse asimismo desde el principio muchas embarcaciones, de modo que —dice Oviedo y Baños— "continuamente están embarazados los hastilleros", y cruzan el lago "muchas balandras, fragatas, barcos y otras embarcaciones pequeñas". Esta industria se desarrolló en tales proporciones que en los primeros años del siglo XIX llegaron a lanzarse en Maracaibo numerosas naves de toda especie. La Compañía Guipuzcoana construyó también muchos navíos en los astilleros de La Guaira. Y no debían estar completamente en pañales otras industrias en Mérida cuando, en 1811, pudo el canónigo Uzcátegui fundir campanas y hacer cañones y otros elementos de guerra destinados a los patriotas.

Las minas de cobre de Cocorote se explotaron durante mucho tiempo por cuenta del Rey y, naturalmente, con déficit, enviándose el metal a España para beneficio, sobre todo, de la fábrica de artillería. Rematadas por 40.000 pesos, dejólas en abandono el contratista a principios del siglo XVII. En las riberas del Tuy, cinco leguas más abajo de su confluencia con el Guaire, se fundó en 1584 una ciudad efímera, San Juan de la Paz, que llegó a prosperar por la "opulenta riqueza" de las minas de oro que en su vecindario existían, las cuales, según Oviedo y Baños, produjeron en los primeros meses de explotación 40.000 castellanos de oro de veintitrés quilates. Lo mortífero del clima hizo abandonar la fundación y se perdió hasta el rastro de las minas.

En los comienzos del siglo XVI la quinta parte declarada del producto de las perlas de Cubagua, correspondiente a la Corona, se elevaba a 15.000 ducados. En realidad, el total de la producción podía calcularse en 150.000 ducados. Coche producía, en 1527, 375 kilogramos de perlas por mes, o sea 1.500 marcos, cada marco con valor de ocho onzas o 250 gramos. Lope de Aguirre "rompió las arcas y sacó porción considerable de oro y perlas de lo procedido de los quintos de las pesquerías de Cubagua, que estaban en aquel tiempo en el aumento de su mayor grandeza", leemos en el cronista arriba citado. En 1580 rescatar perlas era el principal trato en que "consistía el caudal" de los vecinos de Caracas, y para asegurarlo ordenó Pimentel la pacificación de los cumanagotos, cuyas piraterías ponían trabas al comercio.

Muy temprano se instalaron en los valles de Caracas trapiches para la fabricación del azúcar y ésta se extendió a muchas otras partes del territorio.

Según el testimonio de fray Pedro Simón, la agricultura florecía ya a principios del siglo XVII en aquellos valles, donde se cultivaba, además de la caña, trigo, cebada y añil. Desde 1579 dos agricultores de Mérida podían comprometerse a exportar por el sur del lago hasta mil arrobas de harina, en cambio de mercancías castellanas. La harina, el bizcocho y el maíz de los Andes se permutaban en Maracaibo por sal y otros productos. Gran parte de esta harina salía con destino a Cartagena y a La Habana, por el puerto de Gibraltar, habilitado para el tráfico directo en 1629, y el cual era —dice fray Pedro— "de los más famosos puertos de estas Indias, por la gran suma de tabaco fino que se embarca en él de la ciudad de Barinas". Por Gibraltar se exportaban,

además, jamones y cordobanes provenientes de Mérida y Trujillo. Estas provincias recibían por la misma vía toda suerte de telas, paños y terciopelos, peltre y artículos de hierro, lo cual indica cierto género de vida cómodo y necesidades consiguientes.

A principios del siglo XVII también los valles de Caracas exportaban harina. Un pan de seis libras costaba allí un real. En 1619 salieron de La Guaira 7.150 quintales de trigo para Cartagena y las Antillas. Pero este cultivo cesó y Caracas, como todas las provincias de la costa del Caribe, por falta de comunicaciones y otras causas, debió importar todo su pan del extranjero. Las autoridades del Nuevo Reino indicaban la necesidad de sembrar trigo, y los ensayos hechos en el territorio de Cartagena dieron buen resultado, habiendo el gobierno tomado medidas de protección y estimulado a los agricultores a aumentar sus siembras. En cierta época, aquella jurisdicción mandó harinas a las Antillas y a Pamplona y trató de llevarlas a Maracaibo y Caracas. El problema del trigo está aún por resolver en Venezuela.

Pero el principal cultivo a que se entregaron los venezolanos fue el del cacao, que producía ya durante el siglo XVII 65.000 quintales. Los trujillanos exportaban grandes cantidades de dicho fruto, con provechos considerables. Las plantaciones, por desgracia, desaparecieron al correr del tiempo, como también las de trigo y sus similares y las de algodón, que ayudaban a enriquecer a los habitantes de aquella región andina. En tiempo de Oviedo y Baños había grandes haciendas de cacao en El Tocuyo y Barquisimeto y se tenía por exquisito el cosechado en Orituco. Durante el primer cuarto del siglo XVIII la producción total de Venezuela seguía siendo de 65.000 quintales, de los cuales se

exportaban legalmente 21.000; el resto salía de contrabando por manos holandesas.

Las ventajas del establecimiento de la Compañía Guipuzcoana, cuyo monopolio, importa recordarlo, no se extendía a Guayana ni a Nueva Andalucía, se notaron sobre todo al principio en lo referente al cacao, de cuyo artículo se enviaron a España, de 1730 a 1748, 858.978 quintales, o sea un tercio más de lo que se había expedido en los treinta años precedentes. El precio del quintal bajó inmediatamente de 80 a 45 pesos fuertes. Antes de la Compañía, el cacao se vendía a 22 pesos la fanega: según León y los suyos, para 1749 el precio había bajado a 8 pesos en Caracas, a 5 y aun a 3 en Barquisimeto y otros lugares del Occidente. En 1760 salieron del país legalmente 1.448.746 fanegas. Y en el solo año de 1763 la exportación a España, México y Antillas subió a 110.650 quintales. Angel César Rivas dice que la exportación media de cacao de Caracas por la Compañía era en los últimos años de 35.000 fanegas, Humboldt calculaba, a principios del siglo XIX, la cosecha total en 193.000 fanegas, de las cuales se exportaban 145.000. La introducción o desarrollo de otros cultivos hizo bajar la producción de cacao, de modo que para 1805 la exportación lícita era de 60.000 fanegas o poco más. Esta cantidad disminuyó aún durante los primeros treinta años de la República.

A partir de 1770 se restauró el cultivo del añil, y Rivas indica que la exportación media anual de este producto en los últimos tiempos de la Compañía era de 9.000 arrobas. De 1790 a la Revolución, el promedio fue de 500.000 libras. En el solo año de 1802 la exportación se elevó a 1.876.519 libras.

El algodón, planta autóctona como se ha dicho, cultivada ya por los indios a la llegada de los conquistadores, principió a sembrarse en cantidades considerables hacia 1782. Para 1810 la producción media anual era de un millón de libras, llegando a veces a más del doble.

El café comenzó a convertirse a fines del siglo XVIII en artículo primordial de cultivo, a expensas del añil, del algodón y aun del cacao. Esto se debió, entre otras causas, a que podía conservarse almacenado, ventaja importante si se consideran las trabas que ponían al tráfico con la metrópoli los cruceros ingleses.

El azúcar era casi todo de consumo interno, exportándose apenas algunos quintales de papelón a las colonias vecinas.

El tabaco llegará a ocupar el sexto lugar entre los productos de Venezuela. Los amotinados con Francisco León reprochaban a la Compañía Guipuzcoana, y lo confirmaba el informe de la Universidad de Caracas, que echase al mar declarándolo inútil el tabaco que no podía embarcar por su cuenta. Su exportación, según Ramón Díaz, no excedió de 2.260 quintales por año, siendo así que antes del monopolio salían de contrabando por medio de los holandeses alrededor de 8.000 quintales sólo del tabaco llamado curaseca exportable. De 1756 a 1764 la Compañía exportó un total de 88.482 arrobas. Angostura y Upata producían en 1788 seiscientas cargas de buen tabaco. El de Barinas se pagaba en ciertos mercados europeos 20 ó 25 por 100 más caro que el de cualquiera otro país. Miranda notó en Amsterdam, en 1788, que "varios rótulos ofrecían tabaco de Barinas de venta, que es muy estimado aquí". El estanco de este ramo era de uso general en Europa cuando Carlos III lo estableció en Venezuela después de ensayarlo con buen éxito en otras provincias ameri-

canas. El Estado creyó entonces necesario limitar la producción y prohibió la siembra sin previo permiso. Las oficinas del estanco funcionaron como bancos agrícolas y adelantaban dinero a los plantadores. De 1788 a 1792 el producto medio anual para el tesoro fue de 428.000 pesos fuertes. A principios del siglo XIX podía calcularse la cosecha en 20.000 quintales.

Las razas vacuna y caballar se multiplicaron en las Antillas de manera tan asombrosa que, según Oviedo y Valdés, en la Española una vaca valía en el siglo XVI un peso y un potro o yegua 4 ó 5 y aun menos. De las islas, caballos, asnos y vacas pasaron pronto a Tierra Firme, donde se aclimataron hasta el punto de dar a los habitantes de sus llanuras el carácter típico de pastores. Diego de Losada reunió en el valle de Mariara para su expedición —apunta Oviedo y Baños— "doscientas bestias de carga, porción de ganado de cerda y cuatro mil carneros, de los cuales dio los mil quinientos a su costa Alonso Díaz Moreno, teniente gobernador que entonces era de la ciudad de Valencia". Desde 1569 Zerpa pudo comprar en Margarita ochocientas cabezas de ganado, que destinaba a los llanos del interior. Hacia 1580 abundaban los ganados vacuno, ovino y caballar y en las tierras del Táchira y Cúcuta, valiendo cien reses mayores no más de 150 pesos, una yunta de bueyes con su arado hasta 11 pesos y una yegua 2 pesos. Una oveja valía un peso, y un cerdo pequeño cuatro reales. En los comienzos del siglo XVIII el ganado vacuno era numeroso y casi tanto lo era el cabrío en Maracaibo, Coro, Carora y El Tocuyo. En esta última ciudad prosperaba la industria del cordobán. Coro exportaba para Caracas, Cartagena y Santo Domingo gran cantidad de mulas, quesos y cordobanes. De los caballos se decía entonces que podían competir en calidad

con los andaluces y chilenos y había tantos que no era menester importarlos. En Trujillo abundaban los carneros y los cerdos. En Barcelona comenzaron a desarrollarse los hatos hacia 1720, a impulsos del gobernador Tornera, cuya obra continuó D. Carlos de Sucre, de modo que cuarenta años más tarde aquella provincia contaba 50.000 reses. Las misiones de Guayana ofrecían, en 1799, 12.000 cabezas de ganado para el fomento de los establecimientos civiles, y nueve años después Marmión calculaba en 220.000 el número de reses que poblaban los hatos guayaneses. Según el informe del lugarteniente Alvarado los misioneros exportaban, para 1755, ganado en cantidad considerable a Trinidad y vendían allí mulas a 50 pesos cabeza. La Compañía Guipuzcoana llegó a exportar anualmente un promedio de 15.000 cueros de res, y en 1763 la cantidad subió a 35.000. El total de los cueros exportados por aquélla de 1756 a 1764 fue de 177.354. A fines del siglo, la producción anual era de 120.000 cueros, de los cuales se exportaban lícita o ilícitamente 100.000.

Los productos de la cría se exportaban entonces casi todos por los puertos de Oriente. Según leemos en el informe de Moreno, de Cumaná y Barcelona salían de 1784 a 1790 gran número de mulas compradas a 20 pesos y revendidas a 80 ó 90 en las Antillas extranjeras. Depons afirma que el total anual de mulas embarcadas en nuestros puertos se elevaba a 10.000 y dejaba a la colonia una entrada de cerca de 500.000 pesos.

Las prosperidad comercial ganó también las provincias de Guayana y de Barinas. Angostura entró en relaciones oficiales con las colonias holandesas y francesas. Del 25 de septiembre al 11 de diciembre de 1782 entraron en su puerto 12 navíos y salieron 22. El profesor Humbert precisa los productos que

alimentaban aquel comercio; se importaba dinero amonedado de Nueva Granada, alcohol de los establecimientos holandeses y vía Martinica, telas de Bretaña, algodón, hilos, lanas, encajes de Bruselas, porcelanas, machetes, hojalata, velas, alambre, aceites, etc., y se exportaban caballos, mulas, becerros, cerdos, tortugas, pollos, queso, carne salada, pieles, sebo, tabaco en hojas. Barinas producía azúcar, aguardiente, lienzos, chinchorros, alparagas, sombreros de paja y de jipijapa, cordeles y expedía a las provincias andinas reses en pie, pescados y queso. A fines del siglo el comercio de Mérida era activísimo no sólo con Barinas, sino también con los llanos de Apure.

Las medidas liberales de Carlos III, aun aplicadas de modo intermitente como se ha visto, y las providencias tomadas en 1784 por el intendente Saavedra, que permitió la libre exportación de gran número de productos, determinaron un desarrollo considerable de la cría, la agricultura y el comercio. De 1785 a 1805 —dice José Domingo Díaz— triplicaron la agricultura, el comercio y las rentas. "Todo varió de aspecto en Venezuela —escribe Andrés Bello—, y la favorable influencia de la libertad mercantil debió sentirse señaladamente en la agricultura... Desde La Victoria hasta Valencia no se descubría otra perspectiva que la felicidad y la abundancia." Venezuela presentó más y más, según las palabras de Depons, "un aspecto feliz, un aire de prosperidad que no se veían en ninguna otra posesión española". Humboldt, por último, admirará los progresos realizados por la agricultura en nuestro país, en Centroamérica, y aun en México y el Perú, tierras éstas mineras por excelencia.

Los cambios sobrevenidos a principios del siglo XIX en la situación política de Europa y en las relaciones de España con

Francia e Inglaterra, tuvieron también inmediata favorable repercusión en la agricultura y el comercio venezolanos. Nuestros puertos de Oriente, sobre todo, crecieron en importancia debido a la vecindad de los establecimientos extranjeros. El cacao de Caracas tenía entonces en Cádiz precios muy altos, pagándose más caro que el granadino y el guayaquileño. Lo mismo sucedía con el añil, tan bueno como el de Guatemala y más barato. Depons juzgaba los productos venezolanos, excepto el algodón, superiores a los similares de las colonias francesas.

Para aquella época se calculaba que sólo en las provincias de Caracas y Barcelona, en Guayana y en las riberas occidentales del lago de Maracaibo había más de 1.200.000 cabezas de ganado vacuno, 180.000 del caballar y 90.000 mulas, así como gran cantidad de ovejas. El producto de este ramo era de 5.000.000 de francos, incluyendo las reses vivas exportadas a las colonias vecinas, las pieles de venado y otros animales consumidos en el país. En 1800 un toro o vaca valía en Mérida 5 pesos. Datos concordantes resumidos por Rivas permiten darse idea del aumento de la producción y del tráfico: Barcelona llegó a exportar en poco tiempo 132.000 reses, 2.100 caballos, 84.000 mulas, 800 burros, 180.000 quintales de tasajo, 36.000 cueros de res, 4.500 de caballo y 6.000 de venado. En las misiones de Guayana había más de 180.000 reses y sus hatos tomaban parte en el movimiento de exportación. Obsérvese que las misiones del Orinoco, pertenecientes al virreinato de Nueva Granada, habían decaído mucho después de la expulsión de los jesuitas: Humboldt escribía en agosto de 1800 a Guevara y Vasconcelos que algunos pueblos de aquella región, que antes tenían 600 ó 700 habitantes, apenas abrigaban 50 u 80 en la época de su visita.

El progreso continuó con regularidad, de modo que al estallar el movimiento en favor de la independencia Venezuela prometía entrar en una era de prosperidad agrícola considerable. Urquinaona afirma que los negociantes de la Península, de Nueva España y aun los extranjeros eran tributarios de la agricultura y de la naciente industria de la Capitanía. Los hacendados criollos vivían en la holgura, aunque sin duda por la costumbre muy venezolana de despilfarrar muchos de los fundos estaban gravados con fuertes hipotecas. Un propietario con renta de 5.000 pesos pasaba por rico, dice Depons; pero no faltaban quienes gozasen de haberes mucho mayores: las haciendas de Bolívar, que no era el hombre más opulento de la provincia, producían 25.000 pesos anuales. John Robertson informaba a sir James Cockburn, gobernador de Curaçao, en agosto de 1808 que "el cálculo más moderado que oí durante mi corta residencia allí (en Maracaibo) es que si el comercio fuese alentado podrían (los maracaiberos) cargar anualmente con facilidad 2.000 barcos de 300 toneladas cada uno". El inglés agregaba que en aquella ciudad se construían "excelentes bajeles".

En 1804 el movimiento comercial del puerto de La Guaira fue de 6.321.006,99 pesos fuertes, de los cuales correspondieron 4.019.812,25 pesos a la exportación. El movimiento de los demás puertos alcanzó a 1.295.761,31 pesos. El excedente favorable se elevó, pues, a 1.737.957,50 pesos.

Según Francisco Javier Yanes, el monto de la producción de café en las haciendas de Caracas para 1808 era de 100.000 quintales, valiendo el quintal de 18 a 20 pesos. En los últimos diez años de la colonia la exportación media de café fue —dice Ramón Díaz— de 1.590.200 libras. En 1809 salieron de nuestros puer-

tos 140.000 fanegas de cacao, fanega que el labrador vendía a veces en su casa a 52 pesos; 40.000 quintales de café; 20.000 de algodón; 7.000 zurrone de añil, el cual tenía extraordinario consumo; 50.000 quintales de carne salada; 80.000 cueros de reses mayores; 12.000 caballos, mulas y novillos, número que en otros años había subido al doble. Exportábase también vainilla, zarzaparrilla, cobre, quesos, cuernos. Urquinaona dice que el valor total de la exportación en el citado año 1809 fue de 8.000.000 de pesos fuertes. Las cifras oficiales anuales eran 4.776.500 pesos para la exportación y 5.500.000 para la importación. Pero debe tenerse en cuenta que estas cifras no podían comprender los artículos salidos en contrabando. Dauxion las eleva, contando los últimos, a 5.200.000 pesos. Es probable que la balanza comercial fuese en definitiva favorable. En 1796 las importaciones habían sido de 3.118.811 pesos y las exportaciones de 3.136.682; en trece años nuestro comercio aumentó el 70 por 100.

Sin duda el monto de la producción y del comercio venezolanos que hemos citado representaba poca cosa en el total de 68.500.000 pesos que Carlos Pereyra fija a la exportación de todas las colonias españolas de América; pero cuando se piensa en las cifras de nuestra exportación para 1831, compruébase la terrible exactitud de las palabras del regente Heredia sobre las consecuencias económicas de la guerra.

X

EL SISTEMA FISCAL

DICE Depons que el producto de los impuestos de la colonia servía para pagar "una infinidad de empleos, que los españoles de ambos mundos solicitan con insistencia y desempeñan con dignidad". Es lo que se observa hoy en la India y en Egipto, cuyos presupuestos sopor-
tan créditos muy elevados en beneficio de un ejército de funcio-
narios extranjeros, en actividad o retirados. Los españoles de
ambos mundos, al menos, no eran extranjeros en Venezuela,
señalándose los nativos por su peculiar tendencia a vivir del
tesoro público; y los sueldos, a juzgar por los escasos datos que
tenemos a la mano, no parecen haber sido excesivos, habida con-
sideración de los recursos de la provincia. En tiempo de Carlos II,
por 1680, el gobernador de Venezuela estaba dotado de 650.000
maravedís; el de Cumaná recibía 2.000 ducados; el de Mar-
garita 1.500; el de Mérida y La Grita 2.000; el de Trinidad y
Guayana 3.000. Un siglo más tarde el Capitán General sólo
recibía 18.000 pesos anuales, comprendidos los derechos anejos
al cargo. La Real Audiencia costaba 22.200 pesos, repartidos

así: el regente, 5.300; los tres oidores, 3.300 cada uno; los dos fiscales, 3.300 cada uno; el relator, a quien correspondía además ciertos derechos de las causas, 500 pesos. El puesto de alguacil no tenía salario. Un comandante militar, el de Coro, por ejemplo, ganaba 2.000 pesos al año. Los dos funcionarios de la caja de hacienda de Maracaibo tenían 700 pesos anuales cada uno. Los empleados inferiores eran casi todos criollos.

Si examinamos el sistema y el producto de los impuestos que alimentaban la triple organización política, administrativa y militar de la colonia, se verá que tampoco por este capítulo mereció el régimen las acusaciones exageradas que se le hicieron. No puede decirse, en efecto, que un país cuyos habitantes pagaban por toda cuenta al tesoro la irrisoria suma de 3,25 pesos fuertes anuales por cabeza, según los cálculos más severos, y de 2,30 según otros datos, estaba agobiado por un exceso fiscal tan absurdo como el que se observa hoy en todos los Estados civilizados, con desaliento de las iniciativas y paralización de los esfuerzos del productor. A título de ejemplo, recordemos que el monto global medio de los impuestos que paga anualmente un habitante de Suiza se eleva a 140 francos oro, o sea 24 pesos fuertes. Entre los europeos no es el suizo el más recargado, y esta comparación es interesante aun cuando se tome en cuenta la diferencia de vida, necesidades y riqueza entre un colono venezolano del siglo XVIII y un confederado helvético contemporáneo nuestro. En otras edades cierta categoría de gentes se conocía bajo el nombre de siervos de la gleba: en la actualidad todas las gentes son esclavos del impuesto, sometidos a una tiranía tan odiosa como la que se dice ejercían los barones feudales. En nuestro tiempo, el Estado o el Sindicato reemplazan al soberano absoluto; es decir, que,



Nullitur, egregio quisquis sub Principe creditur
 Servitium. Nunquam libertas gratior extat
 Quam sub Rege pio, Quos præficit ipse regendus
 Rebus, ad arbitrium plebis patrumque reducit,
 Conceditque libens, meritis sibi præmia poscant,
 Seu punire velint.

à Paris, chez Petit rue St Jacques près les Mathurins.

como siempre, un puñado de hombres, una oligarquía que usurpa los nombres de Estado o Sindicato, tiraniza y explota al individuo con el pretexto de servir los intereses sociales o los intereses de una clase; le impone sus horas de trabajo; confisca sus bienes con crecidos impuestos sobre la herencia y la renta; le engaña y roba con la bancarrota de los fondos públicos. Felipe el Hermoso alteraba tímidamente la ley de la moneda: el Estado moderno "estabiliza" a cuatro centavos las unidades de veinte y paga en papel lo que ha prometido pagar en oro.

El gobierno español ensayaba por lo menos distinguir entre los esclavos del fisco y establecer la conveniente desigualdad ante el impuesto, cuando así lo reclamaban las condiciones diversas de las provincias y de los contribuyentes en general. Así vemos, por ejemplo, que la isla de Margarita estaba exenta del pago de ciertos derechos cobrados en otras partes con destino al real Consulado.

El régimen fiscal de Venezuela se basaba en la imposición de la producción y de la renta. No se aplicaban ni el impuesto territorial ni la capitación. Sólo los indios civilizados de dieciocho a cuarenta años, no sujetos a los misioneros, pagaban un derecho *per capita* de dos pesos anuales. La ley admitía, sin embargo, numerosas excepciones, y Baralt observa, además, que este impuesto, suerte de canon de las tierras repartidas, "era frecuentemente dispensado a la más leve insinuación de los indios, que jamás dejaban de alegar enfermedades, miserias e intemperies de la estación para eximirse de pagarlo". Su producto se destinaba en parte a gastos administrativos y en parte a hospitales y beneficencia. Los encomenderos y, al abolirse las encomiendas, el Rey, percibían el sexto.

D. Diego de Osorio había solicitado en 1589 un tratamiento de favor para la provincia en materia fiscal. La Corona concedía ya que no se pagase durante cierto tiempo más del 2 1/2 por 100 de los derechos de aduana; por conducto de su gobernador los colonos pedían que se prolongara esta merced por diez años y, además, la rebaja del impuesto sobre el oro, que era de 20 por 100, y sobre las perlas, que era de 5 por 100, así como la exención de derechos del maíz transportado en cabotaje a Cumaná y Margarita. En 12 de abril de 1592 asimiló Felipe II los puertos de Venezuela a los de Cuba y Puerto Rico, que sólo pagaban el 2 por 100 de almojarifazgo.

Sin detenernos a estudiar las variaciones que sufrió sucesivamente el régimen fiscal de la colonia, veamos el cuadro que presentaba en sus últimos años.

La renta externa estaba formada por los siguientes impuestos:

El de aduana o almojarifazgo, percibido en los puertos, y que se elevaba a 15 por 100. En 1796 cuarenta y tres barcos llevaron a La Guaira mercaderías por valor de 3.118.881,50 pesos fuertes, de los cuales, 932.881,75 libras de derechos. El producto de la aduana fue de 281.328 pesos, lo que arroja menos de 13 por 100 de derechos.

Los impuestos de armada y de armadilla, destinados a los gastos de la marina militar, que se cobraban también en las aduanas marítimas y producían a principios del siglo XIX alrededor de 80.000 pesos fuertes.

El de corso o avería, para atender a la policía marítima contra el contrabando, y el cual daba 150.000 pesos.

En resumen: las mercancías extranjeras reexportadas de España a América estaban castigadas a fines del siglo XVIII con

un derecho total de 43 por 100 *ad valorem*, en impuestos percibidos por diferentes capítulos, tanto en la metrópoli como en las provincias ultramarinas. Pero debe advertirse que en ese 43 por 100 están comprendidos derechos que no eran de aduana propiamente dichos, y que lo mismo sucede hoy en casi todos los países, donde las mercaderías extranjeras pagan recargos a que no están sujetas las nacionales; de modo que el arancel no da idea exacta del impuesto de importación ni de la altura de la barrera proteccionista.

Los artículos coloniales estaban exentos de derechos de reexportación de España para el extranjero. Gran cantidad de productos americanos no pagaban entrada en la metrópoli, y los derechos que satisfacían al ser reexportados no podían juzgarse excesivos. Depons califica de sabia combinación arancelaria el sistema de tarifas de las colonias españolas. A veces el Rey decretaba verdaderas "treguas aduaneras", eximiendo durante varios años de derechos, alcabalas y otras cargas ciertos productos. Así sucedió, por ejemplo, en Cuba en 1792 y 1796, donde beneficiaron de exenciones el café, el añil, el algodón y el azúcar, permitiéndose además la libre importación de otros artículos del extranjero.

El autor de estas páginas habría querido estudiar a fondo si las cargas fiscales que soportaban los venezolanos en lo relativo a aduanas eran efectivamente pesadas, en comparación con las establecidas actualmente por los aranceles de algunos Estados. Pero una encuesta de este género ofrece serias dificultades, pues a ciertas cuestiones no podría responderse sin examinar gran número de aranceles, y para resolver otras sería necesario practicar dos estudios considerables por sí solos: uno sobre el valor

real de las monedas en el curso de la historia, y otro sobre la suma total de impuestos directos e indirectos que pesan, por individuo o por hogar y familia, sobre los habitantes de los diversos países. Tales estudios, que los peritos en la materia no han emprendido todavía, excederían ciertamente el objeto y límites de este libro.

No está de más, sin embargo, someter al respecto algunos datos útiles al lector reflexivo. Se ha indicado que la cifra de 43 por 100 que llegaban a pagar las mercaderías extranjeras, importadas a las colonias españolas, comprendía derechos que soportaban los peninsulares, no los colonos, y que muchos de aquellos derechos no podían llamarse aduaneros. La incidencia global de los impuestos de aduana, o sea la relación entre los percibidos y el valor de las mercancías, puede llegar hoy en los Estados Unidos al 40 y aun al 45 por 100. En otros países aquella incidencia oscila entre 5 y 40 por 100, según el grado de proteccionismo que inspire el arancel, con la circunstancia de que la tendencia general es al aumento. El trigo extranjero paga en Alemania derechos que se elevan a 150 por 100. Las telas de algodón pagan en Francia 60 por 100. Pero sería excesivamente difícil cotejar un impuesto antiguo, creado bajo el régimen mercantil, con uno particular moderno, de carácter fiscal proteccionista o de compensación. En la actualidad las mercancías de tránsito están exentas de derechos en el país intermedio, y, en consecuencia, el comercio extranjero con las colonias no paga nada al pasar por la metrópoli. Mas, sobre no poderse comparar las condiciones de hoy a las existentes en el siglo XVIII, ¿cómo hubiera podido España prescindir de la parte del impuesto

percibido en la Península, cuando ella misma carecía de industria y comercio apreciables, y estaba obligada, por tanto, a alimentar su tesoro con el tráfico colonial? Y ya hemos indicado que la escasez de marina mercantil impedía a la metrópoli conformarse con los proventos del flete.

En los primeros años del siglo XIX el producto de la aduana había bajado considerablemente en Venezuela, debido a la crisis agrícola. Para compensar el déficit, la Capitanía recurría a préstamos al vecino Virreinato o a la administración de los tabacos, que tenía caja separada. De un movimiento de 7.616.768,50 pesos fuertes en mercaderías importadas o exportadas en 1804, percibió el fisco la suma de 514.727,87 pesos, o sea un derecho global de 6,75 por 100. Cerca de cuarenta años después, la República cobraba 13,96 por 100 sobre el total de los productos que pasaban por sus aduanas. El derecho de importación se elevaba para el citado año 1804 a 11,67 por 100, y el de exportación a 4,42 por 100. Durante la República, hacia 1839, dichos derechos eran de 24,71 y 4,87 por 100, respectivamente: tales cifras resultan de los cuadros publicados por Ramón Díaz en el primer tomo de la obra de Baralt.

En vísperas de la Revolución —dice Francisco Javier Yanes— las aduanas dejaban 1.500.000 pesos, suma que llegaba casi a dos millones con el aumento de los derechos e impuestos del giro interior. Dos millones es la cifra que Urquinaona fija solamente para las aduanas.

Además de la renta aduanera, la administración colonial levantaba otras de carácter interno, y que se distribuían de la manera siguiente:

El derecho de alcabala, que era primitivamente de 2 por 100 y que subió luego a 5 por 100, en 1790 produjo 400.000 pesos. Obsérvese que la alcabala o aduana interior subsiste en Francia con el nombre de *octroi*, y rigió en Italia hasta el año último con el de *dazio*.

El de aguardiente, a razón de un peso por barril fabricado, que daba a fines del siglo XVIII 32.000 pesos.

El de papel timbrado, que producía en la Audiencia de Caracas alrededor de 25.000 pesos.

El de sal, que daba 13.000 ó 14.000 pesos.

El diezmo era de 5 ó de 10 por 100, según el artículo. En la Intendencia de Caracas su producto alcanzó a 400.000 pesos anuales. Como se sabe, el diezmo se repartía por porciones desiguales entre la Corona, las mitras y el clero.

El tabaco llegó a producir 700.000 pesos en 1790, cifra que apenas había aumentado en tiempo de Depons.

Los venezolanos estaban tan habituados a la libertad de vender sus productos legalmente o de contrabando, que cuando el intendente Avalos estableció en 1778 el padrón de contribuyentes y contribuciones, en previsión del estanco de varios ramos, la medida provocó general protesta. Había el gobierno pedido parecer a los ayuntamientos, dejándoles la alternativa de escoger entre el proyectado monopolio y una contribución equivalente a la que de aquél se esperaba. Fijó entonces el Intendente una suma de cerca de 200.000 pesos como total de contribuciones, en forma tal, que los nobles se dijeron agraviados por confundírseles con las demás clases para el impuesto. Estancóse el tabaco, que, castigado exageradamente, subió de 12 a 100 reales la arroba. Como gran número de mujeres de las clases bajas

ganaban su vida en la industria libre, la desocupación causada por el monopolio contribuyó mucho a despopularizarlo.

En 1792 abolió el Rey el estanco, imponiendo como condición que se pagase un impuesto equivalente a su producto. Fue entonces cuando, a invitación del de Caracas, los ayuntamientos venezolanos diputaron representantes para discutir el asunto en la capital: todas las ciudades optaron por la abolición del monopolio, excepto Barinas, donde, sin embargo, según escribe Terrero, su establecimiento había provocado descontento por sacar aquella provincia grandes recursos de la industria libre. Baralt dice refiriéndose al voto de los barineses, que "se probó a los cabildantes que semejante opinión provenía de los sueldos y emolumentos que reportaban de la institución, y no de su buen discernimiento y patriotismo". Sea lo que fuere, de todo ello se deduce que los colonos tenían la posibilidad de dar opinión en materia de impuestos, ejerciendo una especie de intervención en este importante asunto, cuya discusión es el origen mismo del régimen representativo y parlamentario. Y no sólo se valían los venezolanos del ayuntamiento para quejarse al Rey contra el fisco: los gremios eran verdaderos sindicatos que, constituidos en la forma tradicional que en todas partes tuvieron las corporaciones de su índole, defendían los intereses peculiares de cada oficio y profesión, y se juntaban a veces para dar más fuerza y eficacia a sus demandas. Vallenilla Lanz cita el muy instructivo caso de 1734, cuando varios gremios de Caracas protestaron contra nuevos impuestos destinados por real cédula a obras de utilidad pública: la Corona oyó la protesta y suspendió los efectos de su orden, ganando así la causa aquella ocasional federación de labradores, madereros, arrieros y pulperos.

En los treinta años que van de la creación del monopolio del tabaco a 1809, la renta de este artículo produjo al tesoro una utilidad líquida de 14.832.931,80 pesos fuertes, lo cual da un promedio anual de 472.000 pesos. Durante los diez años de la Gran Colombia el producto fue, en Venezuela, de 175.000 pesos anuales

A fines del siglo XVIII y principios del siguiente el producto total de los impuestos percibidos por la Intendencia de Caracas podía calcularse en 2.300.000 pesos, suma superior a los gastos de la administración pública, la cual cesó de recibir auxilios de México. En 1801, año económico desastroso para la Capitanía, Heredia vio pasar por Coro 200.000 pesos que enviaba, a título de préstamo, el gobierno de Santa Fe. Según Moreno, la caja real de Maracaibo, que centralizaba los impuestos de Maracaibo, La Grita, Mérida, Gibraltar, San Cristóbal, San Faustino y Barinas, recolectaba generalmente, para 1772, 37.000 pesos anuales. Este producto aumentó después; pero la provincia de Caracas, incomparablemente más rica y extensa que las demás, continuó soportando el mayor peso en cuanto a contribuciones. Francisco Javier Ustáriz, ministro de Hacienda de la República en 1811, decía al Congreso que las rentas de Caracas subían a un millón, mientras que entre las demás provincias ninguna había que tuviese 100.000 pesos. Margarita era muy pobre, y, según Urquinaona, no podía sostener los oficios reales, debiendo la administración de Cumaná enviarle mensualmente un situado de 2.500 pesos para pagar su guarnición de ochenta soldados. En 1788 los impuestos sólo producían en la provincia de Guayana 14.000 pesos.

En síntesis: para la época de la Revolución las rentas arrojaban un excedente considerable sobre los gastos, y los venezolanos pagaban impuestos por la suma global de 2.300.000 pesos anuales. Heredia dice que el 19 de Abril había en las cajas públicas dos millones, cantidad que otros escritores elevan a tres millones. Urquinaona habla además de un depósito de 300.000 pesos existente en la tesorería de La Guaira.

XI

LA DEFENSA NACIONAL

UNA paz admirable reinó generalmente durante trescientos años en el interior de América, a tiempo que, en las fronteras y costas, españoles y criollos rechazaban los constantes e inevitables ataques de las naciones rivales. En el espacio de aquellos tres siglos España creó y protegió entidades políticas llamadas a prodigioso desarrollo, situadas a miles de millas de la metrópoli y mucho más extensas que ella. El observador francés citado con frecuencia, y que vivió veintidós años en las colonias, proclamó en frases definitivas la majestad de la paz hispánica: "La organización del sorprendente mecanismo que a tales distancias mueve los resortes con tanta regularidad, en países que no tienen entre sí ninguna semejanza de clima, de población ni de productos, es, sin duda, la obra maestra del espíritu humano." Juicio más elogioso no podría hacerse hoy de la sabiduría política que aplican los ingleses al mantenimiento de su vasto imperio.

Aquella paz se mantuvo casi sin soldados. El sistema defensivo empleado por los españoles, modificado gradualmente, a

medida que lo imponía la necesidad y según el espíritu de los tiempos, reposaba en la constitución jurídica y social de la colonia, y evitó a la Monarquía gastos y militarismos. En 1772, el virrey de Nueva Granada, Guirrior, decía: "La obediencia de los habitantes no tiene otro apoyo en este reino, a excepción de las plazas de armas, que la libre voluntad y arbitrio con que ejecutan lo que se les ordena, pues siempre que falte su beneplácito no hay fuerza, armas ni facultades para que los superiores se hagan respetar y obedecer". Veinticinco años más tarde, Ezpeleta comprobaba que en el interior del Nuevo Reino no hubo cuerpo alguno de tropa veterana, sino después de la conmoción popular de 1781.

Si nos concretamos a Venezuela, veremos que allí ejerció la metrópoli su autoridad sin el auxilio de tropas de línea. Apenas cuarenta años antes de los sucesos que determinaron la Independencia, empezó el gobierno a tomar medidas encaminadas a la organización de fuerzas permanentes. La Capitanía había sido teatro de las proezas militares de los conquistadores y de los indios en el siglo XVI; pero será la Revolución la que enseñará al venezolano, tipo resultante de aquéllos, sin hablar de la aportación negra, un arte u oficio en el cual ha brillado entre todos los pueblos del Continente: la guerra. Es singular que ciertas plumas censuren a España justamente por el hecho de no haber tenido en Venezuela sino un puñado de soldados profesionales, suficiente para encuadrar las milicias, es decir, para realizar en plena época de oscurantismo una teoría de los socialistas actuales. Agréguese que los españoles no tenían gran mérito en aplicar dicho sistema, puesto que el del alistamiento obligatorio, que

permite las hecatombes contemporáneas, data de la Revolución Francesa.

Hemos visto cómo la conquista material fue obra de unos cuantos capitanes, acompañados apenas, las más de las veces, de algunas docenas de soldados, y que sólo contingentes de indios aliados o sometidos vinieron ocasionalmente, aunque conservando sus viejas armas, a engrosar la hueste invasora. Nuestras villas y ciudades primitivas, formadas de bohíos, fueron campos atrincherados con una cintura de palenques, como la que levantó García de Paredes para proteger a Trujillo. Fajardo resistió largo tiempo, en El Rosario, detrás de una empalizada; y en El Collado elevó un fuerte de madera que le permitió rechazar varios asaltos de Guaicaipuro. Al abrigo de estacadas defendió Guillermo Loreto la efímera Santiago, fundada por Diego Fernández de Zepa. Garci González de Silva construyó una plaza de armas "más con las circunstancias de presidio que con las apariencias de república", según dice Oviedo y Baños, en la cual atrincheró a sus soldados en un fuerte de leño. Y con un fuerte bien armado de versos y culebrinas contuvo Cristóbal Cobos los impetuosos ataques de los cumanagotos, mientras pudo salir a batirlos en campo raso.

La principal preocupación de las autoridades venezolanas una vez pacificado el territorio, y aun antes, fue defenderse contra las irrupciones del extranjero, que, como se ha visto, atacaba las costas y las fronteras orientales, pillaba las villas vecinas al mar y algunas veces las del interior. Los filibusteros franceses aparecieron en nuestras costas por 1528. Durante el gobierno de Ponce de León los piratas ingleses asaltaron a Coro, la destruyeron a medias, y no consintieron en retirarse sino mediante el

pago de tres mil pesos, recaudados con trabajo entre los moradores. Caracas fue también saqueada por los ingleses. El 6 de febrero de 1595, sir Walter Raleigh zarpó de Inglaterra para Guayana. Víctimas de su mala fe fueron los españoles de Trinidad, pues el corsario, después de prometerles traficar en paz, cayó sobre ellos por sorpresa, apresó a Berrío e incendió el establecimiento. Martínez, sobreviviente de la expedición de Ordaz, parece haber sido el inventor de la leyenda del Dorado y de la prodigiosa de Manoa, que Berrío contó al inglés, sin duda para incitarle a correr la mortal aventura Orinoco adentro. Las provincias orientales fueron teatro de más de una batalla por la posesión de las salinas: en 1606, por ejemplo, tuvo lugar un combate naval en aguas de Araya, en el cual los españoles vencieron a los holandeses, tomándoles muchos prisioneros. En 1617 efectúase la segunda expedición de Raleigh, en la que su hijo halla la muerte. Para esta época los españoles habían emprendido importantes trabajos militares en Guayana, entre otros un anchísimo campo de penetración de doscientas millas hacia las montañas del Sur. Una empalizada y un fuerte armado de cañones permitieron a Palomeque defenderse con honra, aunque sin buen éxito, contra las fuerzas, ocho veces superiores en número, del invasor inglés.

En la lucha secular que por la posesión de la Guayana sostienen españoles y holandeses, los adversarios alíanse con tribus rivales, que lanzan unas contra otras, y alistan contingentes indios bajo sus respectivas banderas. Los caribes dan sus mujeres a los holandeses, y combaten casi siempre al lado de éstos, aun cuando a veces los traicionan para pasar al campo de los franceses establecidos en Barima. Los indígenas del interior del Orinoco per-

manecieron fieles a España. En 1614, Muxica, a la cabeza de trescientos indios, encuadrados por oficiales y soldados españoles, atacó y destruyó el fuerte enemigo de Corentyn. Juan de Urpín llevaba consigo tropas indias, que se batieron con bravura, en el asalto victorioso que libró a aquellos extranjeros, en agosto de 1640, a orillas del Unare. Los holandeses llegaban hasta fomentar las rebeliones de las tribus sometidas, y a sus agentes se debió, en parte, la del zambo Andresote y la de los indios de Trinidad en 1637.

En mayo de 1627 Felipe IV ordenó que se organizase por el tesoro de la colonia una pequeña armada para combatir a los piratas, pero el cabildo de Caracas no tuvo dinero con que hacerlo. La situación se agravó en los años siguientes, y a tanto llegó la insolencia de los corsarios, que robaban las haciendas cercanas a Caracas, llevándose el cacao y los negros esclavos, y empeorando así el estado de general miseria. En 1662 los holandeses incendian la villa de La Asunción, en Margarita; como años después el Olonés y sus bandidos aterrorizan a Maracaibo durante dos semanas y luego se embarcan para Gibraltar. El gobernador de Mérida había enviado cuatrocientos soldados de refuerzo, y los españoles pudieron oponer resistencia, atrincherados con gaviones y protegidos por la artillería. Los ataques piráticos se estrellaban contra tales defensas; pero el Olonés recurrió al ardid de retirarse, con lo cual los españoles, engañados, dejaron sus posiciones y se lanzaron a perseguirlo: cuando se vio fuera del alcance de los cañones, el francés volvió caras y derrotó a sus enemigos. La mortandad fue considerable; la ciudad cayó en poder de los invasores y fue saqueada; los cadáveres de los vencidos fueron arrojados al lago. Bien pronto

Morgan renueva en aquellas regiones los horrores del Olonés, y destruye en el golfo una armada de tres navíos de cuarenta, treinta y veinticuatro cañones, que, al mando de D. Alonso del Campo y Espinosa, había sido enviada contra los bucaneros. Vuelven los franceses y arruinan a Valencia en 1677, y al año siguiente los establecimientos de Margarita y Trinidad. Gramont destruye a Trujillo. Al propio tiempo que las costas del Caribe, atacan los ingleses por el Orinoco; corsarios de esta nación queman a Santo Tomás y muchas aldeas indias del vecindario.

El gobernador de Venezuela, en sus funciones militares de capitán general, cuidó en toda época de poner a La Guaira y otros puertos en estado de defensa. Osorio fijó el derecho de un peso por esclavo importado, con destino a la construcción de la fortaleza de aquella ciudad. Robles, Vera, Porras, Villegas, de 1654 a 1670, estudiaron personalmente las fortificaciones del puerto. Por estos tiempos consagróse a la mejora de aquéllas el producto de ciertos impuestos provisionales sobre la miel, el azúcar, el tabaco, el vino, el aceite y el cacao. Las nuevas fortalezas resistieron con eficacia a los holandeses en 1703. Fuertes y castillos, en los cuales pequeñas guarniciones podían defenderse útilmente, alzáronse paulatinamente en los puntos estratégicos de la costa marítima y del Orinoco. Algunas de estas construcciones reunían condiciones que han valido a las fortalezas españolas de América, de parte de extranjeros entendidos, la calificación de obras maestras, de maravillas de castrametación, tanto por sus proporciones como por la ciencia que revelan. En Araya se levantó hacia 1625 un castillo formidable, que costó un millón de pesos fuertes, y, destinado a proteger las salinas contra los holandeses, estaba armado de treinta cañones y con-

taba 246 hombres de guarnición, de los cuales 20 artilleros. A su abrigo fundóse una villa que en 1720 tenía más de mil habitantes, entre quienes se organizó una compañía de 59 milicianos. La obra fue demolida a mediados del siglo XVIII, cuando se agotaron las salinas. En 1728 Carlos de Sucre, gobernador de Cumaná, comenzó la construcción del fuerte de San Francisco, en Guayana, que los ingleses tomaron trece años después. Dos nuevos castillos se levantaron en 1746. Los fuertes de Angostura y de Guayana la Vieja, de San Antonio, en Cumaná; del Morro, en la boca del río Neverí, de la isla de Margarita; de La Guaira; de Puerto Cabello y, en fin, de la barra de Maracaibo, armados los principales de poderosa artillería, protegían así nuestra tierra y contribuían a mantener la tranquilidad interna. Las guarniciones eran escasas: a principios del siglo XVII sólo había en La Guaira 130 ó 150 soldados, mandados por el justicia mayor; cuando los piratas franceses atacaron a Maracaibo, 250 españoles se defendieron con valor, pero sin buen éxito, en el castillo, que muy luego debía reforzarse, por iniciativa, parece, del obispo Acuña. Después de una de las invasiones, en que los ingleses se llevaron de los fuertes de Maracaibo cuarenta piezas de artillería, la Audiencia de Santa Fe ordenó proceder a nuevas fortificaciones en la barra del lago, donde se instalaron entonces ocho gruesos cañones y 40 soldados. Una parte del impuesto de la sisa que correspondía a la provincia de Mérida fue destinada a costear la mitad de estas obras. Los castillos guayaneses apenas tenían 100 oficiales y soldados, más una compañía de 58 milicianos.

Mas la colonia hubo de sufrir, a mediados del siglo XVIII, ataques en regla de beligerantes organizados, que reemplazaron

a los corsarios y a los piratas. El 22 de octubre de 1739 la flota inglesa bombardea a La Guaira; pero, a pesar de estar desprevénidas las autoridades por ignorarse la ruptura de hostilidades, los venezolanos logran rechazar al enemigo. Poco después el almirante Vernon atacó a Cartagena con una armada de 48 navíos y 30.000 hombres. Blas de Lezo, que mandaba la guarnición de 3.000 soldados, defendió heroicamente la plaza durante dos meses, y forzó, por último, al enemigo a abandonar la empresa. El gobierno español tomó entonces medidas para asegurar mejor la defensa de las costas del mar Caribe. La Compañía Guipuzcoana, que desde 1733 había construido en Puerto Cabello un fuerte, en el cual gastó 300.000 pesos, transportó en sus barcos a La Guaira tropas, armas, municiones y cañones de grueso calibre. Entonces llegó de la Península una parte del regimiento de Victoria, bien amunicionada, y cuando el 2 de marzo de 1743 se presentaron de nuevo los ingleses, las fortalezas respondieron eficazmente a su copioso bombardeo. El ruido de la artillería causó pánico en la población de Caracas, pero el gobierno envió rápidamente tropas a guarnecer a Maiquetía y Macuto. Retiróse, toda maltrecha, a Curaçao la flota británica, para volver dos meses después, ya reparada, contra Puerto Cabello. Cerca de tres semanas duraron allí los combates, por haber logrado desembarcar el enemigo. La llegada del gobernador Zuloaga y de las milicias de Aragua restablecieron la situación, y el inglés quedó de nuevo escarmentado.

El gobierno peninsular, preocupado, por otra parte, de las resultas de la revolución de Francisco de León, tomó nuevas medidas para mantener la paz en la Capitanía. Pronto llegó un contingente de 1.800 soldados con artillería y pertrechos. A fines

de 1749 desembarcó Julián de Arriaga con 1.500 infantes de línea y alguna caballería; y en 1751 trajo Ricardos 1.200 veteranos más. Veinte años después llegará el mariscal marqués de La Torre con el regimiento de Lombardía, enviado más tarde a Cuba.

La provincia de Cumaná no inspiraba entonces inquietudes al gobierno, pero sí se reclamaba allí contra la falta de fortificaciones y tropas en Trinidad y Margarita, muy expuestas a la codicia del extranjero.

En Maracaibo ejercían sus desmanes los indios motilones, por escasez de policía armada. Según el informe de Moreno, en esta provincia había tres compañías de 140 hombres; en Guayana, 243 soldados, de los cuales, 20 artilleros y 32 gastadores; en Margarita, una compañía de 50 hombres, más 2.058 milicianos inscritos.

Durante los últimos años del reinado de Fernando VI proceden las autoridades coloniales a la reorganización de la milicia. La real cédula publicada por Esternós despierta en los colonos de todas las castas el deseo de entrar en aquélla para obtener, entre otras ventajas, la del fuero militar. España lograba, por otra parte, halagar a nuestros antepasados con la perspectiva de uniformes brillantes y recurría, para reunir milicianos, a métodos de propaganda análogos a los que en nuestra actual esclarecida época emplea el gobierno de la Gran Bretaña, aun ejercido por socialistas, cuando para atraer mercenarios llena los muros de las grandes ciudades de cartelones que representan soldados de la guardia, con dormán escarlata e inmenso colbac de pieles. Para 1759 se habían constituido en Caracas ocho compañías de milicianos mulatos. La fiebre del servicio militar se extendió

a toda la provincia. La agricultura perdió brazos. El cronista eclesiástico nota que entonces "todos quieren ser jefes", ambición tan genuinamente venezolana que no logra el tiempo destruirla, ni siquiera aminorarla.

La reorganización militar estaba cumplida a principios del siglo XIX, en cuya época, y según Depons, quien seguramente obtuvo sus informaciones en fuente oficial, el Capitán General comandante en jefe de las tropas reales y responsable de la seguridad pública en todo el territorio de Venezuela, disponía de 13.136 hombres, entre fuerzas de línea y milicianos. Estas tropas se repartían del modo siguiente: En Caracas, La Guaira y Puerto Cabello había un regimiento de línea, reclutado en España, que contaba cerca de 1.000 soldados; las precauciones del gobierno para proteger la última de aquellas plazas, que era la más importante del país en lo militar y, con La Guaira, la mejor artillada, permitían reunir allí 3.000 hombres en menos de una semana. Había, además, en la capital un batallón y un escuadrón de milicianos blancos y dos de pardos. En Valencia y valles de Aragua había dos batallones de blancos y dos de pardos. Cuando la expedición de Miranda, en 1806, el Capitán General concentró rápidamente en estas regiones 8.000 hombres. En Maracaibo había cuatro compañías de línea y nueve de milicia, de estas últimas, cuatro de pardos. En Cumaná estaban acantonadas tres compañías de línea, y la provincia podía reunir sin tardanza para su defensa hasta 5.000 milicianos. En Margarita: una compañía de línea y diez de milicias, de las cuales, cuatro de gentes de color. En Guayana: una compañía de línea; para 1809, según informaba la Intendencia de Caracas, los 266 hombres que protegían el Orinoco estaban repartidos entre Angostura y los diferentes

fuertes situados en el gran río y sus afluentes; de ellos, 63 eran milicianos pardos, y el resto lo componían infantes y artilleros veteranos. En Barinas: una compañía de línea. El efectivo de las compañías variaba según el lugar, aunque nunca bajaba de 50 hombres, como tenían las de Cumaná; la de granaderos de Caracas tenía 74 entre oficiales, suboficiales y soldados; la de fusileros contaba 80; la de Barinas, 77.

Sir Arthur Wellesley, encargado en 1807 por el gobierno británico de estudiar un proyecto de ataque a Tierra Firme, cuyo informe publicamos en el *Boletín de la Academia Nacional de la Historia* (enero-marzo de 1930), confirmaba en general las cifras anteriores, estimando en 13.159 hombres las fuerzas que guarnecían el conjunto de los territorios venezolanos, distribuídas en la forma siguiente: En la provincia de Caracas "un ejército formado de 6.558 hombres, de los cuales 918 de infantería regular; 900 de artillería, principalmente milicia; 150 de caballería de milicia; 2.400 de infantería de milicia blanca y el resto de gente de color. En Maracaibo hay un cuerpo de 1.218 hombres, de los cuales 308 son de infantería regular; 100 de artillería negra; 450 de milicia blanca, y el resto de gente de color. En Cumaná hay 2.916 hombres, de los cuales 221 de infantería regular; 450 de artillería, principalmente milicia; 175 de caballería de milicia; 1.080 de milicia blanca, y el resto de gente de color. En Guayana hay 1.120 hombres, de los cuales 150 de infantería regular; 100 de artillería de milicia; 150 de caballería de milicia; 360 de infantería de milicia blanca, y el resto gente de color. En la isla de Santa (*sic*) Margarita hay 1.347 hombres, de los cuales 77 son de infantería regular; 400 de artillería de milicia;

50 de caballería de milicia; 360 de infantería de milicia blanca y el resto gente de color”.

Sir Arthur, instruido por los sucesos de Buenos Aires, estimaba que Inglaterra no debía “reposar enteramente sobre los informes que hemos recibido de la insuficiencia de los establecimientos militares españoles en América”, y suponía que las autoridades venezolanas habían reforzado la defensa después de la expedición de Miranda. Sin embargo, no creía difícil apoderarse de La Guaira y tenía por mediocre el fuerte de Cumaná. El general británico decía que para ocupar el país se necesitaban 10.000 soldados, más la artillería.

Christie, agente informador del gobernador inglés de Curaçao, decía en 1808 que la sola provincia de Caracas, donde había 2.000 soldados regulares y 9.000 milicianos, podía movilizar en una semana 31.000 hombres, sin contar los indios. “El sentimiento general a través de este país, tan extenso e interesante —concluía el inglés—, es de completa confianza en su propia fuerza interior, y realmente nada parece faltarle, como no sea una fuerza naval protectora y la ayuda de algunos oficiales conductores”.

Robertson, otro informador británico, estimaba el mismo año la fuerza militar de Maracaibo en 2.000 regulares y milicianos, pero agregaba: “los habitantes están todos disciplinados como para servir en la milicia cuando se les llame”.

XII

LOS PODERES PUBLICOS DE LA COLONIA

LOS instrumentos del poder público en la colonia venezolana de fines del siglo XVIII son: el Capitán General, que dura siete años en ejercicio; el Intendente de Real Hacienda, la Real Audiencia, los gobernadores de las provincias, los Ayuntamientos.

Por las trabas que oponían las leyes y el uso a la autoridad del Capitán General; por las limitaciones e incompatibilidades a que estaban sujetos su persona y su cargo; por su impotencia en materia de hacienda y su deber de consultar a la Audiencia en negocios arduos, más el recurso de apelar al Rey que tenía este tribunal, y, en fin, por el juicio de residencia a que estaba sometido al dejar sus funciones, puede decirse que el supremo gobernante de la colonia era un mandatario constitucional, y en manera alguna el arbitrario déspota que pretenden ciertos demagogos de la Historia. El juicio de residencia, sobre todo, fue uno de los medios más eficaces y admirables de que se valió la autoridad metropolitana para mantener dentro del deber a funcionarios que el alejamiento de ésta podía inducir a cometer

abusos y violencias. Ningún empleado entraba a ejercer un nuevo cargo si no poseía el certificado de haber sufrido victoriosamente este juicio. Y varios fueron los ejemplos que dio la justicia real de que no quedaban impunes los delitos cometidos aun por los primeros agentes de la Corona. Luis de Rojas, culpable de atropellos al Ayuntamiento de Caraballeda, de ruina de esta ciudad y de prisiones injustas, fue aprisionado a su turno y condenado a la pérdida de sus bienes. El licenciado Leguizamón, exactor de la provincia o juez pesquisidor demasiado severo de la conducta de los conquistadores, se vio suspendido de sus funciones y hubo de restituir las sumas indebidamente cobradas. El castigo de D. Francisco Cañas y Merino, reo de haber hecho ajusticiar a algunos contrabandistas, amén de otros desmanes, fue la degradación, con prisión y miseria, escapando al cadalso sólo en virtud de un indulto general acordado con ocasión del nacimiento del príncipe de Asturias, futuro Luis I. Betancourt y Castro fue depuesto en 1720 por sospechársele de andar en líos con los contrabandistas.

La autoridad política no intervenía en materia fiscal, que correspondía exclusivamente al Intendente. Gozaba este empleado de poder discrecional para fijar y recaudar los impuestos y administrar las rentas, y se mezclaba hasta en la hacienda particular de las provincias y aun de las villas y ciudades. Vallenilla Lanz compara al Intendente a un ministro de Hacienda que, con mayores facultades que las dadas ordinariamente a tal funcionario, fuese independiente del jefe del Estado.

La Real Audiencia se nos presenta, ha podido decirse, no sólo como el órgano de aplicación de las leyes en su carácter de tribunal de alzada y, para ciertas causas, de primera instancia, sino

también como la defensora de las libertades públicas y la salvaguardia del colono. Compónese del regente, de tres oidores, de dos fiscales —uno civil y criminal y otro de hacienda—, del relator y del alguacil. La preside el Capitán General como representante del Rey, pero sin voto deliberativo ni aun consultivo, lo cual asegura a los magistrados su independencia del poder político.

Los militares, los clérigos y los empleados de hacienda gozan de fueros, es decir, tienen el privilegio de ser juzgados por tribunales especiales. Los pleitos entre comerciantes se ventilarán más tarde ante el real Consulado, jurisdicción más barata y expeditiva que la ordinaria y que excluía la intervención de abogados y enredadores. En la época actual los fueros han cambiado de definición, pero en cierto modo subsisten; hoy la competencia se establece en razón de la materia y no de la persona, lo que es análogo, si no idéntico. La existencia de tribunales de hacienda, de comercio, militares y, en algunos países, de negocios eclesiásticos, justifica, aparte otras razones, los fueros de la colonia. Adviértase, además, que el juez ordinario podía conocer de ciertas causas criminales de los clérigos, y arrestar y formar sumaria a los militares delincuentes.

En principio, puede afirmarse que la Real Audiencia prolongaba en Venezuela la gran tradición judicial española y aplicaba justamente las leyes. Acaso merecieran sus fallos el juicio que el viajero Depons emitía sobre los del Consejo de Indias en los primeros años del siglo XIX: "Siempre se han distinguido por la equidad, la sabiduría y la experiencia... Durante más de doce años de permanencia dentro de la jurisdicción del Consejo de Indias, siempre vi aplaudir sus decisiones y jamás oí un solo caso

de corrupción o de favor. El oprimido, aunque sea muy poderoso su opresor, da por ganada su causa si está cierto de que el Consejo de Indias tendrá conocimiento de ella". Y el paciente observador del medio y del régimen coloniales, si bien asienta que en pocas ocasiones la verdad sube hasta el Rey y su Consejo, concluye: "Cada vez que la verdad llega hasta ellos la inocencia y la justicia triunfan, aun cuando tengan por adversarios al valimiento y a la riqueza". Creado por Fernando e Isabel, organizado definitivamente por Carlos V en 1524 y luego por Felipe II, el Consejo de Indias era la suprema jurisdicción y el inmediato asesor del monarca en asuntos americanos, ya fuesen éstos eclesiásticos, políticos, de hacienda, justicia, comercio o guerra.

Mucho mal se ha dicho de la legislación española, en general por quienes no la conocen. En realidad, ningún pueblo —fuera de Roma— presenta un monumento jurídico comparable al que levantaron los legistas españoles, a partir de Alfonso el Sabio y aun de los soberanos visigodos. Partidas, fueros, ordenamientos y leyes peninsulares formaban el conjunto de preceptos que, con las leyes especiales de Indias, dictadas por Carlos V en 1541, regía las relaciones civiles de los colonos. Los próceres de la Independencia, seducidos por la claridad, lógica y método del Código Napoleón, novedad de la época, repudiarán las leyes castellanas calificándolas de caóticas. El caos legislativo no existía solamente en las colonias, sino también en la metrópoli, donde, según vieja y cuerda costumbre, se legislaba a medida de las necesidades, sin preocuparse de sistemas teóricos. Sin embargo, en este punto nuestro desorden y el desorden español no eran peores que el que ofrecen todavía la legislación y la jurisprudencia inglesas, que pocos censuran y muchos admiran. Los códigos

españoles conservaban ciertas penas como la capital, la mutilación, el tormento, del propio modo que en Francia y otros países existía el descuartizamiento. En esta materia todo cuanto hicieron los juristas de José Bonaparte, en su reforma de la legislación peninsular, fue reemplazar la horca por el garrote, que es más inhumano. Los jueces de Venezuela aplicaban poco tales penas. "Raras veces —escribe Baralt—, si va a decir verdad, se decretó por las Audiencias de América la pena del último suplicio; y muy pocas cayó sobre el buen nombre de aquellos respetables cuerpos mancha deshonrosa." La arbitrariedad de que habla este autor se ejercía en todo caso, como puede verse, en el sentido de la lenidad.

Hasta 1718 dependieron los territorios venezolanos, en materia judicial, de la Audiencia de Santo Domingo. Pasaron entonces a la jurisdicción de la de Santa Fe; pero muy luego volvieron las cosas a su antiguo estado, en vista de los inconvenientes de todo género que provocara la reforma. En 1786 se creó la Audiencia de Caracas.

El verdadero centro de la vida política de la colonia estaba en los Ayuntamientos, cuya importancia se mantuvo hasta las postrimerías del régimen español y aun revivió cuando, bajo Morillo, fueron restauradas las autoridades realistas. Depons habla del mucho respeto que los españoles profesaban a sus instituciones municipales; por españoles debe sin duda entenderse aquí venezolanos o americanos en general, ya que en la Península el viejo municipio era apenas un recuerdo. Nada, como no fueran los asuntos de la guerra, escapaba a la competencia de los Ayuntamientos que, durante muchos años, ejercieron soberanía efectiva en la colonia. Y aun se dieron casos en los cuales el

municipio decidió en materia de contingentes militares, como, por ejemplo, cuando se aliaron Caracas y Caraballeda, y cuando Gutiérrez de la Peña y Bernáldez recorrieron villas y ciudades en solicitud de soldados.

El español había traído consigo aquel espíritu de libertad e individualismo que por sus diversas manifestaciones tantas trabas pusiera a la acción de Carlos V en su lucha con el rey francés, cuyo poder indiscutido presentaba singular contraste con el del soberano de España, obligado siempre a tomar en cuenta los fueros de sus vasallos. Los hombres que conquistaban a América, en su mayor parte aventureros de toda condición, capaces de grandes hazañas o de grandes crímenes, entregados en los primeros tiempos a realizar propios designios por el alejamiento del poder central, debían tender a una independencia que se apoyaba doblemente en la tradición de la raza y en las circunstancias del medio. Vemos así a los conquistadores alzarse a veces contra las provisiones reales: los habitantes de Cubagua impiden al milanés Lampugnano ejercer el derecho de pesca de perlas que le ha acordado el Emperador, "disponiendo —dicen los colonos— de lo que no le pertenece". Los soldados en campaña establecen verdaderos "soviets" y se arrogan la facultad de elegir a sus jefes: en la guerra del Meta, como se hallara sin cabo, por muerte de Cedeño, la tropa eligió por tales a Losada y a Reinoso. Actos importantes de la conquista se verifican con intervención directa y decisiva de los simples soldados que, prescindiendo por un momento de la estricta disciplina militar, deliberan como ciudadanos: en 1574, cuando Calderón trató de fundar una ciudad a orillas del Tuy, sus subalternos, a quienes consultó, opinaron que la fundación sería inoportuna, porque debilitaría a

Caracas y Caraballeda, que sostenían dura lucha por la existencia. En esta ocasión, como era natural, hubo diligencias jurídicas en debida forma por parte de los soldados para obligar al cabo a acatar la decisión. Y fue previa consulta y con expresa aprobación de su tropa como Sebastián Díaz fundó, en 1584, la ciudad de San Sebastián de los Reyes.

En la vida cívica el Ayuntamiento es forzosamente el organismo de que se valen los colonos para ejercer sus libertades. La más importante de éstas consiste en poder elegir a sus alcaldes dispensadores de la justicia, verdaderos tribunales plantados frente a los gobernadores para equilibrar su poder y, a veces, para usurparlo. Durante el siglo XVI las ciudades venezolanas estaban mandadas por cuatro regidores, a quienes correspondía la elección de los alcaldes. El poder de los regidores arrancaba del nombramiento que en ellos hacía el fundador de una ciudad provisto de mandato regular del gobernador, y aquel nombramiento era el primer acto de la fundación. En los primeros tiempos, la designación de regidores podía tener forma más democrática, puesto que por cédulas de 1520 y 1523 Carlos V había ordenado que, a falta de capitulación suya con los adelantados, los cabildos fuesen elegidos con la concurrencia y participación de los vecinos. En todo caso, los regidores, en cabildo, elegían a los alcaldes. De esta prerrogativa, y en el año 1586, pretendió D. Luis de Rojas privar a los habitantes de Caraballeda, lo cual ocasionó un largo pleito y el abandono del establecimiento por los vecinos, indignados ante la prisión de sus magistrados por el tiránico gobernador. D. Diego de Osorio suprimió, en 1594, los alcaldes cadañeros y, usando de la respectiva real orden, sacó a pregón los oficios de cabildo, que vinieron así a convertirse en

vitalicios. La venalidad de estos cargos y su estabilidad, al mismo tiempo que aseguró la independencia de la magistratura, contribuyó a la formación, en el curso de los años, de la clase burguesa, que compartirá paulatinamente con los descendientes de los más notables conquistadores, que se decían nobles, la dirección efectiva de la sociedad colonial.

Pero no se limitaron los alcaldes a administrar la justicia, y muy pronto tuvieron atribuciones políticas, principalmente la de asumir el gobierno de sus distritos en caso de vacar el puesto de gobernador. A decir verdad, los alcaldes venezolanos seguían una costumbre española, confirmada entre nosotros, como veremos, por las leyes de Indias y las ordenanzas. Tal parece ser el origen de lo que en nuestro lenguaje republicano federal llamarán siglos más tarde los Concejos Municipales "reasumir la soberanía", ingenioso expediente a que se recurre con frecuencia para reformar la Constitución.

A la muerte del gobernador Rembolt reciben el mando los alcaldes Marcio y Bonilla, a cuyas disputas pone fin Juan de Villegas. En 1548 el licenciado Pérez de Tolosa designó como sucesor a este mismo Villegas su teniente, pero sólo por la fuerza logró el conquistador hacer entrar en razón a los alcaldes de Coro y de El Tocuyo, quienes alegaban que la autoridad política les correspondía en sus respectivos distritos. En 1556, la muerte de Villacinda dejó el gobierno en manos de los alcaldes ordinarios de las ciudades, cada cual en su jurisdicción. Para poner en claro el asunto recibió Sancho Briceño encargo de pedir instrucciones al Rey, y vino entonces la real cédula de 8 de diciembre de 1560, por la cual Su Majestad ordenó gobernasen "en cada una de las ciudades y villas los alcaldes ordinarios que en tales pueblos hubiere, entre

tanto que por Nos se provee otro gobernador". Manzanedo dejó el mando a los alcaldes; pero como todas las ciudades de la provincia acudieran a la Audiencia de Santo Domingo con el ruego de que se nombrara a Bernáldez, volvió éste a Coro con su investidura, debida a una especie de aclamación de los municipios. Mandaron también los alcaldes en sus distritos a la muerte de Ponce de León y, en 1600 y 1603, a la muerte de Piña Lidueña y de Suárez del Castillo. Pero en 1623, cuando murió Guillasmas, entraron los alcaldes de Caracas a gobernar la provincia entera; y lo mismo sucedió en el interregno de 1651 a 1654, y al año siguiente por muerte de Robles. Aduenñáronse así los caraqueños de un privilegio que la Corona confirmó más tarde cuando, apoyándose en la cédula obtenida por Briceño, los alcaldes Tovar y Galindo se negaron, por 1675, a reconocer los poderes de Padilla Guardiola, enviado por la Audiencia de Santo Domingo a recoger la sucesión del difunto Orejón. Llevado a la Corte el litigio, mediante la misión de Arrechadera, acordó el Rey por cédula de 18 de septiembre de 1676, privilegio a los alcaldes de Caracas para gobernar toda la provincia en caso de fallecimiento del gobernador. Esta cédula es muy importante, porque puso término a la dependencia política de Santo Domingo en que vivía Venezuela.

La Corona corregía de aquel modo una costumbre o providencia de efectos, por decir así, centrífugos, y afirmaba la supremacía del cabildo de la capital sobre los demás. El 19 de Abril de 1810 veremos a dicho cabildo ejercer la prerrogativa y hablar en nombre de la Capitanía entera. Para los hombres de la Independencia, herederos y practicantes de las tradiciones municipales, el Ayuntamiento será —dice Vallenilla Lanz— "el personero natural y

legítimo de los derechos populares". En rigor, aquel privilegio había sido abolido por Felipe V cuando nombrara un teniente-gobernador y auditor de guerra, llamado a suplir al gobernador. El empleo de teniente había existido en Venezuela: túvolo Felipe de Utre para los asuntos militares bajo el obispo-gobernador Bastidas; Carvajal llevaba el mismo título; Pérez de Tolosa nombró por tal a Juan de Villegas, y el anciano Mazariego nombró también su teniente, con encargo de conquistar y poblar, a Diego de Montes, a quien llamaron el "venerable", noble dictado que no le impidió empalar cierto número de indios jiraharas. La novedad de la disposición de Felipe V, decretada o reiterada en 14 de septiembre de 1736, y por la cual se prohibió entregar el gobierno a los alcaldes y se revocaron las cédulas de 1560 y 1676, consistió en convertir en permanente el empleo de teniente-gobernador y en llamar a éste a ejercer el poder político y militar en todo caso de vacante.

No fueron raros los conflictos de atribuciones entre el gobierno y el municipio, de los cuales casi siempre salió el segundo vencedor. Hemos visto cómo, con mal éxito, se defendió el Ayuntamiento de Caraballeda contra la usurpación de Rojas. La voz de los colonos alzabase con frecuencia y el trono acogía sus protestas. En aquella ocasión el capitán Juan de Guevara, simple particular entonces, envió a España al mestizo Urquijo para que expusiese al Rey las quejas de los habitantes y le presentase formal acusación contra el gobernador: el Rey mandó que aquellos cargos se sustanciasen en el juicio de residencia. Contra los excesos del licenciado Leguizamón los criollos enviaron a Santo Domingo al ex teniente general Juan Riveros, quien obtuvo justicia plena. Y para combatir las providencias de Liaña, llegado en 1596 "con

comisiones muy apretadas" para averiguar sobre fraudes al tesoro y navegación ilícita, vino a Madrid como procurador de los caraqueños D. Nicolás de Peñaloza.

En 1623 el Ayuntamiento depone, aprisiona y embarca para España a Diego Gil de la Sierpe, que la Audiencia de Santo Domingo había nombrado gobernador interino, y se había hecho culpable de exacciones y violencias durante su corta permanencia en Coro. El movimiento provocó la reacción de la Audiencia, en cuyo nombre el licenciado Medrano enjuició y envió a la cárcel a los cabildantes, despojándoles de 30.000 ducados. La historia conserva como casos típicos del espíritu y voluntad de autonomía del municipio en el primer cuarto de siglo XVIII la lucha del Ayuntamiento de Caracas contra el gobernador Cañas, sujeto lunático y cicatero que los regidores hicieron aprisionar por real cédula; y contra Portales, arrestado, entre otras causas, porque trataba de impedir que se siguiera juicio de residencia a su predecesor Bertodano. El pleito con Portales fue largo, y vióse entonces a las milicias de Caracas alzarse en armas contra el gobierno a la voz del cabildo. También derribaron los alcaldes, en 1729, al sucesor de Portales, Lope Carrillo y Andrade. Tres años después, el coronel García de la Torre, objeto de la hostilidad de los partidarios de la Compañía Guipuzcoana, que intervendrá siempre en la política, vióse obligado a abandonar el mando y refugiarse en un convento.

Imponíase decididamente la acción del Rey para poner término a los desmanes de los alcaldes, ya "demasiado diestros en el asunto de apeaar gobernadores", como dice Terrero. La medida de Felipe V citada atrás tendía a robustecer el poder político y ponerlo a cubierto de las usurpaciones del municipio. Pero el Rey

se guardó de tocar las atribuciones legítimas de éste: en 1748, como el gobernador Zuloaga pretendiese conocer en apelación de una causa juzgada por los alcaldes, acudieron éstos a Madrid, que aprobó su resistencia a someterse a la ilegalidad. De todos modos, es lástima grande que los venezolanos hayamos reemplazado el verbo "apear" por el de "tumbar" para la calificación de ciertas operaciones que durante nuestra vida nacional han temperado el despotismo de los gobernantes.

Tampoco faltaron en la provincia los motines y revoluciones armados, que impusieran al gobernador el ejercicio personal de sus atribuciones militares: Meneses y Padilla pacificó en 1628 a Nirgua, con gasto hasta de 6.000 pesos, que pagó el Ayuntamiento de Caracas. Don Fernando de Villegas castigó en 1671 la revuelta de Carora. La rebelión de Andresote provocó también la entrada en campaña del jefe de la colonia. A veces, el poder político debía intervenir, para ahogar alguna peligrosa agitación, en las elecciones municipales: así lo hizo en Mérida, por 1740, cuando, a consecuencia del asesinato de un vicario, el gobernador de la provincia, Altuve y Gaviria, fue de Maracaibo a "apartar del orden público a los Riveras" y eligió por su cuenta alcaldes, procurador y oficiales de policía.

Pero la conmoción popular más considerable que se registra en las regiones del Nuevo Reino y Tierra Firme antes de la de los comuneros de El Socorro, fue la capitaneada por el canario Juan Francisco de León en 1749. La mayoría de los historiadores ha querido ver en este movimiento la primera manifestación del estado de espíritu y de las tendencias que debían conducir la colonia a separarse de España sesenta años después. En realidad, el incidente habría podido llamarse normal en la vida política de

la Capitanía, cuyos habitantes estaban avezados —como se ha visto— al ejercicio de ciertas libertades, entre las cuales no era la menor hacer revoluciones. La de entonces tuvo su origen en la repugnancia de León a ceder su puesto de teniente justicia del pueblo de Panaquire al sustituto vascongado Martín de Echeverría, reputado por agente y criatura de la Compañía Guipuzcoana. Los intereses personales del fundador de Panaquire y la ojeriza de los isleños contra otros provincianos de España y su deplorable espíritu cizañero, cuyos efectos se verán también en 1811 y 12, se mezclaron a los intereses económicos de gran número de personas que, por uno u otro motivo, aborrecían el monopolio. De allí resultó una verdadera revolución armada, cuyo programa fue el muy decente de volver por la libertad de comercio, "exterminar la real Compañía Guipuzcoana y echar de esta provincia a sus factores, dependientes y sirvientes". La autoridad regia no estaba en litigio y los amotinados protestaban su veneración hacia ella.

Es evidente que al intervenir en la política, al influir en el nombramiento de funcionarios y en su recompensa, la Compañía obraba, ilegalmente sin duda, como lo hacían en el extranjero la Compañía holandesa de las Indias occidentales y la inglesa de la India, grandes organizaciones, mitad comerciales, mitad políticas, que no sólo enriquecieron a sus accionistas, sino también fundaron el dominio del respectivo país sobre extensos territorios. Pero hemos visto, por otra parte, que el monopolio creaba numerosos descontentos, entre los cuales se reclutaban los partidarios de León. Los revoltosos comenzaron por oponer un veto al nombramiento de Echeverría, y en número de 800 marcharon contra Caracas, pidiendo la destitución de los empleados públicos que debían sus puestos a la Compañía y la expulsión de los vascos,

de modo que en toda la provincia no quedase ni una sola persona "de esta raza". No fue la circunstancia menos curiosa de la revolución que su cabecilla pidiera se nombrase de oficio un abogado encargado de presentar al gobernador la exposición jurídica de sus reivindicaciones: aparece aquí aquella mezcla de violencia y de respeto a las formas legales que caracteriza ciertas manifestaciones de nuestra vida colonial. León remitía la justificación de su iniciativa a la autoridad misma; era ésta quien debía declarar si la gestión de la Compañía, durante los dieciocho años de su existencia, había sido útil o perjudicial al acrecentamiento del real patrimonio y a los intereses generales de la provincia. El Ayuntamiento y 60 notables de Caracas, reunidos en cabildo abierto, discuten las proposiciones de los revolucionarios; observan que la Compañía no cumple los reglamentos regios que la conciernen; no trae suficientes artículos de España ni compra bastantes venezolanos, pagándose aquéllos muy caros y éstos muy baratos, y declaran que la existencia de dicha Compañía es nociva al interés público. Al heraldo oficial que le consultaba, el pueblo de Caracas respondió unánime que León defendía la causa de la provincia. Una diputación fue enviada a España a solicitar la disolución de la Guipuzcoana. Los revolucionarios se dislocaron y su jefe volvió a Panaquire.

Mas el gobernador Castellanos maniobra astutamente en favor de los vascos, y León, exasperado, marcha de nuevo contra la capital al frente de 9.000 hombres. Castellanos le engaña, aparentando ceder a sus reclamaciones, y entonces comienza el desquite de las autoridades. Un oidor enviado por la Audiencia de Santo Domingo cita al rebelde ante su tribunal. Y resuelve el problema la llegada del nuevo gobernador, Arriaga, con 1.500

CAROLUS III. D. G. Hispaniar. et Indiarum Rex.
 Der liebste Benjamin Leopoldus Eberkild.
 So thut der theure CARL mit voller Frömmigkeit
 Der soll die Stütze sein und auch des Reiches Schilde.
 Der hebe selber seinen Europäischen sein gefallen



soldados de infantería y un escuadrón de caballería: la Compañía continuaría tranquila en su monopolio. Arriaga, con la amnistía y otras medidas de tolerancia, y su sucesor Ricardos, que se presentó con más tropas en 1751 y dictó providencias represivas, pacificaron la provincia. Cuando León se levantó por tercera vez en armas, el ejército real entró rápidamente en campaña, y el cabecilla hubo de entregarse al gobierno. Se arrasó su casa de Caracas y él fuese a morir a España indultado por el Rey.

Los municipales acentúan la defensa de sus fueros en las postrimerías del régimen colonial. En 1790 el Ayuntamiento de Caracas riñe con el Capitán General que interviene en la elección de los alcaldes, y el Rey da razón a aquél. En 1796 protesta contra el mismo mandatario, porque ejerce sin consulta el derecho de organizar las milicias. En 1799 pide la extinción del monopolio del tabaco, como muchos años antes pidiera la del monopolio comercial. Una facultad importantísima, que los cabildos no dejaban de hacer valer cuando lo creían necesario al interés de país, era la de presentar objeciones contra alguna providencia de la Corona, diciéndola nociva o inoportuna. Era este derecho análogo al que tenían los parlamentos franceses bajo el antiguo régimen, previsto igualmente en los fueros de ciertas provincias españolas, y cuya existencia prueba cómo en la colonia funcionaban eficaz y normalmente las libertades municipales. Ejemplo de ello ofrécenlo las observaciones del cabildo de Caracas sobre el arancel de "gracias al sacar" que dictó el Rey el 3 de agosto de 1801, según cédula promulgada seis años antes, de que hemos hablado con el fin de consagrar el producto a la caja de amortización de la deuda. El síndico procurador informó entonces acerca de dicha cédula, como de costumbre, y examinó "si en los

capítulos insertos en ella se encuentra alguno que deje de ser adaptable a las circunstancias del país para, con las salvas más acatadas, sumisas y reverentes, promover los medios que estime convenientes, a fin de que se represente por este ilustre cuerpo al soberano la necesidad de su reparo, en obsequio de los intereses de la Monarquía, con tendencia al bien público, conservación, aumento y felicidad del vasallo”.

Se ha repetido que el cabildo era el asiento y tribuna donde los nobles criollos disputaban sobre preeminencias y otras majaderías. Sin duda. Pero antes que eso era el cabildo baluarte de las libertades municipales, únicas que valgan, acaso. ¿Libertades de los oligarcas? Ciertamente: como en Roma y Venecia gloriosas repúblicas. Y aquellos oligarcas eran venezolanos, pues desde mediados del siglo XVIII los criollos nobles o del estado llano dominaban en los Ayuntamientos por su número e influencia. Defendía también el Ayuntamiento las libertades de todas las castas, pues más de una vez se le vio alzarse contra medidas arbitrarias: por ejemplo, contra la prisión de individuos sin causa justificada, y siempre obligó a ceder a las autoridades políticas. Para aquella época, y aun entrada ya la siguiente centuria, en Suiza, país que es socorrido e histórico espejo de instituciones libres y republicanas, los miembros de los consejos que gobernaban muchos de los cantones se reclutaban exclusivamente dentro del patriciado: el cabildo venezolano era más democrático por su composición que el consejo de Berna o de Lucerna.

XIII

LA ADMINISTRACION COLONIAL

Si pasamos del examen de los órganos del poder público al del ejercicio de sus atribuciones normales, es menester preguntarnos en primer término si es cierto que, en vísperas de la Revolución, nuestros gobernantes vivían en el abismo sin fondo de la ignorancia y si la inercia más completa caracterizaba la administración hispanoamericana.

Los excelentes informes dejados a sus sucesores por los funcionarios reales, las críticas que con notable libertad de espíritu hacían de la citada administración y las medidas sesudas y oportunas que indicaban, muchas de las cuales se ponían en práctica inmediatamente, permiten, a nuestro entender, que se responda a aquella cuestión por la negativa. Es de observarse —y escogemos expresamente el caso como elocuente— que durante los treinta y seis años de la dominación española en la Luisiana francesa esta colonia progresó notablemente y vio pasar su población de 12.000 a 50.000 habitantes, sin que éstos, de origen francés, hubieran de elevar una sola queja contra el gobierno. El caso es interesante, sobre todo si se lo estudia a la luz de ciertos hechos ocurridos en el Canadá cuando fue cedido por Francia a Inglaterra.

Es indudable que en Venezuela el gobierno colonial planteó en términos claros ciertos problemas vitales que aún esperan solución, y ensayó resolver muchos otros. Algunos ejemplos bastarán para demostrarlo. La actividad de Centurión en Guayana es enorme: bajo su gobierno los establecimientos civiles se multiplican, y solamente en el año 1771 funda dos villas y tres aldeas. Este gobernador y sus sucesores proponen y ejecutan en parte grandes medidas administrativas y alientan la expansión comercial. El 10 de julio de 1788 Marmión presentó al departamento de Indias un programa de colonización que llamaríamos hoy científico, tan completo como los que se aplican en países de América y Oceanía; los colonos debían recibir tierras, semillas, instrumentos de cultivo, de caza y de pesca, materiales para construir casas, y quedarían exentos de impuestos durante los diez años consecutivos a su instalación en el país. El plan de Marmión es —dice el profesor Humbert— uno de los más bellos documentos de la colonización española.

Las autoridades coloniales se habían dado perfecta cuenta de que el comercio de nuestros llanos se haría siempre por la utilización preferente de la vasta red fluvial que los recorre. He ahí por qué Marmión proponía, además, desarrollar la navegación en las hoyas del Orinoco, del Meta y del Caura con medidas apropiadas. Y muy oportunas dictó el gobierno del Virreinato para proteger con el tráfico fluvial hacia Guayana el creciente comercio de Barinas. La magnífica situación de Angostura aseguraba a esta ciudad un desarrollo que sólo la decadencia de nuestros llanos le ha impedido alcanzar. Tampoco habían esperado los españoles a Humboldt para comprender que "el Orinoco tomará un gran fomento si un día se abre de nuevo este camino (el del Meta), al

menos hasta la provincia de Casanare", que es la salida natural de extensos territorios colombianos muy distantes de Cartagena. Antes de la expulsión de los jesuitas el comercio por el Meta era libre y muy activo, y fueron los negociantes de Cartagena quienes, "celosos de ver introducir géneros de la Guayana, han puesto fin a esta navegación". Las comunicaciones de Nueva Granada con Venezuela, cuyo acrecentamiento reclaman la situación geográfica de ambos países y su hidrografía, se estudiaron en sus diferentes aspectos bajo el régimen colonial, buscándose la comodidad y rapidez accesibles para la época. El virrey Solís decía en 1760, en un informe al gobierno metropolitano, que se debía sobre todo mantener el correo de Santa Fe a Caracas "por la mayor frecuencia que por él se presenta de la comunicación y giro de los negocios de aquí a España y de España aquí". El correo regular entre España y América, es decir, su transporte por buques especiales, fue creado en 1764. El de Caracas a Maracaibo, quincenal, gastaba veinte días; y el de Caracas a Santa Fe, por los Andes, cuarenta y dos. Según Diguja, el viaje de Santo Tomás de Guayana a Santa Fe por los ríos Orinoco y Meta, duraba cincuenta y siete días. Pero nótese, de paso, que la dificultad de transitar y transportar no era en manera alguna peculiar de las colonias españolas: a fines del siglo XVIII, cuando ya los Estados Unidos estaban constituidos en nación independiente, un correo expreso tardaba treinta días en ir de Pensilvania a la Carolina del Sur, y un viaje de Nueva York a Boston duraba seis días. Sin contar con que no existían allí puentes y se pasaban los ríos en balsas, como en nuestros llanos. Alberdi afirmaba que en su tiempo nada habíamos hecho todavía los hispanoamericanos que

podiera compararse a lo que nos dejó España en materia de caminos y construcciones de todo género.

A veces, los funcionarios de la colonia obtenían de la Corte la derogación de prohibiciones inútiles o perjudiciales, como sucedió con la de navegar por el Atrato, en el Nuevo Reino, dictada como medida de defensa militar, y que Francisco Antonio Moreno, en 1772, durante el gobierno del virrey La Cerda, calificó de contraproducente.

Adviértase, por otra parte, que no faltaba en las colonias la iniciativa de la autoridad pública en materia de higiene y salubridad. Rigurosas medidas de aislamiento preservaron a Pamplona en 1588 de la epidemia de viruelas que entonces desoló al Nuevo Reino y se extendió hasta Chile. Idénticas se tomaron en Mérida cuando, en 1612, se presentó la viruela en Cartagena, ciudad que comerciaba con la primera por los puertos del lago de Maracaibo, preparándose lugares para degredos y cuarentena. En 1687, como hubiese en Caracas viruela y vómito negro, el gobierno aisló la ciudad de las demás poblaciones y construyó degredos, con tanta eficacia que evitó el contagio y localizó la epidemia en la capital. Durante el siglo siguiente, el virrey de Santa Fe, Caballero y Góngora, insistía en la necesidad de estudiar un remedio para la lepra, empleando con tal fin dinero de la renta de hospitales. La policía colonial perseguía a los curanderos y recluía los mendigos. En casos de epidemia en el extranjero, la tripulación y los pasajeros de los barcos recién llegados se sujetaban a visitas de sanidad y a cuarentena. En 1783, Mutis difundió en Bogotá instrucciones para la vacuna, con muy buen resultado, según lo afirma el propio virrey.

Una de las providencias más importantes tomadas en favor del progreso de Venezuela fue la creación del Real Consulado que, a semejanza de los existentes en Lima y México, se decretó el 3 de junio de 1793. Este organismo, formado a iniciativa de Esteban Fernández de León, "espíritu dominante y proyectista, genio audaz y majestuoso" al decir del cronista Terrero, debía resolver los litigios entre el fisco y los comerciantes. Pero en el decreto dábale también el nombre de Junta del Consulado, con el especial encargo de proponer a la Corona y de aplicar cuantas medidas juzgase necesarias para el fomento de la agricultura, de la industria y el comercio. "El Rey, escribe Baralt, quería que cuanto pudiera ser conveniente a la prosperidad de Venezuela se le representase." A tal efecto trazaba un programa completo de grandes obras públicas, muchas de las cuales no han sido aún ejecutadas: caminos, construcción y limpieza de puertos, canalización de ríos. Todos los miembros de la organización fueron escogidos entre los criollos más connotados, y a su disposición pusieron sumas superiores a 100.000 pesos fuertes anuales. Si el Consulado no respondió a cuanto de él se esperaba, culpa fue de sus miembros y no del gobierno que le dio programa y medios financieros para ejecutarlo, o al menos para intentarlo. Es posible que las causas de su ineficacia fuesen análogas a las que muchos años después han determinado la supresión de las llamadas Juntas de Fomento que en varias ocasiones estableciera el gobierno federal en los Estados venezolanos, causas que pueden reducirse a dos: incapacidad y malversación.

El año 1801 fue particularmente penoso para los habitantes de la Capitanía. La pérdida de gran parte de las cosechas, debida sobre todo a los obstáculos que a la comunicación con España

oponían los cruceros ingleses, determinó una situación económica desesperada que el Real Consulado ensayó remediar con disposiciones que producen a algunos cronistas ingenua admiración. Véase claramente cómo la por nosotros vilipendiada administración colonial trataba con singular maestría los problemas del monopolio, de la mendicidad, del trabajo, de los salarios, de las variaciones del costo de la vida, de los beneficios ilícitos, cuyas leyes son tan viejas como el hombre y la sociedad. Desde 1595 el cabildo de Caracas, para proteger al consumidor, había limitado a 50 por 100 la ganancia legal de los importadores y a 25 por 100 la de los vendedores; estas cifras son sin duda elevadas, pero la medida revela conocimientos económicos que no se acostumbra otorgar a los rudos conquistadores del siglo XVI. El corregidor de Mérida fijaba, en 1608, el precio de la fanega de trigo o de maíz, "para el buen gobierno desta ciudad y de sus moradores y pobres" y so pena de crecidas multas a los transgresores. A fines del siglo XVIII la facilidad de la vida y baratura de los víveres habían desarrollado en la colonia la vagancia y la holgazanería; el gobierno estimaba —según nos informa Moreno— que todos los brazos disponibles debían utilizarse en la agricultura y en las minas, y tomaba medidas para combatir aquella especie particular de desocupación. Reales órdenes sucesivas de 1766, 76, 86 y 89 eximieron de ciertos derechos de exportación el café, la harina, el añil y el algodón. Este último producto fue exento de alcabala en 1792. En Cuba, hasta el siglo XVIII, había un regidor que se ocupaba en la inspección de la agricultura y recorría las haciendas para informar al cabildo del cumplimiento u omisión de las prevenciones dictadas para el desarrollo rural: es probable que la misma práctica se observase

en Venezuela y las demás provincias. Los Ayuntamientos dieron más de una prueba de celo y aun de competencia en materias económicas, monetarias y de hacienda.

Decíamos que en 1801, para combatir la miseria amenazante sobre todo en Caracas y para hacer bajar los precios, recurrió el Capitán General a un medio idéntico al que en nuestros días aplican los llamados técnicos: prohibir o dificultar la exportación de víveres y pasar contratos con firmas inglesas para importarlos de las Antillas, a cambio de licencias para exportar tabaco y aun de cantidades de este producto existente en los almacenes reales. Y nada valieron contra los decretos salvadores las protestas de los especuladores, del Ayuntamiento, del Cabildo eclesiástico y hasta el Real Consulado; el plan se ejecutó dictatorialmente y con buen éxito.

El gobierno impulsaba el movimiento económico por los medios a su alcance. Las rentas de la Capitanía arrojaban en los últimos tiempos un sobrante de 800.000 pesos fuertes, proveniente en su mayor parte del impuesto sobre el tabaco, y que debía remitirse a España. En realidad, aquella suma no salía de la provincia —según recuerda Urquinaona—, y se distribuía —apunta el libelista Díaz— "entre los agricultores del país, quienes, sin ningún interés, obligábanse a devolver al real erario dentro de un plazo que vencía después de la venta de las cosechas, las cantidades que habían recibido". Díaz afirma que en 1810 acababa de repartirse una gran cantidad entre abastecedores españoles avencidados en Venezuela o entre criollos, que suministraban artículos para enviar a la Península: el marqués de Casa-León recibió entonces 50.000 pesos para remitir carnes y zapatos al ejército que luchaba contra Napoleón; Bolívar recibió 30.000;

el marqués de Mijares, 20.000; uno de los Ustáriz, 16.000. Es decir, la Colonia había ya instituido un verdadero banco agrícola.

Los colonos, por su parte, formulan sus *desiderata* sobre el estímulo que conviene dar a la agricultura, y la exponen libremente al gobierno. Un ejemplo de ello es el manifiesto redactado en 1809 por el alcalde Escalona y el síndico Lizarraga, en el cual se pide para el trigo y la harina la exención de derechos de diezmo y alcabala durante diez años, la libre introducción, de España o del extranjero, de máquinas destinadas a beneficio de este ramo, "a la manera que lo es la de los utensilios para ingenios de azúcar y molinos de café", y el castigo de las harinas extranjeras con nuevos derechos.

XIV

DEDUCCIONES

AL emprender la narración de los altos hechos de la conquista y fundación de nuestro país, y "aun asistiéndole el conocimiento de que ha de ser poco agradecido de los que debía ser más estimado", Oviedo y Baños alegaba por principal razón de su trabajo la circunstancia de haber estado hasta entonces recatada la historia de Venezuela por "el culpable descuido de sus hijos, sin que entre tan soberanos ingenios como produce haya habido uno que se dedique a tomar por su cuenta esta tarea". El desamor del venezolano por aquella esencialísima parte de la vida de su nación, admirable período en que ésta se formó en medio de dolores y de glorias innumerables, no data, como se ve, del siglo XIX, aunque parezca cierto, según dice el notable historiógrafo colombiano doctor Raimundo Rivas, que la indiferencia de nuestros escritores contemporáneos hacia la época de la Colonia se deba "a la atracción invencible que sobre los devotos de Clío han ejercido y ejercen los hombres y los acontecimientos de la guerra de la Independencia por el fulgor magnífico de heroísmo que la envuelve". . . .

El Imperio español se dislocó a su hora, como toda obra humana, en virtud de causas tan fatales como las que provocan los cataclismos de la naturaleza física. No todos los grandes imperios históricos duraron más de tres o cuatro siglos, y hoy vemos al británico, que no llega a tal edad, retardar apenas su desmembración, más que por la destreza innegable de sus gobernantes, porque, en la actual situación política y económica del mundo, la fórmula imperial no está aún exhausta, y, antes por el contrario, ofrece como nunca irreemplazables soluciones a problemas vitales para los Dominios y grandes colonias.

Estaría fuera de lugar examinar aquí los motivos que determinaron y justificaron la guerra de la emancipación hispanoamericana, pues sólo fue nuestro propósito trazar a grandes rasgos el cuadro del régimen colonial en Venezuela. La obra de Bolívar y de los demás próceres no se pone en tela de juicio a este respecto. El venezolano juzga insuperable el genio y la obra del Libertador, y reivindica la Revolución que creó la República como su gesta magna y el título primordial y fehaciente de su nacionalidad. Pero si la Revolución es el acto más ilustre y considerable de nuestra historia, no nació ésta con la Revolución. El pueblo venezolano se formó en la Colonia, es anterior a 1810, y la prueba de su existencia y vitalidad se halla precisamente en los altos hechos políticos, civiles y militares que componen la epopeya de la Independencia. En próxima ocasión estudiaremos las causas de este movimiento, y veremos cómo el patriotismo americano más escrupuloso, la admiración hacia los libertadores y el legítimo orgullo de ser libres de todo poder extraño, pueden conciliarse con la verdad histórica y con esa obra de filosofía política a que nos convida el más joven de nuestros humanistas,

el doctor Caracciolo Parra León, llamándola justa reconstrucción de nuestro pasado español. Hace varios años viene marcándose en Venezuela una tendencia en favor de la revisión del proceso de la conquista y colonización del país por los peninsulares, y hombres distinguidos de maciza erudición y espíritu imparcial trabajan con feliz éxito en el hasta ahora abandonado filón de nuestra vida colonial. El malogrado Angel César Rivas, el doctor Pedro M. Arcaya, D. Laureano Vallenilla Lanz, el doctor Vicente Dávila, el doctor Mario Briceño Iragorry, han cooperado en primera línea con el estudio paciente o la hábil interpretación de hechos y documentos de la época, a crear sobre éstos un criterio científico y ponderado. En su laborioso retiro de Mérida, otro humanista patriota, el doctor Tulio Febres Cordero, predica también la vuelta a la tradición nacional con el restablecimiento de la verdad, la saludable desconfianza de dogmas y conceptos difundidos en el extranjero sobre la historia y la nación españolas.

La tradición y la creación no se oponen necesariamente una a otra, enseña el ensayista alemán Curtius: unámoslas para hacer la síntesis ideal de las aspiraciones y de la energía de nuestro pueblo. Quien vive sólo en el presente conoce mal el mundo, tiene del mundo una concepción estrecha y primitiva.

Claro está que las preocupaciones que revelan estas páginas no pueden envolver a los ojos de gentes reflexivas pesar alguno por la época del emplumado tricornio (menos ridículo acaso que la deplorable chistera contemporánea), de la peluca, del calzón a la rodilla y del espadín al cinto. Fijar el ser moral del pueblo, formar la conciencia pública, crear al país una norma de vida al propio tiempo ideal y práctica, trazar, en resumen, el indispensable programa nacional: tales son los fines a que hoy propenden

todos los venezolanos. Mas ¿cómo resolver las dificultades actuales y seguir con paso firme al porvenir si se ignora el pasado o sobre él se tienen solamente claridades vagas y mezquinas? No pretendemos, lejos de ello, irradiar luz sobre los siglos coloniales. Pero este libro, escrito deliberadamente en estilo polémico y que tal vez algunos calificarán de agresivo, quiere responder, con datos ciertos y conocidos, a varias cuestiones planteadas a propósito del régimen español en el país, y en tal sentido representa una contribución a la tarea de desvanecer las tinieblas que por voluntad de los hombres o en virtud de ciertas doctrinas cubren aún para todo nuestro pueblo el período de su formación, hasta el momento en que se declaró independiente de la metrópoli. Dichos datos, si bien decisivos, son forzosamente incompletos, porque las funciones que en la actualidad ejerce el autor no le permiten consagrar mucho tiempo a los estudios históricos y le mantienen alejado de centros donde pudiera hallar más libros referentes a este asunto concreto y compulsar documentos de archivo. Dejemos, pues, el cuidado de analizar a fondo la materia a quienes se hallen en condiciones más favorables.

La seudo historia de los horrores perpetrados durante la conquista y colonización de América y, sobre todo, la mentira de la ineptitud del régimen colonial, de origen protestante y antiespañol, han sido tan repetidas por los extranjeros, que peninsulares y americanos, por razones diversas, hemos concluido por aceptarlas como dogmas que escapan al examen. Andrés Bello, en escrito de alta serenidad, indicó ya cómo los españoles de la Conquista, que eran "la primera nación de Europa", fueron de parte de sus rivales "blanco de la detracción porque eran un objeto de envidia". Ciertos apostolados obedecen casi siempre a móviles

dolosos, y cuanto vemos hoy en este particular nos ilustra bastante sobre lo que ocurrió en el pasado. Los romanos, que tantos ejemplos dieron de insigne mala fe, pero que tuvieron la fortuna de escribir la historia del mundo para uso de la posteridad, pudieron impunemente hacer del nombre púnico el paradigma de la falsía. Así también, pueblos enemigos o rivales, cuya literatura y versión de los sucesos del mundo está aún en boga, levantaron contra los españoles cargos de toda suerte que, en fin de cuentas, los acusadores merecen tanto, si no más que los acusados. La necesidad de recusar jueces incompetentes lleva al autor a proponer comparaciones fundadas no sólo en hechos secularmente registrados y clasificados, sino también en hechos de inmediata actualidad. La razón de ello es obvia: el proceso continúa.

Sin duda, en los últimos años algunos escritores de Europa y Estados Unidos han gastado esfuerzos meritorios en criticar y juzgar imparcialmente el admirable período de la historia hispanoamericana que va del Descubrimiento a la guerra de la Independencia, abarcando tres siglos de esplendor para la gente ibérica. Ya Macaulay escribía: "Ni en los días más gloriosos de su república, por todo extremo memorable, conocieron mejor los romanos el arte imponente de *regere imperio populos* que Gonzalo de Córdoba, Cisneros, Hernán Cortés y el duque de Alba". Y muchos convienen hoy en que sólo las obras de Roma y de Inglaterra pueden compararse a la de España, en que sólo aquellos pueblos dieron pruebas de la "política, sabiduría y habilidad" que en los españoles admiraba el francés Depons, y que permitió a éstos adueñarse de un continente y modelar y animar veinte naciones. Mas el errado secular criterio subsiste generalmente y predomina en el extranjero, contando entre sus sostenedores

a gran número de historiógrafos y pensadores de la América latina. Un autor de apellido alemán, en su historia de los filibusteros y bucaneros, recientemente traducida al francés, dice frases inauditas: "Es cierto que la colonización inglesa ha producido otros resultados. Ella construía, mientras la española se contentaba con destruir... Los Cortés y los Pizarros malbarataron sin reflexión la herencia de civilizaciones milenarias, no llevando, en cambio, sino el presente dudoso de la civilización religiosa de la Edad Media, con sus excrecencias exterminadoras, el estado monacal y la inquisición". Este cargo, tan absurdo como el análogo que Montesquieu formulaba contra la conquista romana, basta para poner de manifiesto, con el desdén teutón del doctor Sternbeck hacia la latinidad, su fabulosa ignorancia. Y si aquello puede escribirse con toda impunidad en Alemania, país de notables hispanófilos y de cachazudos universitarios, mayores lindezas dícense en Hispanoamérica por revolucionarios románticos y medio informados, imbuidos de humanitarismo y admiradores de oídas de las civilizaciones o semibarbaries inca, azteca y chibcha. Curioso nacionalismo ese, que consiste en renegar las tradiciones nacionales más venerables y auténticas, para adoptar tesis mendaces de marca extranjera y edificar la propia historia sobre la base deleznable de la leyenda. De la misma España nos vino el ejemplo, puesto que muy altos espíritus peninsulares han creído trabajar por el porvenir de la patria ayudando a cubrir de oprobio su pasado. Recordad, entre otros mil ejemplos, el dicterio incomprensible del sonoro Castelar: "No hay nada más espantoso, más abominable que aquel gran Imperio español, que era un sudario que se extendía sobre el planeta".

Por fortuna, la verdad va saliendo de su pozo, ayudada por españoles y americanos conscientes, al fin, de las responsabilidades que la Historia —no las historias oficiales— ha arrojado sobre las espaldas de los descendientes de la estirpe ibérica. Altamira, en la Península; Esquivel Obregón, en México; Roberto Levillier, Levene, Carbia, en el Plata, y otros escritores e historiógrafos, establecen las normas de la indispensable revisión, ayudan a levantar por su base, sólida esta vez, el monumento de nuestra gloria común.

Elógiase, con razón, la habilidad que demuestran los ingleses para adaptarse a las necesidades del día, su genio, rico en transacciones y compromisos; la cordura de sus oportunas concesiones, que, no lo olvidemos, siguen siempre a la represión implacable y ruda, que no acostumbra Inglaterra a capitular ante la abierta rebelión. Y es corriente contraponer a aquellas virtudes innegables los vicios, muchas veces supuestos, de la dominación española en América, para concluir condenando la última como típico ejemplo de la incapacidad de un pueblo en el campo de la colonización y de la política general. Quienes piensan de esa manera están obcecados por un sectarismo que debiera ya anticuarse, o ignoran por completo la historia, o quieren olvidar, simplemente, que las repúblicas hispanoamericanas, organismos que son política, social y psicológicamente latinos y occidentales, no nacieron por generación espontánea, y fueron obra exclusiva de los conquistadores, que amalgamaron razas, fundaron ciudades, provincias y naciones. Después de la sangrienta guerra de la Independencia, que actores y observadores importantes de ambos bandos, Miranda y el regente Heredia entre otros, calificaron de contienda civil, la República prosiguió necesariamente en Améri-

ca el trabajo creador de la Monarquía. Obsérvese que en algunos de nuestros países la conquista, es decir, la lucha contra el aborigen y por la asimilación del mestizo, está lejos de terminar. Compruébese, al propio tiempo, que la denominación de colonias era impropia, aplicada a los establecimientos de América. Ya lo dijo Baralt: "Ni la mente ni la letra de la legislación española de Indias, ni los decretos de sus monarcas consideraban los países hispanoamericanos como colonias, en el sentido que otras naciones de Europa han dado a tal palabra desde el siglo XVI". Escritores más recientes, el doctor Rafael Domínguez entre ellos, observan que la Monarquía española incorporó desde el principio aquellas provincias, las cuales, a diferencia de lo que sucedió en otros países europeos colonizadores, formaron parte integrante de la nación. Leyes, instituciones políticas municipales y judiciales; universidades y colegios, adaptados a las necesidades locales, pero basados en principios análogos, si no idénticos, a los que se aplicaban en la Península, hasta no ser sino el reflejo de cuanto en ésta había, formaron una sociedad criolla cuyos miembros podrán decirse en 1810, por boca de la Junta Suprema de Caracas, iguales en un todo a los demás españoles. En 1805, un obispo venezolano invoca la cualidad de "ciudadanos de la patria española" de sus diocesanos, para excitarles a participar en la guerra contra los ingleses. El indio mismo había recibido estatuto de vasallo libre. Sí tenía esta vez razón Castelar al escribir: "Nos han calificado injustamente de conquistadores, cuando ante la historia y ante la conciencia del mundo aparecemos como los inventores y civilizadores del Nuevo Continente".

Según creemos recordar, el vizconde Bryce, par de Inglaterra, político eminente y viajero esforzado delante del Eterno, se admi-

raba de ver que en todo el territorio hispanoamericano sólo hubiese una estatua de conquistador: la de Valdivia, en la ciudad del mismo nombre. Hanse modificado un tanto las cosas después del viaje del noble lord, y tímidos bustos surgen aquí y allá para recordar al habitante que su ciudad o villa debió el nacimiento a algún guerrero lorigado, a algún legista, clérigo o encomendero, cuyo nombre dormía en el lejano pasado tenebroso. Las comunidades helénicas, en la rubia adolescencia del mundo, decían epónimos a sus héroes creadores, erigiéndoles templos votivos e instituyendo fiestas en su honor; los descubridores, los fundadores de los pueblos venezolanos y los que rudamente defendieron la Colonia contra indios y extranjeros, o la administraron con sabia energía, Ojeda, Suárez, Paredes, Fajardo, Losada, Silva, Pacheco, Osorio, Bolívar el Viejo, Sancho Briceño, Centurión, no pueden esperar templos ni juegos de nuestra época grave y escéptica; pero piden, al menos, monumentos dignos del incomparable esfuerzo que realizaron. Esos hombres reclaman de sus descendientes, sobre todo, el aprecio exacto y razonado de la obra colonial y el definitivo repudio de los errores y juicios falsos que debemos a una literatura interesada en vilipendiar las gentes cuya sangre, quíerose o no, hace palpar el corazón del Continente y corrió por las venas de sus propios libertadores.

La mayor parte de las imputaciones al sistema español en América carecen de fundamento, o reposan sobre afirmaciones gratuitas y perfectamente discutibles. Quintana habría podido prescindir de su famosa excusa: "Culpa fue del tiempo y no de España", confesión velada, frase contrita, que es una de tantas manifestaciones del temor reverencial hacia el extranjero de que adolece la raza hispana.

Cuando, a partir de la última mitad del siglo XVIII, se inició para el mundo occidental este período en que vivimos, caracterizado por la importancia de los factores económicos y el desarrollo de las ciencias, no se mostró el régimen colonial incapaz de seguir el movimiento, y es falso que el Imperio español haya sido una especie de isla petrificada en medio del vasto mar humano activo y progresista.

El resultado de la investigación, concretada a Venezuela, que en este libro se emprendió, puede sintetizarse en cierto número de negaciones, que se entregan a la meditación de los críticos de nuestra historia :

No es cierto que los indios hayan sido destruidos sistemáticamente por los españoles. La conquista fue dura y terrible para algunas tribus, que se defendieron heroicamente durante un siglo contra el invasor; pero los indígenas sometidos tuvieron en Venezuela mejor suerte que en otras colonias europeas.

No es cierto que el gobierno mirase con desdén a los criollos y les mantuviera en estado de inferioridad respecto a los españoles europeos.

No es cierto que los criollos estuvieran privados de los cargos y honores públicos.

No es cierto que la justicia haya sido siempre arbitraria y siempre administrada contra los venezolanos.

No es cierto que España alentara la separación de castas, aunque de toda evidencia tal separación era entonces el mejor medio de mantener la paz pública.

No es cierto que la metrópoli pusiera deliberadamente toda suerte de obstáculos al establecimiento de industrias y al desarrollo del comercio.

No es cierto que los criollos hayan estado condenados a la ignorancia más abyecta.

No es cierto que los venezolanos hayan vivido trescientos años sobrecogidos de terror ante la Inquisición y bajo un gobierno teocrático, inspirado por curas y frailes.

No es cierto, a juzgar por la irrisoria suma que los colonos pagaban al tesoro y por la cuerda distribución del impuesto, que aquéllos estuviesen agobiados por el peso del fisco arbitrario y excesivo.

No es cierto que la sociedad venezolana del siglo XVIII, que viajeros distinguidos o ilustres apreciaron, fuera atrasada, pobre y aun grosera, como se ha pretendido, en relación con la de gran número de países europeos.

No es cierto que el Capitán General fuese un déspota sin normas constitucionales, que obrara según sus caprichos, ni que el gobierno colonial fuese un sistema de bárbaros.

No es cierto que las libertades municipales, base de las demás y acaso las únicas efectivas, cesaran de existir, y que el Ayuntamiento, fortaleza criolla, hubiese acabado por plegarse completamente ante el poder público.

No es cierto que el gobierno de la Colonia dejara sin resolver los principales problemas de la administración, ni que ésta se caracterizase por la corrupción y el abandono de la cosa pública. La prosperidad innegable que reinaba en Venezuela cuando estalló la Revolución, proporcionada, naturalmente, a los recursos del país y a su población, y comparada al estado de las demás colonias europeas contemporáneas, es, al contrario, argumento muy poderoso en favor de la eficacia administrativa del régimen.

En resumen: el estudio imparcial de los hechos, del medio y del período histórico conduce, en Venezuela, a indultar a los españoles y, en muchos casos, a elogiar su cordura y clarividencia. La opinión de Baralt sobre el sistema político y el mecanismo administrativo de la Capitanía puede tenerse, en general, como justa, y coincide con la de Depons y otros observadores directos. Los calificativos de despótico, retrógrado, inerte y anti-americano que se acostumbra a dar a aquel régimen son temerarios e inconsistentes. En todo caso, las acusaciones a España por tiranía sistemática y mala gestión de los negocios públicos podrían formularse, con mayor equidad, contra otros Estados colonizadores de aquella época y aun de épocas posteriores. Y en cuanto a principios puros, es cosa comprobada que las Leyes de Indias eran superiores a las análogas que entonces observaban, o no observaban, las demás naciones.

Roma, 1931-32.

**NOTA SOBRE LA POBLACION DE VENEZUELA
DURANTE LA COLONIA**

INEXISTENTES como eran las estadísticas propiamente dichas en la época colonial, debemos conformarnos con una serie de datos concordes o que se complementan entre sí, para seguir aproximadamente el movimiento demográfico de la Capitanía y de algunas de nuestras principales poblaciones.

En 1636 Caracas tenía alrededor de 1.500 habitantes, aunque Arístides Rojas le da 6.000, como da 4.000 a Maracaibo para 1666. Ignoramos la fuente de estas indicaciones, y tenemos las cifras por exageradas, o correspondientes a jurisdicciones más extensas que las dos ciudades solas. Nótese, sin embargo, que las relaciones europeas sobre las piraterías y asesinatos del Olonés hablan también de los 4.000 habitantes de Maracaibo y de los 1.200 de Gibraltar. Una ciudad de 5.000 almas, como Panamá, por ejemplo, era considerada muy importante en los siglos XVI y XVII, y había pocas fuera de Europa que tuviesen aquel número.

Las condiciones generales de Venezuela, las pestes, guerras y hambres, impidieron el aumento normal de la población durante el siglo XVII. A principios del siguiente El Tocuyo tenía sólo 120

vecinos; Barquisimeto, 150; Trujillo, poco más de 300; Maracaibo, 500, que vivían casi todos en casas de piedra amplias y arregladas con gusto. Valencia no se había levantado aún de las ruinas ocasionadas por los corsarios franceses en 1677, y la cercanía de Caracas la perjudicaba, por irse allí sus principales vecinos. Por aquel tiempo, que era el de Oviedo y Baños, había en la capital 1.000 vecinos españoles "e innumerable multitud de negros".

De la representación elevada por la Universidad con motivo de los sucesos de 1749, aparece que Caracas tenía ya 20.000 habitantes, y 200.000 su distrito político.

Santo Tomás de Guayana contaba 535 almas, de las cuales 113 negros o mulatos. Angostura, nueve años después de fundada, o sea en 1773, tenía 1.624 habitantes. Los establecimientos de Guayana, fuera de las misiones, daban un total de 4.396.

Según Diguja, Cumaná tenía para el año últimamente citado 4.372 pobladores, y podía levantar 800 hombres de armas, de los cuales 300 eran blancos. En Cumanacoa había 795 habitantes y 213 hombres movilizables, de éstos 60 ó 70 blancos. Cariaco tenía 1.395 habitantes, y 270 movilizables, de los cuales 80 blancos. Carúpano, 928 y 161 movilizables. Barcelona abrigaba 3.351 almas y podía organizar 690 soldados, de los cuales 250 blancos. Aragua, 824 y 145, respectivamente, casi todos de color. El Pao, 632 y 135 movilizables, la mitad blancos. En Araya se hallaban todavía más de 1.000 habitantes. Además de estos "establecimientos civiles" existían cincuenta y tres religiosos, veinte en Cumaná y treinta y tres en Barcelona, sostenidos por capuchinos aragoneses y franciscanos.

El informe de Morèno señala al gobierno de Maracaibo, en 1772, un total de 8.679 vecinos y 914 indios, distribuidos en seis ciudades, tres villas, veinticinco pueblos, seis corregimientos y nueve lugares. De ser reales estas cifras habría de admitirse que la población de la provincia creció en proporciones inusitadas durante los últimos cuarenta años de la Colonia.

El obispo Martí estimaba la población de Caracas para 1774 en 18.669 almas, y la de La Guaira en 3.463. Diez años más tarde, Ségur dio a la capital 20.000 habitantes. En esta época los valles de Aragua contaban 30.000.

En los Apuntes sobre las colonias españolas presentados por Miranda a Pitt en febrero de 1790, se dan a Caracas 25.000 habitantes y 3.500 a La Guaira.

Para 1800 Caracas tenía 40.000, y cerca de 50.000 los citados valles. Guayana tenía 34.000, de los cuales 19.000 indios, administrados por los misioneros. La isla de Margarita, 14.000.

Depons calculó, a principios del siglo XIX, en 728.000 habitantes la población total de los territorios venezolanos, incluyendo a Barinas, Cumaná, Guayana, Margarita y Maracaibo. Aquella población, según el francés, se componía de dos décimas partes de blancos, tres de esclavos, cuatro de manumisos o descendientes de ellos y el resto de indios. Este cálculo parece haber sido inferior a la realidad en cuanto al número, y es sin duda arbitrario en cuanto a su repartición. Baralt dice que en aquella época el país tenía 76 habitantes por legua cuadrada en sus tierras cultivadas y 23 si se comprendía todo el territorio. La población estaba, como hoy, distribuida desigualmente entre las diversas provincias: las de Caracas, Maracaibo, Cumaná y Barcelona, des-

cartada el área incultivable, contaban 102 habitantes por legua cuadrada.

Sir Arthur Wellesley estimaba la población de las provincias venezolanas, para 1807, en menos de 800.000 almas, divididas así: 150.000 blancos, 200.000 esclavos, 300.000 libertos negros o descendientes de ellos, y el resto indios. Estas cifras son, evidentemente erróneas. Al año siguiente, Christie, enviado por sir James Cockburn a Venezuela en solicitud de informes sobre el estado del país, dijo que Caracas tenía 45.000 habitantes, de los cuales 1.400 nacidos en España, la mayor parte de éstos mercaderes y capitalistas. Había 500 funcionarios civiles y militares. En el mismo año Robertson daba a Maracaibo 25.000 almas.

Las indicaciones del censo de 1805, otras suministradas por las autoridades españolas y algún viajero, así como las del censo hecho por el gobierno republicano en 1811, hicieron estimar para este último año nuestra población en un millón de habitantes. Roscio confirmó la cifra en la sesión del Congreso del 5 de Julio. Había 12.000 europeos, 200.000 criollos, 400.000 pardos, 60.000 negros esclavos y el resto indios. El número de 328.000 indios puros nos parece muy elevado. Baralt indica sólo 120.000, de los cuales 89.000 en las provincias de Cumaná, Barcelona y Guayana, y 10.000 independientes en el delta del Orinoco y otros lugares. Humboldt dice que el número de las gentes de color representaba el 51 por 100 de la población total.

En la sesión del 27 de junio de 1811, al discutirse la división de las provincias, el diputado Hernández dijo que, "según una demostración matemática", la de Caracas tenía 480.000 almas; que, de las otras provincias, la más poblada tenía 80.000, y que



CARLOS
Rey de



QUARTO
España

Trujillo y Barcelona contaban 30.000 cada una. Es indudable —agregó— que San Carlos tiene 29.000; El Tocuyo, 28.000; Guanare, 27.000. Muchas ciudades del interior tenían población mayor que la que arrojan los censos, pues éstos han sido levantados en tales condiciones, que así es permitido creerlo. Castro dijo que la villa de Ospino tenía 5.000 almas, y Araure y Nirgua, 14.000 cada una. Es posible que los diputados partidarios de la Independencia exageraran más bien la cifra de la población para combatir ciertos argumentos.

Según la proposición hecha el 2 de septiembre siguiente por la Diputación de Mérida para dividir en dos la provincia de Caracas, los departamentos de Caracas, Valencia, San Sebastián, Puerto Cabello, Calabozo, Villa de Cura, Nirgua y San Felipe tenían 262.612 habitantes; y los de San Carlos, Barquisimeto, Carora, Tocuyo, Ospino, Araure y Guanare, 150.245: total, 412.867. El argumento de la población era empleado alternativamente, y siempre de modo tendencioso, por amigos y adversarios de la división de la citada provincia. Antonio Nicolás Briceño, en su alegato por la división, decía que aquella contaba 412.857 habitantes, y que las demás provincias, fuera de Coro, Maracaibo y Guayana, tenían 264.770. Barcelona, El Tocuyo, Barquisimeto, San Carlos, pasaban de 28.000; Valencia y San Sebastián, de 50.000. El partido capitular de Caracas —concluía el *Diablo*— tiene 115.804 almas, "sin contar con los muchos omitidos en los últimos censos, que no se formaron con la exactitud correspondiente".

En 1812, Semple y Palacio Fajardo, entre otros, atribuían 50.000 habitantes a la ciudad de Caracas.

El siguiente cuadro, naturalmente incompleto, permite formarse idea aproximada de la población de las principales villas y ciudades venezolanas en los años que precedieron inmediatamente a la Revolución libertadora y al declararse la Independencia. Obsérvese que en 1790 sólo había en los Estados Unidos cuatro ciudades que tuviesen más de 10.000 habitantes. Filadelfia, capital, apenas contaba 42.000.

	1804 Datos de Depons	1812 Datos diversos
Caracas	42.000	50.000
Cumaná	24.000	28.000
Maracaibo	24.000	25.000
Barcelona	14.000	14.000
Guanare	12.300	
Mérida	11.500	11.500
Barquisimeto	11.300	11.300
Tocuyo	10.200	
Barinas	10.000	12.000
Coro	10.000	10.000
San Carlos	9.500	9.500
Valencia	8.000	10.000
Turmero	8.000	
La Victoria	7.800	8.000
Trujillo	7.600	7.000
San Felipe	6.800	
Angostura	6.575	
Cariaco	6.500	
Cazora	6.200	
San Fernando	6.000	
Puerto Cabello		6.000
La Guaira	6.000	12.300
Escobar	5.400	
San Juan del Pao	5.400	
Cagua	5.200	
Ospino		5.000
Calabozo	4.800	
Cumanacoa	4.200	
San Luis de Cura	4.000	
San Sebastián	3.500	
El Consejo	3.000	
San Mateo	2.800	
Magdaleno	2.700	
El Pao	3.300	
Maracay		10.000
Guacara		4.000

APENDICE

I

OPINION DEL DOCTOR JOSE GIL FORTOUL

AL dar cuenta de la aparición del libro *El Régimen Español en Venezuela*, el doctor José Gil Fortoul escribió en *El Nuevo Diario*, de Caracas, número de 13 de marzo de 1933:

NOTAS RÁPIDAS.— Por el nombre del autor, por las relaciones intelectuales que venimos cultivando desde que él empezó a escribir y por el asunto mismo, leo con interés el libro cuyo título acabo de transcribir. Parra-Pérez figura entre los más distinguidos venezolanos a quienes atraen las cuestiones de historia patria y ha publicado obras tan valiosas como su *Miranda y la Revolución Francesa*, que bastaría para asegurarle merecido renombre.

Lo dicho me permitirá apuntar algunos reparos, que tal vez resulten justificados y oportunos. En trece cortos capítulos, Parra-Pérez resume los conocidos datos que se encuentran en historias y recopilaciones sobre el estado social, intelectual, económico, político de la Colonia. Labor útil, pero ¿con qué propósito? No con el propósito de escribir historia propiamente dicha. Antes con el fin de sostener una tesis. En el capí-

tulo XIV, que es el último y se titula "Deducciones", advierte (p. 263): "No pretendemos, *lejos de ello, (¡) irradiar luz (!)* sobre los siglos coloniales. Pero este libro, escrito *deliberadamente en estilo polémico* y que tal vez algunos calificarán de *agresivo*, quiere responder, con datos ciertos y conocidos, a varias cuestiones planteadas a propósito del régimen español en el país, y en tal sentido representa una contribución a la tarea de desvanecer las *nieblas* que por la voluntad de los hombres o en virtud de ciertas doctrinas cubren aún *para todo nuestro pueblo* el período de su formación, hasta el momento en que se declaró independiente de la metrópoli".

De suerte que, para el autor, en nada ha contribuido el secular trabajo de historiadores y recopiladores (que traen los mismos datos) al conocimiento de los siglos coloniales... Pasemos: cualquiera, si le agrada, puede emplear sus horas en descubrir la luna o inventar la pólvora o divertirse con el huevo de Colón... Lo que intento aquí es señalar una tesis que me parece insostenible y, peor todavía, polvorientemente anticuada en los presentes tiempos de crítica científica.

Durante la guerra internacional de Independencia y en los primeros años de la República, lógico fue que los patriotas venezolanos (aunque lo propio se pudiera decir de los demás patriotas indiohispanoamericanos, prefiero limitarme a mi tierra), lógico fue que pintasen el régimen español como despotismo absolutamente detestable y modelo de atraso en todo sentido. Porque la urgente necesidad de entonces era insuflar de cualquier modo a la clase inferior la idea y el sentimiento de patria modernizada, autónoma, desligada de dominaciones extranjeras. El Libertador, que sin embargo veía más alto y lejos que la muchedumbre de sus contemporáneos, empleó también a veces un lenguaje violentamente exagerado; pero siempre, sobre todo en los años 1820 y 21 (cuando ya había triunfado en Nueva Granada, e iba a triunfar en Venezuela, y se preparaba a triunfar definitivamente en Ecuador y Perú), se mostró deseoso de una reconciliación con España, a condición, por supuesto, de que la antigua metrópoli reconociese sin reservas la soberanía absoluta de los nuevos Estados...

Ahora, ciertos polemistas pretenden, por irreflexivo espíritu de reacción, popularizar la tesis histórica contraria; que el régimen colonial fue casi perfecto, entre varias razones porque otras potencias europeas colonizadoras no hicieron nada (?) mejor. Pero, si las cosas iban tan buenas en Hispanoamérica, ¿a qué la Independencia? ¿Para qué nació el Libertador? ¿Por qué nos convertimos en República? Preferible hubiera sido continuar gobernados por algún cualquier representante de Carlos IV y Fernando VII, y olvidar también que en la misma España estalló otra revolución republicana. Desgraciadamente para España su revolución fracasó, cuando afortunadamente para las antiguas colonias la revolución libertadora venía triunfando en todas las Indias Occidentales...

Aquellas dos tesis contrarias no merecen ya que se pierda tiempo en exponerlas ni discutir las. Ahora tratamos de escribir historia, sin prevenciones sistemáticas ni apasionamientos anacrónicos. El Libertador y nuestros demás antepasados que fundaron la patria nueva, pelearon contra España porque el régimen político, social e intelectual de España se había quedado atrás en la revolución iniciada por Inglaterra, continuada por América del Norte, rematada por Francia, y acabaron con el gobierno colonial, porque ya había llegado la hora de que el Imperio de Carlos V de Alemania y I de España, después de una sucesión de monarcas casi todos enajenados o miopes o idiotas, se convirtiese acá, en este lado del Atlántico, en Repúblicas modernas... Al cabo de un siglo largo estamos por fin viendo a España consumir también su revolución, nacer, renovarse, para acercarse a un ideal en que por la lengua y otros lazos no menos fuertes seguirá abrazada con las nacionalidades nacidas de sus antiguas colonias...

¿Para qué gastar más pluma ni papel en polémica anticuada? Gástense en acopiar datos que se añadan a los ya conocidos; estúdiese atentamente la evolución de estos pueblos americanos, desde los comienzos del siglo XVI hasta las postrimerías del XVIII, momento en que comenzó la revolución emancipadora; y señálese en honor de España cómo desde mediado del siglo XVIII una parte de sus hijos, los vascongados, trajeron a estas regiones venezolanas, junto con nuevos métodos de cul-

tivar la tierra y mejorar sus frutos, las ideas revolucionarias que alboraban en Francia; repítase al "hombre de la calle" cómo un criollo caraqueño, el Precursor Miranda, logró desde Londres, desde París, desde Filadelfia, propagar en toda Hispanoamérica la aspiración de ser independientes; repítase cómo y por qué sacrificaron su vida por el mismo ideal los mestizos de Coro, y José María España, muerto en la horca, y Manuel Gual, envenenado en el destierro, y aquellos otros nobles mestizos ahorcados y descuartizados en Caracas y La Guaira; repítase cómo el criollo Simón Bolívar, con su cortejo de patriotas, pudo finalmente fundar la nacionalidad venezolana y llevar a otras colonias la bandera libertadora. Aspiró también —sueño generoso— a llevarle a España la misma bandera. No lo olvidan los descendientes de Riego, y bien lo saben los altos espíritus que están ahora empeñados en transformar a España y en preparar el porvenir que por su raza y por su genio espera a la hidalga e inmortal España... A esos altos espíritus, con algunos de los cuales he cambiado cordial apretón de manos, envío en esta ocasión saludo fraternal...

Parra-Pérez —mi amigo de siempre, a veces colaborador en misiones diplomáticas, colega distinguido en aficiones históricas— anuncia que tiene en preparación una *Historia de la Primera República de Venezuela*. Será bienvenida y encomiada, porque espero que en ella cambie la pluma anticuada del polemista por la de verdadero historiador, que él sabe manejar también con talento y maestría.

II

RESPUESTA AL DOCTOR GIL FORTOUL

LOS amigos del doctor Gil Fortoul, que somos muchos, y sus adversarios, que son algunos, admiran todos en tan eminente compatriota no sólo la elevada y dinámica inteligencia y la cultura vastísima, sino también la generosidad, notable por rara en hombre de letras y que él parece conciliar sin inconveniente, como perfecto deportista que es, con la singular vehemencia de su carácter y la sinceridad de sus opiniones personales. Nueva prueba de esta que pudiera llamarse conformación espiritual acaba de dar aquél al tratar, someramente, del libro *El Régimen Español en Venezuela*. Por ello, y antes de responder a sus observaciones, cumplo con el deber de expresarle mi agradecimiento por las frases benévolas que escribe sobre mi modesta labor en el campo de la historia patria, que él siempre me estimuló a cultivar, y por la mención que se sirve hacer de nuestras viejas y cordiales relaciones.

Del comentario del maestro se deduce, en rigurosa lógica, que cuanto tienda a revisar el proceso de la dominación española en América es acríptico y propio de personas retrógradas, y que sólo es "científico" y "moderno" quien acepta la versión tenida hoy por oficial, aunque se demues-

tre que está basada casi toda ella en opiniones de polemistas, extranjeros en su mayor parte. Tal criterio, "rápido" y expeditivo, permite sin duda clasificar y juzgar en pocas líneas tres siglos de vida americana y pasar a otro asunto menos "anticuado y polvoriento". Diríase la teoría jurídica de la prescripción transpuesta al terreno de la historia.

La dificultad consiste en haberse levantado últimamente, de México al Plata, una secta no conformista que entiende ir al fondo de la cuestión y examinar los fundamentos del dogma. Estos herejes o disidentes escudriñan y analizan sucesos y papeles y, como tratan de desalojar a los ortodoxos de posiciones fortificadas durante ciento cincuenta años de beata posesión, atacan "en estilo polémico", con grande escándalo de los mistagogos llamados hasta ahora a definir la doctrina "sin prevenciones sistemáticas ni apasionamientos anacrónicos". Así, la cuestión del régimen español, interesante en todos sus aspectos porque aquél formó nuestras naciones, se debate entre dos partidos: uno que quiere sacudir el "polvo" para ver qué hay debajo, y otro que quiere dejar el polvo donde está y seguir enseñando a los escolares que la colonización de América por los blancos fue simplemente la lucha de la barbarie peninsular contra las florecientes civilizaciones de Tunja, Anáhuac y otros Cuzcos y que España apenas trajo al Continente frailes inquisidores, encomenderos esclavistas y buscadores de oro, habiendo brotado las Repúblicas actuales del caos, sin gestación previa, por mágico conjuro y en virtud de ciertas fórmulas y principios luminosos que no podían llegarnos sino del oriente exótico. Este último partido, digo, se proclama, naturalmente, científico y moderno, apellida a sus adversarios anticuados y anacrónicos y considera los argumentos que van contra el *statu quo* como indigna polémica, sin cabida posible en el sereno y límpido dominio de la Historia, la cual Historia está ya preparada en caracteres indelebles y para uso del pueblo por los escribas rituales. Situación semejante creóse en Francia cuando la escuela de Taine, después de remover el polvo de los archivos, reexaminó el formidable expediente de la Revolución, desgarró el velo del santasantórum y mostró el cocodrilo sagrado a "los curiosos de zoología moral". Aún no ha cesado el clamor de los adoradores fanáticos del saurio,

quienes —apunta Lenôtre— aplican en historia la ley contra los sospechosos y rechazan de plano pruebas y explicaciones.

El nombre que uno se dé a sí mismo y el que endilgue a su contendor son de importancia capital en las luchas de ideas o de ambiciones, pero no siempre definen realidades. Ni el hábito hace al monje ni la bacía del barbero es el yelmo de Mambrino. Las cosas tienen esencia propia e independiente de fáciles logomaquias. No podía dejar de imputarse en esta oportunidad el pecado de reacción al inquietante movimiento revisor. En cuanto personalmente me concierna, declaro que el cargo no me intimida, si con él quiere decirse que contribuyo a reaccionar contra embustes generalmente aceptados. Y entiéndase que en este caso mi "espíritu de reacción" no impetra circunstancias atenuantes ni paliatorias: es reflexivo... El libro *Miranda y la Revolución Francesa*, que mi ilustre impugnador aprecia con tanta simpatía, obedeció ya a reacción contra las fábulas y calumnias que muchos extranjeros y algunos venezolanos han acumulado alrededor de una figura que es parte integrante del patrimonio nacional.

El doctor Gil Fortoul tiene a bien conceder que mi labor es "útil", mas se pregunta inmediatamente cuál propósito pudo guiarme al emprenderla, y responde que lejos de escribir historia apenas sostengo una tesis. ¿Qué tesis? ¿De química o derecho? No: sostengo una tesis de historia, revisora de un período histórico, y me baso en hechos históricos que no invento, que tomo de autores cuyos nombres no callo y de documentos que cito. Digo que los datos son "ciertos y conocidos" y me parecen suficientes para formular conclusiones, aun cuando no me sea posible completarlos en la actualidad, por razones que aduzco. Aquellos hechos son patentes, pero el doctor Gil Fortoul tiene libertad, como yo, ni más ni menos, para interpretarlos a su manera, para desvirtuarlos o debilitarlos con otros hechos. Frente a mi tesis puede levantar otra, pero necesita fundarla en pruebas y no en desdenes. ¿Puro deporte esto de discurrir sobre la época española? Vasto error. El estudio de aquélla, el conocimiento profundo, en lo posible, de la vida colonial es tan esencial para seguir la "evolución de estos pueblos americanos", como el

gentes que los cometieron idénticos o peores. Y si España no recusa esos jueces, incumbe a los americanos recusarlos en cuanto se refiere a la parte española de la historia de América. Es para tachar los jueces que se reprochan a éstos sus propias faltas e hipocresía, y en manera alguna para justificar crímenes o errores de nuestros antepasados. Llegó la hora de establecer balance riguroso en negocio tan grave y privativo como la formación de nuestras nacionalidades, con el activo y el pasivo, las flaquezas innegables y la innegable grandeza. Dejemos que algunas razas canten como providencial su dispersión por el haz de la tierra, su "diáspora" de predestinadas. Y depuremos en tanto nuestra historia pasada, preparando la venidera en la candencia del que esos mismos extranjeros nombran con marcado desprecio crisol latinoamericano.

De paso, y con intención visible, califica el doctor Gil Fortoul de internacional la guerra de la Independencia. La tesis es defendible, si se la funda en la circunstancia de haber tenido efecto el conflicto entre el Estado español y entes que se habían declarado Estados independientes. En rigor, y para limitarme a Venezuela, la República no llegó a ser reconocida por los neutrales y a obtener beligerancia sino después de su incorporación en la Gran Colombia. Hasta entonces la lucha, dentro del cuadro jurídico y político del Imperio, fue intestina. Mas, por ahora, el asunto parece de poca importancia. Quisiera hacer notar sólo que tener por civil aquella guerra no es invención de "reaccionarios" del día. El problema de la independencia se resolvió en Venezuela entre un reducido número de oligarcas, o como guste decirseles, por una parte, y, por la otra, la masa general de la población, que, al menos hasta 1820, siguió la bandera del Rey. Que se la llame civil, social o de cualquier modo, la guerra presentó caracteres que no eran de internacional, y así lo comprendieron algunos actores y testigos. Desde 1808 los mantuanos de Caracas tiemblan ante la perspectiva de posibles conmociones populares. En 1812, Miranda exclama: "Mis compatriotas no saben lo que es una guerra civil". Heredia habla de "una guerra civil tan sostenida y disputada como la de Venezuela". Años más tarde, en 1817, el oficial británico autor del libro *Campagnes et Croisières* apunta también que la

"guerra civil" ensangrienta al país. Opiniones semejantes se recogen de los patriotas de otras partes de América. Ejemplo, no único: en 1812, Moreno escribe en Buenos Aires que México "se ha manchado con los horrores de una guerra civil".

No permanece el doctor Gil Fortoul, al condenar mi libro y expedirlo a la galería de las antiguallas, dentro del tema definido que me propuse discutir. Y la puerta por la cual se escapa de mi campo cuidadosamente limitado es de esas cuya apertura puede, si no se toman precauciones, determinar malignas corrientes de aire. A mi modo de ver, la cuestión de la independencia nacional no se prejuzga por el restablecimiento de la verdad sobre ciertos aspectos de la historia colonial, de la organización y del estado de nuestras provincias al estallar la Revolución. En los Estados Unidos abundan las obras consagradas al estudio del antiguo régimen inglés en el país, y muchas de ellas traen conclusiones favorables a la Madre Patria: no sé de ningún norteamericano que haya querido repudiar la obra del Congreso de Filadelfia, pero tampoco que haya intentado restringir la libertad de juicio sobre los siglos que precedieron a Washington. Tranquilícese el doctor Gil Fortoul: nadie, que yo conozca, trabaja entre nosotros por volver a los tiempos del Demonio del Mediodía ni de Don Carlos II el Hechizado, y todos los venezolanos continuamos prefiriendo el Libertador a Fernando VII, fantasma familiar del receloso maestro.

Escribí en el último capítulo de mi obra que "estaría fuera de lugar examinar aquí los motivos que determinaron y justificaron la guerra de la emancipación hispanoamericana... En próxima ocasión estudiaremos las causas de este movimiento y veremos cómo el patriotismo americano más escrupuloso, la admiración hacia los libertadores y el legítimo orgullo de ser libres de todo poder extraño pueden conciliarse con la verdad histórica..." Tal es mi posición actual. A cada día basta su tarea.

Sin necesidad imperiosa se ha mezclado al Libertador en esta querrela. Pero como la República y su creador son seres consustanciales, he aquí que se me brinda ocasión de pedir a la República juicio sobre la

- FERNÁNDEZ DURO, CESÁREO: *Los Hermanos Pinzón*. Buenos Aires, 1944.
- GARCÍA, CASIANO: *Vida del Comendador Diego de Ordaz, descubridor del Orinoco*. México, 1952.
- GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: *Estudios de Historia Colonial Venezolana*. Caracas, 1937-1938 (2 vols.).
- GIL FORTOUL, JOSÉ: *Historia Constitucional de Venezuela*. Caracas, 1930.
- GONZÁLEZ, ELOY G.: *Historia de Venezuela*. Caracas, 1930.
- GUMILLA, PADRE JOSÉ: *El Orinoco Ilustrado. Historia natural, civil y geográfica de este gran río*. Madrid, 1741.
- HERRERA, ANTONIO DE: *Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano*. Madrid, 1601-1615.
- HERRERA, DIONISIO ALCEDO Y: *Aviso histórico-político-geográfico, con las noticias más particulares del Perú, Tierra Firme, Chile y Nuevo Reino de Granada*. Madrid, 1740.
- HUMBERT, JULES: *Origines vénézuéliennes. Essai sur la colonisation espagnole au Venezuela*. Paris, 1905.
- *L'occupation allentande du Venezuela au XVI siècle, période dite des Welser (1528-1566)*. Paris, 1905.
- *Histoire de la Colombie et du Venezuela des origines jusqu'à nos jours*. Paris, 1921.
- HUMBOLDT, ALEXANDRE DE: *Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent*. Paris, 1814-1825 (3 vols.).
- MADARIAGA, SALVADOR DE: *Cuadro Histórico de las Indias*. (Segunda edición.) Buenos Aires, 1950.
- MARTÍ, ILMO. SR. D. MARIANO: *Relación de la visita general (de la Diócesis de Caracas y Venezuela), 1771-1784*. Caracas, 1928-1929.
- MÉNDEZ Y MENDOZA, JUAN DE DIOS: *Historia de la Universidad Central de Venezuela*. Caracas.
- MORÓN, GUILLERMO: *Los Orígenes históricos de Venezuela*. Tomo I: "Introducción al siglo XVI". Madrid, 1954.
- NAVARRO, ILMO. SR. D. NICOLÁS E.: *Anales Eclesiásticos Venezolanos*. Caracas, 1929.
- OCAMPO, MAESTRE JUAN DE: *El Mar de las Perlas. Historia da Conquista de Nueva Andalucía*. Madrid, 1918.
- OTTE, ENRIQUE: *Cedulario de la Monarquía Española relativo a la Provincia de Venezuela (1529-1592)*. Caracas, 1959 (2 vols.).
- OVIDO Y BAÑOS, JOSÉ: *Historia de la Conquista y población de la Provincia de Venezuela*. (Edición original.)
- OVIDO Y VALDÉS, GONZALO FERNÁNDEZ DE: *Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano*. Salamanca, 1547.

- PANHORST, CARLOS: *Los alemanes en Venezuela durante el siglo XVI*. Madrid, 1927.
- PARDO, ISAAC: *Esta Tierra de Gracia*. Caracas, 1955.
- PARRA LEÓN, CARACCILO: *Documentos del Archivo Universitario de Caracas (1725-1810)*. Caracas, 1930.
- *La Instrucción en Caracas (1507-1725)*. Caracas, 1932.
- PERERA, AMBROSIO: *Albores de Venezuela. Significado del régimen alemán. Génesis de la nacionalidad*. Caracas, 1946.
- POLANCO MARTÍNEZ, TOMÁS: *Esbozo sobre Historia Económica Venezolana*. Primera etapa: "La Colonia" (1498-1810). Caracas, 1950.
- RIVAS, ANGEL CÉSAR: *Ensayos de Historia política y diplomática*. Madrid.
- RODRÍGUEZ RIVERO, P. D.: *Historia médica de Venezuela hasta 1900*. Caracas, 1931.
- ROJAS, ARÍSTIDES: *Orígenes de Venezuela*. Caracas, 1891.
- *Estudios históricos. Lecturas históricas*. Caracas, 1926-1927.
- SALAS, JULIO C.: *Tierra Firme*. (Edición de Madrid.)
- SILVA, Ilmo. Sr. D. ANTONIO RAMÓN: *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*. Mérida, 1908-1909.
- SIMÓN, FRAY PEDRO: *Noticias históricas de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales*. Bogotá, 1954 (9 vols.)
- SUCRE, LUIS ALBERTO: *Los Gobernadores y Capitanes generales de Venezuela*. Caracas, 1928.
- SUCRE-REYES, JOSÉ L.: *Le Système Colonial Espagnol dans l'ancien Venezuela*. Paris, 1939.
- TERRERO, PADRE BLAS JOSÉ: *Teatro de Venezuela y Caracas*. Caracas, 1926.
- URQUINAONA, PEDRO DE: *Relación documentada...* (Edición de Madrid, 1917.)
- VALLENILLA LANZ, LAUREANO: *Cesarismo democrático*. Caracas, 1929.
- *Disgregación e integración*. Caracas, 1930.
- YANES, FRANCISCO JAVIER: *Compendio de la Historia de Venezuela*. Caracas, 1840.
- ZAVALA, SILVIO: *Programa de Historia de América en la época colonial*. (Versión española de ANTONIO ALATORRE). México, 1961.



ALTAMIRA
TALLERES GRAFICOS, S. A.

BRAVO MURILLO, 31
MADRID

